

**ELECCIONES PRESIDENCIALES EN AMÉRICA LATINA:
EL ASCENSO DE UNA IZQUIERDA HETEROGÉNEA**

Insumisos Latinoamericanos

Cuerpo Académico Internacional e Interinstitucional

Directores

Robinson Salazar Pérez
Nchamah Miller

Cuerpo académico y editorial

Pablo González Casanova, Jorge Alonso Sánchez,
Fernando Mires, Manuel A. Garretón, Martín Shaw,
Jorge Rojas Hernández, Gerónimo de Sierra,
Alberto Riella, Guido Galafassi, Atilio Borón, Roberto Follari,
Eduardo A. Sandoval Forero, Ambrosio Velasco Gómez,
Celia Soibelman Melhem, Ana Isla, Oscar Picardo Joao,
Carmen Beatriz Fernández, Edgardo Ovidio Garbulsky,
Héctor Díaz-Polanco, Rosario Espinal, Sergio Salinas,
Lincoln Bizzorero, Álvaro Márquez Fernández, Ignacio Medina,
Marco A. Gandásegui, Jorge Cadena Roa, Isidro H, Cisneros,
Efrén Barrera Restrepo, Robinson Salazar Pérez,
Ricardo Pérez Montfort, José Ramón Fabelo,
Bernardo Pérez Salazar, María Pilar García,
Ricardo Melgar Bao, Norma Fuller, Flabián Nievas,
Juan Carlos García Hoyos, José Luis Cisneros,
John Saxe Fernández, Gian Carlo Delgado,
Dídimo Castillo, Yamandú Acosta.

Comité de Redacción

Robinson Salazar Pérez
Nchamah Miller

Ignacio Medina Núñez

ELECCIONES PRESIDENCIALES
EN AMÉRICA LATINA:

EL ASCENSO
DE UNA IZQUIERDA HETEROGÉNEA

Colección
Insumisos Latinoamericanos
elaleph.com



Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la fotocopia y el tratamiento informático.

© 2008, los autores de los respectivos trabajos.

© 2008, ELALEPH.COM S.R.L.

contacto@elaleph.com
<http://www.elaleph.com>

Primera edición

Este libro ha sido editado en Argentina.

ISBN 978-987-1070-89-3

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en el mes de enero de 2009 en
Bibliográfica, Elcano 4048,
Buenos Aires, Argentina.

ÍNDICE

Prólogo de Jorge Alonso Sánchez	7
Introducción	13
Capítulo I	
¿Disolución de fronteras o confrontación ideológica?	19
Derecha e izquierda: disolución de fronteras	19
Permanencia de la confrontación ideológica	26
En un mundo plural	31
Capítulo II	
Utopía y nuevos imaginarios sociales	35
Racionalidad y utopía	36
El Imaginario social	51
De la realidad a la utopía latinoamericana	56
Capítulo III	
Derechas e izquierdas en Latinoamérica	63
Un escenario plural	63
Capítulo IV	
Hacia la derecha	75
4.1 COLOMBIA: reelección de la mano dura	75
4.2 MÉXICO: ascenso de la izquierda pero triunfo de la derecha	81

Capítulo V	
Posiciones de centro ideológico	105
5.1 HONDURAS: continuación del bipartidismo	107
5.2 COSTA RICA: superación del bipartidismo	112
5.3 PERÚ: segunda oportunidad para el APRA	117
Capítulo VI	
Una izquierda heterogénea en ascenso	123
6.1 BOLIVIA: una sorprendente revolución democrática de rasgos indígenas	125
6.2 CHILE: permanencia de la Concertación	132
6.3 BRASIL: la reelección de Lula	139
6.4 ECUADOR: superación de una democracia restringida	176
6.5 NICARAGUA: el regreso del sandinismo	199
6.6 VENEZUELA: el nuevo proyecto bolivariano	231
Capítulo VII	
La centro izquierda en el 2007: Guatemala y Argentina	271
7.1 GUATEMALA: ¿transición a la socialdemocracia?	272
7.2 ARGENTINA: la continuidad de un proyecto político (Néstor-Cristina)	296
Conclusiones	329
Bibliografía	335

PRÓLOGO

El presente libro es muy oportuno. Da cuenta detallada de los principales cambios ocurridos en la política de América Latina en los últimos años. Realiza una penetrante discusión teórica sobre el origen, desarrollo y pertinencia de la dicotomía derecha-izquierda, la cual es reutilizada innovadoramente para analizar lo que acontece en los principales países latinoamericanos que han experimentado procesos electorales entre 2005 y 2007. Otro mérito es que en cada país se ofrece un contexto histórico y social, y se discuten las diferentes interpretaciones sobre su devenir.

Los datos de Latinobarómetro en 2008 muestran que, pese a que dos de cada diez latinoamericanos no saben o no quieren responder si son de izquierda o de derecha, y a que cuatro de cada diez preferirían ser identificados con un indeterminado centro político, persisten quienes se reconocen ya de derecha ya de izquierda. De 1998 a 2008, los que se confiesan de derecha han bajado 14 puntos (de un 36 a un 22 por ciento). Los que se proclaman de izquierda también han descendido cinco puntos (de 22 a 17%). No obstante, hay temas fundamentales donde hay proporciones significativas que acercan a una gran mayoría a temas propios de la izquierda. De esta forma, ante preguntas de qué actividades deberían estar mayoritariamente en manos del Estado y no de las empresas privadas las respuestas son contundentes: 8 de cada diez prefieren que el Estado controle desde la educación básica hasta la universidad, la

salud, el agua potable, las pensiones y jubilaciones, los servicios eléctricos y el petróleo¹.

Este libro explica por qué se ha dado un corrimiento latinoamericano hacia la izquierda. La lucha contra las depredadoras y pauperizantes medidas de la globalización neoliberal ha empujado a una gran cantidad del lado de la izquierda. Pero el libro no cae en simplificaciones y hace ver que hay muchas y muy diversas izquierdas. Hay izquierdas partidistas y movimientos sociales que impulsan demandas que sólo pueden ser respondidas desde la izquierda. Hay convergencias entre estas dos institucionalizaciones, pero también decepciones, conflictos y rompimientos. Hay izquierdas que quieren el poder estatal y hacer los cambios desde arriba, y otras izquierdas que se proponen hacer los cambios desde abajo y sin tener que ver con el poder estatal. En la izquierda se presentan tanto moderados como radicales. Aunque estos últimos no son necesariamente aquellos que gritan más fuerte, sino quienes saben “construir líneas de ruptura profundas”². Además de las diferencias internas de la izquierda, las pugnas por lo que se proclamaría “una izquierda legítima” se da en las descalificaciones que se establecen entre los diversos grupos. Hay quienes acusan a otros de quedarse en una izquierda reformista. El boliviano Oscar Oliveira, quien se mantiene en la lucha desde abajo, ha acusado al gobierno de Evo Morales de incumplir demandas desprivatizadoras y de seguir con la represión. Se queja de que un gobierno diga que sus antiguos compañeros de trinchera y de lucha sean “una ultraizquierda” que es financiada por la derecha para desestabilizar al gobierno, cuando lo que ha estado haciendo esa izquierda es mantener la lucha y las demandas de la gente de abajo. Por esto mismo se ha pensado que llegar al gobierno “no sirve”, pues se queda a merced de

¹ Corporación Latinoabómetro, *Informe 2008*, Santiago de Chile (www.latinoabometro.org).

² Raúl Arancibia, “La izquierda a debate” en *La Fogata Digital*, www.lafogata.org (página consultada el 19 de diciembre de 2008).

los poderes fácticos, y porque el poder consume no sólo a las instituciones sino a las personas, y porque resulta insuficiente nacionalizar lo expropiado como patrimonio público si no se llega a la apropiación social, y al ejercicio de la decisión acerca de lo que es asunto público y social³.

Hay una izquierda que privilegia la lucha electoral; otra izquierda que quiere combinar lo electoral con la lucha social, y una más que ya no confía en lo que se pueda hacer desde gobiernos ganados por los votos. Varios grupos de esta gran gama de la izquierda plantean que la clave para saber si se es verdaderamente de izquierda es si hay una meta anticapitalista. La izquierda italiana en 2008 se vio prácticamente borrada del escenario electoral. Esto impulsó a unos agrupamientos de izquierda a reflexionar sobre la necesidad de constituirse como nueva izquierda anticapitalista apartándose de los viejos grupos dirigentes responsables del fracaso electoral. Hablan no de reconstrucción sino de construcción sobre nuevas bases. Plantean colocarse desde la oposición social para construir una resistencia amplia. Dicen que se debe pensar en una izquierda anticapitalista, ecologista y feminista. Insisten en que la democracia absoluta deberá ser la práctica para comenzar de nuevo, pues no se puede confiar en líderes carismáticos ni en grupos dirigentes infalibles. Plantean la rotación rigurosa de los cargos en todos los niveles. Son conscientes de que una izquierda de este tipo no puede impulsarse sino en el seno de las contradicciones del conflicto social y no en reuniones de salones. Saben que el sujeto nuevo no nace de una autoproclamación sino de la construcción de un movimiento. Los temas de su lucha deben ser ir contra la precariedad, por el empleo dignamente remunerado, por la defensa ecológica, contra las grandes obras dañinas e inútiles, por la autodeterminación de las mujeres, etc.⁴

³ Charla de Oscar Olivera con un colectivo que reflexiona sobre movimientos sociales en Guadalajara, 2 de diciembre de 2008.

⁴ Varios: "Once puntos para una nueva izquierda anticapitalista y de clase" en *Viento Sur*, núm. 98, julio de 2008, pp. 12-15.

Las izquierdas oscilan entre acomodados a la situación imperante y entre sectarismos puristas⁵. Hay quienes recomiendan no ir acumulando derrotas porque esto acaba por desmovilizar y desanimar a la gente. También las falsas expectativas a la larga son desmovilizadoras. Hay que mostrar que la lucha “paga” porque se obtienen victorias, porque no sólo se denuncien injusticias sino porque se les detenga. También se advierte que hay que tener cuidado de que las luchas sociales no sean recuperadas por el poder. Entre los que insisten en que la izquierda debe mostrar que su lucha es verdaderamente anticapitalista hay sectores que no quieren abandonar el campo electoral. Se dice que en la izquierda anticapitalista es posible construir capacidades para competir con la izquierda gestionaria, pero se puntualiza que se requiere que haya izquierdas con representación parlamentaria para que se amplifique el discurso crítico y para que se apoyen las luchas sociales de los sectores que la izquierda tradicional ha abandonado⁶. Ante el auge de la izquierda en América Latina se recomienda no olvidar que por la vía electoral puede retornar la derecha. Contra los que sostienen que se debe cambiar el mundo sin tomar el poder se destaca la imposibilidad de eludir la acción estatal, y se hacen acotaciones en cuanto a la gravitación estatal ante las demandas populares⁷. Sin embargo, otros recalcan que hay muchos elementos caducos de la vieja izquierda y que se tendrían que buscar formas de organización y estrategia que privilegien una política autónoma⁸.

La autonomía es un elemento clave de la nueva izquierda. Se trata de construir condiciones institucionales pero sobre todo vitales para un marco autogestionario. Hay muchos agr-

⁵ Alex Callinicos: “¿Hacia dónde va la izquierda radical?” en *International Socialism*, 28 de noviembre de 2008.

⁶ Andreu Coll, “Lucha de clases, izquierda anticapitalista y partido revolucionario en Europa”, en *www.espacioalternativo.org*, 27 de febrero de 2007.

⁷ Claudio Katz, *Las disyuntivas de la izquierda en América Latina*, Ediciones Luxemburgo, Buenos Aires, 2008.

⁸ Ezequiel Adamovsky, *Más allá de la vieja izquierda. Seis ensayos para un nuevo anticapitalismo*, Prometeo, Buenos Aires 2007.

vios que se han ido acumulando. De repente brotan amplios movimientos que cuestionan el orden imperante. Por ejemplo, en Chile, a mediados de 2006, los estudiantes secundarios ocuparon liceos, e hicieron marchas multitudinarias contra la política neoliberal y por una educación pública de calidad. A finales de 2008, en Grecia, los estudiantes develaron las graves crisis sociales de gestiones neoliberales. Dijeron: “somos la generación de los 400 euros, de los programas *stage* del organismo de empleo, del trabajo flexible, de la eterna capacitación siempre con nuestros gastos, de la precariedad, de la carestía, de los dos diplomas que no sirven para nada, de la eliminación de los derechos laborales, de nuestra humillación por parte de los patronos... somos los chavos a los que humillan... somos los heridos en las marchas... Moriremos prematuramente porque no estuvimos de acuerdo con las leyes que nos están robando la vida... somos muchos y estamos furiosos... no tenemos ilusiones, no tenemos esperanzas”⁹. Estos grupos están cansados de los políticos de todo el espectro electoral y buscan otras formas de defenderse y de hacer política. Obviamente son otro tipo de izquierda. La izquierda no puede reducirse a los partidos ni a las organizaciones que se proclaman de izquierda, sino que se amplía a quienes resisten y se rebelan contra las condiciones capitalistas. En esta nueva izquierda, se trata de horizontalizar las decisiones; se crean pequeños espacios autónomos y se convierte en consigna política lo cotidiano. Se trata de no depender de los tiempos (sobre todo electorales) ni de los ritmos de los poderosos, sino de tener el control de la propia vida. Más que enfrentar directamente al Estado y al capital, se les van quitando espacios con prácticas alternativas. El problema es cómo articular esta gran diversidad de experiencias como una masa crítica capaz de empujar un cambio sustancial. Como lo expuso Houtart ante la ONU, ante la grave crisis financiera, alimentaria, energética, climática

⁹ Volante que se repartía en las calles de varias ciudades griegas el 15 de diciembre de 2008.

y social actual, el mundo requiere alternativas. Propuso otra definición de la economía privilegiando el valor de uso sobre el valor de cambio. Un punto importante visualizado es la generalización de una democracia no sólo aplicada al sector político sino dentro del sistema económico y en todas las instituciones. Houtart defendió que el actor histórico portador de proyectos alternativos es plural (obreros, campesinos, pueblos indígenas, mujeres, pobres de las ciudades, militantes ecologistas, migrantes, etc.). Enfatizó la necesidad de que el género humano volviera a encontrar un espacio de vida, y por lo tanto reconstruir la esperanza¹⁰. Todas estas perspectivas tienen que ver con la nueva izquierda. Al mantener que la distinción entre izquierda y derecha era todavía operativa, Bobbio puntualizó que, en el siglo XX, la derecha había defendido la libertad y la izquierda una igualdad que había privilegiado el autoritarismo (Bobbio 1995). Efectivamente la derecha ha defendido la libertad para los mercantilistas que producen pobreza y desigualdades, pero la nueva izquierda del siglo XXI tiene que buscar la combinación de la libertad de los hombres con la búsqueda de una igualdad que implique la democracia civil, política, y sobre todo social, teniendo en cuenta, además, la extensión de la democracia a la ecología y la cultura. Hay que conjugar para todos la libertad con la igualdad, y rescatar una profunda solidaridad, lo cual no puede lograrse en los límites del capitalismo. La izquierda, para ser auténtica, debe contribuir a la construcción de otros mundos, más humanos.

**Jorge
Alonso Sánchez**
jalonso@ciesas.edu.mx

¹⁰ Participación de F. Houtart en el Panel sobre Crisis Financiera, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 30 de octubre de 2008.

INTRODUCCIÓN

“El problema es que los ricos se han apoderado de la tierra y no dejan vivir al resto de la población”. José Profirio Miranda (1988: 49)

¿Existe todavía una izquierda y una derecha en el campo de la ideología política? Con frecuencia, entre diversos ciudadanos y líderes de opinión se responde con un rotundo NO. El concepto de izquierda y derecha política en muchos de sus contenidos parece haber perdido su sentido. Sobre ello hace referencia, por ejemplo, Pasquino, quien, aunque reivindica esta distinción para el mundo de la democracia moderna, señala una importante corriente de opinión en el ambiente político: “Es sabido que para algunos la distinción misma es irrelevante: en el mundo de la política contemporánea ya no existiría ni una derecha ni una izquierda. Es la posición de quienes no creen que la política sea capaz de ofrecer oportunidades de elecciones significativas entre alternativas programáticas” (Pasquino, 2004). Por su parte, Anthony Giddens (1999), con su propuesta de la “tercera vía”, quería superar la dicotomía tradicional entre las izquierdas y las derechas, refiriéndose tanto a las deficiencias de la socialdemocracia tradicional del siglo XX como al modelo neoliberal de fines de ese mismo siglo.

Sin embargo, muchos partidos y grupos políticos que se dicen de izquierda y derecha, sobre todo en tiempos electorales, se siguen enfrascando en peleas y combates de posiciones de confrontación bajo esta perspectiva. Bobbio reivindica la distinción, queriendo recuperar el significado político de la dife-

rencia, y llega incluso a mencionar que “izquierda y derecha son términos que el lenguaje político ha venido adoptando a lo largo del siglo XIX hasta nuestros días, para representar al universo conflictivo de la política” (Bobbio, 1995, capítulo 2), mientras que Gómez Barata afirma que “el uso de los términos *derecha* e *izquierda* es un magnífico recurso para identificar y ubicar convenientemente a los actores del proceso político” (Gómez B., 2007). La respuesta entonces a la pregunta inicial no tiene una respuesta clara: se puede contestar con un “Sí” con suficientes razones teóricas y prácticas, y se puede contestar con un “No” debido al corrimiento ideológico de ambas tendencias hacia un centro político indiferenciado.

En América Latina, además, hay un fenómeno novedoso: después de la etapa de los múltiples gobiernos dictatoriales y militares se pasó a una transición democrática entendida solamente desde la perspectiva de realización de elecciones con gobiernos civiles, los cuales en su mayoría implementaron medidas acordes al modelo económico neoliberal; de esta forma se puede hablar, por un lado, de una frágil democratización, de una “democracia restringida” usando el concepto de Agustín Cueva, de una “democracia precaria” como lo señala Jorge Alonso para el caso de México y el estado de Jalisco, porque las mismas reglas de funcionamiento electoral con una mínima transparencia apenas se pueden estar empezando a consolidar y, por otro lado, hay que hacer referencia siempre a una situación en donde cambian las élites políticas sin que cambie para nada el modelo económico desigual del capitalismo y la globalización salvaje. “En Latinoamérica se tuvo una de las oleadas democratizadoras más importantes del último trayecto del siglo XX. La mayor parte de las naciones del subcontinente padecían regímenes dictatoriales y autoritarios que se fueron desgastando y agotando para dar lugar a procesos políticos que implicaron una mayor liberalización y democratización en la vida de sus sociedades” (Tejeda, 2005: 93). Sin embargo, bajo las mismas reglas de la democracia electoral, en

el tránsito al siglo XXI, diversas ideologías de izquierda han llegado al poder de diversos gobiernos, especialmente en América del Sur. La discusión entre la izquierda y la derecha se ha vuelto a intensificar, teniendo no solamente un escenario de discusión ideológica sino sobre todo la propuesta de nuevas alternativas al modelo económico dominante e incluso con el imaginario de un socialismo para el siglo XXI, como lo propone Hugo Chávez para Venezuela. Con esta oleada de una izquierda en ascenso no sólo en el ámbito electoral sino también en los movimientos sociales, podemos utilizar lo que Robinson Salazar (2005) ha llamado la “democracia emancipatoria”, entendiendo que es necesario profundizar el concepto a partir de mecanismos institucionales establecidos para marcar nuevos senderos de política social para vencer la pobreza y la desigualdad y aun plantearse opciones alternativas frente al capitalismo y al modelo neoliberal dominante. Si la democracia y la izquierda pueden ser presentadas como una verdadera opción para las diversas naciones, no hay que olvidar, más allá de las definiciones ideológicas, cuál es el problema principal a combatir, como bien lo señalaba Porfirio Miranda, uno de los grandes profesores que he tenido en mi vida y cuyas palabras son citadas en el epígrafe de esta introducción: el verdadero problema es la pobreza y la desigualdad entre los seres humanos; combatirlas con eficacia es una tarea posible en este mundo.

Ya no se puede negar este ascenso de la llamada izquierda en nuestra región aunque sea objeto de mucha polémica su significado: “esta marea de izquierda que parece estar recorriendo las naciones americanas al sur del Río Grande ha levantado controversias tanto viejas como de nuevo sabor que van desde preguntarse sobre si sus políticas son buenas, son malas, para dónde se dirigen o qué tan sustentables son y cómo esta marea se parece o se diferencia de la izquierda o del populismo de tiempos pasados” (Tussie and Heidrich, en Castañeda y Morales, 2008).

Este libro comienza abordando la discusión ideológica e histórica sobre la derecha y la izquierda política, tratando de mostrar una discusión sustentada a favor y en contra de la dicotomía. Nuestra postura está a favor de seguir manteniendo la distinción conceptual y analítica pero con ciertas condiciones fundamentales, teniendo en cuenta sobre todo una gran pluralidad de izquierdas existentes. Se aborda luego el tema de los nuevos imaginarios sociales surgidos en el subcontinente queriendo mostrar el cambio cultural que está ocurriendo cuando la población está perdiendo el miedo a imaginar y luchar para que el mundo pueda ser de otra manera. Posteriormente se aborda el particular escenario electoral latinoamericano, focalizando especialmente los países cuyos comicios presidenciales acontecieron durante el 2006 y 2007, en donde diversos gobiernos obtuvieron la victoria mostrando políticas innovadoras y aun nuevos idearios post-neoliberales como un imaginario social alternativo para la región. Se puede decir claramente que en Latinoamérica, “las elecciones en la región continúan siendo un motor de cambio” (Carlsen, 2006), aunque la democracia puramente electoral tiene ciertamente sus propios límites. En términos declarativos, en la mayoría de los gobernantes se está superando el llamado modelo único del neoliberalismo y se pretende implementar una nueva política social. Por ello, sostenemos que algo nuevo está ocurriendo en América Latina en el comienzo del siglo XXI, no solamente en la superación del autoritarismo sino en la construcción de nuevas opciones emergentes dentro de la frágil democracia, aunque todavía no está definido si se trata de una tendencia más permanente y consolidada.

Tengo que agradecer especialmente a varios estudiantes de la carrera de estudios internacionales del ITESO (Universidad Jesuita en Guadalajara) como Alejandra Mendoza, Olivia Zúñiga, Miguel Angel Torres y Rafael García, quienes en algún momento del proceso me ayudaron en la recolección de datos y en la corrección de varias partes del manuscrito; de la misma

manera, tengo que dar las gracias a varios colegas de la Universidad de Guadalajara y del ITESO, que leyeron partes de este trabajo y que me hicieron valiosos comentarios sobre el contenido.

Ignacio Medina Núñez¹¹
medina48@yahoo.com

¹¹ Ignacio Medina es doctor en Ciencias Sociales y profesor en el ITESO (Universidad jesuita en Guadalajara) y en la Universidad de Guadalajara.

CAPÍTULO I

¿DISOLUCIÓN DE FRONTERAS O CONFRONTACIÓN IDEOLÓGICA?

“Derecha e izquierda no son conceptos absolutos sino históricamente relativos, o sea sólo dos maneras posibles de catalogar los distintos ideales políticos, y por lo tanto ni los únicos ni siempre los más relevantes... El hombre de derecha es el que se preocupa, ante todo, de salvaguardar la tradición; el hombre de izquierda, en cambio, es el que entiende, por encima de cualquier cosa, liberar a sus semejantes de las cadenas que les han sido impuestas por los privilegios de raza, de casta, de clase, etc. Tradición y emancipación pueden ser interpretadas también como metas últimas o fundamentales, y como tales irrenunciables, tanto por una parte como por la otra: se pueden alcanzar con distintos medios según los tiempos y las situaciones”. Bobbio, 1995.

Derecha e izquierda: disolución de fronteras

Estos conceptos cuya confrontación ha significado tanto en el mundo moderno de la política surgieron a partir de la referencia histórica de la revolución francesa de 1789¹². Esta referencia ubica en un escenario espacial específico dentro de la asamblea nacional de representantes a quienes, por un lado, defendían el nuevo modelo de la república y a quienes, por otro lado, eran partidarios del modelo monárquico. Se trataba de una clara simplificación en donde se iban a agrupar en el

¹² En las reuniones de la Asamblea Nacional francesa que tuvieron lugar de agosto a septiembre de 1789, en el momento de la discusión sobre la propuesta de veto del depuesto rey Luis XVI, se aglutinaron del lado derecho los diputados partidarios del veto real mientras que los opositores al veto, llamándose patriotas, se ubicaron en el izquierdo.

lado izquierdo quienes pretendían tener posiciones revolucionarias enarbolando los principios de la democracia liberal frente a quienes, ubicados en el lado derecho, defendían el estado absolutista y en particular al rey Luis XVI. Era una simplificación que aglutinaba solamente dos posiciones porque en la práctica, la llamada izquierda agrupaba a numerosos grupos moderados y radicales con diferentes niveles de poder y métodos de actuación quienes, a pesar de su común ideología revolucionaria, se miraban enfrentados entre ellos¹³. Estas ideologías de izquierda son las que van a triunfar en Francia al lograr la decapitación de Luis XVI y su esposa María Antonieta pero que provocaron la instauración, con Robespierre, de un régimen de terror al implantar medidas violentas y destructivas entre los propios líderes revolucionarios.

Para el siglo XX, en Francia permanecerá la lucha ideológica entre la izquierda y derecha pero, cada una de ellas, podrá tener numerosos partidos y movimientos en su seno. Como en numerosos países, al igual que cuando se habla de la contradicción de las clases sociales¹⁴, también la izquierda y la derecha no fueron campos rígidamente determinados sino que se

¹³ Los primeros grupos de la izquierda francesa fueron entonces los Jacobinos, los Cordelianos, los Girondinos, los Montañeses, comunistas, etc. Todos ellos eran partidarios del modelo de la República, un modelo de gobierno sin rey, pero todos ellos estuvieron enfrentados también de manera violenta por las particularidades de sus posiciones. En la derecha estuvieron todos los llamados monárquicos, que estaban a favor de la restauración del rey o por lo menos de conservarle su derecho de veto sobre los asuntos de estado.

¹⁴ Carlos Marx señaló con claridad la contradicción de dos clases fundamentales (la burguesía y el proletariado, la clase dominante y la clase dominada), pero dentro de cada una de ellas, cuando se refiere a coyunturas específicas como en “la lucha de clases en Francia” encontraba numerosos grupos a quienes también denominó clases: los terratenientes, los banqueros, los industriales, los campesinos, los obreros industriales, la pequeña burguesía, etc. Este análisis coyuntural lo retomaría también Mao Tse-Tung en China para buscar incluso alianzas entre clases sociales contradictorias dentro de una misma formación social.

empezaron a distinguir otras corrientes para distinguir, por ejemplo, la izquierda y la derecha radical (la ultra), la izquierda y la derecha moderada, e incluso diversas corrientes de centro que tomaban elementos de uno y otro bloque. En casos como en el Perú de 1978 cuando competían más de 30 partidos en el proceso electoral, había más de 10 partidos de izquierda, otros tantos de derecha, y otros más de centro.

Citando también el caso de México en la década de los setentas, durante el surgimiento de la propuesta de reforma política del presidente José López Portillo, se conocieron, por ejemplo, numerosas y distintas agrupaciones políticas de diferentes tendencias, que se catalogaron con diferentes signos ideológicos: Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Comunista Mexicano (PCM), Partido Socialista Revolucionario (PSR), Partido Popular Socialista (PPS), Partido Acción Nacional (PAN), Partido Demócrata Mexicano (PDM), etc. (Cfr. Medina I., 1978). Y empezaron luego a surgir algunos otros que buscaban representar una ideología más centrista: Partido Verde Ecológico Mexicano (PVEM), Partido del Trabajo (PT),... y otras agrupaciones más radicales de izquierda como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Por su parte, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) se presentaba siempre como heredero de la revolución mexicana –y por tanto, de una izquierda revolucionaria– para distinguirse de la derecha, pero con corrimientos hacia posiciones de un centro ideológico moderado.

Las investigaciones realizadas por René Rédmond (1993, 2005), son muy ilustrativas en la discusión de este mismo problema, preguntándose algo semejante a lo que nosotros hacemos: ¿tiene sentido esa división tradicional entre la derecha y la izquierda? Para él, por ejemplo, las diferencias fundamentales entre derecha e izquierda en Francia han ido desapareciendo, llegando a ciertos consensos fundamentales sobre lo que es la *República*, la *Democracia*, la *laicidad*: “De esta manera, Repú-

blica, Democracia, son instituciones que actualmente ya no son un principio de división ni fomentan la discordia: no es eso lo que divide a la derecha y la izquierda sino que son un elemento de consenso entre los franceses” (Rédmond, 1993: 27).

En Francia, menciona Rédmond, la revolución de 1789 dividió a los franceses en derecha e izquierda: a favor del cambio revolucionario hacia la república o a favor de la monarquía absolutista. En el primer centenario, en 1889, todavía existía esa división ideológica; sin embargo, 200 años después de la toma de la Batilla, ya no existe esa contradicción; él cita la siguiente confirmación: “En su introducción general a su estu-penda *Histoire des Droites* publicada en 1992, Jean-François Sire-nelli hacía referencia a numerosos sondeos de opinión pública realizados entre 1989 y 1991, que revelaban que entre el 55 y el 56% de las personas interrogadas, esto es una mayoría clara, pensaban que esa división ideológica ya estaba superada” (Rédmond, 2005: 46).

En cierto paralelismo con la historia política mexicana, fue claro el cambio en la historia del siglo XX a partir de la revolución de 1910; de hecho el nuevo gobierno con el partido hegemónico que gobernó el país durante 71 años a partir de 1929 se apropió de la ideología revolucionaria frente a una derecha que fue representada por el PAN y otros grupos como el sinarquismo. Sin embargo, con la alternancia en la presidencia de la república en el 2000, el gobierno del presidente Fox nunca cuestionó la revolución reivindicando la dictadura de Díaz sino solamente la matizó quitando, por ejemplo, cuadros con la figura de Zapata sustituyéndolos con la de Francisco I Madero y sus postulados más moderados con respecto al gobierno anterior.

Si aparte de la concepción del modelo republicano, se quieren señalar otros puntos fundamentales que antes dividían a la izquierda y la derecha francesa, éstos son los siguientes.

Uno era la cuestión religiosa, lo cual también puede ser cosa del pasado; hay una aceptación generalizada de que cada

quien puede ser libre de profesar sus creencias religiosas sin que el gobierno tenga que imponer una religión y prácticas obligatorias a partir de las creencias del jefe de estado.

Antes se consideraba que la derecha optaba por el capitalismo y la izquierda por el socialismo. Pero en todo el siglo XX, la socialdemocracia exitosa en diversos países europeos pudo mostrar los grandes beneficios para la sociedad con el estado benefactor de tipo keynesiano, dentro de las reglas fundamentales de libre empresa y competitividad capitalista. Incluso la opción más clara durante la preponderancia del modelo neoliberal entre izquierda (optando por las empresas propiedad del estado) y derecha (optando por las privatizaciones) ha ido desapareciendo. En la Francia de los años 80s, François Mitterrand se presentó como el candidato que iba a combatir el capitalismo y, sin embargo, toda la época del Partido Socialista en el poder siguió las reglas del modelo del capitalismo europeo, llegando incluso a la realización de privatizaciones de empresas que no se habían hecho cuando la derecha estaba en el poder. Sarkozy, en cambio, el nuevo presidente de Francia a partir de las elecciones de mayo del 2007, acusa a la izquierda de inmovilismo y de haberse vuelto reaccionaria; él mismo, representando un partido al que todos llaman de derecha, se dice inspirado en teóricos ligados a la tradición de la izquierda como Antonio Gramsci: “En realidad, yo he hecho mío el análisis de Gramsci: el poder se gana por las ideas” (Sarkozy, en *Le monde diplomatique*, 2007: 8)

Se consideraba también –esto en un ámbito mundial– que la izquierda estaba a favor del proletariado, de los trabajadores, mientras que la derecha tenía su opción por el empresariado y los grandes ricos, considerados éstos como los únicos que podían hacer crecer la economía. Sin embargo, por diversas razones, ambas corrientes ahora se refieren conjuntamente al pueblo en general, a los derechos de los ciudadanos, a los derechos políticos de todos los habitantes. De alguna manera, el lenguaje es convergente hacia los derechos políticos de todos:

“la noción de ciudadanía reposa sobre el reconocimiento de los derechos políticos” (Touraine, 2005: 94).

Si todavía se quiere añadir otro punto en la disolución de fronteras ideológicas, está el asunto del proyecto de la Unión Europea. Estar a favor o no de este gran proyecto de integración no ha sido un asunto de ideologías de izquierda o derecha; a favor o en contra de este proyecto se encuentran alianzas de una y de otra ideología; en este tema los que están con el sí o el no, distan mucho de alinearse con la derecha o con la izquierda, como bien se comprobó en el referendun francés del 2005 sobre la propuesta de constitución europea; incluso gobiernos llamados de derecha como el de Sarkozy en Francia o el de Merkel en Alemania son los principales impulsores de la Unión Europea.

Se ha dicho en muchos círculos de opinión, además, que una de las características permanentes de la izquierda es la opción por el cambio, mientras que la derecha opta por la tradición y el conservadurismo. Pero la experiencia histórica de las sociedades revuelve mucho estas características en muchos casos: la historia del capitalismo ha mostrado claramente cómo los valores de la ganancia se han impuesto para cambiar numerosas costumbres tradicionales de los pueblos; los cambios impulsados por la globalización económica de finales del siglo XX y representando a los intereses de la industria y grupos de poder de la derecha siguen revolucionando con cambios drásticos la vida al interior de las naciones: el mundo en su totalidad ha cambiado radicalmente de los inicios del siglo XX a los inicios del siglo XXI. Otro caso fue la situación de la antigua URSS cuando la llamada izquierda gubernamental enarbolando el socialismo de estado defendía el statu quo frente a quienes criticaban y luchaban por mayor libertad dentro del esquema soviético: la izquierda se había vuelto conservadora y tachaba de derechistas y pro-imperialistas a todos sus críticos. Otro ejemplo más podemos citar cuando, a finales del siglo XX, las tendencias de izquierda empezaron a defender el modelo de

estado benefactor (independientemente de su contenido en cualquier país) frente a todos los cambios que la derecha empezó a proponer para achicar el estado y luchar por el libre comercio. Con ello, podemos citar de nuevo a Sarkozy en su campaña para postularse a la presidencia francesa: “Nuestra fortaleza será un partido en movimiento; los socialistas son los que se han convertido en conservadores” (Le monde diplomatique, 2007: 8).

La conclusión de Rédmond es contundente para Francia: “La distinción entre derecha e izquierda ya no es pertinente; ella no determina las posiciones de una parte u otra ni esclarece las motivaciones para elegir una posición específica” (Rédmond, 2005: 74). Sin embargo, parece claro que la confusión de posiciones ideológicas ha llegado a ser un fenómeno mundial cuando en todos lados vemos los desplazamientos de ideas y las alianzas entre partidos y movimientos de distintos signos: partidos de la derecha se acercan a posiciones de centro (postulando demandas típicas de la izquierda sobre los reclamos populares) con el objeto de ganar electores; partidos de la izquierda radical moderan sus posiciones e incluso cambian de nombre (quitando, por ejemplo, el nombre del *comunismo*, concepto tan denigrado por los medios de comunicación) para no asustar a una población y perder votos.

Se puede ver con claridad, además, una serie de temáticas políticas muy importantes que se han vuelto comunes para cualquier gobierno, independientemente de su signo ideológico: la seguridad para todos los ciudadanos, la lucha contra el terrorismo, el combate a la pobreza, la batalla contra las drogas y el narcotráfico, etc. Esto ha contribuido a que los partidos políticos de izquierda y de derecha tengan agendas comunes en sus propuestas, diferenciándose en muchas ocasiones no por sus objetivos sino solamente por la forma de hacer sus programas, prometiendo solamente mayor eficacia que los contrincantes.

Permanencia de la confrontación ideológica

Sin embargo, para no quedarnos con el sentimiento que provoca uno de los poemas irónicos del antipoeta chileno Nicanor Parra (*“La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas”*), hay que admitir que, aunque se puede probar que la distinción de las ideologías tradicionales está dejando de operar, por lo general, siempre se encuentran presentes en la lucha política. Es decir, la diferencia ideológica parece caduca desde cierta perspectiva, pero las fronteras no han desaparecido: la lucha de la llamada izquierda y derecha está más presente que nunca en los debates nacionales. Hay consensos fundamentales pero también hay división, separación y combate entre posiciones de poder y puntos de vista. “En los mismos sondeos de opinión en donde una mayoría juzga que la distinción entre derecha e izquierda está pasada de moda, también hay una mayoría que acepta situarse en relación a ella: en noviembre de 1990, solamente 34% de los franceses aceptaban que esta diferencia de ideologías tenía sentido, pero 38% se reconocían como de izquierda y un 28% como de derecha, es decir, un total del 66%... Es decir, las diferencias entre la derecha y la izquierda no han desaparecido totalmente” (Rédmond, 1993: 47-48). Y si vemos la vida política electoral contemporánea de Francia en las elecciones de 2007, numerosas discusiones y anuncios y reportajes en los medios masivos de comunicación colaboran para distinguir con claridad las opciones del electorado, incluyendo a los candidatos en las siguientes opciones: derecha, izquierda, extrema derecha, extrema izquierda, centro y “otros”. La realidad empírica muestra entonces que en Francia –y también en el resto del mundo– hay muchos temas que separan a los grupos de interés de la sociedad que se manifiestan en la vida política en la que se libra una lucha frontal, especialmente en los momentos electorales: política social, el aborto, la posición de la mujer en la sociedad, la pena de muerte, la migración, la identidad nacional, la lucha contra la

pobreza y el desempleo, las medidas fiscales, las políticas de seguridad,...

Si bien es cierto que con la crisis de los socialismos de Europa del Este y la desaparición de la antigua URSS, numerosas posturas ideológicas de la izquierda ligada a la corriente del marxismo-leninismo fueron perdiendo credibilidad, se puede seguir afirmando que sigue habiendo una gran confrontación entre quienes postulan la necesidad de cambios urgentes y necesarios a partir de una situación empírica de enajenación y explotación de una gran mayoría de los seres humanos del planeta y quienes aceptan las diferencias y las desigualdades en la sociedad como algo natural, frente a lo cual solamente se pueden hacer reformas menores y ciertos programas asistenciales.

Con esto, nos podemos sumar a la postura de Bobbio (1995), en el sentido de afirmar que la dicotomía de posiciones entre izquierda y derecha todavía tiene un sentido fundamental en el modo de hacer política; “se puede incluso afirmar que izquierda y derecha son términos que el lenguaje político ha venido adoptando a lo largo del siglo XIX hasta nuestros días, para representar al universo conflictivo de la política” (Bobbio, 1995, cap. 2), aunque siempre hay que admitir que son términos relativos, espaciales y referidos a sociedades determinadas en donde su contenido de postulados puede variar con el tiempo. Se puede decir que la izquierda sigue teniendo sentido en la medida que postula la necesidad de la liberación y la emancipación de los seres humanos que están sujetos a ciertas cadenas impuestas por el poder de grupos que se apropian de los recursos sociales a partir de su posición y privilegios de raza, clase, élite o fuerza económica, política y militar.

Sin embargo, la derecha no está alejada tampoco de estos postulados, puesto que no pueden cerrar los ojos a la desigualdad existente dentro de cualquier sociedad. Por ello, entonces, la principal distinción entre la izquierda y la derecha podría encontrarse en la manera en cómo se quiere afrontar la des-

igualdad social. “El criterio más frecuentemente adoptado para distinguir la derecha de la izquierda es el de la diferente actitud que asumen los hombres que viven en sociedad frente al ideal de la igualdad, que es, junto al de la libertad y al de la paz, uno de los fines últimos que se proponen alcanzar y por los cuales están dispuestos a luchar” (Bobbio, 1995, cap. 6). Por un lado, entonces, hay quienes consideran las desigualdades como fruto de un desarrollo histórico de la sociedad, que han sido causadas precisamente por los propios seres humanos y, por lo tanto, es un hecho posible de ser transformado a través de las mismas acciones de individuos y grupos sociales; por otro lado, habría quienes le otorgan a la desigualdad el calificativo de “natural” y por ello consecuentemente se enfrentan a la imposibilidad de cambiar de manera drástica ese estado de cosas¹⁵; propio de la derecha sería entonces la aceptación de las desigualdades fundamentales entre los seres humanos, las cuales no pueden combatirse más que con reformas menores y programas de tipo asistencial.

Si bien entonces es útil en la política la distinción de estas corrientes ideológicas, ¿por qué la confusión y por qué el acercamiento de posiciones entre ambas corrientes en cuanto a sus programas de acción en las distintas sociedades?

Hay que aceptar que en el siglo XX proliferaron numerosas tendencias de izquierda postulando el socialismo y el comunismo, llegando a tener poder efectivo en numerosos gobiernos. Sin embargo, por un lado, la debacle de los socialismos de Europa del Este y la desaparición de la antigua URSS ofrecieron una idea contundente sobre la imposibilidad a corto plazo de la construcción de una sociedad alternativa al capitalismo; de alguna manera, numerosas corrientes de izquierda han tenido que moderar sus posiciones pasando de la radicalidad del

¹⁵ Se han adoptado incluso fundamentaciones de tipo religioso al recordar las palabras de Jesucristo en los evangelios “A los pobres los tendréis siempre con vosotros” (Juan 12, 8), queriendo afirmar la diferencia permanente e irremediable entre ricos y pobres a lo largo de toda la historia humana.

enfrentamiento al capitalismo hacia las reformas moderadas dentro del sistema. De esta manera, aunque Proudhon fue derrotado ideológica y políticamente por Marx en uno de los congresos de la Asociación Internacional de Trabajadores, su propuesta decimonónica de colaboración con las fuerzas del gobierno en turno, aceptando la necesidad de impulsar reforma moderadas como camino hacia una sociedad mejor, se ha estado reivindicando a finales del siglo XX y comienzos del XXI.

Pero, por otro lado, hay que tener en consideración un hecho empírico comprobado: no todos (ni individuos, ni grupos, ni partidos ni gobiernos) los que dicen tener una ideología de izquierda son consecuentes en la práctica de sus acciones con los principios en los que dicen inspirarse. O por lo menos, en numerosos casos puede constatarse que muchas ideologías de izquierda han sido utilizadas por diversos grupos –sobre todo cuando están en posiciones de poder gubernamental– para beneficio propio (Kuehnelt-Leddihn, 1991). Por ello, hay que aceptar que gobiernos como el de Pol Tot en Camboya, el de Sadam Hussein en Irak, o el partido nacional socialista de Hitler, amparados en ideologías que decían luchar por el socialismo, no tenían nada que hacer dentro de la izquierda. E incluso hubo períodos en la antigua URSS en donde el Stalin de la década de 1920 mandó a la purga a la mayoría de sus antiguos compañeros líderes que habían acompañado la revolución de octubre de Lenin y, entonces, frente a él como frente a otros líderes de izquierda, han surgido otras izquierdas (como la de Troski frente a la dictadura stalinista), que reclaman ser la verdadera izquierda. Pudo suceder entonces, como lo señala Castoriadis (1975), que el marxismo mismo (el símbolo de gran parte de la izquierda) se convirtió en una ideología esclerótica que no existía ya más que como discurso de justificación de burocracias de poder –y por tanto, de la derecha– aunque se seguían considerando como representantes de las clases populares.

Hay que señalar también que el acercamiento de posiciones entre izquierda y derecha también ha sido producto de los nuevos procesos del siglo XX. La clase obrera dejó de ser considerado el único movimiento revolucionario por la izquierda; lo demostró Mao Tse-Tung al señalar a los trabajadores del campo (los campesinos a los que Marx había llamado pequeña burguesía) en China como los principales artífices de un movimiento de guerra popular prolongada que llegó al triunfo en 1949. Además, tanto el movimiento estudiantil de Francia en mayo de 1968 como ciertos escritos de Marcuse mostraron el potencial de los jóvenes estudiantes. Pero fueron sobre todo los llamados “nuevos movimientos sociales” como el feminismo y los ecologistas quienes mostraron que dentro de ellos podía estar tanto la izquierda como la derecha. De esta manera es como se han ido constituyendo los frentes amplios de ciudadanos que no quieren pertenecer en muchas ocasiones a ningún partido o grupo ideológico determinado.

En el movimiento por los derechos de las mujeres, por ejemplo, Bernard Stiegles relata el caso ocurrido en 1929: “Edward Barneys, para quien el problema clave de los grandes estados industriales del siglo XX será el dominio de la opinión y el control de los comportamientos individuales y colectivos,... propone sus servicios a la compañía Philip Morris en grave dificultad financiera, a la que le hace la oferta siguiente: los Estados Unidos es un país puritano donde las mujeres no fuman, pero se les puede incitar a fumar, a transgredir los tabus gracias a una campaña publicitaria centrada en el inconciente femenino. La emancipación femenina pasará por el cigarro... Con ello Philipp Morris extiende su mercado y sale de la crisis” (Stiegler, en *Le nouvel observateur*, 2007: 25). De una manera curiosa, se unieron en un momento determinado intereses económicos, liberación femenina y la necesidad de impulsar cambios de comportamiento en la población.

De esta manera, tampoco se podría formular que es la derecha la que defiende los valores tradicionales, y la izquierda la

que promueve el cambio. Como lo señala el mismo Stiegler (*Le nouvel observateur* 2007: 26), a propósito del movimiento estudiantil de 1968 en Francia, muchos pensaban en la defensa del capitalismo representando a la derecha y los valores tradicionales, mientras que los estudiantes eran de izquierda al querer simbólicamente destruir esos valores. Pero el análisis histórico puede mostrar claramente que es el proceso de producción capitalista lo que ha subvertido gran parte de los valores de la sociedad, revolucionando radicalmente no solo la economía sino la política, la cultura y los imaginarios sociales antiguos. ¿Dónde quedó la izquierda? ¿no estaba más bien representada por los defensores de numerosos valores tradicionales?

En un mundo plural

Con los precedentes históricos señalados, ¿no hay suficientes razones para seguirse confundiendo entre tantos partidos y movimientos? ¿Hay una izquierda y una derecha claramente definidas? ¿Vale la pena seguir utilizando estas categorías de análisis político?

En la práctica sabemos que no todos los que se confiesan públicamente con una ideología específica responden en la práctica a ella, y que ha habido importantes corrimientos ideológicos cuando se ha aceptado que la toma del poder por un gobierno o un líder revolucionario no necesariamente garantiza una mejor sociedad.

A pesar de todas las confusiones creadas, hay un fundamento histórico y teórico para seguir sosteniendo la dicotomía tradicional de estas categorías políticas de izquierda y de derecha. Lorenzo Meyer afirma que el término de izquierda “se acuñó en el siglo XVIII, durante la Revolución francesa (en la asamblea, los radicales se sentaban a la izquierda), pero su equivalente ha existido desde el inicio de la actividad política. Izquierda es un término que identifica a todos aquellos que en diferentes épocas y circunstancias se han pronunciado o actuado a favor del cambio radical, con un argumento ético y en

función explícita de los intereses de la mayoría. Desde esta perspectiva, de izquierda eran los hermanos Graco –Tiberio y Cayo, descendientes de Escipión el Africano– que como tribunos se propusieron llevar a cabo una reforma agraria para mejorar la condición de las masas plebeyas; también de izquierda fue el cura mestizo José María Morelos y Pavón, quien luchó no sólo por la independencia de la Nueva España, sino por una política de justicia social que disminuyera el abismo creado por tres siglos de colonialismo entre los muy numerosos pobres y los muy pocos ricos del reino. Y no es coincidencia que ellos y tantos otros que optaron por posiciones similares hayan encontrado la muerte a manos de los defensores del *statu quo*, es decir, de la derecha” (Meyer, 2005: 97)

Sin embargo, más allá de las autodefiniciones de cada organización, hay que darle un contenido práctico a la ideología en cada localidad, teniendo en cuenta que, dentro de cada espacio local, surgen no siempre dos posiciones contrapuestas sino decenas de movimientos, líderes y partidos entre los cuales pueden darse numerosos conflictos y alianzas. El análisis coyuntural, por tanto, tiene que pesar más que los principios declarados por los líderes y las interpretaciones ideológicas sobre los postulados teóricos; se tiene que hacer continuamente un análisis histórico coyuntural para ver quién puede ofrecer y llevar a la práctica determinadas metas que en algo ayuden a mejorar las condiciones de vida de la mayoría de los habitantes.

Aparte de la opción por seguir sosteniendo la validez de ciertas diferencias fundamentales entre la izquierda y la derecha, debido a la persistencia de los corrimientos ideológicos y la delimitación de fronteras, me parece importante asumir además la propuesta práctica de Pasquino, quien piensa más en términos de un sistema democrático en donde pueden tener cabida distintas ideologías y programas, según los avatares de los procesos electorales. Aunque cualquier persona pueda reconocerse con afinidad por una de las dos posturas (o varias más, cuando se desglosan otros adjetivos como “moderada” o

“extrema”), hay que reconocer que no es deseable el llegar a una situación permanente e indefinida de dominación de un determinado grupo social en cualquier gobierno y por ello, en vistas de una gobernabilidad democrática, habría que admitir siempre la posibilidad de alternancia conforme al sentir de la población, con reglas determinadas y confiables. “Sólo si la derecha y la izquierda tienen perspectivas efectivas de gobierno y temores igualmente efectivos de perder el gobierno a través de procedimientos de alternancia democrática tratarán entonces de controlar y conducir los procesos de globalización” (Pasquino, 2004). Aunque, como él mismo lo señala, habría que poner determinados condicionantes: “Derecha e Izquierda, tanto en el gobierno como en la oposición, tienen la gran oportunidad de garantizar la gobernabilidad democrática si, *primero*, actúan de manera responsable, o sea, si aceptan la responsabilidad por las decisiones que toman; si, *segundo*, se enfrentan por las políticas y no por los valores y tampoco, salvo excepcionalmente, por las reglas constitucionales; *tercero*, si no son muy distantes, si no se *polarizan*; si, *cuarto*, permanecen en el terreno estrictamente político y no utilizan ni intentan movilizar recursos extras o antipolíticos; si, *quinto*, pueden alternarse periódicamente en el gobierno y *aprovechan* esa oportunidad..” (Pasquino, 2004).

Es muy importante esta perspectiva puesto que en cualquier contienda democrática con reglas institucionales establecidas, tanto los grupos llamados de derecha como los de izquierda puede llegar a acceder al poder. Engels planteaba a mediados del siglo XIX que con el sufragio universal, la clase trabajadora accedería al poder del gobierno con medios democráticos por el hecho de ser mayoritaria; sin embargo, en la democracia no hay determinismos absolutos: los intereses de clase (si es que seguimos utilizando el concepto) nunca se expresan de manera mecánica en conciencia de clase para votar por una sola organización; cuenta, además, muchísimo el papel de los medios de comunicación en períodos electorales. Por

ello, pudo darse, por medios democráticos, en Italia, en un momento el triunfo del empresario Silvio Berlusconi; por ello, en Ecuador, en el 2006, el multimillonario Álvaro Noboa tuvo tantos votos en las elecciones presidenciales que lo llevaron a ganar la primera vuelta; por ello también, en Argentina, en junio del 2007, pudo ganar el derechista Mauricio Macri, con el 60% de los votos, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, llamando la atención del periodista Horacio Verbitsky de la siguiente manera: "sería la primera vez en la historia electoral argentina que una representación política de las clases dominantes accediera al gobierno de un distrito importante del país por medios legales y pacíficos" (La Jornada, 25 junio 2007),

De esta manera, resulta razonable que, aunque haya que apasionarse por alguna de las opciones políticas en relación al funcionamiento de la sociedad, hay que encontrar una manera de gobernar que permita la alternancia, de acuerdo a la voluntad mayoritaria de una población expresada en los votos: cualquier gobierno deberá ser transparente y estar supeditado a diversos controles, en especial a los resultados electorales confiables, después de ciertos períodos fijados por las leyes de cada país. En América Latina, estas reglas de la democracia electoral todavía están a debate porque no existen instituciones suficientemente consolidadas en todos lados que garanticen plenamente los resultados. Esto último, ciertamente, es una gran tarea por conquistar; sin embargo, izquierda y derecha, entonces, más allá del ofrecimiento ideológico de sus posturas a partir de sus propios valores, tendrán que ser juzgados por su práctica política, supeditados a un proceso posible de alternancia periódica; nunca podrá ser valedero que un gobierno se siga imponiendo por tiempo indeterminado, con el pretexto de que la población ignora qué es lo que conviene a sus intereses colectivos y que por ello se quieran justificar los fraudes patrióticos. En las reglas básicas del proceso democrático, la izquierda y la derecha deben tener consensos fundamentales para una gobernabilidad democrática.

CAPÍTULO II

UTOPIA Y NUEVOS IMAGINARIOS SOCIALES

“Considerada como régimen político, la democracia tiende a aparecer como algo más bien estático. Sin embargo, puede concebirse como una forma de vida, algo eminentemente dinámico. Esta idea se desprende en parte de las concepciones republicanas, remanentes del imaginario de la intensa participación de la vieja democracia ateniense, tributaria también de la concepción de soberanía popular rousseauniana”. (Paez R., en Lizcano, 2006)

En los últimos siglos de la historia humana se ha hecho una distinción clara entre dos épocas: el tiempo de la sociedad feudal europea y el tiempo de la modernidad. Esta diferencia tiene su fundamento en el tránsito de una sociedad teocéntrica hacia una antropocéntrica con el nacimiento de una filosofía del humanismo y del racionalismo. La diferencia entre estas dos grandes épocas se puede ver en múltiples ejemplos, puesto que en el siglo XVI vimos la aparición de numerosos acontecimientos que atestiguan dicho tránsito: el surgimiento de las ciencias naturales, el renacimiento, la reforma protestante, el resurgimiento de las ciencias políticas y sociales, la aparición del nuevo modo de producción capitalista a través de la fuerza de trabajo asalariada, etc. Fue el tránsito de una sociedad alienada en el oscurantismo de una visión teológica que solamente se quería fijar en el más allá hacia una sociedad antropocéntrica en donde el ser humano se convertía en el centro del universo, sobre todo con su capacidad de razonar. Sin embargo,

dentro de la época moderna, la racionalidad no necesariamente está peleada con la utopía y la imaginación.

Racionalidad y utopía

El racionalismo y la modernidad nacieron en Europa pero luego se extendieron a todo el resto del planeta; el desarrollo del capitalismo en particular trajo consigo la revolución industrial del siglo XVIII y XIX con el uso exagerado de los conceptos de desarrollo y progreso. Todo esto se producía a partir de una confianza cada vez ilimitada en el uso constante de la razón del ser humano, que no podría sino conducir a mejores etapas en la vida de la humanidad, particularmente cuando en los siglos posteriores al renacimiento se experimentaba también una transición política del estado absolutista hacia un modelo liberal y democrático.

Los más grandes representantes del racionalismo en Europa fueron Descartes, Spinoza y Leibniz; ellos expresaron una confianza ilimitada en la razón humana como fuerza motriz universal capaz de tender a mejores etapas de desarrollo. Junto con ellos también se desarrolló el concepto de utopía desde Tomás Moro en el siglo XVIII hasta el socialismo utópico del siglo XIX (Saint-Simon, Fourier y Owen), incluyendo la aspiración de una sociedad sin clases de Marx. En un posible diálogo entre ambas corrientes, uno puede preguntarse si con base en la razón puede uno legítimamente aspirar a la utopía, especialmente si uno se pone a analizar las condiciones particulares de la existencia humana y las compara con aquello que debería ser según ciertos conceptos elementales de igualdad, justicia y hermandad.

Hirschberger, como un renombrado autor de la historia de la filosofía, señala que "con Descartes (1596-1650) se inicia definitivamente la filosofía moderna" (Hirschberger, 1998: 163), puesto que él es el iniciador del Racionalismo, una corriente que "significa literalmente filosofía de la razón. En concreto quiere decir que se trabaja preferentemente con la

razón o con la inteligencia (en un principio, ambas cosas son lo mismo), con el pensamiento y con conceptos" (Hirschberger, 1988: 162). Pero un nivel del racionalismo está en la reflexión sistemática sobre los principios generales del ser y otro es la aplicación a la historia y a la comprensión de los problemas sociales y políticos de la sociedad. En este segundo nivel empezaron a brillar en el siglo XVII Joannes Althusius (1557-1638), Hugo Grocio (1583-1645) y Spinoza (1632-1677), quienes empezaron a utilizar la razón para el análisis político de las sociedades humanas.

El escritor alemán y calvinista Althusius en su tratado sobre la política (*Política methodice digesta, exemplis sacris et profanis illustrata*) es de los primeros en oponerse a las ideas absolutistas bajo el principio de que si los gobernantes dirigen al pueblo, el pueblo tiene algo que decir sobre quiénes deban ser sus gobernantes y por ello "declaró que la soberanía descansa siempre, necesaria e inalienablemente, en el pueblo... La teoría política de Althusius es notable por su afirmación de la soberanía popular y por el uso que hizo de la idea de contrato" (Copleston, 1988: 311). Por su parte, Grocio, especialmente con sus textos *Mare liberum*, *De iure belli ac pacis* y *De iure naturae et gentium*, se ha convertido en uno de los primeros teóricos de las relaciones internacionales, dado que la universalización del comercio obligaba a regular cada vez más el derecho a la guerra propiciando la convivencia pacífica entre las naciones. De esta manera, puede uno pensar que, con base en la razón, uno puede criticar fuertemente el modo concreto de existir de una sociedad porque contradice a algo que parece ser exigido por la ley natural: en la práctica, se podía empezar a decir que en un estado nación en donde un rey gobierna con postestad absoluta sobre todos sus gobernados, se trata de una situación contraria a la razón puesto que dichos gobernados –los ciudadanos– tendrían que tener alguna injerencia para definir quién es el que los debe gobernar. La razón y la utopía podían conectarse para impulsar una lucha social en contra de lo establecido.

Sin embargo, fue Spinoza¹⁶, de manera particular, quien más sobresalió con un método racional y matemático al empezar a abordar los tres modelos de sociedad de Aristóteles (monarquía, aristocracia y democracia) y ubicarlos otra vez en la discusión moderna, pero señalando, a diferencia de Aristóteles (que parecía preferir la aristocracia), el fundamento racional del modelo democrático. Al igual que su contemporáneo en Inglaterra Thomas Hobbes, él también creía que los hombres son naturalmente enemigos, pero más que llegar a la conclusión sobre la necesidad de un *Leviathán*, un poder totalitario por encima de la sociedad, Spinoza se inclinaba por la idea del pacto de una asamblea general. Una vida conforme a la razón jamás podrá justificar un gobierno tiránico. En su Tratado Teológico-Político, afirma que el Estado más racional es el más libre; “la república más libre es aquella cuyas leyes se fundan en la sana razón” (Spinoza, 1999: 361); el fin es vivir con pleno consentimiento bajo la entera guía de la razón, y esa clase de vida se asegura del mejor modo en “una democracia, la cual puede definirse como una asamblea general que posee comunalmente su derecho soberano sobre todo lo que cae en la esfera de su poder” (Spinoza, 1999: 360). En una democracia, las órdenes irracionales son menos de temer que en cualquier otra forma de constitución, “por ser punto menos que imposible que la mayoría de una asamblea sancione un absurdo” (Spinoza, 1999: 360-1). Con ello llega finalmente a su conclusión: “He preferido tratar de esta forma de gobierno (la democracia) por parecerme la más natural y la más propia a la libertad que la naturaleza da a todos los hombres, porque en este Estado nadie transfiere a otro su derecho natural, sino que le cede a favor de la mayoría de la sociedad entera de que es una parte” (Spinoza, 1999: 361).

¹⁶ Juan Carlos Scanone señala que antes de Spinoza fue Francisco Suárez (1548-1617) el padre de la democracia moderna porque en su texto *De legibus* de 1612 señala que el poder de los reyes está limitado por el favor de la gente; con ello enfrentó la teoría del poder divino que se adjudicaban los reyes.

Si el modelo de la democracia es lo más racional, si el conocimiento científico abre innumerables posibilidades para el desarrollo del ser humano y de las sociedades, si el comercio se hace universal extendiéndose más allá de los límites del estado-nación, etc. la imaginación y el pensamiento pudieron volar hacia el futuro imaginándose no solamente el fin del autoritarismo monárquico sino también una época en que las naciones pudieran vivir en paz, sin la necesidad de la guerra. La misma racionalidad le daba su fundamento a la utopía, pero ya no como algo irrealizable –que es el significado original: lo que no tiene lugar– sino como un proyecto histórico con el que los seres humanos tienen que comprometerse.

Hobbes presentaba su “Leviathán” como un poder totalitario basado en una necesidad histórica para poder mantener el orden y la estabilidad social entre los seres humanos siempre en pie de guerra; sin embargo, el siglo XVIII en Europa, desde los albores de la Ilustración, trajo consigo también los deseos sobre una sociedad cosmopolita en armonía, producto del cúmulo de conocimientos. Armand Mattelart (2000) nos muestra en su excelente libro sobre la utopía planetaria cómo se fue planteando esta visión por numerosos autores.

De esta manera, Bossuet (1627-1704) y Fenelón (1651-1715) elaboraron conceptos como la “sociedad general del género humano” y el de la “Gran patria del género humano”, que son “los auspicios bajo los que se sitúa el siglo XVIII” (Mattelart, 2000: 74). Varios de estos escritos estuvieron inspirados en la tradición utópica de Tomás Moro y Tomás de Campanella, señalando que era una tendencia necesaria para la humanidad, pero también muchos de ellos estuvieron inspirados tanto en la razón como en el voluntarismo. De manera particular, por ejemplo, en 1708, el abate de Saint-Pierre escribió un texto llamado “Informe sobre la reparación de los caminos” donde empezó “a meditar sobre la necesidad de establecer una paz duradera, con el fin de garantizar un comercio perpetuo entre todas las naciones, y él mismo se dedicó a la

tarea de empezar a publicar otro texto titulado *Proyecto para instaurar la paz perpetua en Europa* (*Projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe*), en donde también aclaraba que dicho proyecto *abarca todos los estados de la tierra*” (Mattelart, 2000: 78). Su consideración fundamental radica en que de manera racional los soberanos de las grandes naciones formarían una sociedad permanente de soberanos en donde renuncian a la vía de las armas y acuerdan la vía de la conciliación a través del instrumento de una asamblea general perpetua. Como dice Mattelart, “quimérica o no, novela inútil o no, la obra del abate de Saint-Pierre representa un jalón en la apertura de la reflexión económica, filosófica y diplomática a la dimensión de toda la redondez de la tierra, como medio de bienestar y de progreso, en contra del espíritu de conquista” (Mattelart, 2000: 80)

En el siglo XVIII se pueden contar alrededor de veinte proyectos de pacificación general, universal o europea en diversos pensadores franceses, ingleses, italianos y alemanes, con la intención de formar la república única del género humano. Podríamos hacer referencia también a la obra de Louis Sébastien Mercier (1740-1814) publicada en 1771 con el nombre de “El año 2440: sueño si acaso lo hubo” (*L’an 2440. Rêve s’il en fut jamais*): en ella, el autor sueña en el devenir del mundo, más de dos siglos posteriores a su propia época, en donde no habría prejuicios religiosos, en donde todos se mirarían como hermanos no importa que fueran chinos o indios, en donde en el mundo solamente existiría una sola familia bajo un padre común. La lógica del racionalismo se imponía en la concepción de la evolución del género humano porque la gente, al duplicar sus conocimientos, llegaría a amarse y a estimarse entre todos ellos; de esta manera, como considera Mercier, en todo el mundo del futuro, “en todas partes, la guerra es considerada como una extravagancia imbécil y bárbara” (Mattelart, 2000: 83).

Sin embargo, Leibniz, uno de los más grandes representantes del racionalismo filosófico, es muy escéptico de esta visión en donde el progreso apunta necesariamente a una sociedad de

paz perpetua; él mismo le escribió una carta al abate Saint Pierre en 1715, criticándole la visión voluntarista de esa unión supranacional; la base de la crítica de Leibniz es el estudio de la historia práctica de los pueblos, cuyo desarrollo no se corresponde necesariamente a una evolución de fases empíricas progresivas hacia mejores estadios de convivencia humana, a pesar de que tengan mejores conocimientos. Voltaire, por su parte, calificó al abate Saint-Pierre como el “Saint-Pierre d’Utopie”.

Hace varias décadas consideré con atención y atracción la tentativa ecléctica de Mannheim en su texto *Ideología y Utopía* de 1929; después Paul Ricoeur publicó otro libro con el mismo título pero con diferente interpretación. Mannheim entendía los conceptos de ideología y de utopía con una relación íntima pero como desviaciones e incongruencia con respecto a la realidad; Ricoeur les dio, en cambio, una interpretación positiva, considerándolos como discursos necesarios para la vida a través de una elaboración simbólico narrativa que tipificaba la imaginación social y cultural en un momento determinado; de hecho, el proyecto más amplio de Ricoeur sobre la filosofía de la imaginación se conecta de manera profunda con toda la interpretación sobre el poder del imaginario en las sociedades. De hecho, de acuerdo a una de las frases atribuidas a Albert Einstein podríamos afirmar que “*la imaginación es más importante que el conocimiento*”, porque es lo que nos hace saltar los límites que nos impone la realidad fáctica para poder luchar por un mejor mundo posible.

¿Podría uno hacer una síntesis entre Mannheim y Ricoeur sobre el mismo tema? Me parece que las dos interpretaciones sobre ideología y utopía pueden existir en todos nosotros. Hay quienes utilizan constantemente la palabra ideología como símbolo denigrante: “estás ideologizado”; “sólo piensas en utopías y por eso estás fuera de la realidad”. Y efectivamente es la perspectiva de Mannheim: hemos elaborado ideas que se han apoderado de nosotros, a las cuales les damos culto, a pesar que están alejadas de la realidad empírica o parecen de-

formarla. Puede pasar algo semejante con el concepto de utopía: el adjetivo “utópico/a” para cualquier persona puede ser algo denigrante porque parece ser sinónimo de un soñador que ya no tiene los pies en la tierra. Y sin embargo, la utopía también puede definirse como un conjunto de ideas-fuerza que son capaces de mover a un individuo o un grupo social para formular y realizar nuevos proyectos; de esta manera, el concepto deja de ser castrante para convertirse en motor creador de nuevas realidades; el mundo, entonces, no puede vivir sin utopía, sin imaginación creadora.

De hecho, tanto Mannheim como Ricoeur pueden ser defendidos en su concepción sobre la ideología y la utopía, dependiendo de las dos tendencias contradictorias que tiene todo ser humano. Utilizando los términos de Edgar Morin, podría afirmarse que cuando la razón se convierte en racionalización, entonces nos ideologizamos y nos mutilamos al querer encasillar de forma necesaria cualquier dato sobre la realidad empírica dentro de los modelos simplificadores ya adoptados; sin embargo, solamente la imaginación y la utopía, que también son capacidades humanas, nos pueden hacer volver a un pensamiento crítico y creativo en donde también las ideas se convierten en fuente de movimiento. Es por ello que tanto Manuel Castells como Alain Touraine le dan un gran valor al análisis de la identidad en los movimientos sociales; de hecho, así titula Castells el segundo tomo de su excelente obra sobre la *Era de la Información*: el poder de la identidad.

Según Kant, existe una tendencia natural del ser humano hacia la paz duradera (de manera semejante a como existe nuestra tendencia hacia la guerra), pero puede modificarse en la vida práctica de acuerdo a las posibilidades de la misma libertad humana, la cual puede adelantar o retrasar los objetivos imaginados de acuerdo con las acciones tomadas por individuos y grupos. Kant tiene la esperanza de que las acciones racionales contribuirán con certeza a la construcción de mejores sociedades: “...*Tomando por nuestra parte disposiciones raciona-*

les, podríamos apresurar la llegada de esa época tan dichosa para la posteridad... La misma guerra, no solo resultará poco a poco una empresa artificiosa, de inseguro desenlace para ambos contrincantes, sino también muy de sopesar por los dolores que luego siente el Estado con su deuda pública en incremento constante... Ya empieza a despertarse un sentimiento en los miembros, interesados en la conservación del todo; lo que nos da esperanza de que, después de muchas revoluciones transformadoras, será a la postre una realidad ese fin supremo de la Naturaleza, un estado de ciudadanía mundial o cosmopolita.” (Kant, 2002: 58-60)

La consideración final es la insistencia y la apuesta, no por las posibilidades destructivas de la insociabilidad –que siempre podrán actuar tanto dentro de los pueblos nacionales como en la comunidad de naciones independientes– sino por la capacidad de sociabilidad de los seres humanos guiados por una razón cada vez más compartida y por su libertad. Es decir, el conocimiento de la “*intención*” de la naturaleza puede tener un efecto propulsor para acelerar el desarrollo de la humanidad hacia mejores niveles de convivencia mundial. Esta capacidad de las ideas de promover cambios en el mundo real de las sociedades se puede expresar así en palabras de Kant: “*Un ensayo filosófico que trate de construir la historia universal con arreglo a un plan de la Naturaleza que tiende a la asociación ciudadana completa de la especie humana, no solo debemos considerarlo como posible, sino que es menester también que lo pensemos en su efecto propulsor...*” (Kant, 2002: 61)

Edgar Morin, por su parte, coincide también con estas dos tendencias inherentes al ser humano: por un lado están las posibilidades del *homo sapiens*, pero también se encuentra en su interior la tendencia del *homo demens*, porque todos los hombres y mujeres experimentamos esa sociabilidad natural de la que hablaba Aristóteles en el siglo IV a.C., pero también la insociabilidad de la que habla Kant y de la tendencia natural a la guerra a la que se refería Hobbes. De esta manera, en las sociedades del siglo XX y XXI, por ejemplo, podemos admirar las grandes posibilidades de progreso y avance que puede tener la humanidad en la era de la tecnología y la informática y, al

mismo tiempo, las realidades de la miseria humana durante la segunda guerra mundial, la bombas atómicas en Hiróshima y Nagasaki, las atrocidades de las guerras del nuevo siglo sobre Afganistán e Irak y los terribles niveles de tortura y genocidio que han sido denunciados en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

A la sociedad contemporánea, Ulrik Beck la ha llamado “*sociedad en riesgo*”, porque la actual acumulación de conocimiento en la época de la globalización, por un lado, nos brinda la mayor oportunidad de transformación de las condiciones de existencia de los seres humanos y, por otro, nos expone a enormes destrucciones, a grandes desigualdades crecientes y un gran empobrecimiento espiritual; es el propio éxito de la sociedad contemporánea lo que pone en peligro la propia supervivencia humana. Al mismo tiempo, en nuestras sociedades asimétricas, él mismo señala que no todos tienen las mismas posibilidades de influir para su transformación: “*Las oportunidades que tienen los diferentes grupos sociales de constituirse en actores políticos dentro del juego de los grandes poderes están muy mal distribuidas*” (Beck, 2002: 186).

En este sentido, junto a la mayor capacidad que el mundo ha construido para producir alimentos, junto a la gran capacidad creciente de gobernabilidad a escala mundial, también hoy se expresa la mayor desigualdad y pobreza de gran parte de la población con una gran cantidad de violencia y exclusión, y los desposeídos no han tenido las condiciones para convertirse en verdaderos actores sociales de influencia en el mundo de la globalización. El gran reto de construir una comunidad mundial solidaria es muy difícil y no se logrará más que con la creación de nuevos saberes, acciones y movimientos sociales.

Por ello, hay que pensar, como Habermas, de manera positiva al señalar que actualmente “en el proceso de globalización, la capacidad de cooperación de los egoístas racionales se encuentra rebasada” (Habermas, 1999). Esto puede coincidir con cierta “*intención*” biológica de la naturaleza que nos apunta hacia la construcción de sociedades democráticas, en donde

pueden estarse asentando los principios de acción para una sociedad civil más organizada, con mayores elementos institucionales de gobernabilidad, con más respeto a los derechos humanos y mejores leyes de protección sobre una naturaleza tan devastada, etc.

Sin embargo, la realidad histórica nos muestra lo lejos que está la guerra de ser desterrada: las guerras comerciales entre las naciones llegan a enfrentamientos bélicos de gran escala, los fundamentalismos religiosos plantean una guerra de los dioses que se expresa en guerra de razas y culturas; determinados países pisotean el multilateralismo para imponer su voluntad sobre las mismas Naciones Unidas,... El debate, entonces, siempre seguirá estando en la contradicción entre lo sociable e insociable del ser humano, teniendo presente la incertidumbre sobre cuál de las dos tendencias puede prevalecer. El mismo Habermas apunta una conclusión importante que también sostenemos: *“La cuestión principal es la siguiente: si en las sociedades civiles y en los espacios públicos de gobiernos más extensos puede surgir la conciencia de una solidaridad cosmopolita. Sólo bajo la presión de un cambio efectivo de la conciencia de los ciudadanos en la política interior, podrán transformarse los actores capaces de una acción global, para que se entiendan a sí mismos como miembros de una comunidad que sólo tiene una alternativa: la cooperación con los otros y la conciliación de sus intereses por contradictorios que sean”* (Habermas, 1999). ¿No es semejante esta propuesta a la apuesta que hacia Teilhard de Chardin sobre la tendencia natural hacia una convergencia del fenómeno humano en el punto omega, la cual, sin embargo, siempre tendría la alternativa del fracaso con una también inherente tendencia hacia la dispersión negativa a partir de decisiones libres del mismo ser humano?

De alguna manera, la visión de una democracia emancipadora solamente puede ser concebida como un hilo conductor de efecto propulsor, y por ello, nuestra historia, con la participación activa de la libertad humana, podrá seguir siendo esa entusiastamente línea de tendencia convergente con elípticos

contactos, aunque siempre en permanente peligro por la insociabilidad humana. La complejidad del mundo al que nos enfrentamos, de nuevo, como lo reitera una y otra vez Edgar Morin, no podrá nunca ser simplificada por nuestro conocimiento como una conclusión universal; el estudio interdisciplinario de la complejidad de la naturaleza y las sociedades nos lleva a mejores acercamientos sobre una realidad siempre inalcanzable; pero, solamente a través de estos esfuerzos, con base en la apuesta por la prevalencia de la sociabilidad sobre la insociabilidad, podremos elaborar mejores estrategias para controlar la demencialidad, la bestialidad y la inhumanidad, que también son propias del ser humano. Las preguntas con las que termina Morin su tomo del Método referido a “La humanidad de la humanidad” no nos lanzan con seguridad hacia el futuro: “¿Hay posibilidades de controlar la barbarie y civilizar verdaderamente a los humanos?” Y él mismo responde: “nada está asegurado, ni siquiera lo peor” (Morin, 2001: 342). Persiste, sin embargo, la apuesta y la pasión por la democracia y participación de los ciudadanos organizados sobre las políticas públicas de los gobiernos, sean estos de izquierda o de derecha.

En la interpretación de la historia como movimiento social siempre ha fascinado en el mundo de la filosofía política el papel que puede jugar la visión o imaginario social de una persona o grupo de personas que se apasionan por un ideal y por él son capaces de dedicar todos sus esfuerzos, incluso sacrificando la propia vida. Quienes se fijan predominantemente en el peso de las estructuras sociales ven a los seres humanos como entes determinados por la historia; quienes enfatizan la subjetividad, sobrevaloran la potencia de los ideales y el pensamiento como factor de cambio; y también hay quienes valoran tanto las circunstancias impredecibles de un momento determinado que todo lo quieren ver predestinado por la suerte o la fortuna. Sin embargo, nuestros intentos de hacer ciencia de lo social deben tomar todos estos elementos, recordando de alguna forma aquel planteamiento de Ortega y Gasset: “yo

soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo” (Ortega y Gasset, 1984), pero también hay que moverse en un juego dialéctico, como dice Francisco Lizcano, “entre la utopía y la realidad” (Lizcano, 2006), que es el marco para su intento de reinterpretar histórica y conceptualmente la democracia en América Latina.

La utopía ciertamente puede en ocasiones jugar un papel de alienación para aquellos que quieren olvidarse de las condiciones terribles que tiene el mundo, llevándolos a refugiarse solamente en el pensamiento y en la idea. Sin embargo, hay que revitalizar la utopía como motor de cambio social porque la visión de un imaginario que contrasta con las malas condiciones de un presente impulsa también a las personas a realizar acciones para conseguir determinados fines.

Cuando han ocurrido cambios sociales en la historia de las sociedades, nunca han sido producto únicamente de las condiciones objetivas de las contradicciones sociales; en muchos momentos, ha sido la subjetividad de los individuos lo significativo para modificar el rumbo de acontecimientos importantes. Pero junto a lo objetivo y lo subjetivo, también se hay que señalar la importancia de fenómenos circunstanciales que acontecen y que nadie previó, porque en ocasiones se convierten en factores decisivos para fijar un rumbo determinado. La suerte o la fortuna también pueden ser elementos determinantes como lo señala, por ejemplo, Víctor Hugo en su novela *Los Miserables* cuando narra la batalla de Napoleón en Waterloo: no nos remite sólo a los condicionamientos macro históricos de transición del absolutismo a las sociedades liberales del siglo XIX ni a la determinación subjetiva de los líderes sino a un detalle que pudiera parecer casi insignificante porque, la noche anterior a la batalla, había llovido profusamente y los cañones que le pudieron haber otorgado la victoria a Napoleón no pudieron subirse a un lugar de ubicación estratégica contra los ingleses: “si no hubiera llovido la noche del 17 al 18 de junio de 1815, el porvenir de Europa hubiera sido otro”

(Hugo Víctor, 1974: 311). En un momento determinado, lo que Maquiavelo denominó la “fortuna”, es capaz de modificar radicalmente el curso de los acontecimientos. En una frase que Robert Harris atribuye a Cicerón, se menciona con claridad: “en política uno puede hacer tantos planes como quiera, pero al final es la suerte la que decide” (Harris, 2007: 303).

Sin embargo, no se puede estar viviendo solamente de la fortuna, del destino, de la suerte o de una voluntad divina que ya tiene todo preestablecido; por ello, tenemos que hacer uso de la razón, de la lógica, de la planeación, etc. porque es lo que hace que el hombre sea el creador de su propia historia; las sociedades son producto de los seres humanos y no son obra de la mera casualidad. Lo que existe en una sociedad en un determinado momento de la historia, es responsabilidad de los ciudadanos y sus líderes y también puede ser modificado en una dirección u otra según las acciones libres de la gente.

Dentro de determinado contexto estructural dado, es la subjetividad de los actores sociales la que se convierte en factor fundamental para impulsar las transformaciones socioeconómicas y políticas que se requieren; las mismas experiencias de ensayo-error se convierten en aprendizaje de una transformación constante; lo que nunca hay que abandonar es la pasión por la utopía. Es decir, el rumbo de cualquier país y del mundo entero no está determinado mecánicamente por las estructuras sino que siempre se puede estar a la espera de momentos inesperados en donde el surgimiento de nuevos liderazgos o situaciones puede hacer avanzar un proceso o hacerlo retroceder mediante la acción política.

Lo que hemos dicho anteriormente sobre la suerte o la fortuna, sin embargo, también será un elemento sorpresa siempre a tener en cuenta: más allá de la siempre necesaria planeación a corto y largo plazo que tienen que hacer los dirigentes políticos para hacer triunfar sus posiciones, habrá que contar constantemente con ese porcentaje de voluntarismo, de suerte (o

de “fortuna”, como lo señala Maquiavelo en el *Príncipe*¹⁷) que ha hecho cambiar coyunturas históricas importantes. Ésta debe ser una nueva manera de hacer política, entendida como el compromiso del individuo comprometido con los intereses de su comunidad. Esto no necesariamente nos convierte en idealistas alejados de la realidad sino que nos hace retomar propuestas de sociólogos muy realistas como Max Weber, quien al hablar de los políticos señala su principal tarea: “La política consiste en una dura y prolongada penetración a través de tenaces resistencias, para la que se requiere, al mismo tiempo, pasión y medida. Es completamente cierto, y así lo prueba la historia, que en este mundo no se consigue nunca lo posible si no se intenta lo imposible una y otra vez” (Weber, 1982). La fría planeación de la razón pero alimentada por la pasión serán entonces elementos indispensables del quehacer político.

En contraparte tuvimos la aparición del “pensamiento único¹⁸”, que proponía al modelo neoliberal del libre comercio como la única alternativa para la economía mundial a fines del siglo XX cuando Francis Fukuyama propuso su famoso *Fin de la historia*, en donde la historia de las sociedades no podía desembocar más que en un solo modelo de sociedad: el capitalismo frente a un socialismo derrotado. Fukuyama se preguntaba si “al final del siglo XX tenía sentido hablar de una historia del género humano coherente y direccional”, y se respondía de una manera afirmativa apelando a “lógica de la moderna cien-

¹⁷ Así lo señala Maquiavelo: “No ignoro que muchos creen y que han creído que las cosas del mundo están regidas por la fortuna y por Dios de tal modo que los hombres más prudentes no pueden modificarlas... Sin embargo, y a fin de que no se desvanezca nuestro libre albedrío, acepto por cierto que la fortuna sea juez de la mitad de nuestras acciones, pero que nos deja gobernar la otra mitad, o poco menos” (Maquiavelo, 1999)

¹⁸ La expresión fue propuesta en 1995 por Ignacio Ramonet, miembro de ATTAC y editor de *Le Monde Diplomatique*, para criticar las propuestas neoliberales de ciertos gobernantes para quienes el libre mercado y la desregulación de la economía eran el único camino existente, como lo había mencionado mucho antes Margaret Thatcher con su frase: *There is no alternative*.

cia natural” señalando el fin de la historia como “un efecto de la interpretación económica del cambio histórico, que no conduce (a diferencia del marxismo) al socialismo sino al capitalismo como su último resultado” (Fukuyama, 1992). En la coyuntura de la debacle del socialismo de Europa del Este y la desaparición de la antigua URSS, se fortificó una marea neoliberal que influyó con su línea de pensamiento el actuar de numerosos gobiernos: “La fe absoluta en el mercado, la apertura económica propia y la cerrazón ajena, la privatización y la desregulación en ausencia de un estado de derecho cabalmente conformado, se han convertido en los nuevos dogmas de los gobernantes latinoamericanos” (Catañeda, 1993: 81).

Frente a estas interpretaciones mecánicas, la razón nos indica que no hay postulados absolutos; sujetarse a un pensamiento único se convierte en el intento de una “castración intelectual”, como lo señala Edgardo Lander, al mencionar una de la principales demandas que debemos tener los latinoamericanos: “La reivindicación de que las cosas podrían ser de otra manera” (Lander, 1991: 162). La historia no tiene un fin predeterminado sino a partir de lo que los hombres decidan hacer con su propia libertad. El peso ideológico de la falta de alternativas es brutal y por ello muchos prefieren conformarse con lo actualmente existente, cercenando el poder de la imaginación y la búsqueda; “tendemos a creer... que es poco lo que podemos cambiar –individualmente, en grupos o todos juntos– del decurso de los asuntos del mundo, o de la manera en que son manejados, y también creemos que, si fuéramos capaces de producir un cambio, sería fútil, e incluso poco razonable, reunirnos a pensar un mundo diferente y esforzarnos por hacerlo existir si creemos que podría ser mejor que el que ya existe... Si la libertad ya ha sido conquistada, ¿cómo es posible que la capacidad humana de imaginar un mundo mejor y hacer algo para mejorarlo no haya formado parte de esa victoria?” (Bauman, 2006: 9).

Algo nuevo está naciendo en América Latina durante la transición del siglo XX al XXI, especialmente en el tema de la democracia y sus posibilidades emancipatorias. Si antes pesaba más la idea de que la democracia era solamente la forma pacífica en que las élites económicas se intercambiaban en el gobierno para seguir el mismo sistema de explotación, ahora se puede pensar en profundizar la democracia para abrir la posibilidad de cambiar el mismo modelo económico. “En América Latina, se está dando una vuelta de página en su historia. Están surgiendo nuevos imaginarios y es necesario llegar a comprenderlos” (Corten, 2006: 24). Han surgido nuevos proyectos, utopías y experiencias novedosas de desarrollo local e incluso a nivel de gobiernos surgidos de procesos democráticos. Hay un gran poder en la imaginación creadora sobre las nuevas posibilidades que se albergan en la realidad actual de este subcontinente; la subjetividad del cambio se ha puesto en movimiento a través de la creación de nuevos imaginarios sociales¹⁹.

El Imaginario social

Si bien en diversas ocasiones el concepto de utopía se ha utilizado en un sentido alienante y peyorativo porque nos aleja de la realidad empírica que estamos viviendo, aquí queremos darle un sentido positivo, como elemento generador de nuevas realidades en los procesos de transformación social. Con ello, retomamos la concepción que tenía Castoriadis sobre este concepto: “La historia humana, y también las diversas formas de sociedad que conocemos en esta historia, se ha definido esencialmente por un imaginario creador. Este imaginario, en este contexto, no significa evidentemente algo ficticio, ilusorio, espectacular, sino el posicionamiento de nuevas formas, un

¹⁹ Diversas ideas sobre los nuevos imaginarios sociales en Latinoamérica fueron publicadas anteriormente en el libro compilado por Alejandra Chávez “Diálogo de Saberes” (Edición Elaleph, Argentina, 2008), a partir de la participación en un Simposium internacional con sede en la UAM-Xochimilco, realizado del 23 al 25 de enero del 2008 en la ciudad de México.

posicionamiento no determinado sino determinante” (Castoriadis, 2007: 159). En México, el concepto de imaginario social empezó a discutirse con más amplitud en las ciencias sociales de la década de 1970. Fue particularmente significativa la contribución de Gilberto Giménez cuando quería revalorizar la utopía, no como algo inalcanzable y alienante sino como fuerza motriz para los cambios sociales. “La utopía no tiene aquí un sentido peyorativo, como *lo irrealizable*, lo *puramente imaginario*, un *sueño imposible*, etc. En realidad, de un tiempo a esta parte, estamos asistiendo a un movimiento de rehabilitación que se propone recuperar su verdadero sentido y clarificar el aspecto constructivo de su función especialmente en el plano psicológico-político” (Giménez, 1976); este autor quería rehabilitar el papel de la imaginación como parte de la ciencia y como elemento innovador y creador. Los datos del mundo empírico son fundamentales como punto de partida del proceso de conocimiento, pero, siguiendo la concepción de Gastón Bachelard²⁰, se puede sostener la necesidad de no encadenarse a la realidad presente sino vislumbrar en ella todas las múltiples alternativas de construcción de lo posible: “Hay también una forma de imaginación ligada más bien al *deseo de liberarse de la tiranía del dato*, de trascender la inmediatez de la percepción y de explorar el mundo de lo *posible*, de lo que todavía no es. Es la imaginación como *actividad innovadora* que por eso mismo, tiene un carácter esencialmente prospectivo, anticipador y creador” (Giménez, 1976).

En este contexto, la discusión sobre la imaginación y los imaginarios posibles está ubicada en el campo epistemológico, contradiciendo la visión clásica de la ciencia supeditada sola-

²⁰ A Gastón Bachelard también se le ha conocido como el filósofo de la imaginación: hizo una distinción muy interesante entre las palabras “*songe*” y “*rêverie*” para indicar la dialéctica entre lo real y lo imaginado. Varios de sus libros son claves para esta propuesta: *L’air et les songes: essai sur l’imagination de la matière* (1942); *L’air et les songes: essai sur l’imagination du mouvement* (1943); *La terre et les rêveries de la volonté* (1948).

mente al método tradicional del dato empírico y la comprobación a través de hipótesis. Y no se trata de una problemática sólo contemporánea de los últimos siglos sino que procede desde el comienzo de la filosofía como ciencia en la época de los griegos, desde la *maïéntica* de Sócrates, el idealismo de Platón y la dialéctica de Aristóteles. Así lo refiere René Barbier²¹ en su historia de este concepto: “La historia del concepto de imaginario está ligada a la dinámica de las representaciones intelectuales dicotómicas desde la antigüedad” (Barbier, 2007).

La perspectiva de Barbier ubica el concepto de imaginario en una larga trayectoria histórica que comenzaron los griegos con su distinción entre lo real y lo imaginado, que continuó en la época del romanticismo y el surrealismo y finalmente desembocó en una tercera etapa en el siglo XX con Gastón Bachelard, para otorgarle a la utopía imaginaria, en ruptura con la realidad establecida, un papel impulsor del cambio social. Junto al CRISE de Barbier y el Centro de Investigación sobre el Imaginario (CRI) de Michel Maffesoli, se ha retomado la significación de este concepto tanto con la densidad teórica que le atribuyó Lacan como con las grandes aportaciones de Castoriadis que le otorgan al imaginario un carácter instituyente en la sociedad a través de la intervención política.

El imaginario puede ser el mundo de significados dominante en un grupo humano determinado, lo que también podríamos denominar como ideología hegemónica y el mundo de la cultura. Sin embargo, Castoriadis nos presenta una distinción fundamental: una cosa es el imaginario instituido, que como fetichismo nos hace adorar el orden imperante real como algo natural e incambiable: “en el uso corriente del término imaginario, se trata de una representación de la realidad que guía o

²¹ René Barbier es director del Centre de Recherche sur l’Imaginaire Social et l’Éducation (CRISE), de la Universidad de Paris I, desde 2004. Sobre esta discusión también retomamos los aportes de Gilbert Durand, quien fue fundador del Centre de Recherche sur l’Imaginaire (CRI) en 1966 en Grenoble, Francia, y de Castoriadis en los años 70s.

influencia de manera inconsciente nuestro comportamiento o el de los otros. Se habla de un imaginario colectivo para justificar una especificidad propia de nuestra comprensión de la realidad” (Corten, 2006: 7). Sin embargo, otra acepción es la del imaginario instituyente que rompe con lo real y se abre a la alteridad como algo posible a ser creado, como un continuo movimiento de significaciones autoproducidas: “la concepción que adoptamos aquí sobre el imaginario quiere decir autoproducción. La emancipación es una auto producción. Ella es un imaginario instituyente que se vive como autoproducción” (Corten, 2006: 23); “el imaginario instituyente es fuente de un nuevo sentido” (Idem, 2006: 32).

Nos referimos aquí a esta segunda concepción del imaginario; el concepto contradice la realidad pero no se separa de ella en un movimiento de alienación como utopía irrealizable sino que moviliza recursos y los dirige a diversos horizontes de emancipación en donde la acción política, productiva de nuevos escenarios, es el elemento fundamental. Este tipo de imaginario, entonces, tiene esa función emancipadora y autoproducida. Dentro del llamado movimiento altermundista, por ejemplo, se hace un llamado a construir alternativas frente al capitalismo salvaje que promueven los organismos financieros internacionales con su globalización neoliberal, al señalar que *otro mundo es posible*. No se trata de aceptar el mundo tal como es porque es una sociedad que no satisface las necesidades y derechos fundamentales de la mayoría de los ciudadanos, y por ello necesita ser modificada.

Aquí nos enfrentamos a uno de los puntos fundamentales que han dividido desde hace poco más de dos siglos las posiciones de la derecha y de la izquierda, en relación al modo de producción dominante, el capitalismo. Hay quienes defienden de manera general el statu quo dominante o simplemente quieren hacerle diferentes cambios decorativos, y hay quienes quieren revolucionarlo de manera radical o hacerle reformas profundas que conduzcan a un modo de producción diferente.

Los conceptos de “izquierda” y “derecha” en política han ido diluyendo sus fronteras, aunque todavía provocan actualmente numerosos enfrentamientos de ideas, especialmente en tiempos electorales. La discusión seguirá abierta en el debate mundial, pero también podemos observar la creciente inconformidad con la dominancia de unos pocos sobre la economía y la política mundial y nacional, que en realidad sigue afectando gravemente a gran cantidad de la población; y estas críticas ya no vienen solamente de sectores de la izquierda sino también de los defensores de los derechos humanos, de quienes luchan contra la guerra, de quienes quieren defender la ecología del planeta, de todos los que no soportan que la riqueza se acumule en pocas manos de manera tan descarada en perjuicio de gran parte de la población.

Los cuestionamientos al sistema capitalista y a la forma específica de globalización salvaje que ha estado imponiéndose en las últimas décadas no vienen, entonces, solamente de la autodenominada izquierda: se está formando un frente amplio que demanda cambios sustanciales y reformas importantes en la forma de hacer política y en la forma de dirigir las economías nacionales. Si bien en un tiempo histórico determinado, el modo de producción capitalista revolucionó la sociedad feudal con una innegable fuerza transformadora, después de varios siglos de dominación y crisis, la dinámica de la pura ganancia capitalista se está agotando como cohesionadora de la sociedad contemporánea: “el capitalismo de alguna manera ha perdido su espíritu: las gentes ya no se adhieren a su dinamismo. Y también nos estamos refiriendo a los cuadros empresariales, porque ellos mismos están sufriendo de desmotivación” (Stiegler B., en *Nouvel Observateur*, 2007: 22). Si en el año 2008, el mundo entero ha presenciado la explosión de la crisis económica del propio capitalismo a partir de los créditos inmobiliarios y en el sistema financiero que han producido la reconocida recesión mundial, queda claro que los cuestionamientos al modelo no vienen solamente de los llamados grupos revolucio-

narios o de la izquierda en general sino de amplios sectores sociales que que están reconociendo la irracionalidad del modelo del libre mercado. La crisis económica mundial surgida en los Estados Unidos está mostrando a muchos que un libre mercado sin supervisión de los estados puede llegar a descontrolarse como lo reconoció el nuevo presidente norteamericano B. Obama en su discurso de toma de posesión el 20 de enero del 2009.

De la realidad a la utopía latinoamericana

Tradicionalmente América Latina se ha definido como un subcontinente subdesarrollado, dominado por los Estados Unidos, enfrentado en sus múltiples nacionalidades y con grandes niveles de pobreza, desigualdad y corrupción. Si aceptamos que así se define actualmente nuestra región, ¿podemos soñar con algo diferente? ¿podemos tener una diferente perspectiva de futuro? En la región latinoamericana han resurgido con fuerza en el debate social los proyectos sobre la integración bolivariana y sobre el socialismo del siglo XXI. Ambos conceptos pertenecen al mundo de la utopía: ¿cómo es posible que se pueda pensar la integración de los países de América Latina si lo que existen son las nacionalidades en múltiples territorios después del fracaso del sueño de Simón Bolívar? ¿Cómo puede pensarse en el socialismo después de la debacle de Europa del Este y la desaparición de la Unión Soviética? A muchos les sorprende la emergencia de gobiernos de izquierda en la región, pero la realidad es que existen intelectuales y líderes latinoamericanos que han hecho resurgir nuevos imaginarios que contradicen el fin de la historia, que se oponen al modelo neoliberal capitalista y que hablan de un nuevo proyecto de integración, de la construcción de un nuevo socialismo en el siglo XXI que reparta la riqueza social, cuando este modelo parecía ser un objetivo desprestigiado.

Los indicadores sociales del nuevo imaginario son contundentes: Cuba persiste en su modelo socialista, a pesar de sus crisis y del vendaval de ofensivas de los sucesivos gobiernos

norteamericanos; la revolución bolivariana de Venezuela con el presidente Hugo Chávez ha sido ratificada por la vía democrática; se dio el triunfo del indígena Evo Morales en diciembre del 2005 como presidente de Bolivia y fue ratificado posteriormente en referendun; sucedió la victoria de Rafael Correa en Ecuador en el 2006 con la aprobación posterior de una nueva constitución; se dio la vuelta al poder ejecutivo en Nicaragua del Frente Sandinista de Liberación Nacional en las elecciones del 2006. Todos estos acontecimientos son, en el nacer del siglo XXI, una referencia para ubicar una tendencia dentro de América Latina con propuestas de cambio económico y político-social para la región. Estas experiencias, a pesar de sus problemas reales, representan un énfasis mayor en el tema de la utopía latinoamericana. “En América Latina, la esperanza ha sido siempre superior al temor y a las frustraciones que provoca la dura confrontación con la realidad y se ha traducido en la indiscutible vigencia de la función utópica” (Ramírez R. M., 2007: 93).

Actualmente no es sólo Cuba quien defiende su revolución. Hugo Chávez, el presidente de Venezuela también se ha hecho notar no solamente por sus impropiedades sobre el presidente norteamericano George Bush sino sobre todo porque, siguiendo las reglas estrictas de la democracia liberal, ha consolidado su liderazgo al interior de su país con la creación de una nueva asamblea constituyente, con la superación del golpe de estado del 2002, con el triunfo del referendun del 2004 y del 2009 y con su reelección como presidente del país en el 2006 a través del 60% del voto aprobatorio de la población²².

²² Nadie puede dejar de observar también el rechazo –aunque fuera por un mínimo margen de votos- de la población venezolana a finales del 2007 a la propuesta de reformas a la constitución que el propio presidente Chávez estuvo impulsando. En un nuevo referéndun el 15 de febrero del 2009, ganó el SÍ a la posibilidad de que el presidente vuelva a presentarse como candidato.

Dentro de las diversas tendencias que existen hoy en la llamada izquierda gubernamental latinoamericana, el caso de Chávez es uno de los que más representa una ruptura con el orden establecido y la irrupción de un nuevo imaginario social. El caso particular de Venezuela muestra en la segunda parte del siglo XX toda una época de aparente estabilidad después de la caída de Pérez Jiménez en 1958 y el Pacto de Punto Fijo entre los principales partidos políticos; esta época terminó con la implantación de un modelo neoliberal que acarreó mayores frustraciones y demandas en un país generador de una inmensa riqueza petrolera. Chávez y su movimiento de la V República llegó a expresar las aspiraciones de otros imaginarios posibles: “el advenimiento del *chavismo* en Venezuela puede interpretarse como un caso de desplazamiento de fronteras en la escena política con el surgimiento de una fuerza antagónica que devela la frontera o el carácter contingente de un orden simbólico” (Peñafliel, en Corten, 2006: 142)

El caso de Venezuela tiene también un gran valor simbólico para la utopía de la integración latinoamericana porque fue precisamente Simón Bolívar quien formuló por primera vez esa aspiración durante el proceso de la independencia. Lo que está en juego, cerca de 200 años después, es de nuevo la autonomía, el desarrollo de los pueblos y los procesos de integración. Para acrecentar este valor simbólico es por lo que se le dio el nuevo nombre al país: República Bolivariana de Venezuela. Por ello también el presidente Chávez lo cita tantas veces en su discurso de toma de posesión en enero de 2007, haciendo alusión a la esperanza de los tiempos venideros: “Escribió Bolívar *Yo espero mucho del tiempo... Su inmenso vientre contiene más esperanzas que sucesos pasados... Y los acontecimientos futuros han de ser superiores a los pretéritos*” (Chávez, 10 enero 2007)

De esta manera, América latina en su variada heterogeneidad no está viviendo la aparición de nuevas locuras y populismos sino el escenario de contradicción entre los modelos de pensamiento hegemónico y los nuevos imaginarios sociales

que buscan ser instituidos y transformarse en instituyentes, de acuerdo a los nuevos valores que se quieren construir: “la utopía que debería seducir la mirada hacia América Latina debería ser ante todo democrática, abierta, flexible, tolerante y justa; respetuosa de la dignidad humana y de las libertades ciudadanas; debería proveer de las herramientas necesarias para descubrir su propia verdad y no vivir en función de una y única verdad impuesta desde arriba, debería ser conciliatoria y dialogante y debería, de manera pacífica, velar por el bienestar social” (Ramírez R. M., 2007: 97)

Frente a la etapa de las democracias electorales que empezaron a superar el militarismo latinoamericano pero persistieron en el mismo sistema de explotación, una de las utopías más importantes para América Latina es la conversión del modelo de la democracia liberal en una democracia emancipatoria. Con lo importante que son las elecciones, hay que mantenerlas con mejores instituciones que den credibilidad a los procesos, pero lo más importante es el efecto que pueda tener el modelo en la realidad misma de la población: “para que sea eficaz, la democracia debe crecer sobre un terreno firme, el de la equidad y el desarrollo socioeconómico... En América Latina, el establecimiento de regímenes democráticos... coincidió con la implantación de políticas económicas neoliberales y sus desastrosos efectos sociales. Si bien hoy se reconoce que el consenso de Washington fracasó, los resultados de tales políticas han influido negativamente en la valoración de la democracia que tienen sectores importantes de la población latinoamericana” (Páez, en Lizcano F.F., 2006: 55).

El discurso del presidente Chávez en su toma de posesión como presidente, el 10 de enero del 2007²³, es un ejemplo de las principales ideas sobre el imaginario social de la continuación de su proyecto. Utilizando algunos elementos del análisis

²³ El discurso del presidente Hugo Chávez Fariás, el 10 de enero del 2007, durante su toma de posesión fue transcrito por Mónica Chalbaud.

lexicométrico que propone Víctor Armony²⁴ para analizar el discurso político, anteriormente en otro escrito (Medina, en Chávez R. A., 2008: 45) lo hemos presentado de manera detallada mostrando sobre todo la referencia a personajes como Bolívar, Jesucristo y a conceptos como el de socialismo y democracia, pero todo ello relacionado con los derechos iguales para todos a través de un gobierno que pueda brindar educación, salud y seguridad social.

Es importante en América Latina señalar la utopía del cambio social democrático ligado al tema de la religión, porque de manera tradicional, la interpretación dominante de la jerarquía eclesiástica ha enfatizado solamente la esperanza de una vida mejor en el más allá después de la muerte –relegando a segundo término las responsabilidades de los cristianos por la igualdad y la justicia en el mundo presente– y para aceptar los males y sufrimientos como voluntad de Dios. La visión expresada por el presidente Chávez incluye la vinculación explícita de los cristianos con el socialismo de las primeras comunidades cristianas (durante los tres primeros siglos de nuestra era, los creyentes en Jesucristo ponían sus posesiones materiales para uso común) y el fuerte castigo que se daba a la corrupción. En este sentido, usando las palabras del evangelio cristiano, el reino de Dios se construye en este mundo con un compromiso explícito de los creyentes para combatir las desigualdades sociales.

En la cronología latinoamericana de las últimas décadas, primero fue el cambio del autoritarismo de las dictaduras militares hacia los llamados modelos democráticos, entendidos éstos por lo menos en su condición fundamental de tener gobernantes electos a través del sufragio: “las condiciones para que se desarrollara el imaginario y la cultura democráticos en la

²⁴ Los elementos de este método lexicométrico están expuestos en el trabajo de Víctor Armony titulado “*L’analyse lexicométrique du discours politique: porte d’entrée pour étudier les signifiants sociaux*”, en Corten, 2006: 117-137. Armony se fija precisamente en los discursos presidenciales como objetos de estudio y hace su análisis en el caso de Néstor Kirchner.

zona presentan muchas variaciones nacionales, pero tienen en común que se hace una valoración negativa del autoritarismo civil y militar” (Tejeda, 2005: 95). Sin embargo, la práctica de estas democracias restringidas o precarias o “democraduras” empezó a decepcionar porque los gobiernos civiles seguían teniendo la misma actuación autoritaria tradicional, favoreciendo la concentración de la riqueza en pocas manos. Frente al fracaso de este tipo de democracias de oropel, está surgiendo con fuerza el imaginario de la transformación social pero utilizando los mismos métodos del liberalismo democrático.

A diferencia de la reacción violenta de la lucha armada contra las dictaduras militares, la lucha actual de los ciudadanos no es exclusiva de la clase obrera sino que se está transformando en un frente amplio que reivindica el derecho a la utopía por medios pacíficos en la arena política. Los nuevos gobiernos que están surgiendo no son fruto de golpes de estado ni ejercen su poder de manera totalitaria sino a través de las propias instituciones democráticas. El poder de las alternativas se fundamenta en el fracaso de las promesas del modelo neoliberal del libre comercio; la dominación norteamericana va manifestándose cada vez más en América latina como un proyecto en decadencia y crece la necesidad de las autonomías nacionales; el crecimiento de la pobreza y la desigualdad frente a las minorías enriquecidas de manera escandalosa es tal vez el principal cuestionamiento que se le puede hacer al capitalismo vivido por tanto tiempo. Y por ello, la imaginación ha proyectado un mundo diferente que solamente es posible mediante el apoyo mayoritario de la población.

CAPÍTULO III

DERECHAS E IZQUIERDAS EN LATINOAMÉRICA

“El tiempo de los fusiles ya pasó”

Hugo Chávez, en RFI, 14-VII-2008

Un escenario plural

Teniendo en cuenta la permanencia de la confrontación ideológica entre la izquierda y la derecha, las elecciones en América Latina durante el 2006 y 2007 han mostrado un escenario que parece confirmar las diferencias entre ambas posiciones, a pesar de la confusión existente en muchos casos a nivel nacional y a pesar de lo que hemos llamado corrimientos ideológicos.

En América Latina, el nuevo movimiento hacia la izquierda con gobiernos democráticamente electos surgió con la elección de Hugo Chávez en 1998, quien fue ratificado en las megaelecciones del 2000 y ratificado de nuevo por los venezolanos en el 2006 para un período de 6 años más. Se sumó luego el triunfo de Lula da Silva en Brasil en el 2002 y quien fue ratificado en las urnas para otro período de 4 años en la presidencia en el 2006. También fue significativa la victoria de Tabaré Vázquez en Uruguay en el 2004 a través de una coalición de izquierda socialista que lo puso en el gobierno del 2005 al 2010. Por otro lado, aunque se le puede cuestionar su ideología de izquierda, también podemos mencionar el triunfo de Martín Torrijos en el mismo año 2004 por el Partido Revolu-

cionario Democrático, quien, por lo menos, se diferencia bastante de su antecesora en el gobierno, la derechista Mireya Moscoso.

Con estos antecedentes, se presentó el escenario latinoamericano durante enero del 2006, que comenzó con la toma de posesión de Manuel Zelaya en Honduras, quien había salido victorioso en la contienda electoral de noviembre de 2005, cuyo escenario no había ofrecido nada nuevo al país en el nivel estructural porque había sido la continuación del bipartidismo vivido durante las últimas décadas. Ganó ciertamente el Partido Liberal de Honduras (PLH), que desde el punto de vista ideológico puede situarse más a la izquierda del perdedor, el Partido Nacional de Honduras (PNH), pero ambos en sus continuas alternancias anteriores en la presidencia no han significado en conjunto más que la representación de las oligarquías locales en alianza con el gobierno de los Estados Unidos, aunque el nuevo gobierno de Zelaya empezó a distinguirse con nuevas propuestas.

Sin embargo, este escenario contrastó abiertamente con la toma de posesión del nuevo presidente Evo Morales en Bolivia en el mismo mes de enero, quien había sido electo con un nivel de votación (el 53.7%) que le permitió definir su permanencia con ese resultado del 18 de diciembre del 2005. Tenía dos principales características que lo convertían en un símbolo de la izquierda (aunque había otros grupos más radicales que el suyo): la primera era su ascendencia indígena que lo había vinculado durante toda su vida anterior a numerosos movimientos populares en reivindicación de sus derechos; la segunda era la ideología explícita de sus principios señalados en el mismo nombre del partido que lo había hecho candidato, el Movimiento al Socialismo.

Por otro lado, durante el mismo mes de enero ocurrió el triunfo de Michelle Bachelet en la segunda vuelta electoral de Chile, que al interior de su país se convirtió en continuación de la presencia gubernamental del Partido Socialista Chileno en el

poder ejecutivo (sustituyendo al presidente Ricardo Lagos, del mismo partido), que sigue representando ciertos principios de izquierda, aunque, en la perspectiva de la concertación nacional interna, tanto dentro del país como fuera sea reconocido como una tendencia muy moderada. Hay quienes le quieren negar a PSCH su característica de izquierda por estar precisamente en el marco de la concertación en un panorama que muchos reconocen como neoliberal; sin embargo, basta ver las candidaturas que tuvo que vencer Bachelet tanto en su propio partido como hacia afuera para reconocer que el gobierno que representa no es dederecha: “En Chile, donde la concertación de Partidos por la Democracia se erigió desde 1990 en el paradigma de la *governabilidad neoliberal* y donde las corrientes más combativas del Partido Socialista libran una dura batalla por preservar su identidad y objetivos históricos, cabe justipreciar, primero, que su candidata presidencial fue Michelle Bachelet – y no Soledad Alvear, representante de la derecha más recalitrante dentro de esa alianza–, y segundo, que Bachelet derrotó al candidato de la ultraderecha en la segunda vuelta de la elección presidencial, en... 2006, gracias al apoyo de sectores de izquierda ajenos a la Concertación” (Regalado R., 2008a: 2).

Hay que resaltar, por otro lado, los casos de Costa Rica, Perú y México, en donde, aunque no llegó una izquierda alternativa al poder ejecutivo a partir del resultado final en cada uno de los países, es importante considerar el poder electoral que tuvo la oposición en las elecciones presidenciales y lo significativo de su fuerza tanto en el resultado de la contienda como en el nuevo balance de los actores políticos.

En Costa Rica, para las elecciones de febrero, fue Ottón Solís con su partido Acción Ciudadana quien rompió la dicotomía tradicional existente de un bipartidismo de décadas anteriores entre el Partido de Liberación Nacional (PLN) y el Partido de la Unidad Social Cristiana (PUSC); estos últimos solamente solían traspasarse el poder al término de sus respectivos gobiernos; los resultados entre Oscar Arias (quien final-

mente fue declarado presidente, con un margen mínimo de votos) y Ottón Solís fueron tan empatados que fue necesario resolver la decisión final mediante un conteo voto por voto.

En Perú, Ollanta Humala puso a temblar a los grupos dominantes tradicionales cuando ganó la primera vuelta para la presidencia en el mes de abril, derrotando tanto a la candidata del gobierno en turno —el presidente Alejandro Toledo apoyaba a la candidata Lourdes Flores, quien finalmente solamente llegó al tercer lugar en la primera ronda— como a la tradicional izquierda moderada de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA); para la segunda vuelta en el mes de junio, todos los grupos de derecha se aliaron para impedir el triunfo de Ollanta y con ello pudieron llevar a Alan García, que había quedado en segundo lugar en las votaciones de la primera ronda electoral— a convertirse en presidente por segunda ocasión (ya lo había sido de 1985 a 1990).

En México, aunque ya se había dado una alternancia en el poder en el año 2000 cuando el Partido Acción Nacional (PAN) había conquistado la presidencia después de los 71 años de gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), las elecciones de julio del 2006 estuvieron prácticamente empatadas (aunque con numerosas versiones de fraude) entre dos opciones contrapuestas: la derecha de Felipe Calderón (quien finalmente fue declarado presidente de manera oficial por el tribunal electoral), y la izquierda representada por Andrés Manuel López Obrador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), quien prometía reformas radicales al modelo económico neoliberal aplicado por varias décadas; fue la primera vez en que la izquierda mexicana recibió una votación tan numerosa, y la fuerza electoral del PRD sobrepasó el nivel de votación del mismo PRI.

Las elecciones de Colombia en el mes de mayo ofrecieron un resultado definitivo que no necesitó de segunda vuelta: el presidente Álvaro Uribe, quien había logrado, a través de la coerción y la compra de legisladores, enmendar la constitución

para permitir la reelección, conquistó un triunfo holgado para su agrupación “Primero Colombia” con un 62.2% de la votación. En este país, también se había dado en décadas anteriores un bipartidismo tradicional entre conservadores y liberales que se alternaban en la presidencia, pero lo novedoso en el 2006 fue que el Partido Liberal de Colombia (PLC) –parte del bipartidismo tradicional– solamente llegó al 11.84% de la votación, mientras que una nueva agrupación con ideología progresista de izquierda, el Polo Democrático Alternativo (PDA), postuló a Carlos Gaviria, quien ocupó el segundo lugar en la preferencia de los ciudadanos con un 22% de los votos.

En todo este escenario, los procesos electorales latinoamericanos del 2006 y 2007 dieron como resultado una mayoría de gobernantes con un proyecto ideológico de izquierda, buscando en algunos casos nuevas alternativas de desarrollo frente al modelo neoliberal.

Tanto Brasil (primera y segunda vuelta durante el mes de octubre) como Venezuela (diciembre) ratificaron a sus presidentes: por un lado Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT) quien ya había sorprendido con su victoria en el 2002 –después de tres intentos consecutivos–, revestido con una imagen de trabajador comprometido en las luchas sociales y quien volvió a derrotar al Partido Socialista Democrático Brasileño (PSDB) para obtener un segundo mandato; por otro lado, Hugo Chávez, quien ya había llegado al poder en Venezuela en 1998 y habiendo logrado la aprobación de una nueva constituyente y sobrevivido a un golpe de Estado en el 2002, logró la reelección en el mes de diciembre del 2006 y tomó posesión el 10 de enero del 2007 con una aplastante victoria sobre su contrincante de la derecha, Manuel Rosales, para gobernar Venezuela hasta el 2013.

En el caso de Ecuador, con elecciones en el mes de octubre, Rafael Correa con sus postulados claramente anti-neoliberales se enfrentó en una segunda vuelta al hombre más rico de Ecuador, Álvaro Noboa, que llevaba su ideología de

derecha al extremo de aventurar el rompimiento de relaciones con Venezuela y Cuba si llegaba a ser presidente. Aunque Correa quedó por debajo de Noboa en la primera vuelta electoral, su triunfo definitivo en la segunda ronda, rompió con una tradición de numerosos gobiernos plagados de corrupción y escándalos que siempre estuvieron en estrecha alianza con Estados Unidos y los organismos financieros internacionales; sus propuestas se encuentran ubicadas en corrientes de izquierda que se oponen radicalmente al modelo neoliberal de la derecha.

Finalmente, en el 2006, hay que señalar a Nicaragua, en donde, Daniel Ortega, del Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) volvió a ganar la presidencia después de tres derrotas consecutivas (1990, 1996, 2001): había gobernado el país después del triunfo de la revolución sandinista al frente de una junta para luego en 1984 ser presidente electo pero en medio de una terrible guerra con la contrarrevolución alentada y armada por los Estados Unidos; en la contienda electoral de 1990 perdió las elecciones dejando la presidencia en manos de Violeta Barrios. Volvió a postularse como candidato a la presidencia por el FSLN en los dos periodos siguientes perdiendo en ambas, hasta el nuevo proceso de noviembre del 2006 donde logró el triunfo. Aunque mucho se ha modificado la ideología de Daniel Ortega desde 1990 moderando sus posiciones, sigue representando una ideología de izquierda y mostró claramente sus alianzas internacionales durante su toma de posesión al tener como invitado especial al presidente de Venezuela, Hugo Chávez.

Durante el siguiente año, presenciamos también un cambio significativo en el proceso electoral de septiembre del 2007 en Guatemala, en donde, a pesar de un estrecho acercamiento entre partidos de derecha e izquierda, la disputa se centró entre dos candidatos: Álvaro Colom, postulado por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de tendencia socialdemócrata en cuanto a sus principios y con el combate a la pobreza a

través de medidas sociales como principal bandera de su partido, frente al general retirado Otto Pérez Molina, del Partido Patriota (PP), que promulgaba una línea dura de control policíaco y militar y represión como único camino para poner orden en el país. Al no lograr el 50% de los votos ningún candidato en la primera vuelta electoral, se programó la segunda ronda para el 4 de noviembre del 2007, en donde Álvaro Colom, quien había contendido ya en dos procesos presidenciales anteriores (habiendo sido apoyado en 1999 por el antiguo movimiento guerrillero de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca), ganó con el 52.81% de los votos sobre Ottón Pérez.

Por último, el proceso de elecciones presidenciales del 2007 sucedido en Argentina llevó a Cristina Kirchner, esposa del presidente en funciones, al poder ejecutivo, en una línea de continuidad con el pensamiento de izquierda moderada que tuvo gran éxito en la recuperación del país después de la terrible crisis económica de los argentinos que había hecho explosión en diciembre del 2001. Cristina Fernández, con su coalición Alianza para la Victoria y con el 44.92% de los votos derrotó a la candidata de una izquierda radical, Elisa Carrió, postulada por la Confederación Coalición Cívica. Aunque la nueva presidenta de Argentina representa en lo fundamental el mismo proyecto de Néstor Kirchner, no cabe duda que la independencia de su carrera política desde hace muchos años le dará un sello personal con numerosas innovaciones que se seguirán distanciando de los postulados neoliberales de Carlos Menem.

A partir de ciertos postulados programáticos básicos que han definido los partidos que están en el gobierno para sus realidades nacionales y entorno internacional del mundo contemporáneo, se puede intentar una diferenciación de posiciones entre derecha e izquierda (tomando en cuenta que cada corriente incluye numerosas tendencias) en América Latina,

aunque todo reduccionismo tiene el riesgo de un grado de simplificación que puede oscurecer los análisis particulares.

La derecha se distingue por el impulso a las políticas de crecimiento económico, considerando que la “mano invisible” del mercado (inspiración de Adam Smith) tarde o temprano llegará a desparramar los beneficios sociales para toda la población y, en este sentido, realizan alianzas preponderantes con los grupos económicos más poderosos a nivel nacional y proponiendo medidas para atraer la inversión del capital internacional; su política social se caracteriza sobre todo por programas de beneficencia focalizados a los sectores más desfavorecidos, con el objeto de impedir estallidos sociales. Por otro lado, en el marco internacional, suelen tener una relación subordinada a los organismos financieros y en particular a la presión de los Estados Unidos. Como dice Alain Touraine, “los partidos de la derecha, en relación a los Estados Unidos, no se definen más que por la sumisión a esta superpotencia” (Touraine, 2005: 27); en el caso particular del contexto latinoamericano, diversos gobiernos de la derecha no han hecho más que apoyar en su momento el proyecto continental de libre comercio (llamado Alianza para el Libre Comercio de las Américas: ALCA) o los proyectos particulares de alianza bilateral entre Estados Unidos y cada uno de los países.

Por su parte, la izquierda latinoamericana (a pesar de la multitud de sus diferencias) siempre ha manifestado su posición de vincularse a las llamadas masas populares –frente al poder de los grandes grupos empresariales–, tratando de resistir las medidas de los programas de ajuste del modelo neoliberal que ha predominado en la región desde la década de los 80s; en particular, con relación a los Estados Unidos, se ha dado permanentemente una confrontación con sus políticas de dominación económica o de intervención militar, tratando de conservar al menos una autonomía nacional. De esta manera, la izquierda se ha opuesto al ALCA o a los tratados bilaterales de libre comercio, que solamente significan la apertura de

fronteras a productos del exterior sin tener en cuenta la producción nacional y el mercado interno.

De esta forma, a partir de estos postulados básicos, los nuevos gobernantes del 2006-2007 –aunados a Uruguay (2004) y Paraguay (2008) en la izquierda; a Panamá (2004) y República Dominicana (2008) en el centro, y El Salvador (2004) en la derecha, en años anteriores– se pueden aglutinar de la siguiente manera:

Elecciones presidenciales 2006-2007

DERECHA	CENTRO	IZQUIERDA
México Colombia	Honduras ²⁵ Costa Rica Perú Guatemala	Bolivia, Chile, Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina, Nicaragua ²⁶ .

Fuente: elaboración propia del autor

Esta aglutinación puede ser demasiado gelatinosa porque es necesario hacer muchos matices; los países en cada grupo no forman automáticamente alianzas o bloques con presencia internacional, ni tampoco tienen posiciones comunes sobre todos los temas. Sin embargo, la distinción de ideologías es importante porque la situación política representa algo nuevo

²⁵ George Couffignal (2007: 10) hace una división entre derecha (México y Colombia), centro (Honduras), centro-izquierda (Costa Rica, Perú, Chile, Brasil, Nicaragua), y una izquierda radical (Venezuela, Ecuador y Bolivia).

²⁶ De manera semejante, Ignacio Ramonet (*Manière de voir*, 2007: 4) hace también la siguiente selección: “Desde la victoria electoral de Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela en 1998, los resultados han llevado en diversos países a la elección o reelección de candidatos de izquierda o centro-izquierda: Néstor Kirchner en Argentina, Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, Tabaré Vázquez en Uruguay, Martín Torrijos en Panamá, Evo Morales en Bolivia, Michelle Bachelet en Chile, y aun Alan García en el Perú, cuyo partido, el APRA es miembro de la Internacional Socialista”. Le faltó mencionar el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, cuyo triunfo fue posterior al número de la revista.

en el ámbito latinoamericano por el hecho de que numerosos gobernantes de izquierda están en el poder del gobierno como producto de los procesos electorales. Bastaría recordar la caída de los gobiernos de Jacobo Arbenz en Guatemala (1954) y de Salvador Allende en Chile (1973) para saber que, en el siglo XX, la democracia electoral tenía sus límites bien marcados tanto por las élites de poder y grupos militares locales como por el gobierno de los Estados Unidos. Por ello, la transición al siglo XXI es la nueva época de una izquierda en ascenso en el marco de la democracia electoral.

Por otro lado, los casos de Perú y Costa Rica, Honduras (y muchos señalan también el caso de Panamá, que no tratamos aquí) son especiales desde el punto de vista ideológico en una posición que podemos catalogar como de centro-izquierda y por su actuación práctica. Oscar Arias, presidente de Costa Rica, ha representado tradicionalmente a los liberales dentro de su país, opuestos siempre a la democracia cristiana, pero durante el proceso electoral del 2006, su principal opositor fue Ottón Solís. Por su lado, Alan García se diferenció tanto de la derecha (la candidata Lourdes Flores) como de la nueva izquierda radical y nacionalista de Ollanta Humala; su partido, el APRA (o también llamado Partido Aprista, Peruano), además, conserva ideológicamente la tradición de Haya de la Torre²⁷. Por estas razones, hemos querido ubicarlos a ambos en el centro político. En el caso de Honduras, al interior del país se puede ubicar con claridad en las últimas décadas que el partido nacional es de derecha mientras que el partido liberal (al que pertenece el actual presidente Zelaya) puede estar más a la izquierda; incluso el actual gobierno se ha acercado en sus relaciones al gobierno de Venezuela, Nicaragua y Cuba solici-

²⁷ Víctor Manuel Haya de la Torre (1895-1979), aunque se diferenció claramente del pensamiento marxista de Mariátegui y del leninismo ortodoxo en la década de 1920, conservó con claridad una ideología de izquierda planteando la lucha contra la pobreza y el subdesarrollo y apoyando diferentes movimientos populares y de liberación.

tando su ingreso a la Alianza Bolivariana de las Américas; sin embargo, los dos partidos han respondido de manera tradicional a distintos grupos de la élite económica hondureña que se intercambian el poder periódicamente.

De cualquier manera, el nutrido calendario latinoamericano nos presentó once elecciones presidenciales²⁸ en el 2006 y dos en el 2007. Los casos del primer semestre 2006 han sido analizados en otro momento (Delgado et al, 2007) y por ello aquí se encontrará solamente una síntesis; aquí se encontrarán más detallados los países cuyas elecciones ocurrieron el segundo semestre del 2006 y los dos del 2007: nos ofrecen variados escenarios electorales con triunfo de ideologías diversas, pero en las que predominaron cuantitativamente los gobernantes de la llamada izquierda.

Elecciones presidenciales

PAIS	PRESIDENTE	FECHA
Honduras	Manuel Zelaya	27 Nov 2005/ Toma de posesión: enero 2006
Bolivia	Evo Morales	18 Dic.2005/ Toma de posesión: enero 2006
Chile	Michel Bachelet	2ª Vuelta: 15 Enero 2006
Costa Rica	Oscar Arias	5 Febrero 2006
Perú	Alan García	9 Abril / 4 junio 2006 (1ª y 2ª vuelta)

²⁸ En el ámbito continental, siempre será importante mencionar también el caso de Haití, que tuvo su proceso electoral presidencial también en el 2006, el 7 de febrero. El análisis de este país no está incluido en este momento, por el hecho de haber tomado de manera restrictiva el concepto de América Latina a partir de los países de habla hispana y portuguesa.

PAIS	PRESIDENTE	FECHA
Colombia	Álvaro Uribe	28 Mayo 2006
México	Felipe Calderón	2 Julio 2006
Brasil	Inazio Lula da Silva	Octubre 2006 (1ª y 2ª vuelta)
Ecuador	Rafael Correa	Octubre 2006 (1ª y 2ª vuelta)
Nicaragua	Daniel Ortega	23 Noviembre 2006
Venezuela	Hugo Chávez	3 Diciembre 2006
Guatemala	Álvaro Colom	Sept. y Nov. 2007 (1ª y 2ª vuelta)
Argentina	Cristina Fernández	28 Octubre 2007

Fuente: Elaboración propia del autor

En este sentido, se tiene que afirmar que algo nuevo está surgiendo en América Latina aunque no sea una tendencia homogénea ni tampoco se pueda garantizar su permanencia en un largo período. Un analista señala la gran diferencia de nuestra región con lo que acontece en Europa donde las izquierdas institucionales se han contentado con gestionar un capitalismo triunfante queriendo solamente darle un rostro más humano o queriendo convertirlo en algo menos feroz y salvaje; hay que fijarse “en estos momentos en países de América Latina como Venezuela, Bolivia o Ecuador, en los cuales la izquierda radical y democrática ha sabido conectar con la mayoría de la ciudadanía, dando voz y poder a sectores sociales que durante siglos han permanecido en una marginación que era vista como natural. Prueba de que ese desplazamiento de protagonismo social se ha producido es el griterío histórico organizado contra Chávez, Evo Morales o Rafael Correa por quienes nunca alzaron la voz ni a la mitad de volumen frente a la miseria y las injusticias crónicas de las sociedades venezolana, boliviana y ecuatoriana” (Fajardo, 2008: 28).

CAPÍTULO IV

HACIA LA DERECHA

Partiendo de las definiciones del propio partido en el gobierno y de las posiciones del presidente del país en relación a postulados fundamentales que dividen actualmente la visión de gran número de latinoamericanos, comenzamos con la ideología de la derecha, en donde ubicamos con claridad a los gobiernos de Colombia (2006) y México (2006)²⁹. Los principios tradicionales del partido que postuló tanto a Álvaro Uribe y lo hizo ganar de una forma contundente como el que postuló a Felipe Calderón y lo hizo ganar de una manera polémica y controvertida nos hablan de los postulados tradicionales de la derecha.

4.1 COLOMBIA: reelección de la mano dura

La República de Colombia tiene una población de 44.4 millones de habitantes y su nombre reivindica al hombre que dirigió el descubrimiento de América, Cristóbal Colón. Desgraciadamente en el imaginario latinoamericano, el nombre del país se ha visto vinculado ordinariamente a la producción y

²⁹ Aparte de estos dos países, sin duda también se encuentra con claridad El Salvador con su presidente Antonio Saca (2005-2009), esperando lo que ocurra en las elecciones presidenciales del 2009, donde el antiguo movimiento guerrillero del FMLN ha sido la segunda fuerza electoral con posibilidades de disputar la presidencia.

distribución de estupefacientes, a tal punto que al hablar de la drogas de una región determinada podemos decir que se está “colombianizando”. Por otro lado, si bien los movimientos guerrilleros parecerían ser cosa del pasado lo mismo que las dictaduras abiertamente militarizadas, en Colombia se da el caso manifiesto de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que son todavía un poder fáctico dentro del país y que incluso tienen territorios controlados bajo su poder. Se puede decir que es el único país latinoamericano en donde se articula una situación particular de tres poderes: el poder gubernamental oficial apoyado por los Estados Unidos (con innumerables grupos paramilitares), el poder de los grupos guerrilleros con los cuales no se ha llegado a procesos de paz definitivos, y el poder del narcotráfico en múltiples expresiones regionales, nacionales e internacionales. Con ello, esta población con un ingreso promedio oficial anual por habitante de 2,020 dólares, ha ratificado recientemente (con un 62% de la votación) en las elecciones del 28 de mayo del 2006 al anterior presidente Alvaro Uribe (2002-2006) –y que también había sido alcalde de Medellín y dos veces senador de la república– para un segundo período de mandato en el poder ejecutivo del 2006 al 2010.

La droga es ciertamente uno de los mayores males del planeta, pero su producción está bastante bien ubicada; hay países como Afganistán o Colombia que sobresalen en este aspecto. Alberto Lugo, en su tesis universitaria sobre este tema da cuenta de la situación: “El crecimiento de esta industria ilícita en el país ha sido muy acelerado, y durante los últimos 30 años de la historia reciente de Colombia, su influencia en el plano económico, social y político ha sido fundamental. El narcotráfico ha contribuido al agravamiento del conflicto armado interno, a la generación de mayores índices de violencia y criminalidad común; y de esta forma ha ayudado a reducir el crecimiento económico del país y a aumentar los índices de pobreza y marginación que viven miles de colombianos. De

igual forma, el narcotráfico ha marcado la agenda internacional del país, dejando poco espacio para la negociación de otros temas de interés nacional” (Lugo, 2005).

Por otro lado, los movimientos guerrilleros colombianos se cuentan entre los más antiguos de América Latina; su origen, como en varios países como Guatemala, El Salvador, Chile, Argentina, etc., se remonta a la imposibilidad de cambios por la vía electoral. En el caso de Colombia, el origen histórico de la insurrección viene desde el asesinato del candidato presidencial liberal Jorge Eliecer Gaitán, el 9 de abril de 1948. Dos de las expresiones guerrilleras más importantes en el país fueron las Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC) –nacida en 1964 y la más importante a principios del siglo XX–, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), surgido en 1965. A este último grupo perteneció en un momento efímero y último de su vida el cura Camilo Torres Restrepo (1928-1966), pionero en la corriente de la teología de la liberación latinoamericana. Aunque se han desarrollado numerosos acuerdos de paz con diversos grupos de guerrilla, el conflicto armado todavía continúa, en una situación en que regiones enteras se autoproclaman autónomas. Por otro lado, Estados Unidos y los diferentes gobiernos colombianos acusan constantemente a la guerrilla de estar involucrada en el narcotráfico para poder financiar sus actividades militares, aunque las organizaciones insurgentes siempre lo han negado.

A partir de la producción de la droga y de los movimientos guerrilleros, el gobierno norteamericano se ha ido involucrando progresivamente con los sucesivos gobiernos colombianos, en una alianza permanente que justifica todas sus acciones económicas, políticas y militares a través del combate al narcotráfico y la lucha contra el terrorismo. Esta alianza llegó a generar lo que hoy se conoce como el Plan Colombia. Éste se presentó en septiembre de 1999, durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango: se anunciaba una colosal inversión estadounidense que tenía como objetivo declarado el

fortalecimiento de la economía colombiana a través de proyectos económicos, promoción de la democracia, conservación del orden público y combate frontal al narcotráfico y grupos guerrilleros. De esta manera, las pretensiones formales eran alcanzar la paz y detener el conflicto armado, darle un nuevo impulso a la economía y acabar con la producción y distribución de estupefacientes; para ello, el gobierno norteamericano inició en el 2000 con una aportación oficial de 1,319 millones de dólares³⁰, proponiendo que el gobierno colombiano aportara otra cantidad y que, además, se hiciera un fondo con aportación de múltiples gobiernos en el mundo que quisieran abonar a esta causa. Esta última estrategia no fue exitosa, debido sobre todo a que, a nivel internacional, se percibía claramente que toda esa ayuda económica estaba enfocada exclusivamente a apoyar el involucramiento mayor de los Estados Unidos en el país y en la zona.

Con todas estas circunstancias determinantes del contexto histórico, el proceso electoral en Colombia sigue expresando la continuidad de las élites políticas gobernantes; sin embargo, existe un cambio notable en los resultados del 2006: el tradicional binomio entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, quienes solamente se turnaban el poder político entre ellos mismos, en los sucesivos períodos presidenciales, parece estar llegando a su fin. En esa ocasión, no fue el Partido Conservador quien le disputaba la presidencia al Partido Liberal sino las propuestas progresistas de Carlos Gaviria Díaz, con su “Polo Democrático Alternativo”, que obtuvo el 22.04% de los votos. La victoria de Álvaro Uribe Vélez, el 28 de mayo del

³⁰ En el año 2002, el congreso estadounidense aprobó oficialmente una nueva cantidad para el plan Colombia: \$349,404 millones de dólares, y declaró a las FARC y al ELN como organizaciones narcoterroristas, culpables de toda la violencia en Colombia. En ese mismo año, USA aprobó otros 31 millones de dólares dedicados especialmente a la lucha antiterrorista, y para el 2003, el apoyo al plan Colombia abarcó otros 526 millones de dólares. Para el 2003, la suma global de USA al plan Colombia era ya de \$2,225.686 millones de dólares (Lugo, 2005).

2006, a través de la coalición “Primero Colombia”, fue inobjetable con el 62.2% de la votación, aunque su reelección estuvo manchada por todos los sobornos que brindó como presidente a los legisladores que aprobaron la modificación constitucional para favorecer la posibilidad legal de ser reelegido. Sorprende, sin embargo, que se haya terminado el bipartidismo tradicional entre liberales y conservadores, puesto que el Partido Liberal Colombiano que postulaba a Horacio Serpa Uribe solamente llegó al tercer lugar con el 11.84% de la votación.

Los otros candidatos presidenciales quedaron en posiciones intrascendentes por su porcentaje de votación. Llama la atención, sin embargo, la candidatura de Antanas Mockus Sivickas, hombre inquieto y extravagante pero con muchas iniciativas desde que fue alcalde de Bogotá, porque a nivel de su carrera hacia la presidencia no consiguió más que el 1.24% de votos a través de su Movimiento Alianza Social Indígena. El resto de los candidatos (Enrique Parejo, por el Movimiento Reconstrucción Democrática Nacional; Alvaro Leyva por el Movimiento Nacional de Reconciliación; Carlos Arturo Rincón, por el Movimiento Comunal y Comunitario de Colombia) no llegaron ni siquiera al 0.5% de los votos.

Sin embargo, en todo este contexto de la votación colombiana, hay que tener en cuenta a los que efectivamente ganaron: los abstencionistas: “la decisión del mayor número de votantes fue la de no participar en las elecciones. Los resultados muestran que solamente 7.3 millones votaron por Uribe y su controvertida política de seguridad democrática; 4.2 millones de votantes lo hicieron contra él (incluyendo los electores que pusieron en su boleta el nombre de otros candidatos). Pero el abstencionismo creció: de haber sido en 2002 de 48.4%, se elevó al 54.9% en el 2006. Pero 14.6 millones de colombianos o no fueron a votar o dejaron las boletas en blanco. El abstencionismo creció de 48.4% en 2002 al 54.9% en mayo del 2006, según Inter Press Service. Con ello, los críticos señalan

que Uribe gobernará solamente con el apoyo del 27.5% de los votantes del país” (LADB. NotiSur, June 9, 2006).

El segundo mandato de Uribe comenzó el 7 de agosto del 2006. En este sentido, no cabe duda que consolidó su poder internamente a través de una imagen de mano dura, firme negociador y aliado incondicional de los Estados Unidos; como complemento prometía reducir con eficacia la pobreza del país. Una victoria importante ya la había ganado en el 2005 cuando logró que el congreso cambiara la Constitución colombiana para permitir la reelección del presidente, aunque a través de un proceso comprobado de pagos y sobornos.

La novedad en Colombia es la propuesta del Polo Democrático Alternativo con el 22% de la votación, el cual no tenía esperanza de desafiar el triunfo de Uribe pero representó, por un lado, el mayor número de votos para un candidato de izquierda en la historia del país y, por otro, el punto final del bipartidismo tradicional entre conservadores y liberales que viene desde el siglo XIX. Esto último no solamente es consecuencia del tercer lugar al que fue desbancado el Partido Liberal sino también porque Uribe creó su propio partido basado en su propia personalidad y estilo de gobernar, desligándose de los conservadores.

El gobierno de Uribe parece tener una perspectiva política muy favorable a nivel interno debido sobre todo al apoyo mayoritario que tiene en el congreso, al soporte sólido que le dan los Estados Unidos en recursos y apoyo político y militar; su imagen se ha fortalecido políticamente; el crecimiento del país se muestra en las cifras positivas a nivel macroeconómico y, además, durante 2007 y 2008 se lograron tanto los polémicos golpes dados a la guerrilla³¹ como la liberación de algunos re-

³¹ El 3 de marzo del 2008, militares colombianos invadieron territorio de Ecuador para exterminar un grupo guerrillero de las FARC, donde se encontraba el dirigente Raúl Reyes, el segundo en el mando de esta organización. Esta incursión sangrienta sienta un terrible antecedente sobre golpes

henes, particularmente el caso de Ingrid Betancourt³². Pero los problemas del país siguen siendo gigantes: economía desequilibrada, pobreza, subsistencia de la guerrilla, lo más de 30,000 paramilitares con áreas exclusivas de control, el narcotráfico con sus redes nacionales y extraterritoriales, la corrupción gubernamental (incluido el propio Uribe por la forma como logró modificar la constitución en el 2005 para posibilitar su reelección), los rehenes de guerrilla y paramilitares, etc. Con ello, es muy poco probable que la sola estrategia de tener abundantes recursos económicos para seguir agrandando y mejorando el Ejército con el apoyo norteamericano baste para tener mejores cuentas para la población en los años restantes de gobierno.

4.2 MÉXICO: ascenso de la izquierda pero triunfo de la derecha

México se encuentra en la misma dinámica latinoamericana en donde nuevas alternativas políticas están naciendo a partir de los procesos electorales. Si bien encontramos los antecedentes de movimientos guerrilleros que cuestionaron al poder gubernamental en los años 60s y 70s —e incluso la guerrilla un tanto simbólica del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994—, se ha ido consolidando un proceso de resolución de los problemas sociales dentro de la arena política, en donde las elecciones son un ingrediente fundamental para definir las diversas posiciones de poder federales, estatales y municipales.

preventivos de un gobierno contra sus enemigos, sin importar la soberanía territorial de los países vecinos.

³² Se calcula que en Colombia hay alrededor de 3000 rehenes: unos 700 en manos de las FARC, y 2,200 en manos de grupos paramilitares. Ingrid Betancourt fue liberada en el mes de julio 2008 por militares colombianos mediante engaños, uso de estandartes de la Cruz Roja y de Telesur y, según una radio suiza, mediante el pago de 20 millones de dólares.

En este marco, se ofrece en primer lugar el panorama de las diversas etapas de la transición mexicana hacia la democracia; se abordan, enseguida, algunas particularidades del sexenio del primer gobierno de alternancia con el Presidente Fox, para terminar con una evaluación de las controvertidas elecciones presidenciales del 2006. El resultado final de estas últimas muestra la confrontación de dos proyectos contrapuestos, semejante al escenario político en algunos otros países latinoamericanos, en donde de manera confusa y poco clara se pudo imponer la victoria de Felipe Calderón para continuar el PAN en la presidencia por un sexenio más. Si bien el resultado final ubica claramente al país en la derecha, a nivel interno se puede afirmar con certeza que la izquierda nunca había logrado tal cantidad de votación a su favor; por ello, hay quienes concluyen que en México, en el contexto general latinoamericano de mayor impacto de las ideologías de izquierda, “si examinamos con detalle no es tanto una excepción, el balance es que continúa un viraje hacia la izquierda” (Carlsen, 2006).

Etapas de la transición

El esquema tradicional de partidos que vivimos hasta la reforma política de 1977 solamente contaba con cuatro organizaciones políticas legalmente reconocidas, pero en donde se vivía la predominancia de uno solo.

El Partido Nacional Revolucionario (PNR) había nacido en 1929 por iniciativa de Plutarco E. Calles en un intento de centralizar el poder político; después este partido se transformó en Partido de la Revolución Mexicana (PRM) en 1938 en tiempo del Presidente Lázaro Cárdenas incluyendo la participación oficial del sector campesino y obrero, y finalmente se convirtió en Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1946, en el tránsito del sexenio del presidente Manuel Ávila Camacho al Presidente Miguel Alemán. Este partido de Estado permaneció hegemónico de manera casi absoluta, ganando todas las elecciones presidenciales, todas las gubernaturas has-

ta la década de los 80s, y predominando con mayoría absoluta en el Congreso de la Unión hasta 1997.

El único partido real de oposición durante varias décadas fue ciertamente el Partido Acción Nacional (PAN), fundado en 1939, y que contendió por la presidencia en todos los sexenios, con excepción del año de 1976 cuando José López Portillo tuvo que recorrer el país como único candidato sin ningún adversario electoral. Desde la década de los 40s, el PAN llegó a triunfar en algunos distritos electorales pero sus diputados siempre fueron minoría tanto en el Congreso de la Unión como en las legislaturas de los estados. La ideología del PAN contrastó notablemente con la del PRI en todo este período y no tuvo grandes éxitos electorales reconocidos hasta el caso de la gubernatura de Baja California Norte en los años 80s, cuando empezó a convertirse en un verdadero partido de oposición con aspiraciones reales de disputar el poder.

Fuera de esa confrontación tradicional entre PRI y PAN, también encontramos otras dos organizaciones: el Partido Popular Socialista (PPS), que nació originalmente sólo como Partido Popular (PP) en 1948 y al que luego se le añadió el calificativo de Socialista en 1961; y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM), surgido en 1954, en tiempo del Presidente Ruiz Cortínez, compuesto principalmente por personajes que habían participado directamente en el movimiento revolucionario de principios de siglo. Aunque el PP inauguró su vida política nacional en 1952 postulando como candidato a la presidencia a Vicente Lombardo Toledano —éste había sido su ideólogo y fundador— y a pesar de su radicalidad ideológica manifestada en el adjetivo de “socialista” en 1961, vivió en un maridaje fáctico con el PRI hasta la coyuntura de 1988, cuando llegó a apoyar al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas en el Frente Democrático Nacional frente al candidato del PRI, Carlos Salinas de Gortari. Algo parecido ocurrió con el PARM, en el sentido de que, desde su surgimiento hasta las elecciones de 1988,

siempre se sumó a las candidaturas del PRI a la presidencia de la República, renunciando a postular candidatos propios.

El sistema de partidos en toda esa época resultó por lo general con el mismo esquema: un enfrentamiento político permanente entre el PRI y el PAN, en donde detrás del primero siempre estuvieron los apoyos explícitos del PPS y el PARM. Estos dos últimos partidos, siempre pequeños en sus militantes y en las posiciones legislativas que conseguían, hicieron el papel de comparsas para intentar representar un sistema pluripartidista, a pesar del comportamiento contestatario que tuvo el Partido Popular (antecedente del PPS) en los años 40s con el liderazgo de Vicente Lombardo Toledano, promovido en un principio como candidato opositor al PRI en la contienda por la presidencia de la República durante 1952.

La situación política del país, nombrada en 1991 por Mario Vargas Llosa como la “dictadura perfecta” y a la que Carlos Salinas solamente calificó como “hegemonía de un solo partido” fue sufriendo transformaciones a través de lo que los analistas han mencionado como “transición a la democracia”, un término todavía polémico en cuanto a sus resultados en el siglo XXI.

El proceso histórico de esta transición hasta el momento en que el PRI perdió la presidencia de la República en el año 2000 tiene cuatro momentos claramente distinguibles: el movimiento estudiantil de 1968, la reforma política de 1977, las controvertidas elecciones de 1988 cuando los partidos de oposición se aliaron en el Frente Democrático Nacional (FDN), y las elecciones legislativas de 1997 cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y el PRD ganó el Distrito Federal.

El movimiento estudiantil de 1968 brotó como algo circunstancial en el mes de julio a partir de la pugna entre estudiantes de las preparatorias dos y cinco de la ciudad de México. El 26 de julio chocaron dos manifestaciones distintas: la de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, que protesta-

ba por la intervención de los granaderos y la convocada por la Central Nacional de Estudiantes Democráticos y la Juventud Comunista, que quería conmemorar el 26 de Julio, fecha de aniversario de la toma del cuartel Moncada en Cuba. Las dos manifestaciones fueron reprimidas por la policía y los granaderos del Distrito Federal, lo que motivó que todos los estudiantes se unieran para protestar. La represión gubernamental se acentuó aún más, lo cual provocó que el movimiento se extendiera a la zona metropolitana del D. F. y a diversas universidades de otros estados, con las 6 demandas básicas de su pliego petitorio³³. El movimiento mostró una gran coordinación a partir del 10 de agosto cuando se dio a conocer a la opinión pública el Consejo Nacional de Huelga, que decía representar a 150 mil estudiantes. El autoritarismo del régimen se mostró en la mano dura del presidente Gustavo Díaz Ordaz quien llegó a tomar militarmente las instalaciones de la UNAM y ordenó la represión violenta a la manifestación estudiantil en la Plaza de Tlatelolco en el Distrito Federal, el 2 de octubre de 1968.

El significado político de este movimiento ha sido analizado por numerosos escritores en perspectivas que desbordaban ciertamente los 6 puntos del pliego petitorio para centrarse en la crítica al autoritarismo y la búsqueda de la democracia. Esta organización estudiantil “tiene por meta entre otras la democratización del sistema político vigente” (Ramírez, 1969: 24)... porque “la democracia en México es un mero concepto, una forma más, pues la política se hace al margen de las mayorías populares, de sus aspiraciones, intereses y exigencias” (Ramírez, 1969: 42). “Este movimiento es expresión de las profun-

³³ Los seis puntos demandados eran los siguientes: 1) Libertad a presos políticos. 2) Destitución de los Generales Luis Cueto y Raúl Mendiola y Teniente Coronel Armando Frías. 3) Extinción del cuerpo de granaderos. 4) Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código penal (delito de disolución social). 5) Indemnización a familiares de los muertos y heridos. 6) Deslindamiento de responsabilidades en la represión por parte de las autoridades (policía, granaderos y ejército).

das desigualdades en la distribución del ingreso...” (Ramírez, 1969: 69);

El principal hecho post facto del 68 fue el surgimiento de numerosas agrupaciones políticas de ideología de izquierda o derecha pero que querían participar legalmente en la vida política del país con posiciones de poder: Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT), Partido Demócrata Mexicano (PDM), Partido Socialista Revolucionario (PSR), Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), etc. El mismo Partido Comunista Mexicano (PCM), que había sido creado en 1919 y que había tenido vida clandestina en diversos momentos de la historia del país, empezó a actuar más abiertamente en la vida pública sin tener, como los anteriores, registro reconocido de manera legal.

Un hecho significativo políticamente fue el hecho de que en 1976 el PAN se negó a presentar candidato a la presidencia de la República. No obstante, el candidato del PRI, José López Portillo, hizo una campaña de oropel, sin oposición, en todo el país y se erigió formalmente como presidente con un alto número de votos.

El segundo hecho en la transición política mexicana fue la reforma política de 1977 propuesta por Jesús Reyes Heróles durante el gobierno de López Portillo. La reforma abrió la posibilidad a diversas agrupaciones políticas de obtener un registro legal como partido pero condicionado a los resultados de un proceso electoral. Las elecciones legislativas de 1979 fueron la prueba de fuego de esta reforma porque habían obtenido su registro condicionado el PST, el PDM y el PCM. La ley establecía que podrían lograr el registro definitivo si en la votación nacional dichas agrupaciones llegaban a obtener el 1.5% de los votos. En ese proceso, el PST y PDM lograron con dificultad sobrepasar el 1.5% mientras que el PCM llegó hasta el 3%. Con ello, estos tres partidos obtuvieron su registro definitivo, aunque en la correlación de fuerzas políticas prácticamente no cambió nada puesto que el PRI –apoyado

por PARM y PPS– y el PAN seguían siendo la principal contradicción pero con una permanencia de la aplanadora política priista en la Cámara de diputados. En este órgano legislativo, la reforma política había ampliado el número de diputados por distrito a 300 llamados uninominales y, de manera complementaria, podían haber otros 100 diputados electos de los partidos minoritarios con el nombre de plurinominales. En la concepción de José Woldenberg, “mediante la apertura del sistema a las corrientes políticas a las que se mantenía artificialmente marginadas, y gracias a una inyección de pluralidad en la Cámara de Diputados, esta transformación abrió las puertas al cambio y construyó un cauce para empezar a modificar el autoritarismo en democracia” (Woldenberg, 2006: 25).

Se había logrado un mayor pluralismo político, aunque en la práctica perduró un sistema de partido casi único. En 1979, el PRI había sido una aplanadora porque había ganado 294 de los 300 distritos (el PAN solamente ganó 4), y quedaron 104 curules que se repartieron entre los restantes 6 partidos.

En medio de la terrible crisis económica de los años 80s, la vida política de México no varió en ese esquema de correlación de fuerzas: ya existía oposición formal y real de otros partidos pero el PRI mantenía la mayoría absoluta en la Cámara de diputados. En las elecciones presidenciales de 1982, por ejemplo, el PRI ganó 299 de los 300 distritos uninominales y dejó 101 diputados a repartirse entre los demás partidos. En ese año, se incorporó también de manera oficial a la lucha política el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Un esquema parecido perduró en las elecciones legislativas de 1985: el PRI ganó 289 diputaciones uninominales y dejó 111 curules a repartirse entre el resto de los otros partidos. Entre los partidos de oposición se había sumado para esa ocasión también el PMT, con lo cual ya eran 9 partidos total en la contienda política.

A pesar del dominio casi absoluto del PRI en las posiciones legislativas, Woldenberg sostiene que “el congreso –y más

específicamente la Cámara de Diputados— fue la primera institución estatal, de carácter federal, en asimilar el impacto de la pluralidad política. Se convirtió en un espacio de debate y recreación de la diversidad y en un escenario de experimentación e innovación a lo largo del proceso de cambio democrático. La historia del Congreso ilustra de manera inmejorable las diferentes etapas por las que transcurrió la transición democrática... Luego de las elecciones de 1979, la representación en la Cámara de Diputados pasó de cuatro a siete partidos, y el PRI vio descender su mayoría a 74%, porcentaje que se mantuvo estable en las elecciones de 1982 (74.8% de los diputados) y de 1985 (73%). Esto significa que, si bien el PRI mantenía su hegemonía, a lo largo de tres legislaturas se fue creando un clima de coexistencia en la Cámara de Diputados que, de manera paulatina, contribuyó a desdemonizar a las oposiciones e instalar la idea de diversidad política como algo natural en el paisaje mexicano” (Woldenberg, 2006: 26)

Así se llegó a la coyuntura de las elecciones presidenciales de 1988, que constituye el tercer acontecimiento trascendente en el proceso mexicano de transición a la democracia. De acuerdo a modificaciones a las leyes electorales, los partidos políticos pudieron hacer coaliciones para presentar un solo candidato. Carlos Salinas de Gortari había sido postulado por el PRI; Manuel Clouthier fue candidato por el PAN, y Cuauhtémoc Cárdenas, quien originalmente había sido postulado por el PARM, fue ampliando su base de apoyo a través del Frente Democrático Nacional, logrando que diversos partidos de izquierda y centro-izquierda tuvieran una convergencia en su candidatura. En esa ocasión “se cayó el sistema” electoral puesto que, la noche del 6 de julio, habiéndose inaugurado un conteo público paulatino de los votos, se suspendió la versión al público en donde el Ing. Cárdenas aparecía lidereando la votación general. Al día siguiente, el gobierno, solamente con la base de unos paquetes cerrados, hizo público el resultado oficial: Salinas había ganado la presidencia con el 51% de los

votos; Cárdenas había obtenido el segundo lugar con el 31%, y Clouthier quedó en tercer lugar con el 17% de la votación. Las acusaciones de fraude electoral por la manipulación de los resultados por parte del gobierno nunca pudieron ser desmentidas debido a que los paquetes electorales nunca fueron abiertos: por orden de una Cámara de Diputados dominada todavía por el PRI y ya con Salinas como Presidente, dichos paquetes fueron quemados. “En 1988 el panismo y el neopanismo –con Manuel J. Clouthier a la cabeza–, por un lado, y el Frente Democrático Nacional, bajo el liderazgo de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, por el otro, sorprendieron y quizá derrotaron al PRI, pero un fraude tan burdo como brutal dio la victoria, una vez más, al candidato del PRI, a Carlos Salinas” (Meyer, 2005: 70)

Oficialmente, el PRI se impuso, pero no como aplanadora: “como resultado de aquellos controvertidos comicios, el PRI apenas obtuvo 52% de los escaños en la Cámara de Diputados y por primera vez arribaron al Senado cuatro legisladores que no habían sido postulados por el partido gobernante, sino por el Frente Democrático Nacional, que llevó a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a presidente. Ello supuso que, por primera vez, el PRI requería de algún tipo de acuerdo con otras fuerzas políticas si quería modificar el texto constitucional” (Woldenberg, 2006: 27). El partido del gobierno, sumando diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, obtuvo 270 curules; los partidos que se habían coaligado en el FDN lograron un total de 129 repartidos sobre todo entre el PPS, el PARM, el PFCRN, el PMS. Mientras tanto, el PAN, que había quedado como tercera fuerza en la candidatura presidencial, permanecía como segunda en la Cámara de Diputados con 101 curules.

Las elecciones de 1991 y 1994 representaron una recuperación electoral para el PRI después del significativo descenso de 1988. El PRI se elevó a 320 diputados en el 91 y alcanzó 300 en 1994; su control en el órgano legislativo seguía siendo abso-

luto. El PAN tuvo 89 diputados en 1991 y 119 en 1994. Por su lado, el Ing. Cárdenas no pudo mantener unidas las fuerzas del FDN y fundó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que logró 41 diputados en 1991 y 71 en 1994. Los otros partidos (PPS, PARM y PFCRN) obtuvieron en total 50 posiciones en 1991, mientras que en 1994 perdieron su registro por no alcanzar el mínimo de votación exigido por la ley y ya no aparecieron en la representación del Congreso; en 1994, junto al PRI, PAN y PRD, solamente se integró en el aparato legislativo el Partido del Trabajo (PT) con 10 diputaciones. Habían aparecido otros nuevos partidos en la contienda electoral como el Partido Demócrata Mexicano (PDM) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) pero en ese año su votación no alcanzó para el registro legal.

El cuarto momento importante en este proceso de transición política se ubica en las elecciones de 1997, cuando por primera vez, el PRI perdió a nivel federal la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, mientras en el D.F. el candidato al Distrito Federal por el PRD, el Ing. Cárdenas, obtuvo una victoria aplastante. El PRI obtuvo 239 diputados en total, con lo cual, sobre los 500 totales, ya no le alcanzaba para imponer sus propuestas entre los legisladores; en adelante, tendría siempre que tener un proceso de negociación con otras fuerzas políticas para poder sacar los acuerdos. El PAN logró 122 diputados mientras que el PRD alcanzó 125. Más que un bipartidismo, en México se empezó a dibujar un esquema de tres partidos fundamentales, en donde, para ese año, también obtuvieron representación minoritaria tanto el PT con 6 diputados como el PVEM con 8.

En el caso del Distrito Federal, lo significativo no sólo fue la victoria del PRD en 1997 sino la contundencia del triunfo, que fue reconocido la misma noche del 6 de Julio por el Presidente de la República, Ernesto Zedillo. La mañana del 7 de Julio, el IFE, con el 80% de casillas computadas, ofrecía los siguientes resultados: 47.7% de los votos para el PRD; 25.5%

para el PRI, y 16% para el PAN. En un lejano pero también significativo cuarto lugar se encontraba el PVEM con 6.9% de la votación.

Por otro lado, también en el Senado de la República se empezó a notar cambio en la correlación de fuerzas dentro del conjunto total de los 124: en 1997, el PRI siguió conservando la mayoría absoluta con 76 senadores, pero había comenzado a aumentar de forma significativa también la presencia de los otros partidos: el PAN obtuvo 32, el PRD 14, y el PT y PVEM tuvieron presencia respectivamente con un senador.

En la vida política del país se había instalado institucionalmente la negociación y la concertación como la manera obligada para llegar a los acuerdos. “El partido del presidente de la República no logró la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. El PRI tuvo que conformarse con 47.8% de los representantes, un porcentaje inferior al de la suma del PAN (24.2%) y el PRD (25%). Ese mismo año, en la Cámara de Senadores se equilibraron las fuerzas como nunca antes: el PRI obtuvo 60.2%, el PAN 25.8%, el PRD 12.5% y el PT y PVEM, 0.8% cada uno. Desde ese momento, no solo para modificar la Constitución sino para hacer avanzar cualquier proyecto de ley, se requiere del acuerdo de dos o más fuerzas políticas; ningún partido puede hacer su voluntad y se necesita, como nunca antes, de acercamientos, negociaciones y pactos” (Woldenberg, 2006: 27). Se abrió una etapa de un parlamentarismo más real en donde un poder legislativo como apéndice del Ejecutivo empezó a ser cosa del pasado. La existencia de tres grandes fuerzas políticas ofrecía la oportunidad histórica de la negociación, de la concertación, de la búsqueda de los consensos. La vigilancia sobre la actuación de los funcionarios gubernamentales empezó a ser parte de la vida cotidiana a través de mejores leyes de transparencia y control.

Por otro lado, al interior de los estados de la República, aunque en 1997, el PRI seguía teniendo una mayoría absoluta de gobernadores, el proceso empezaba también su diversifica-

ción porque el PAN gobernaba Baja California Norte, Chihuahua, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco, mientras que el PRD gobernaba el Distrito Federal.

En el contexto de este cuarto acontecimiento de las elecciones de 1997 hay que situar el nacimiento de Instituto Federal Electoral (IFE) en un funcionamiento ya no dependiente del gobierno sino con una autonomía clara para organizar los comicios y realizar el conteo de los votos de los ciudadanos. En la institucionalización de los procesos democráticos, ciertamente la actuación de los consejeros electorales autónomos fue un paso fundamental para poder dar mayor credibilidad a los resultados de las votaciones. La historia del PRI desde su creación como PNR en 1929 hasta su término como partido gobernante en el 2000 fue de manera permanente un factor constante generador de dudas sobre la forma en que se contaban los votos; la historia política de México con numerosos analistas e historiadores ha dado cuenta abundante de la forma en que se mantuvo este partido en el poder tanto a través de prácticas clientelares como también con el uso de métodos extremos como el robo de urnas, falsificación de resultados, inflación artificial de votos, etc. México necesitaba un instrumento que pudiera garantizar una mayor credibilidad en los resultados. Y esto se logró en parte por medio del IFE y su primera generación de consejeros, cuya prueba de fuego fueron las elecciones presidenciales del 2000.

En la historia de México, la contienda presidencial del 2000 fue un parteaguas político: se acabaron 71 años de gobierno ininterrumpido del PRI en la presidencia de la República y se abrió un período de alternancia con un partido diferente en la cabeza del gobierno. Por ello, este acontecimiento se convierte dentro del proceso de transición mexicana en el quinto acontecimiento significativo.

El IFE informó oficialmente el 5 de Julio del 2000 que, al contabilizar el 100% de las casillas electorales (113,406), se habían emitido 37 millones 603,855 sufragios para los candida-

tos a presidente de la República, de los cuales el 43.43% (15 millones 988,725) fueron para el candidato de la Alianza por el Cambio, Vicente Fox. De esta manera, el PRI y su candidato Francisco Labastida perdieron la presidencia y abrieron paso a la alternancia.

Resultados electorales para Presidente 2000

PAN Vicente Fox	43.43% 15.988,725 votos
PRI Francisco Labastida	36.88% 13.576,386 votos
PRD Cuauhtémoc Cárdenas	17% 6.259,012 votos
PDS	1.67% 592,072 votos
PCD	0.57% 208,258 votos
PARM	0.43% 157,119 votos

Fuente: IFE, 2000

Este resultado de la alternancia política fue lo más significativo para la vida política del país, pero quedaba en la discusión el tema de la gobernabilidad: “El partido del presidente ya no solo no tiene mayoría absoluta en el Congreso, sino que es la segunda fuerza política en ambas cámaras (el PAN tenía 40% de los diputados y el PRI, 42%; en la Cámara de Senadores, el PAN contaba con 35.9% y el PRI, con 46.9%)” (Woldenberg, 2006: 28). Por otro lado, la tendencia hacia un tripartidismo se empezaba a desdibujar porque el PRD solamente consiguió 52 diputados de los 500 totales; era la tercera fuerza pero con una distancia muy importante con respecto a los dos partidos que estaban en la punta. Finalmente, se hacían presente diversos partidos también en el congreso pero con una influencia minoritaria que solamente llegaría a ser importante en caso de empate de votación entre las principales fuerzas: el PVEM consiguió 14 diputados, el PT 8, mientras que el Partido de la Sociedad Nacionalista (PSN) 3, el Partido Convergencia Democrática (PCD) 3 y el Partido Alianza Social (PAS) 2. El resultado evidente fue la falta de acuerdos nacionales para importantes reformas que el país necesitaba. La visión de

Woldenberg, a pesar de todo, fue demasiado optimista: “si deseábamos democracia y pluripartidismo, ya los tenemos” (Woldenberg, 2006: 30); simplemente deseaba que lo logrado no se erosionara y que empezara a rendir frutos.

Para las elecciones federales del 2003 no hubo cambios sustanciales, aunque el PAN tuvo un retraimiento a favor del PRI. Este último consiguió el 34.4 % de la votación mientras que el PAN descendió al 30.5%; el PRD se frustró al no lograr el deseado 20% porque se quedó solamente en 17.1%.

VOTACION GENERAL DEL 2003

PAN	PRI	PRD	PVEM	PT	CONV	PSN	PAS	MEX Posible	PFC	PLM
30.5%	34.4%	17.1%	6.2%	2,4%	2.3%	.3%	,7%	1%	,5%	.4%

Fuente: IFE 2003

El ganador pareció ser el abstencionismo porque llegó al 59%. Sin embargo, de acuerdo a los resultados, el PAN, a pesar de vanagloriarse de haber sido el partido de la alternancia, sus primeros años de gobierno dejaron una mala imagen en la población y por ello fue superado por el PRI. De haberse realizado elecciones presidenciales en el 2003, el antiguo partido hegemónico del siglo XX hubiera regresado a la presidencia. El resto de los partidos, fuera de los tres grandes, seguían siendo de poca significatividad: solamente el PT y Convergencia sobrevivieron porque las otras organizaciones perdieron o no lograron la votación suficiente para el registro legal.

Elecciones conflictivas del 2006

La alternancia con Vicente Fox en la presidencia por el PAN no logró consolidar un sistema de elecciones más creíbles para los ciudadanos. El error de fondo estuvo en la nueva conformación del IFE con diferentes consejeros electorales que, aparte de que el PRD no estuvo representado al interior del Consejo, no estuvieron a la altura que requería el país con una autonomía clara frente al propio gobierno.

Los errores del propio PRD y las negociaciones de cúpula entre los principales partidos políticos llevaron a la conformación de un IFE manco. El PRD fue sacado del juego y los consejeros fueron decididos solamente por el PAN y por el PRI.

El contexto económico de México, según datos del Banco Mundial, tampoco era fácil. Se había superado la terrible crisis económica de 1994-95 pero con un ritmo de lento crecimiento y no estable.

México: Datos generales 2005

Población	102.29 Millones
Ingreso per capita	5,070 dólares anuales
Esperanza de vida	72 años
Nivel en el IDH	51
Población adulta alfabetizada	91%
Mortalidad infantil	29/1000
Mortalidad maternal	55/100K
Fuerza de Trabajo femenina	33%
Libertad de prensa	54/100
Percentil de gobernabilidad	54
Rango de confianza en el país	49-62

Fuente: <http://info.worldbank.org/governance/kekz2005/worldmap.asp#map>

El presidente Fox podía presumir que México se encontraba entre las primeras 12 economías mundiales por la magnitud de su producto interno bruto; sin embargo, los niveles de pobreza, acorde a los números del Comité Técnico de Medición de la Pobreza, habían llegado a la mitad de la población.

El escenario electoral del 2006 se preparó en la práctica desde cuatro años antes pero debían definirse primero las pugnas al interior de cada partido. En el PRD, la contienda estaba clara entre los dos principales dirigentes que buscaban la nominación: Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador (AMLO). En el PAN, la pugna se encontró entre Santiago Creel, apoyado inicialmente por el presidente Vicente

Fox, y Felipe Calderón, destapado por el gobernador de Jalisco. En el PRI, la pelea entre los candidatos Carlos Madrazo, Montiel y Jackson se decidió a favor del primero pero el partido llegó totalmente dividido por la guerra civil sucedida entre el propio Madrazo como presidente del partido y Elba Esther Gordillo, secretaria general del mismo.

El triunfo de AMLO en el PRD y el de Madrazo en el PRI se logró con graves consecuencias de heridas de guerra civil interna: Cárdenas nunca llegó a apoyar abiertamente a AMLO durante la campaña, mientras que Gordillo y su gran influencia en el sindicato de trabajadores de la educación se esforzó abiertamente por restarle votos a Madrazo. El PAN también llegó herido a la contienda final con el candidato Calderón, pero Vicente Fox aceptó la derrota de Creel y comprendió que el balance histórico de su gobierno dependía de la victoria del PAN en el 2006 y por ello se dedicó legal e ilegalmente –como lo reprochó abiertamente el Tribunal Electoral al señalar las irregularidades del proceso– a apoyar a Calderón con recursos gubernamentales.

A principios del 2006 y después de todo el drama del intento de desafuero –que buscaba impedir que AMLO pudiera contender legalmente como candidato– el llamado “Peje” lideraba ampliamente los sondeos de opinión. De hecho, se convirtió en el principal enemigo a vencer tanto por el PAN como por el PRI. Estando éste último de hecho en tercer lugar de las preferencias electorales, la contienda electoral mexicana se dibujó claramente entre dos proyectos distintos, dibujados uno y otro por la ideología de la izquierda y la derecha en sus postulados fundamentales: el PRD decía buscar un cambio a favor de los pobres, luchar contra el modelo neoliberal, contra la corrupción del estado, contra la concentración de la riqueza, a favor de la intervención del estado en la economía, a favor de una autonomía del gobierno mexicano frente a los Estados Unidos y no una sujeción; el PAN se esforzaba en presentarse como aliado de la Iglesia y de los grandes empresarios propi-

ciadores del empleo y de la creación de la riqueza fundamental de todos, contra los subsidios, a favor del libre Mercado, planteando un modelo de crecimiento que tarde o temprano tendría que dar bienestar para todos.

Se trataba de una contradicción ideológica fundamental en esta contienda pero no siempre clara en los hechos. A AMLO, diversos sectores de izquierda lo acusaban de creerse un protagonista mesiánico o simplemente de representar un PRI modificado debido a sus antecedentes políticos. Cuauhtémoc Cárdenas, por ejemplo, a final de cuentas le restó votos al PRD simplemente por el hecho de que él no había sido el candidato elegido; había sido una pugna de liderazgos, pero Cárdenas, con su derrota al interior del PRD, nunca quiso adoptar una posición institucional y guardó distancia con AMLO durante todo el proceso de la campaña; por otro lado, desde la poca significatividad de “la otra campaña” de Marcos y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), también le escatimaron votos al “Peje” porque recordaban los zapatistas cómo habían votado los legisladores perredistas contra su propuesta de ley indígena del 2002. En el caso del PAN ciertamente muchos empresarios y banqueros tomaron posición abierta a favor de Calderón, aunque también hubo figuras económicas significativas como Carlos Slim, que había colaborado abiertamente con AMLO cuando éste había sido gobernador del Distrito Federal —alrededor sobre todo del proyecto de remodelación del centro histórico— y que mantuvieron una posición neutral durante la campaña electoral.

Madrazo, en determinado momento, quiso presentarse como una posición de centro izquierda razonada, diferenciándose de los extremos ideológicos, pero su destino político estaba sellado tanto porque, a pesar de la imagen progresista de su padre en los años 60s, estuvo rodeado en su paso como gobernador de Tabasco y como presidente del PRI por un halo continuo de autoritarismo y corrupción, como por la campaña efectiva de Elba Esther Gordillo en su contra a nivel nacional.

Las preferencias electorales de enero a junio del 2006 muestran ciertamente un claro descenso de la imagen de AMLO y una elevación de la opción del PAN con Calderón. En esto, como muchos analistas lo han señalado, hay causas en las actuaciones del propio “Peje” y del PRD pero también en la campaña abierta del presidente Fox en los medios de comunicación para desacreditarlo. Esto es algo que consta claramente en el dictamen del Tribunal Federal Electoral³⁴. Y no solamente hizo el Presidente de la República campaña abierta contra el “Peje” sino también diversas y poderosas organizaciones empresariales a través del Consejo Coordinador Empresarial (CEE), como consta en el mismo dictamen del Tribunal Electoral.

Al final de la jornada electoral, el IFE constató un empate técnico y finalmente le dio la victoria a Felipe Calderón. 14 millones 916,927 votos consiguió oficialmente el PAN (35.71%) mientras que AMLO obtuvo 14 millones 683,096 (35.15%). La diferencia, para la magnitud de los votantes, era mínima: solamente 233,831 sufragios, que representaban el 0.56%. Finalmente para septiembre, el Tribunal Electoral consideró que las irregularidades cometidas no fueron suficientes para anular la elección y por ello ratificó el triunfo del PAN.

³⁴ Así consta en el dictamen emitido que apareció el 6 de septiembre del 2006: "Esta sala superior no pasa por alto que las declaraciones analizadas del presidente de la República, Vicente Fox, se constituyeron en un riesgo para la validez de la elección que, de no haberse debilitado su posible influencia con los diversos actos y circunstancias concurrentes, podrían haber representado un elemento mayor para considerarlas determinantes para el resultado final, de haber concurrido otras irregularidades de importancia que quedarán acreditadas".

Resultado de la elección presidencial en México: 2 de Julio 2006

Partido	Candidato	Resultado	Votos
ACCION NACIONAL	Felipe Calderón Hinojosa	35.71%	14.916,927
COALICION POR EL BIEN DE TODOS (PRD,PT,CONVERGENCIA)	Andrés Manuel López Obrador	35.15%	14.683,096
ALIANZA POR MEXICO (PRI,PV)	Roberto Madrazo Pintado	22.26%	9.237,000
ALTERNATIVA SOCIAL DEMOCRATA Y CAMPESENA	Patricia Mercado Castro		1.124,280
NUEVA ALIANZA	Roberto Campa Cifrán		397,550
NO REGISTRADOS			298,204
NULOS			900,873
VOTACIÓN TOTAL			41.557,430

Fuente: IFE, 2006

Después de lo sucedido en las elecciones presidenciales en 1988, siempre quedó la acusación y una sospecha fundada sobre la posible manipulación por parte del gobierno sobre los resultados electorales. En aquel tiempo, el propio gobierno organizaba los comicios y, por ello, la sospecha está muy fundada. Pero en el 2006, la existencia del IFE ofrecía una mayor garantía de imparcialidad por parte del gobierno; sin embargo, la segunda generación de consejeros del IFE, tanto por haber excluido la representación importante del PRD, como por la debilidad que mostraron –sobre todo su consejero presidente Carlos Ugalde– en la vigilancia de todo el proceso, contribuyó también a profundizar la sospecha. Señalaba, por ejemplo, Alberto Aziz, al Presidente de la

República y a los empresarios como varios de los principales causantes de haber obstaculizado la transición democrática: “El árbitro, el IFE, por su falta de contundencia, sus errores estratégicos, la falta de pulcritud y la actitud omisa ante los intereses poderosos. Vicente Fox, por una obsesiva intervención en contra de AMLO. Los gremios empresariales, por violentar el orden electoral y montar una campaña partidista” (Aziz A. El Universal. 8-VIII-2006).

Ignacio Ramonet, de Le Monde Diplomatique, no duda en sus calificativos sobre el proceso electoral mexicano del 2006, con la fuente de numerosos observadores de diversos países: “Un fraude masivo. E indiscutible. Lo admitió José Manuel Barroso, presidente de la Comisión europea. Los veinticinco ministros de relaciones exteriores de la Unión Europea, manifestaron *su grave preocupación. Es importante que transmitamos del modo más claro posible la inquietud de la Unión Europea y de todos los Estados miembros sobre el resultado de la elección presidencial*, declaró el ministro holandés de asuntos exteriores... El National Democratic Institute (NDI) presidido por Madeleine Albright, ex secretaria de Estado; la Freedom House, dirigida por James Woolsey, ex director de la CIA; el American Enterprise Institute impulsado por el ex presidente Gerald Ford; incluso el Open Society Institute, dirigido por George Soros, denunciaron *manipulaciones masivas y exigen sanciones económicas*. El senador Richard Lugar, presidente de la comisión de asuntos exteriores del senado y enviado del presidente George W. Bush, no vaciló en hablar abiertamente de *fraudes: "Es evidente que hubo un programa amplio y concertado de fraudes el día de las elecciones, o bajo la dirección de las autoridades o con su complicidad"* (Ramonet, Rebelión, 08-09-2006)

En el 2006, de manera especial, se reconoció una mínima diferencia oficial de porcentaje en la votación final entre el primero y el segundo lugar y, dado que el propio gobierno de Fox realizó una campaña en los medios de comunicación –junto con un importante sector del empresariado– a favor de

Calderón, lo que tenemos entonces es un retroceso en la consolidación de las instituciones electorales, que no pudieron garantizar su credibilidad. Cuando un año después, en el 2007, los partidos políticos emprendieron una nueva reforma electoral, hicieron caer al presidente del IFE junto con otros dos consejeros, quedando otros dos más pendientes de ser removidos para el 2008. Con la nueva reforma, además, se decretó que el dinero para la propaganda de los partidos políticos a través de los medios de comunicación sería en el futuro manejado directamente por el IFE. Con ello, la tercera generación de consejeros electorales tendrán su prueba de fuego en las elecciones federales del 2009 y, de nuevo, en el 2012 con otras elecciones presidenciales para las cuales el derrotado AMLO se encuentra en pie de lucha.

El resultado final para México, de cualquier forma, a pesar de la existencia alternativa de un “presidente legítimo” posterior a las elecciones del 2006, es un gobierno ideológico de derecha, que junto con el de Alvaro Uribe en Colombia son los dos jefes de gobierno que no rehuyen esta categoría política. Al mismo Uribe se le ha acusado y comprobado en el 2008 de haber utilizado medios ilegales para modificar la constitución y posibilitar su reelección como presidente, como así ocurrió realmente. Con ello, junto a las ilegalidades del presidente Fox para favorecer la victoria de su candidato Calderón, se muestra claramente hasta dónde están dispuestos a llegar estos grupos políticos para permanecer en el poder. La democracia, entonces, no se juega solamente el día de la elección sino en numerosas instancias diversas de participación social.

En el caso mexicano, ya son parte de la historia las elecciones presidenciales del 2006 pero la experiencia seguirá presente en las siguientes contiendas. La polarización ideológica seguirá presente porque fueron cerca de 15 millones de votos para la derecha y cerca de 15 millones de votos para la izquierda. Quedó claro que con la alternancia, siendo fruto

de un proceso positivo hacia el pluralismo político, no necesariamente hay un viraje en lo económico o en la manera de hacer política; del PRI al PAN hubo alternancia pero permaneció el mismo modelo económico y las mismas viejas formas de política a la mexicana; el PRD ciertamente en sus propuestas prometía cambios más profundos en los diferentes niveles de la sociedad y gobierno, sobre todo frente a las posiciones clásicas del neoliberalismo. Decía AMLO en la manifestación del 7 de agosto del 2006 frente al Tribunal Electoral en la ciudad de México: “Vamos a iniciar el movimiento para transformar a las instituciones de nuestro país... Vamos a transformar esta realidad de injusticias y de opresión que tanto daño han hecho a nuestro país; vamos, aunque no les guste a nuestro adversarios, a purificar la vida pública” (AMLO. El Universal, 8-VIII-2006). El PAN en realidad fue “más de lo mismo” con la alternancia del 2000, y tendrá que haber en el futuro otra opción de otro tipo para ver si el país puede marchar con su potencial económico hacia un verdadero desarrollo con mayor distribución de la riqueza social.

Consideraciones finales

El proceso de transición a la democracia en México es claro pero tiene ciertas particularidades preocupantes. En primer lugar, ha sido muy lento si tenemos en cuenta los cinco grandes momentos históricos que se han reseñado anteriormente: el movimiento estudiantil de 1968, la reforma política de 1977, las controvertidas elecciones presidenciales de 1988, el momento de 1997 cuando el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de diputados, y la alternancia del 2000. Pero también, en segundo lugar, no ha terminado con la alternancia, puesto que las instituciones democráticas no se han consolidado para ofrecer una certeza sólida sobre los mismos resultados de los votos. Como dice Lorenzo Meyer, “es innegable que el sistema político mexicano ha sufrido una

transformación sustantiva a lo largo de los últimos tres lustros, pero también es innegable que el cambio ha sido mucho menor de lo que la modernización, la historia y, sobre todo, la justicia y cierta decencia requieren y demandan. La calidad de la vida política mexicana actual y la que ya se vislumbra para el futuro dejan mucho que desear, y quizás no sea ajeno a ello el hecho de que la transición mexicana ha sido muy larga, llena de indefiniciones, cuentas pendientes y actores que no siempre han estado a la altura de las circunstancias; en pocas palabras, una historia bastante escabrosa escrita con los retorcimientos de un mal pulso” (Meyer, 2005: 71).

A nivel de votación, la izquierda estuvo claramente presente en México aunque diversos analistas radicales no le quieren reconocer ese rasgo a los seguidores de López Obrador al provenir del PRI numerosos de los cuadros de su partido en décadas anteriores; otros le conceden esa característica pero con el adjetivo de “reformista/ sistémica”, queriendo distinguirla de otra izquierda “revolucionaria/ antisistémica” (Cfr. Hernández, en Picardo O., 1999); sin embargo, oponiéndose claramente a la derecha del PAN, esta corriente estuvo a punto de ganar la presidencia, a pesar de las dificultades y conflictos internos del PRD, el partido que postuló a AMLO; sus propios postulados ideológicos lo colocan en la línea de la izquierda. Por ello, aunque no haya ganado, el ascenso fue incuestionable. “Las disputadas elecciones de México en julio pasado parecen arremeter contra la tendencia regional poniendo en el poder, de nuevo, a un gobierno de derecha. Sin embargo, el curso de los eventos subsecuentes hace muy difícil afirmar que la sociedad mexicana avale esta situación. Persisten las acusaciones de fraude electoral, la mitad de la población que votó contra la derecha continúa movilizada e insatisfecha” (Carlsen L., 2006). No se puede negar la existencia de los cerca de 15 millones de votos que favorecerían esta opción. De esta manera, esta alternativa política seguirá presente en los siguientes procesos electorales.

CAPÍTULO V

POSICIONES DE CENTRO IDEOLÓGICO

En este apartado hemos ubicado a tres países a partir de una visión relativa de las organizaciones ganadoras de la presidencia: Honduras, Costa Rica y Perú. La razón fundamental se encuentra en sus posturas en relación con los otros partidos contendientes dentro de la propia nación: el Partido Liberal de Honduras (PLH), aunque dentro de una estructura de bipartidismo tradicional por varias décadas con el Partido Nacional de Honduras que tiene una orientación clara hacia la derecha, representa una posición más liberal y por ello lo ubicamos en una tendencia que tiende más hacia el centro; el Partido de Liberación Nacional (PLN) de Costa Rica se distingue tanto de su tradicional oponente de derecha, el Partido de la Unidad Social Cristiana (PUSC) como de la nueva fuerza de izquierda que casi le arrebató la presidencia a Oscar Arias, la organización Acción Ciudadana con su candidato Ottón Solís. Por otro lado, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) del Perú se distingue tanto de la candidata de la derecha Lourdes Flores (apoyada por el gobierno de Alejandro Toledo) como de la nueva organización de izquierda del candidato Ollanta Umala. Cuando hablamos de un centro ideológico, tal vez podríamos incluso intentar más precisiones al distinguir un centro-izquierda o un centro-derecha, pero ello nos llevaría a muchos matices para delimitar una serie de fronteras casi invi-

sibles. La explicación coyuntural sobre cada gobierno nos ayudará a fortalecer la afirmación.

En el caso de Honduras³⁵, como ya hemos mencionado, el partido de Zelaya tiene una ideología más liberal que el Partido Nacional hondureño, aunque, dentro del esquema de bipartidismo tradicional, se encuentra ligado al círculo de la élite económica del país, que no ha permitido cambios fundamentales en la estructura económica y política nacional; ambos partidos estuvieron también alineados con los Estados Unidos durante todo el período del conflicto bélico en Nicaragua y el Salvador en los años 80s. Sin embargo, habría que tener en cuenta el acercamiento del nuevo presidente Zelaya con el bloque de la Alianza Bolivariana de las Américas para mostrar un cierto alejamiento con las posturas de la derecha.

En Costa Rica existía, semejante a Honduras, un bipartidismo tradicional entre conservadores y liberales: el Partido de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y el Partido de Liberación Nacional (PLN). En términos relativos, el PUSC era la derecha y el PLN la izquierda, pero ambos se alternaban en la presidencia sin que cambiara la estructura general del país. Sin embargo, la novedad en las elecciones del 2006 fue el rompimiento del bipartidismo cuando el PUSC descendió hasta el cuarto lugar electoral con un exiguo 3.55% de la votación y cuando una nueva opción, Acción Ciudadana, con su candidato Ottón Solís estuvo a punto de conquistar la presidencia, al quedar solamente unos puntos abajo del triunfador PLN con Oscar Arias. Acción Ciudadana se reconoce con una ideología de centro izquierda sobre todo al mantener una dura crítica al CAFTA (el tratado comercial de Centroamérica con los Esta-

³⁵ La categoría de centro sobre el gobierno de Honduras (Manuel Zelaya) es valedera al compararlo con su contrincante del Partido Nacional, aunque ambas organizaciones han formado un bipartidismo de la oligarquía hondureña en las últimas décadas. Podemos traer en este punto la opinión de George Couffignal (2007: 10) quien ubica, por ejemplo, al gobierno de Zelaya en Honduras como una tendencia de centro.

dos Unidos). De esta forma, a diferencia de Honduras, el proceso electoral presidencial costarricense sí ofreció una gran novedad en la correlación de fuerzas, rompiendo el bipartidismo y ubicando al ganador Oscar Arias con una diferencia clara tanto respecto a la derecha tradicional como a la aparición de una sorprendente corriente progresista, aunque venida de la escisión de un partido tradicional.

En Perú también encontramos una gran novedad en el proceso electoral del 2006 porque el presidente en funciones, el indígena Alejandro Toledo, apoyó abiertamente a la candidata de la derecha, Lourdes Flores, diferenciándose tanto de Alan García, candidato de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), como de Ollanta Umala, postulado por su movimiento de izquierda Unidos por el Perú. En este triángulo de las tres principales fuerzas contendientes durante la primera ronda electoral, parece claro ubicar a Alan García como una opción de centro, que es la que nos permite ubicarlo en este apartado; incluso en este mismo contexto, García aparece más cargado ideológicamente a la izquierda. Sin embargo, el APRA alcanzó a obtener el segundo lugar en la primera ronda electoral y por ello llegó a la segunda ronda para enfrentarse a Ollanta Umala, en un escenario ideológico en donde toda la derecha apoyó a García para poder derrotar a la organización Unidos por el Perú.

De esta manera, tanto los presidentes triunfantes Zelaya en Honduras, Arias de Costa Rica como García de Perú se distinguieron tanto de posiciones claras de la derecha en la contienda electoral como de nuevas alternativas de izquierda, y por eso están ubicados en esta categoría de centro.

5.1 HONDURAS: continuación del bipartidismo

El caso de Honduras y sus elecciones presidenciales de noviembre del 2005 y la toma de posesión del nuevo Presidente Manuel Zelaya en enero del 2006 lo hemos abordado ya en un

libro anterior (Delgado, Medina y Gómez, 2007 ³⁶) para dar cuenta de la continuación del bipartidismo en esa nación centroamericana, en donde los partidos Nacional y Liberal se han alternado en el poder durante las últimas décadas.

Honduras es un país con 6.97 millones de habitantes y un promedio de ingreso per capita de 860 dólares anuales, lo que lo ubica como una de las naciones más pobres del continente. De hecho, aplicando los criterios del índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas –implicando el nivel de ingresos y la situación promedio de salud y educación–, encontramos que está ubicado en el lugar número 107 en el todo el concierto de las naciones mundiales (World Bank, 2005).

El poder político de este país centroamericano, por lo general, siempre ha estado controlado por los militares y determinados grupos de la élite económica que se han expresado en un traspaso continuo de la presidencia casi únicamente entre dos fuerzas políticas: el Partido Liberal de Honduras (PLH) y el Partido Nacional de Honduras (PNH) (Cfr. Medina 1998: 51). Aunque el primer partido se define como liberal y el segundo como conservador y tienen de hecho contradicciones entre ambos por sus posiciones frente a determinados problemas, siempre se han mostrado ligados a las oligarquías económicas y siempre con una alineación expresa a los gobiernos norteamericanos; durante la etapa de conflicto bélico en El Salvador y Nicaragua en los años 80s, los diferentes gobiernos permitieron que Estados Unidos instalara numerosas bases militares en territorio hondureño para enfrentar sobre todo el supuesto peligro de los sandinistas nicaraguenses. Ambos partidos, por otro lado, se sumaron a la propuesta del acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos (el CAFTA: Central America Free Trade Agreement), una propuesta que enfrentó

³⁶ En este libro publicado por la Universidad de Guadalajara (Delgado, Medina y Gómez, 2007), uno de los capítulos concentra en otra versión un análisis de las elecciones presidenciales en Honduras (2005), Bolivia (2005), Chile (2005-06), Costa Rica (2006) y Colombia (2006).

la oposición de grandes sectores de la población (Cfr. LADB, 2006).

En todo este contexto, las elecciones del 27 de noviembre del 2005 y la toma de posesión de Zelaya como presidente no ofrecieron alternativas novedosas para modificar el rumbo del país; ciertamente hubo en el gobierno un cambio de partido político, hubo alternancia, pero fue la alternancia tradicional dentro del bipartidismo arraigado por varias décadas. Ganó José Manuel Zelaya Rosales con el 49.9% de la votación y tomó posesión como presidente del país el viernes 27 de enero del 2006. Su contrincante electoral fue Porfirio Lobo, del PNH, quien llegó al 46.2% de la votación.

Aunque el partido liberal ha sido oposición frente al gobernante partido nacional, la nueva presidencia de Zelaya no significa ningún cambio estructural para el país. Ciertamente la disputa de las élites del partido nacional y liberal por el control del gobierno desataron pasiones y enconados ataques entre sus candidatos. Incluso el país se acercó a cierta crisis política por lo cerrado de la votación, porque el Tribunal Supremo Electoral tardó bastantes días sin declarar oficialmente al ganador, y porque el presidente en funciones, Ricardo Maduro, del Partido Nacional, había apoyado abiertamente a Porfirio Lobo y se negaba a reconocer los resultados que mostraban a Zelaya como ganador.

Los dos principales candidatos no tenían grandes diferencias en relación a las propuestas esenciales del modelo del país, pero la rivalidad tradicional entre ambos y el deseo enconado por estar en el gobierno los llevaron a enfrentamientos apasionados, a tal punto que varios periodistas señalaron la campaña electoral de noviembre del 2005 como la más sucia de toda la historia hondureña. Uno de los puntos más debatidos entre ellos fue, por ejemplo, la propuesta de la pena de muerte (Lobo estaba a favor, Zelaya en contra), en un contexto en donde la delincuencia y la inseguridad de los habitantes había ido aumentando, teniendo sobre todo el escenario de la violencia

por parte de las pandillas juveniles. Las pugnas entre ambos partidos, a pesar de la sujeción de ambos a las élites económicas del país, se expresaron en numerosos ataques verbales violentos; la pugna por quedarse con los importantes cargos políticos de un gobierno siempre provocará enfrentamientos aun entre los mejores amigos: en el caso de Honduras, lo que estaba en juego no sólo era la presidencia del país sino también los puestos de 128 legisladores del congreso y los 298 presidentes municipales. Hasta el 5 de diciembre del 2005, Lobo y su partido conservador empezaron a aceptar el triunfo de los liberales, aunque los resultados finales definitivos no salieron a la luz pública hasta el 23 de diciembre, casi un mes después de la fecha electoral.

ELECCION PRESIDENCIAL EN HONDURAS: Noviembre 2005

PARTIDO	CANDIDATO	% votos
Partido Liberal de Honduras (PLH)	José Manuel Zelaya Rosales	49.9%
Partido Nacional de Honduras (PNH)	Porfirio Lobo	46.2%

Fuente: Tribunal Supremo Electoral de Honduras (*www.tse.hn*).

La diferencia entre ambos partidos fue de poco más de tres puntos porcentuales. El Liberal y el Nacional han sido los principales y casi únicos oponentes electorales. En esa ocasión, por ejemplo, participaron también otros tres candidatos presidenciales pero que conquistaron solamente un porcentaje insignificante de votación: Juan Ángel Almendarez Bonilla, de la organización Unificación Democrática, con el 1.5% de la votación; Juan Ramón Martínez, postulado por el Partido Demócrata Cristiano de Honduras, con el 1.4% de los votos; Carlos Alejandro Soza Coello, de la organización Innovación y Unidad Social Demócrata, con el 1% de la votación. Y habría que añadir también el dato importante del bajo nivel de participa-

ción de la ciudadanía en el proceso electoral. “En Honduras, en las elecciones del 27 de noviembre de 2005 la mayoría de los votos se repartió entre el Partido Liberal y el ahora opositor Partido Nacional, pero con el telón de fondo de un abstencionismo que prácticamente llegó al 50%. Manuel Zelaya, el nuevo presidente calificado por algunos de populista de derecha, no logró obtener la mayoría en el Congreso, lo que supone un panorama de negociación con el Partido Nacional o con los representantes de otras agrupaciones pequeñas.” Rojas M., 2006).

De esta manera, uno puede concluir que en Honduras, los procesos electorales han estado secuestrados por las élites económicas y políticas del país, las cuales viven de un bipartidismo tradicional que no ha dado lugar a nuevas opciones políticas. Sin embargo, cada partido tiene su propia manera de gobernar que tiene que adecuarse a las circunstancias políticas particulares. En este caso, Manuel Zelaya, de 53 años, aunque no logró una mayoría legislativa (solamente 62 diputados por 52 del Partido Nacional, de un total de 128), pudo sortear cierta crisis de gobernabilidad puesto que logró una alianza con dos partidos menores: el Partido Innovación y Unidad – Social Democrática (PINU-SD), y el de la Unificación Democrática (UD), que para algunos observadores le dio al gobierno del PLH un toque de ideología de centro-izquierda. El presidente manifestó que sus prioridades de gobierno serían la “honestidad y transparencia” porque son las cosas que, según su visión, el país más necesita; en consecuencia con ello firmó una Ley de Participación Ciudadana, que le iba a “dar al pueblo la participación para vigilar el gobierno y poner fin a la corrupción en Honduras” (LADB, NotiCen, Feb 2, 2006). De la misma forma, enfatizó que uno de sus principales compromisos era la educación pública. Entre otras promesas, durante su toma de posesión, expresó su deseo de proteger los recursos naturales, especialmente el agua, brindar más seguridad a los ciudadanos aumentando el número de policías, ofrecer programas de vivienda a ciudadanos pobres...

5.2 COSTA RICA: superación del bipartidismo

El país tiene una población de 4 millones de personas; sobresale en el contexto centroamericano por su relativa estabilidad democrática y por un nivel económico que es superior al resto de sus vecinos (un ingreso promedio de 3,810 dólares anuales, según el Banco Mundial). Esta situación de estabilidad política, mejor situación económica acompañada con programas más efectivos de redistribución de la riqueza social (la alfabetización, por ejemplo, llega al 96% de la población) contrasta con el resto de los países centroamericanos y ha provocado una constante migración de nicaragüenses que de manera legal o ilegal se han establecido en tierra costarricense. Si observamos el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas encontramos a Costa Rica en el rango número 41, muy por arriba de México y Brasil. Este índice mide tanto el ingreso como el nivel de salud y educación, y por ello representa una mejor calidad de vida en relación a sus vecinos; la migración de los nicaragüenses puede explicarse sobre todo por razones económicas puesto que, según la misma fuente del Banco Mundial, el ingreso promedio en Nicaragua es de 400 dólares y el país se encuentra en el rango 106 del mismo índice de desarrollo humano.

El nuevo presidente Oscar Arias Sánchez, postulado por el Partido de Liberación Nacional (PLN), ya había sido presidente de su país (1986-90) y había obtenido el premio Nobel de la paz, por su labor en favor de la pacificación al interior de Centroamérica, en 1987, debido a su propuesta para la paz en los “Acuerdos de Esquipulas II”, también conocidos como el Plan Arias. Sin embargo, a pesar de sus antecedentes, en las elecciones del 5 de febrero del 2006 no logró una victoria holgada, aunque logró ser declarado presidente electo y tomó posesión de su cargo el 8 de mayo del 2006. Después del polémico conteo, el resultado final lo favoreció con el 40.02% de los votos, mientras que su cercano contrincante de izquierda, Ottón Solís Fallas, casi lo alcanza con el 39.80% de la vota-

ción. Junto con la sorpresiva novedad de la aparición de Acción Ciudadana, también quedó atrás el bipartidismo tradicional entre el PLN y el PUSC, puesto que este último con su candidato Ricardo Jaime Toledo Carranza descendió hasta el cuarto lugar con un poco significativo 3.55%; el tercer puesto fue ocupado por Otto Guevara Ruth del Movimiento Libertario con el 8.48%. Siguieron también con exiguos resultados Antonio Álvares de Unión para el Cambio (2.44%), José Manuel Echandi de Unión Nacional (1.64%) y Juan José Vargas de Patria Primero (1.08%). Los otros restantes siete candidatos³⁷ presidenciales no llegaron al 1% de la votación general.

Aunque la reputación de Costa Rica permanece como uno de los más democráticos del continente, esta elección se complicó tardando varias semanas para decidir al ganador. Las empresas encuestadoras se equivocaron en sus apreciaciones (predecían que Arias ganaría con mucha claridad, por lo menos con 10 puntos de ventaja) y, además, el tamaño de los escándalos entre los partidos políticos alejó a la población el día de la votación para provocar un abstencionismo del 35%. El principal contrincante electoral del PLN, Otton Solís del Partido Acción Ciudadana (PAC), de centro izquierda, se acercó de manera inesperada y casi empató la elección. Como ejemplo del posible empate, dos días después de la elección y con el 88.44% de los votos nacionales contados electrónicamente, Arias tenía 591,769 votos (el 40.51%) mientras que Solís alcanzaba 588,519 votos (el 40.28%), lo cual daba una diferencia de solamente 3,250 votos, cuando faltaban cerca del 17% de los votos por contabilizar (Cfr. LADB, NotiCen Feb 9, 2006). Con ello, el Tribunal Supremo Electoral decidió irse

³⁷ Estos siete candidatos fueron los siguientes: José Miguel Villalobos, de Alianza Democrática Nacionalista (0.23%), Manuel V. De la Cruz, de Fuerza Democrática (0.19%), Álvaro E. Montero, de Rescate Nacional (0.15%), Humberto E. Vargas, de Coalición Izquierda Unida (0.14%), y José H. Arce, de Unión Patriótica (0.11%). (Datos del Tribunal Supremo de Elecciones, de Costa Rica)

al lento conteo de voto por voto en todas las 6,163 casillas en todo el país –que tardaría varias semanas–, con el objeto de que hubiera total claridad en la elección. Transparencia Internacional, los representantes de partidos políticos y numerosas organizaciones ciudadanas se reunieron alrededor de los centros de conteo. En este asunto, las instituciones electorales costarricenses dieron otro ejemplo para la estabilidad democrática, por su intento de dar claridad a todo el mundo sobre el resultado exacto de los votos. Al final, se reconoció que Arias triunfó sobre Solís con 18,167 votos más, en una cerrada pelea electoral que no se daba en el país desde 1966 cuando José Joaquín Trejos venció a Daniel Oduber con sólo 4,220 votos de más.

Esta actuación ejemplar de Costa Rica no sería tomada en cuenta en la situación postelectoral de México, a mediados del 2006, y por ello se provocaría en este país la incertidumbre sobre quién realmente ganó, a pesar de la declaración formal de la victoria a favor de Felipe Calderón.

En Costa Rica, se habían manifestado numerosas predicciones favorables al triunfo de Oscar Arias antes de la fecha electoral; se pensaba que su fama precedente como nobel de la paz junto con la crisis del Partido de la Unidad Social Cristiana (PUSC), quien junto con el PLN eran solamente los dos partidos políticos tradicionales que siempre se disputaban la presidencia, le otorgarían una amplia victoria. Y de hecho, como se preveía, Ricardo Jaime Toledo, el candidato del PUSC³⁸, solamente logró el 3.55% de los votos, pero muy pocos esperaban la sorpresa del PAC con Ottón Solís. El mismo Arias confesó a los reporteros: “Este resultado es inesperado; Ottón logró más de lo que cualquiera hubiera proyectado” (LADB. NotiCen, Feb. 9, 2006)

³⁸ La caída del bipartidismo tradicional en Costa Rica no sólo se dio por el ascenso del PAC sino por la crisis interna del PUSC y la actuación de su último gobierno. El PUSC había gobernado Costa Rica en dos períodos sucesivos: 1998-2002 y 2002-2006.

¿Qué razones influyeron en el electorado para poner en cuestión la elección casi segura de Arias? Hay que contar, por un lado, que la fama internacional de un líder no necesariamente lleva a su aceptación generalizada a nivel nacional; en Guatemala, la también premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, también sería candidata presidencial un año después y fracasaría rotundamente. De hecho, al interior de Costa Rica, desde antes de la fecha electoral, un sector de la población había considerado como inconstitucional la postulación de Arias para un segundo período. La postulación de Arias no era para un período consecutivo, ya que su primer período presidencial había sido de 1986 a 1990, pero la aprobación para que pudiera contender de nuevo como candidato no la dio el poder legislativo sino que se decidió en una Sala Constitucional de la Corte. Por otro lado, el PLN llegaba al proceso electoral del 2006 después de haber perdido la presidencia en dos veces consecutivas y en medio de fuertes divisiones internas. Sin embargo, el punto más importante de la controversia electoral se dio en torno a la aprobación o rechazo al Central America Free Trade Agreement (CAFTA) con los Estados Unidos, debido a las consecuencias inmediatas que se podían prever sobre la vida nacional, especialmente en el sector agrario.

La posición de Otton Solís con su partido Acción Ciudadana no era de oposición frontal al CAFTA; planteaba que solamente lo apoyaría si éste era renegociado. Arias en cambio abiertamente manifestó su apoyo al tratado. Costa Rica se había convertido en el único país centroamericano que no había ratificado el CAFTA y éste se encontraba en la discusión pública dentro de la ciudadanía, con grandes temores sobre la producción agraria y la industria nacional al entrar en competencia directa con la producción norteamericana. Se puede apreciar que las elecciones fueron convertidas casi en un referéndum sobre el tema del libre comercio con los Estados Unidos; gran parte de la población se manifestaba en contra el modelo neoliberal y aprovechó la candidatura de Solís para

enfrentar la ideología del libre comercio de Arias. De hecho, Arias llegó a obtener la victoria con una ventaja mínima de votos, pero la ratificación del Tratado no estuvo asegurada, al no haber podido lograr una mayoría en el congreso; con ello, el CAFTA no pudo entrar en operación en enero del 2007 sino que tuvo que decidirse en un referendun nacional, en donde finalmente ganó el Sí con un escaso margen, mostrando cómo la población siempre estuvo dividida alrededor de este debate.

Alberto Canas, uno de los fundadores del PLN que habían abandonado el partido para irse con Solís al PAC manifestó esta central preocupación: “Este es un país de pequeños propietarios, pequeños granjeros y pequeños empresarios. El hecho de que el gobierno abandone a los pequeños empresarios y opte por las grandes industrias y los grandes bancos hace que mucha gente haya protestado de esa manera en la elección del domingo” (LADB, NotiCen, 2006). Algunos llegaron a señalar que el principal conflicto en las elecciones de Costa Rica se centraba en la discusión sobre un modelo económico basado en el Consenso de Washington que podía promover el crecimiento de las exportaciones favoreciendo los intereses de la oligarquía del país, pero también la pauperización de los sectores de clase media.

Los resultados de la elección presidencial junto con la conformación del aparato legislativo ofrecían un panorama típico de la nueva gobernabilidad latinoamericana, en donde el espacio político privilegiado es la negociación política. El PLN de Arias ganó 25 asientos de la legislatura de un total de 57 miembros; el PAC quedó en segundo lugar y obtuvo 18 curules. La sorpresa del PUSC también se dio a nivel legislativo puesto que, habiendo sido el partido gobernante durante los últimos 8 años, se presentó en el 2007 solamente con 4 diputados; el Movimiento Libertario tuvo seis posiciones y el resto se dividieron entre los partidos minoritarios. En caso de poner el CAFTA para ser ratificado en el congreso, el presidente

necesitaría 4 votos más si es que la decisión se definía por una mayoría simple; estos cuatro votos podrían ser los del PUSC. Sin embargo, un tratado de esa naturaleza exigía, según muchas opiniones políticas, dos tercios de los votos del congreso, algo que Arias nunca lograría. Por eso, finalmente, el presidente se decidió por un impulsar el referendun sobre este tratado con Estados Unidos, que se convirtió en todo un acontecimiento político a nivel centroamericano.

5.3 PERÚ: segunda oportunidad para el APRA

La Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) es una organización de izquierda desde que la concibió y creó su fundador Manuel Haya de la Torre a principios del siglo XX. Pero desde entonces se mantuvo en una tendencia centrista porque era opuesta a la organización de una izquierda más radical en la que militaba Jose Carlos Mariátegui. Haya de la Torre nunca pudo ser presidente del Perú; cuando las condiciones históricas le ofrecieron la oportunidad de competir con oportunidad de ganar, la muerte lo alcanzó; en su lugar por el APRA fue designado Alan García, quien efectivamente con un pensamiento progresista llegó a desempeñar el cargo de presidente de 1985 a 1990. Su período presidencial, sin embargo, fue un desastre y él mismo tuvo que enfrentar persecuciones legales ³⁹.

La vida política parece dar muchas vueltas porque Alan García, en el 2006, después de los dos mandatos presidenciales de Alberto Fujimori (más el intento frustrado de un tercer gobierno) y después de las frustradas esperanzas que dejó el gobierno del indígena Alejandro Toledo, logró de nuevo colocarse como candidato presidencial por el mismo APRA. De hecho, durante la primera vuelta electoral ocurrida el 9 de abril del 2006, con dificultad logró apenas colocarse en el segundo

³⁹ Después de su mandato presidencial 1985-1990, Alan García fue perseguido y tuvo que salir exilado y estuvo fuera de su país de 1992 a 2001.

lugar con el 20.4% de la votación⁴⁰, por debajo de manera clara del candidato triunfador Ollanta Humala, postulado por la Unión por el Perú, quien había logrado el 25.68% de la votación. De no existir la ley electoral sobre la segunda vuelta, Humala hubiera sido designado presidente del país.

Los 27 millones de habitantes del Perú cuentan con apenas \$2,080 dólares de ingreso promedio; el Índice de Desarrollo Humano de la ONU sitúa a esta nación descendiente directa de los incas actualmente en el nivel número 74 dentro del concierto de los países del mundo, con una gran desigualdad en la distribución de la riqueza. Por otro lado, según el peruano Julio Cotler, siendo una república independiente desde el siglo XIX, no ha podido todavía constituir una plena identidad nacional debido sobre todo a las líneas geográficas que separan a los tres grandes tipos de población: la que vive en la costa, la que vive en los Andes y la que vive en la selva.

El nuevo presidente Alan Gabriel Ludwig García Pérez, quien tomó posesión el 28 de julio de 2006, ha sustituido en el puesto a Alejandro Toledo (2001-2006). Este último, aunque de ascendencia indígena en un país con población mayoritariamente indígena, poco pudo hacer después de los dos períodos consecutivos de Alberto Fujimori⁴¹ en la presidencia, y fue decreciendo paulatinamente en su popularidad hasta tener solamente un 9% de popularidad en el Perú a finales de 2004 (Cfr. *Annuaire*, 2006: 422). Toledo tiene el mérito de sus raíces indígenas pero tuvo una formación académica y política en el mundo norteamericano, casado con extranjera, y que gobernó el país enfundado en la ideología del libre comercio.

⁴⁰ Este segundo puesto en el resultado electoral fue disputado con Lourdes Flores, la candidata de la derecha apoyada por el gobierno de Alejandro Toledo, quien llegó al 19.97% y estuvo a punto de quitarle el lugar a Alan García para poder competir en la segunda vuelta con Humala.

⁴¹ De hecho, Fujimori ya había logrado en el 2000 ser declarado como presidente para un tercer período presidencial, pero las revueltas ciudadanas y políticas lo obligaron a huir del país y refugiarse en el Japón, admitiendo su ciudadanía japonesa.

En las elecciones presidenciales de 1990, cuando se postulaba como candidato del modelo neoliberal el novelista Mario Vargas Llosa, surgió la figura de Alberto Fujimori, de origen japonés pero apodado el chino, que ofrecía un programa alternativo. Pero Fujimori llevó a la práctica los postulados económicos de apertura comercial que Vargas Llosa había enunciado en su campaña y logró dar golpes espectaculares a la insurgencia armada de Sendero Luminoso; logró una exitosa reelección en 1995 e intentó todavía un tercer período de gobierno, que le fue frustrado mediante todas las acusaciones de corrupción y autoritarismo que fue acumulando en sus sucesivos períodos presidenciales. Había logrado una relativa estabilidad económica y había desmantelado la estructura de la guerrilla de Sendero Luminoso encarcelando a su principal dirigente, pero fracasó en su estilo de gobernar. El indígena Alejandro Toledo le siguió en la presidencia hasta el 2006 continuando la implementación de las reformas estructurales del neoliberalismo con ajustes que, aunque estabilizaron la economía y la hicieron crecer (PIB del 5.1% en el 2004, comparado con 4% en el 2003 y 3.7% en el 2002), también provocaron una profundización de la desigualdad social en medio de grandes escándalos institucionales y políticos. Estas dos situaciones –gran desigualdad social especialmente con respecto a los indígenas y los escándalos de corrupción gubernamental– fueron las que constituyeron el caldo de cultivo para la nueva propuesta de Ollanta Humala, con una propuesta de izquierda con rasgos indígenas, nacionalista, que pedían la depuración de toda la vida política del país. Por otro lado, los debates electorales también estuvieron profundamente influidos por el Tratado de Libre Comercio que los Estados Unidos empezaron a negociar con Perú desde 2004. No solamente era el tema de la agricultura peruana, que se vería tremendamente afectada por la apertura de fronteras con los Estados Unidos sino también por la polémica sobre los insumos de plantas naturales que la industria farmacéutica trasnacional utiliza continuamente para

sus medicamentos sin atender demandas por los derechos de propiedad nacional. Estos insumos naturales eran sacados principalmente de las regiones donde tienen su asiento las comunidades indígenas.

Las tendencias predominantes en la primera ronda electoral, el 9 de abril del 2006, se dividieron en tres candidatos: la derecha de la gente rica y blanca con Lourdes Flores, apoyada por el propio presidente Toledo y los grupos económicos predominantes; la izquierda radical de Humala buscando la distribución de la riqueza social entre los pobres, mayor control de estado en la economía y denunciando toda la corrupción de los políticos; la tibia izquierda del APRA se vio de hecho en el centro político, queriendo proponerse en medio de los extremos. El triunfo claro lo tuvo Humala con su organización Unidos por el Perú con el 25.68% de los votos. La polémica estuvo en la determinación del segundo lugar por la cercanía de los números: la diferencia fue mínima pero finalmente se determinó que Alan García (APRA) había obtenido el 20.4% de los votos mientras que Lourdes Flores (Unidad Nacional) casi lo alcanzaba con el 19.97% de la votación; la ideología de una derecha con la gente rica y de color blanco representada por Flores no tuvo oportunidad de llegar a la segunda vuelta por solamente 64 mil votos de diferencia con García.

En total hubo 20 candidatos presidenciales. Los tres mencionados fueron los que atrajeron la mayor parte de la votación. Sin embargo, hay que mencionar también a los siguientes lugares: el cuarto puesto lo consiguió Alianza por el Futuro con su candidata Martha Gladys Chávez Cossío (6.23%); el quinto el Frente de Centro con su candidato Valentín Paniagua (4.82%); el sexto fue para Restauración Nacional con su candidato Humberto Lay Sun (3.67%). Los otros 14 candidatos ⁴² no obtuvieron ni siquiera el 1% de la votación.

⁴² Los otros 14 candidatos fueron propuestos por los partidos Concentración Descentralista, Partido Justicia Nacional, Partido Socialista, Alianza para el Progreso, Con Fuerza Perú, Movimiento Nueva Izquierda, Alianza

De hecho, el presidente Toledo, ante los resultados ciertos de la primera ronda electoral y la incertidumbre sobre quién sería el futuro presidente, se apresuró a firmar el TLC con los Estados Unidos, con el objeto de amarrar la economía para cualquier sucesor, instando al Congreso a ratificarlo lo más pronto posible. Por sus declaraciones, los candidatos que iban a disputarse la segunda ronda tenían posiciones diferentes sobre este tema de debate nacional: Alan García proponía que el tratado fuera renegociado mientras que Humala quería convocar a un referendun nacional para poder decidir su aprobación.

Ollanta Humala hubiera sido presidente de Perú si todo se hubiera decidido en la primera vuelta porque fue el claro ganador con el 25% de los votos totales, cuatro puntos arriba de sus perseguidores. Pero al no conseguir ningún candidato el 50% de los votos, la contienda final tendría que ser entre los dos candidatos punteros. Humala estaba definido como uno de ellos, pero existió un cierto grado de crisis político-institucional por lo cerrado de la votación entre el segundo y tercer lugar.; la diferencia entre García y Lourdes Flores era solamente de .4%. Humala, con el énfasis en una ideología nacionalista y etnocentrista, tuvo alrededor de 3.5 millones de votos más que sus dos más cercanos contrincantes, mostrando el gran resentimiento de la población, contra la política económica neoliberal del presidente Toledo, contra la corrupción del mundo de la política y contra el intervencionismo de los Estados Unidos especialmente en la producción de coca.

La segunda vuelta electoral fue decidida, el 4 de junio del 2006, por la unión establecida entre el APRA (García) y quienes habían votado por la Unidad Nacional (Flores), que prefirieron hacer un bloque sólido, a pesar de sus diferencias, con el objeto de evitar que Humala llegara a la presidencia. Todo

Fuerza Democrática, Avanza País-Partido de Integración Social, Partido Renacimiento Andino, Progreseemos Perú, Partido Reconstrucción Democrática, Resurgimiento Peruano, Y se llama Perú, Movimiento Descentralizado Perú Ahora.

mundo recordaba el período de García como presidente de 1985 a 1990 como el peor en términos económicos, pero, como decía Fritz du Bois, economista en Lima, García “se ha convertido por default en el candidato de los empresarios, de los mercados y de la clase media. El mensaje de Ollanta Humala era demasiado agresivo y hostil para para el sector privado y hostil en general para la clase media aquí que se tuvo que aliar con García” (LADB, NotiSur June 16, 2006). Las ideologías de centro (García) y de derecha (Flores) hicieron una lógica alianza y lograron su objetivo en la segunda ronda electoral: 52.62% de los votos fueron para Alan García mientras que Humala conquistó el 47.37%. Pero en términos geográficos, García ganó en Lima y Ollanta en los sectores rurales. “El conteo final le dio a García 6.965,017 votos y a Humala 6.270,080, una diferencia de 694,937. Cerca de 16.5 millones de peruanos estaban aptos para votar y debían hacerlo por ley, pero solamente llegaron a las urnas 14.468,049 votos, de los cuales 157,863 estuvieron en blanco y 1.075,089 fueron declarados nulos, dejando solamente 13.235,097 votos válidos” (LADB, Idem).

En el período poselectoral, de nuevo vino la negociación entre las fuerzas políticas pero en una nueva correlación de fuerzas. Entre los diputados, debido al triunfo de Humala en la primera vuelta, el partido UPP llegó a 45 posiciones de las 120 que tiene el congreso; el APRA conquistó 36 y la UN 17. Fujimori tuvo que exilarse a Japón por todas las acusaciones que hubo en su contra, pero su partido Alianza por el Futuro había conquistado el cuarto lugar en la votación presidencial y obtuvo 13 curules. El resto de posiciones fue para los partidos minoritarios. La gobernabilidad depende entonces de las alianzas del presidente, que ciertamente tiene que entenderse con la izquierda radical del nuevo movimiento de Humala.

CAPÍTULO VI

UNA IZQUIERDA HETEROGÉNEA EN ASCENSO

“No todas las izquierdas son iguales”

Spot de la organización Alternativa Socialdemócrata.

México, Agosto 2008

Nadie puede negar que diversos autollamados gobiernos de izquierda han llegado al poder del gobierno en los últimos años por la vía de las urnas. En este sentido puede hablarse de una nueva fase en la historia política latinoamericana durante la transición al siglo XXI. Sin embargo, no todas las izquierdas son iguales porque no se trata de un bloque homogéneo de gobiernos que, a partir de la ideología, puedan establecer sólidas alianzas. Incluso diversos analistas les niegan a algunos gobernantes esa categoría política de izquierda: puede ser el caso de Lula da Silva en Brasil, a partir de la moderación en las posiciones de su gobierno en el primer período (2002-2006) y a quien muchos radicales ven como traidor al movimiento de la izquierda; también lo es el caso de Bachelet en Chile, cuyo gobierno se ejerce a través de una concertación con la Democracia Cristiana y cuyos postulados nunca han sido radicales pero cuyo resultado es un país que está entre los mejores índices de desarrollo humano en Latinoamérica; incluso hay duras críticas hacia Daniel Ortega en Nicaragua, por el hecho de haber hecho pactos con la iglesia católica y con las élites económicas, moderando las posiciones que mantenía en los años

80s; también es el caso de Néstor Kirchner, con un gobierno de continuidad explícita a través de su esposa Cristina Fernández ahora como presidenta de Argentina, quien ha sido atacada por organizaciones de izquierda más radicales como Elisa Carrió, quien le disputó la presidencia en el 2007.

A todos estos gobiernos podríamos ubicarlos en una categoría de izquierda desde sus postulados ideológicos, pero se distinguen con bastante claridad de las izquierdas más radicales en los gobiernos de Venezuela, Bolivia, Ecuador y Cuba, pero con las cuales se entablan alianzas y concertaciones nuevas sobre proyectos alternativos. Ciertamente aparece la aspiración de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) con la integración de varios de estos países a los que se suma explícitamente Nicaragua, pero también se ha formulado el proyecto de la Comunidad Sudamericana de Naciones que hoy se conoce con el nombre de Unión de Naciones del Sur (UNASUR). Con sus problemas, pero permanece también el proyecto de integración del MERCOSUR, en donde se mantiene todavía en suspenso la inclusión de Venezuela, pero que avanza también en sus tratados económicos.

A pesar de la heterogeneidad, es posible hablar de una tendencia en toda la región. “Los latinoamericanos perciben que si bien actualmente existe democracia política, en las últimas dos décadas se ha incrementado la desigualdad social y económica. El resultado es un viraje hacia la centroizquierda: los latinoamericanos optaron por otros caminos —o por otras promesas— que insisten en la necesidad de avanzar hacia una mayor equidad y dejar de lado la ortodoxia en el manejo de la macroeconomía, que trajo estabilidad económica, pero no logró generar condiciones de equidad y, en muchos casos, tampoco impulsó con éxito el desarrollo económico” (Toranzo C., 2006).

El aspecto novedoso de la izquierda es que no está llegando al poder del gobierno con el postulado de la vía armada, como predominó en la segunda mitad del siglo XX, sino por la vía

institucional de la democracia electoral. “En América Latina el cartero de la izquierda está llamando por segunda vez a la puerta de la historia, casi medio siglo después de la Revolución cubana, y lo está haciendo no mediante la violencia insurreccional y el sistema de partido único, sino mediante elecciones y pluralismo, como ha quedado claro en el reciente referendo venezolano en el que Chávez reconoció su derrota” (Fajardo, 2008: 28).

El viraje es claro pero la tendencia no puede ser considerada como permanente. Lo importante sigue siendo la posible consolidación de estas tendencias al interior de sus propios países en el período establecido por sus legislaciones, porque seguirán encontrándose con otros proyectos de país y el resultado periódico tendrá que salir también de las propias urnas.

6.1 BOLIVIA: una sorprendente revolución democrática de rasgos indígenas

Dada la cultura racista que impregnaron los españoles en el nuevo continente, a los indígenas por lo general se les ha considerado como subhumanos⁴³; esa inferioridad natural, mencionaba Francisco Ginés de Sepúlveda en el siglo XVI, era lo que hacía necesario por voluntad de Dios que fueran subyugados por los conquistadores. Los indígenas fueron diezmados por la opresión colonial y las enfermedades europeas a tal punto que en el siglo XVII se procedió a la migración obligada de personas de raza negra provenientes de África en calidad de esclavos. Indios y negros sufren históricamente de esta visión racista del mundo occidental en donde como decía Alexander

⁴³ Dice Bernardino de Sahagún sobre los indios, en su introducción a los *Comentarios Reales* del inca Garcilaso de la Vega: “Así están tenidos por bárbaros y por gente de bajísimo quilate”. El cura Francisco Ginés de Sepúlveda también señalaba: “Los indios son gente de rudo ingenio, servil por naturaleza y, por consiguiente, obligada a someterse a otras gentes de mayor talento, cuales son los españoles”

Humboldt en sus Ensayos Políticos señala que *en América, la piel, más o menos blanca, decide el rango que ocupa el hombre en la sociedad.*

Por este tipo de visión cultural que todavía persiste, resulta sorprendente el papel destacado que algunos pocos indígenas han llegado a tener en sus respectivas sociedades. En México se ha hablado mucho de Benito Juárez, quien llegó a ser presidente en el siglo XIX; en ese nivel, también llegó a destacar Alejandro Toledo en el Perú y recientemente Evo Morales en las elecciones del 2006 en Bolivia. Sin embargo, se tiene que hacer notar también que no todos los indígenas son iguales o representan los mismos intereses. Sin embargo, por un lado, la palabra indio significó una generalización simplista que trató de borrar las múltiples diferencias de las características particulares de numerosos grupos étnicos y, por otro, no siempre la pertenencia a una raza representa siempre la defensa de los intereses de ella. La gran diferencia entre los casos recientes de Alejandro Toledo en Perú y de Evo Morales en Bolivia ilustran claramente estos señalamientos anteriores: el primero tiene la piel del indio y una ascendencia inca certificada pero su gobierno no significó nada diferente en relación a los gobiernos anteriores; el segundo, en cambio, está comprometido con los intereses indígenas y tiene la difícil tarea de intentar compaginarlos con los intereses de toda la nación andina.

Bolivia tiene en el 2006 por primera vez un presidente de ascendencia indígena Quechua-Aymara; nació en 1959 y siempre estuvo vinculado en su trayectoria de vida a los movimientos populares y al pensamiento general de la izquierda. Pero las tareas que enfrenta son gigantescas, no solamente en el ámbito económico por ser Bolivia uno de los países más pobres de América Latina, sino también en el ámbito político y cultural, sobre todo cuando las tradicionales oligarquías, especialmente las aglutinadas alrededor del polo de Santa Cruz, han visto afectados sus intereses por las decisiones del nuevo gobierno.

El país está caracterizado por ser uno de los países más pobres de toda América Latina. Sus 8.98 millones de personas

tienen un ingreso promedio anual de 990 dólares y con una esperanza de vida de 62 años. El índice de Desarrollo Humano coloca a Bolivia en el lugar número 104, en los últimos lugares dentro de la región latinoamericana (Cfr. World Bank, 2005)

El Movimiento al Socialismo (MAS) postuló a Juan Evo Morales como su candidato para las elecciones nacionales del 18 de diciembre del 2005 en donde triunfó claramente con el 53.7% de la votación, y tomó protesta oficial como presidente el domingo 22 de enero del 2006. Había ocupado diversos puestos públicos: secretario general sindical en 1985, secretario ejecutivo de la confederación del trópico en 1988, presidente del comité coordinador de las seis federaciones del trópico cochabambino en 1996, diputado uninominal en 1997... Pero su vida nunca fue la de un burócrata, puesto que en muchas ocasiones fue perseguido y criminalizado, especialmente por la defensa que hacía del cultivo de la hoja de coca, argumentando la tradición de su consumo indígena sin que ello significara su anuencia para el uso de la coca en otro tipo de drogas.

Fueron las coaliciones las que definieron la coyuntura política del 2005 en Bolivia en dos principales fuerzas contendientes: “El escenario electoral fue ocupado por Poder Democrático y Social (PODEMOS), liderado por Jorge *Tuto* Quiroga ⁴⁴, quien, lejos de comprender el giro hacia la centroizquierda de América Latina, insistió en ofrecer más de lo mismo: ajuste estructural y política social asistencial... Morales capitalizó el voto de la izquierda, de ex socialistas, ciudadanos cercanos a las organizaciones no gubernamentales, algunos intelectuales, clases medias empobrecidas, campesinos y otros sectores que no encontraban una razón valedera para votar por Quiroga. Consiguió, ante todo, el apoyo de quienes estaban cansados de la vieja política” (Toranzo C., 2006). El primero enfocó su

⁴⁴ Jorge Quiroga había sido presidente de forma breve entre 2001 y 2002, pero luego se había separado de su agrupación Acción Democrática Nacionalista (ADN) para mostrar una cara renovada en una nueva coalición de fuerzas.

campaña queriendo provocar miedo a los electores ante la posibilidad de la victoria de Morales y ofreciendo más de lo mismo que habían hecho los gobiernos anteriores; el segundo partía de acerbas críticas contra la viejos modos de gobernar que habían llevado a las condiciones desastrosas que vivían los bolivianos y prometía reformas radicales en la economía y en el modo de practicar la política.

Resultados de las elecciones presidenciales en Bolivia: 18 diciembre 2005

PARTIDO	CANDIDATO	VOTOS
Movimiento al Socialismo	Juan Evo Morales AIMA	1.544,374 (53.7%)
Poder Democrático y Social (PODEMOS)	Jorge Quiroga	821,745 (28.6%)
Frente de Unidad Nacional (UN)	Samuel Jorge Doria Medina Auza	224,090 (7.8%)
Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR)	Michiaki Nagatani Morishita	185,859 (6.5%)
Movimietno Indígena Pachakuti (MIP)	Felipe Quispe Huanta	61,948 (2.2%)
Nueva Fuerza Republicana (NFR)	Guido Angulo Cabrera	19,667 (0.7%)
Frente Patriótico Agropecuario de Bolivia (FREPAB)	Eliceo Rodríguez Pari	8,737 (0.3%)
Unión social de Trabajadores de Bolivia (USTB)	Néstor García Rojas	7,381 (0.3%)

Fuente: cuadro personal con base en datos oficiales del Corte Nacional Electoral de Bolivia *www.cne.org.bo*

Evo Morales conquistó casi el 54% de los votos de la población, entre ocho candidatos, para luego tomar posesión como presidente el 22 de enero del 2006. Además, parece

haber sido también un acierto el haber llevado como candidato a la vicepresidencia a Alvaro García Linera, un sociólogo ex líder del movimiento guerrillero Tupac Katari. Derrotaron al más cercano contrincante, el anterior presidente Jorge Quiroga, quien había estado en el poder ejecutivo en el período 2001-2002; los otros dos contrincantes del Frente de Unidad Nacional (UN) Samuel Jorge Doria y del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) el empresario Michiaki Nagatani, alcanzaron una exigua votación. La participación de los votantes bolivianos en esta elección fue del 84.72%. “La mayoría absoluta del MAS demuestra que lo que sucedió en Bolivia fue una revolución democrática, ligada a una historia revolucionaria y conectada con el proceso de construcción de democracia representativa desarrollado durante dos décadas. En las elecciones de 2005, la gente votó contra la vieja política, por el cambio y la necesidad de conectar la ética con la política. Pero además el voto tuvo como objetivo ampliar la inclusión y evitar que haya solo ciudadanía política, con el reto de lograr ciudadanía plena, es decir, que se alcancen derechos económicos, sociales y culturales para todos” (Toranzo C., 2006). Desde esta perspectiva, la ideología de izquierda, las posiciones de autonomía frente a la injerencia estadounidense y en especial a la propuesta de tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Bolivia, y los vínculos expresos con Fidel Castro en Cuba y con Hugo Chávez en Venezuela no parecen haber sido un obstáculo para un electorado que ya quería cambios significativos en el modelo económico y político del país. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que Evo Morales, aunque impulsado sus manifiestos contra el neoliberalismo y contra la injerencia norteamericana, no representa la izquierda extrema boliviana, porque había otros proyectos como el del también líder indígena aymara Felipe Quispe, del MIP, que reivindicaban propuestas más radicales, aunque éste solamente logró el 2.2% de los votos en el resultado de diciembre.

La gran ventaja de Evo Morales fue haber logrado el triunfo en más del 50% de los votos porque, ello, aparte de la legitimidad, lo puso también con un apoyo muy significativo en el Congreso. “En las dos últimas décadas, ningún candidato había ganado por mayoría absoluta. El triunfo de Morales cierra así una página de la historia política del país, marcada por la democracia pactada y los acuerdos para formar mayorías parlamentarias y gobiernos de coalición, lo que conduce a leer de otra forma la gobernabilidad. Con el resultado de las elecciones, el nuevo gobierno cuenta con un control absoluto de la Cámara de Diputados (72 de los 130 diputados, pero se mantiene en minoría en el Senado, donde posee apenas 12 de las 27 bancas” (Toranzo C., 2006).

De cualquier manera, se puede afirmar que en Bolivia el descontento con un modelo económico y con las élites locales tradicionales ha provocado un cambio por medios pacíficos a través del voto, encaminándose a otro tipo de reformas. Si la reforma del Estado en décadas anteriores –y particularmente con los últimos presidentes de la República del mismo tipo tradicional: Jorge Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa– no ha resuelto los problemas fundamentales de la población, en especial de la población indígena, ahora a través de el mismo modelo liberal que sacraliza los procesos electorales se ha encontrado el medio para impulsar otro tipo de reformas. Este será el difícil reto que tiene desde 2006 el nuevo presidente indígena Evo Morales, en donde sobresalen tres grandes proyectos: la renegociación sobre los hidrocarburos con las empresas trasnacionales que los administran (Repsol, Total y Petrobras, de España, Francia y Brasil), la preparación de una Asamblea Constituyente con la reformulación de un nuevo pacto social, y la nueva relación del centro con las regiones, especialmente con aquellas como Santa Cruz y Tajjira que reclaman una mayor autonomía.

El objetivo del MAS no está enfocado a una lucha frontal contra el capitalismo sino que, partiendo del respeto a la pro-

piedad privada, se pretenden reformas radicales que eviten la aplicación salvaje de las reglas del capital. “El programa del MAS apunta a la industrialización de los recursos naturales, al desarrollo del mercado interno, a un cambio del *patrón de desarrollo* centrado en la producción y exportación de materias primas por otro centrado en productos industriales. Busca *acabar con el estado colonial* y democratizarlo por medio de una Asamblea Constituyente para generar igualdad jurídica entre los distintos grupos étnicos y sociales y conquistar la soberanía política” (Orellana, 2006). En este sentido, sin ser un programa de izquierda radical, el nuevo gobierno estará buscando algo que todavía no ha existido en Bolivia: la inclusión y participación política de los indígenas en el estado nación, la expansión del mercado interno, el desarrollo de un capitalismo nacional donde ganen los inversionistas pero con un mejor salario para los trabajadores, una democracia liberal y representativa con reglas institucionales más claras.

Tres años después de su elección, en una propuesta muy poco común en en todo el mundo donde el presidente se somete de nuevo a las urnas preguntando a la población sobre una posible ratificación a su mandato, Evo Morales fue ratificado como presidente de su país a través de la figura de un plebiscito en agosto del 2008 con más del 60% de la votación, superando el apoyo que había tenido en la elección del 2005. Seguía manifestándose una derecha y ultraderecha expresada en la fuerza regional de Santa Cruz y otras zonas que buscan una autonomía casi total en relación al poder presidencial del centro fueron apoyadas explícitamente por los Estados Unidos con ayuda económica a través de diversas agencias norteamericanas; en ese contexto, opinaba Atilio Borón: “la ratificación del mandato de Evo Morales no pondrá fin a las hostilidades, los chantajes, las agresiones y las políticas desestabilizadoras de la derecha boliviana” (Borón, Adital, 2008). Pero, por otro lado, aparecía también la fuerza de una opositora ultraizquierda que quisiera llevar al gobierno a una mayor radicalización

de sus posturas. Entre ambas, persiste con apoyo popular el gobierno de Morales como el primer gobierno progresista en la historia de Bolivia, el cual sería ratificado posteriormente en diversas consultas nacionales hechas a la población.

6.2 CHILE: permanencia de la Concertación

La historia de Chile a finales del siglo XX tiene el sello de la sangrienta dictadura del general Augusto Pinochet, quien liquidó, mediante un golpe de estado apoyado por los Estados Unidos, en 1973, el gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. La república chilena se convirtió, de hecho, en uno de los primeros experimentos latinoamericanos para que el Fondo Monetario Internacional (FMI), con sus recetas inspiradas por Milton Friedman, impulsara con eficacia sus proyectos de reformas estructurales. Sin embargo, a pesar de lo largo de la dictadura (17 años), el país transitó hacia un sistema democrático, a partir del referéndum que perdió Augusto Pinochet en 1989, aunque hubo muchos candados institucionales que le permitieron una inmunidad hasta su muerte; el mismo general Pinochet permaneció como jefe del ejército hasta 1998. “La libertad política se obtuvo en 1990 sin mediar una reestructuración de las Fuerzas Armadas y con la manutención hasta 1998 de Augusto Pinochet como Comandante en jefe del Ejército” (Moulián T., 2006).

Posteriormente, dentro de los mismos procesos electorales, el país transitó de los gobiernos de la Democracia Cristiana hacia los gobiernos actuales presididos por el Partido Socialista Chileno (Ricardo Lagos y la reciente elección de Michelle Bachelet) en un escenario de concertación⁴⁵; en este sentido, se puede hablar en Chile de prácticamente dos transiciones: de la

⁴⁵ “La Concertación es una coalición estable que ha logrado sobrevivir a 4 elecciones presidenciales, triunfando sobre las opciones de la derecha... Se trata de una coalición que unifica al centro demócrata cristiano con una parte de la izquierda, la más significativa desde el punto de vista electoral reviviendo así la situación colaborativa” (Moulián T., 2006).

dictadura militar hacia las propuestas de la Democracia Cristiana; de los gobiernos demócrata cristianos a las propuestas del Partido Socialista, aunque para diversos analistas, debido a sus posiciones moderadas y la adopción de numerosos elementos del modelo neoliberal para su economía, se estaría hablando de una izquierda no radical. “La candidatura de Lagos en las elecciones de 1999 constituyó un giro hacia la izquierda en la Concertación. A diferencia de sus predecesores demócrata-cristianos, Lagos era socialista” (Navia, 2006). Esta situación probablemente le restó un número considerable de votos puesto que por primera vez después de la dictadura, el candidato de la Concertación apenas superó a Joaquín Lavín de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) con un 0.45% de los votos y tuvo que pasar a una segunda vuelta para lograr la victoria definitiva con el 51%.

Sin embargo, lo notable de este proceso, es que en su conjunto nos ofrece actualmente una economía estable, con uno de los mejores índices de Desarrollo Humano dentro de la región latinoamericana. Sus 15.77 millones de personas tienen un ingreso promedio de 4,590 dólares al año, pero su esperanza de vida es de 76 años; lo más notable es que el país está considerado en el lugar 39 dentro del Índice de Desarrollo Humano (World Bank, 2005), muy por arriba de naciones como México y Brasil que tienen un producto interno bruto mucho más cuantioso. En opinión del mexicano Federico Reyes Heróles, Chile, de seguir el camino que lleva, será el primer país desarrollado de América Latina.

En la república de Chile se dio la continuidad gubernamental del gobierno de Ricardo Lagos con el Partido Socialista Chileno hacia Verónica Michelle Bachelet Jeria, del mismo partido, pero en coalición con otras fuerzas políticas bajo la denominación de Concertación para la Democracia. Las elecciones se realizaron el 11 de diciembre del 2005, pero al no haber un ganador que rebasara el 50% de la votación, se programó la segunda vuelta para el domingo 15 de enero del

2006. En la primera vuelta electoral Bachelet consiguió el 45.96% de los votos mientras que en la segunda se convirtió en presidenta electa con el 53.5% de la votación.

Bachelet, la primera mujer en el poder ejecutivo en Chile fue hija de Alberto Bachelet Martínez⁴⁶, general de la Fuerza Aérea chilena, quien fue arrestado durante el golpe de estado de Augusto Pinochet sobre el gobierno de Salvador Allende en 1973. Posteriormente, tanto Michelle como su madre fueron arrestadas y torturadas en 1976 pero pudieron escapar a Australia y luego hacia Alemania Occidental. Pudo retornar al país en 1979 colaborando en diversos movimientos opositores políticamente a la dictadura. Es una mujer que había estudiado medicina con especialidad en pediatría pero luego se dedicó a asuntos políticos y estratégicos y consiguió, en tiempos ya de la democracia chilena, llegar a dirigir el ministerio de salud en el 2000 en el gobierno de Ricardo Lagos y finalmente, en el 2002, el Ministerio de Defensa, antes de ser candidata por la Concertación de Partidos por la Democracia.

Esta agrupación había nacido en 1988 durante el régimen pinochetista con el nombre de “Concertación de partidos por el NO”⁴⁷, refiriéndose al rechazo político a la continuidad del régimen de la dictadura. “La Concertación de Partidos por el No se creó a comienzos de 1988 como una coalición de 17 fuerzas políticas y grupos de derecha moderada, centro e izquierda que se oponían a la dictadura de Augusto Pinochet”

⁴⁶ El Gral. Bachelet murió en 1974, en una prisión de Santiago de Chile, en el contexto de la purga que hizo Pinochet a todos aquellos oficiales del ejército que se opusieron al golpe de 1973. Según el 1991 Rettig Report on human rights, el Gral. Bachelet murió a consecuencia de la tortura y maltrato que sufrió en prisión (LADB, 2005).

⁴⁷ Fueron 17 partidos y asociaciones que se unieron para promover el NO en el plebiscito entre los cuales estuvieron el Partido Demócrata Cristiano, las principales corrientes del Partido Socialista, la Unión Socialista Popular, el Partido Radical, el Partido Radical Socialista Democrático, la Social Democracia, el Partido Democrático Nacional, la Izquierda Cristiana, el Partido Humanista, el Partido Liberal, etc.

(Navia, 2006). Se trataba de una agrupación amplia que incluía a socialistas, demócrata-cristianos, y otras corrientes progresistas, liberales y movimientos civiles. Desde entonces, esta coalición es la que ha permanecido en el poder del gobierno desde 1990, habiendo postulado anteriormente a Patricio Alwin, a Eduardo Frei y a Ricardo Lagos.

La permanencia de esta Concertación en el gobierno no ha sido fácil ni ha tenido un apoyo popular aplastante, puesto que las corrientes de la derecha simpatizantes de la dictadura pinochetista siguen presentes en el país. Hay que recordar tan solo que en el plebiscito nacional de 1988, el triunfo del NO fue de un 55.99% mientras que un 44.1% de los habitantes querían expresamente que siguiera el dictador en el gobierno. Todos los gobiernos de la Concertación han triunfado pero la oposición de la derecha en todo momento ha mantenido un alto porcentaje de la votación. Patricio Alway y Eduardo Frei triunfaron en la primera vuelta electoral con un 55% y un 57% respectivamente, pero Ricardo Lagos sólo llegó al 47% en la primera vuelta para triunfar en la segunda con apenas un 51%.

El gobierno de Ricardo Lagos, perteneciente al Partido Socialista (a diferencia de los dos anteriores presidentes que provenían de la Democracia Cristiana) tuvo una gran aceptación por parte de la población manteniéndose en un alto nivel: “Aunque su nivel de aprobación, de acuerdo con las encuestas del Centro de Estudios Públicos, pasó del 40% al iniciar su gobierno a más del 60% al finalizarlo, el éxito de Lagos, el primer presidente socialista después de Salvador Allende, fue celebrado mucho más allá de las fronteras de Chile” (Navia, 2006). Esto se debió en gran parte al crecimiento económico chileno, a los logros en la reducción de la pobreza, a las políticas de concertación del presidente y al énfasis que puso en el intento de denunciar y castigar las violaciones a los derechos humanos del gobierno de Pinochet. “En sus seis años en el poder, Lagos llevó adelante un gobierno fiscalmente conservador, comercialmente integrador al mundo, tecnológicamente

avanzado, cultural y socialmente progresista, y políticamente de izquierda. Las iniciativas adoptadas durante la década del 90 para reducir la pobreza se modernizaron y modificaron (en el nivel de pobreza llegó a un 18.7% en el 2003). Pero también se adoptaron profundas reformas sociales destinadas a privilegiar la igualdad” (Navia, 2006).

Bachelet, habiendo surgido del mismo Partido Socialista, tenía un buen precedente en este contexto de gobierno, pero, por sí misma, tuvo dificultades para mostrarse como mujer capaz de erigirse en cabeza del gobierno. El presidente Lagos, en el tema del género, había mostrado una apertura considerable al poner en su gabinete a un número extenso de mujeres, porque en América Latina ciertamente es importante considerar la figura de la mujer en la política, superando las trabas culturales propias de la región para aceptar a las mujeres como dirigentes en los altos niveles de gobierno. “Bachelet obtuvo el 45.95% de los votos, en primera vuelta, superando al liberal derechista Sebastián Piñera, de Renovación nacional, quien consiguió el 25.4%, a Joaquín Lavín, quien obtuvo el 23.2%, y al candidato de la coalición humanista comunista Tomás Hirsch, quien llegó al 5.4%. Aunque se vio obligada a disputar una segunda vuelta, al analizar la composición del voto surge que Bachelet superó el porcentaje que había obtenido Lagos entre mujeres en la primera vuelta de 1999. Respecto a su predecesor, la candidata de la Concertación perdió votos entre los hombres, pero mejoró entre las mujeres (que históricamente habían sido el grupo electoral más difícil de conquistar para los izquierdistas)” (Navia, 2006).

Chile ha ido consolidando su transición política hacia la democracia después de los 17 años de dictadura (1973-1990). El modelo democrático partió del respeto fundamental que se dio al resultado del plebiscito de 1988, pero gran parte del sistema político quedó amarrado a numerosas imposiciones que quiso dejar el general Pinochet. A pesar de la existencia de una gran cantidad de población que sigue simpatizando con la dictadura

militar, la transición sigue avanzando de una manera pacífica y así se ha expresado en el proceso electoral de 2005-2006.

Elección presidencial en Chile: 11 diciembre 2005/ 15 enero 2006

Partido	Candidato	%
Partido Socialista (PS) - Concertación por la Democracia	Michelle Bachelet Jeria	45.96%
Renovación Nacional (RS)	Sebastián Piñera Echenique	25.41%
Unión Democrática Independiente	Joaquín Lavín Infan- te	23.23%
Coalición Humanista - Comunista	Tomás Hirsch Goldschmidt	5.4%
15 enero 2006	2ª. Vuelta Electoral Michelle Bachelet Jeria	53.5%
	Sebastián Piñera Echenique	46.5%

Fuente: cuadro personal con base en resultados oficiales del Servicio Electoral de Chile (SERVEL).

De acuerdo a las leyes electorales chilenas, los resultados del 11 de diciembre significaron la planeación de una segunda vuelta electoral ya solamente entre dos candidatos: la socialista Bachelet y el empresario conservador Sebastian Piñera. Éste último representa una de las más grandes fortunas de Chile, hechas durante el tiempo del gobierno de Pinochet (aunque luego se opuso abiertamente a la dictadura) y fue un tiempo consultor del Banco Mundial y del BID. Fuera de contienda quedó también una ideología radical de izquierda representada por Hirsch, que incluía al Partido Comunista y al Partido Humanista, quienes solamente consiguieron el 5.4% de los votos.

Para la segunda vuelta del 15 de enero del 2006, la perspectiva no era tan clara para Bachelet porque Piñera y Lavín (este último era el candidato derrotado de la UDI) unieron fuerzas en contra del Partido Socialista mientras que Hirsch, del Partido Comunista y el único que mantenía un discurso anti-neoliberal, manifestó que votaría en blanco, negándole su apoyo personal a Bachelet. Sin embargo, finalmente en la fecha de la segunda vuelta, Bachelet obtuvo un triunfo claro (53.5%) sobre Piñera (46.5%), mostrando la victoria de un proyecto nacional que no rechaza la apertura comercial en los tratados de libre comercio pero que tiene una postura clara para combatir también las desigualdades sociales. En este sentido, se trata de una izquierda muy especial en Chile porque reconocen “el libre mercado como una herramienta para la asignación de recursos, los izquierdistas chilenos valoran y favorecen la globalización. Aunque insisten en la necesidad de un Estado pequeño pero musculoso y privilegian la adopción de políticas públicas que ayuden a los desposeídos y corrijan las ineficiencias del mercado (en particular, en temas relacionados con la concentración de la riqueza, la izquierda chilena atribuye al Estado un papel de regulador antes que de generador de riqueza... La izquierda chilena ha perdido el miedo a la iniciativa privada. Más aún, celebra y fomenta la adopción de medidas que faciliten y privilegien la competencia... en comparación con otros partidos latinoamericanos, es posible afirmar que la izquierda chilena no solo ha perdido el miedo, sino que favorece abiertamente la economía de mercado” (Navia, 2006).

Bachelet ciertamente representa una continuidad en el modelo económico y político chileno en relación con su antecesor Ricardo Lagos, pero el imaginario que proyectó y que le valió el triunfo en el 2005 enfatiza dos aspectos nuevos que no tenían los gobiernos anteriores: el interés de incorporar más la participación ciudadana en la definición de las políticas públicas y el tema de la igualdad de género. El presidente Hugo Chávez, de Venezuela, señaló que con ella "se levanta un nuevo

proyecto sudamericano y es imprescindible para la salvación de nuestro pueblo... estamos frente a una mujer extraordinaria que refleja el nuevo tiempo que se levanta en América Latina” (La Jornada, 12-III-2006).

6.3 BRASIL: la reelección de Lula

Dentro de la región latinoamericana, Brasil y México, por su extensión territorial y la magnitud de su PIB, son unas naciones especiales que destacan y que podrían tener un fuerte liderazgo en la región. México, sin embargo, por su cercanía geográfica con los Estados Unidos, se ha visto tradicionalmente sometido a la influencia de su vecino del norte, mientras que Brasil, a pesar de su situación interna de enorme desigualdad social, se perfila cada vez más como una potencia en el cono sur.

Según *L'État du Monde* (2006), Brasil tenía una población de 186.400 millones de habitantes y su PIB ascendía a 1,461 mil 600 millones de dólares en el 2004. En el nivel político, después de más de 20 años de gobiernos militares, el país pudo regresar a la democracia electoral con el presidente José Sarney en 1985; Brasil, entonces, también experimentó una transición del militarismo hacia los gobiernos civiles, aunque no vivió el tipo de dictaduras sangrientas como las de Argentina y Chile: “Las características específicas de su régimen militar significaron que la represión y el control social nunca alcanzaran los extremos de otras dictaduras militares del Cono Sur” (Palermo, 2003: 52-53). Fue una transición negociada entre las cúpulas militares y las élites económicas en donde, desde un principio, se hizo presente la participación del Partido de los Trabajadores, creado en 1980, y la figura de Lula da Silva, quien compitió y perdió con su candidatura para la presidencia de la República en 1989, 1994 y 1998. Finalmente en el cuarto intento, el PT accedió al poder ejecutivo en el 2002 con su presidente Lula, quien de nuevo en el 2006 fue reelecto hasta el 2010.

Brasil ha ido consolidando su economía con una gran influencia en el ámbito regional y también parece estar consoli-

dando su democracia electoral, especialmente a través de la transición de gobiernos del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) al del PT en el nuevo siglo. Trataremos de explicar esta transformación política y su desenlace en las elecciones del 2002 y 2006.

Transición a los gobiernos civiles

Las oligarquías económicas brasileñas apoyadas por los Estados Unidos fabricaron el golpe de estado⁴⁸ del 31 de marzo de 1964 contra el presidente Joao Goulart para acabar con su política de reformas sociales, dentro del contexto internacional de la guerra fría donde era común acusar de comunista a cualquier reformador social, como había acontecido con Jacobo Arbenz en Guatemala; con ello, se estableció la dictadura militar que duraría hasta 1985.

Durante la época militar en Brasil y también como producto de ella, fue mundialmente conocida la obra educativa de Paolo Freire, especialmente a través de sus trabajos “La educación como práctica de la libertad” (1967) y la “Pedagogía del oprimido” (1970). De la misma manera, brilló en esa época la también importante figura de Hélder Câmara, obispo de Olinda y Recife a partir de 1964, y reconocido en todo el mundo por su predicación sobre la liberación de los pueblos, su compromiso con los pobres y sus trabajos a favor de la paz, de donde surgiría el movimiento posterior de las Comunidades Eclesiales de Base⁴⁹.

⁴⁸ En el 2004, el National Security Archive (NSA) de los Estados Unidos abrió numerosos documentos y videos al público en general, en donde se atestiguaba el apoyo de Washington al golpe de Estado contra Goulart y muchos otros dados a los militares brasileños durante el período 1964-1979. El pretexto para el apoyo fue el contexto de la guerra fría y el temor al comunismo en Brasil.

⁴⁹ El impacto de estas dos experiencias en Brasil serían posteriormente trascendentes para el proyecto de Lula en el partido que lo llevó a la presidencia: “La propuesta del PT... era afín con las expectativas de las Comunidades Eclesiales de Base, nutridas por la Teología de la Liberación, que

Durante el período militar se realizaron de hecho diversas elecciones –tres de ellas en el ámbito legislativo: 1974, 1978 y 1982–, en un esfuerzo de los gobernantes por legitimizar su actuación, pero simplemente fueron ornato del propio autoritarismo; para ello, habían creado su propio partido, la Alianza Renovadora Nacional (ARENA) que luego se convirtió en Partido Demócrata Social (PDS). “Después de 1964, el régimen militar realizó en varias ocasiones procesos electorales para funcionarios de menor rango pero realizó toda una serie de manipulaciones incluyendo el cambio de las reglas del juego después de las elecciones para prevenir que la oposición tomara poder en importantes oficinas de gobierno. Hacer elecciones no es suficiente; la posibilidad de transferir el poder real a través de las elecciones es una condición necesaria de las reglas democráticas” (Drake & Silva, 1986: 273). En este sentido la verdadera transición a gobiernos civiles se dio hasta 1985 en Brasil, aunque fue una elección indirecta a través de un colegio electoral, y finalmente en 1988 donde se dio la elección presidencial directa de Fernando Collor de Melo.

La democracia electoral fue negociada por los propios militares ante la presión internacional y ante el ascenso de los movimientos de la sociedad civil que luchaban contra el autoritarismo. “La acción de los movimientos sociales fue importante, no solamente en términos de su contribución al fin del gobierno militar, sino también porque su campaña fortaleció la noción de que una ciudadanía activa era un componente esencial de la nueva democracia” (Palermo, 2003: 53); las organizaciones no gubernamentales seguirían jugando posteriormente un papel importante en la vida pública como lo hicieron entonces en la campaña nacional de numerosos grupos sociales que exigían una elección directa del presidente de la república. En

sistematizaba los principios orientadores de la relación fe y política... Lula llega a la presidencia de la República gracias al movimiento social articulado en los últimos 40 años, en el cual la pedagogía de Paulo Freire tiene más peso que las teorías de Marx” (Betto Frei, 2002)

1985, los militares tuvieron que admitir la victoria electoral de Tancredo Neves, candidato a la presidencia, acompañado de José Sarney, candidato a la vicepresidencia. “La aplastante victoria de Tancredo Neves en el Colegio Electoral mostró bien a las claras cuáles eran las aspiraciones políticas dominantes dentro de la élite política brasileña e, implícitamente, cuál era el proyecto político que prevalecería en el siguiente período presidencial: construir una Nueva República, una democracia plena, que no pusiese restricciones a los movimientos y organizaciones populares, y que tuviese como orientación económica un nacionalismo desarrollista renovado, combinando crecimiento económico y redistribución de renta” (Salum Jr., en Palermo 2003: 283).

Puesto que Neves cayó en una enfermedad grave y murió el 21 de abril antes de asumir la presidencia, José Sarney asumió el poder ejecutivo primero de manera interina y luego de manera definitiva en marzo-abril de 1985; fue el primer presidente civil después de la época militar. Esta transición motivó la aceptación oficial de organizaciones de izquierda y aun comunistas; en ese contexto había comenzado el trabajo del PT con Lula da Silva, que en 1988 empezó a tener sus primeras experiencias de gobiernos locales: “Si bien el Partido dos Trabalhadores conquistó en 1988 el ejecutivo de varias prefecturas (municipalidades) importantes, la experiencia en Sao Paulo es quizá la más trascendente dada la dimensión política, demográfica y económica de dicha metrópolis” (Sierra, 1994: 21)

El nuevo gobierno logró hacer una nueva Constitución en 1988 pero fracasó en sus propuestas económicas para enfrentar la crisis, como le sucedió al plan *Cruzado*. Al terminar el período de Sarney, con una buena dosis de desencanto popular de ese primer gobierno democrático (porque la expectativa no solamente era por la democracia puramente electoral sino también por una mejora en las condiciones de vida de la población contrastada con el grave deterioro de la economía) y con la insistencia del temor ante el candidato izquierdista del

PT, Lula da Silva —que se postulaba por primera ocasión—, surgió la corriente alternativa de Fernando Collor de Mello. Pero la vida política brasileña estaba marcada por un pluripartidismo heterogéneo: “la primera elección presidencial posdictadura, en 1989, fue disputada por ocho partidos, ninguno de los cuales logró reunir un tercio de los votos, lo cual subrayó la naturaleza multipartidista del escenario político brasileño” (Echegaray F., 2006). Pero De Mello gobernaría Brasil solamente de 1990 a 1992: fue depuesto por su forma autoritaria de gobernar y por diversas acusaciones de corrupción. Su propuesta de un programa de liberalización de la economía a través del *Plano Collor* nunca pudo llevarse a cabo y fracasó igual que el Plan *Cruzado* de Sarney. Collor de Melo fue obligado a renunciar en octubre de 1992 y quien era su vicepresidente, Itamar Franco se convirtió en Presidente de Brasil.

Los postulados de Franco tenían un gran toque de nacionalismo: impulsar el crecimiento económico, bajar las tasas de interés y atacar la pobreza. Cuando en 1993, la inflación en Brasil había llegado al 2,148%, el gobierno designó como su ministro de Hacienda a Fernando Henrique Cardoso, perteneciente al Partido Social Democrático Brasileño (PSDB), quien lanzó en 1994 el *Plan Real*, como un nuevo programa económico, que empezó a tener de manera inmediata consecuencias sensibles positivas en la estabilización de la economía. La caída del ritmo de la inflación fue drástica tan sólo en el período de dos años.

La popularidad de Cardoso subió a velocidad vertiginosa y por ello su postulación como candidato a la presidencia fue un éxito total. El PSDB tuvo “una victoria electoral contundente en la elección presidencial de octubre de 1994 con 54% de los votos, derrotando a su rival más próximo, Luiz Inácio Lula da Silva, por alrededor de 24 puntos. El éxito de Cardoso en lanzar el Plan Real y su impresionante victoria electoral le dieron un fuerte mandato a favor del cambio” (Panizza F., en Palermo, 2003: 78). Pero el cambio propuesto por Cardoso era

la transición de la época del proteccionismo al modelo neoliberal, como ya lo habían empezado a realizar México y otros países latinoamericanos en esas décadas; proponía privatizaciones, apertura comercial y modernización económica para atraer mayor inversión extranjera directa. Las primeras reformas fueron aprobadas por el congreso, aunque posteriormente otras se fueron atascando al depender el gobierno de la alianza con los otros partidos, en un contexto donde también estuvo la discusión sobre el cambio constitucional para permitir la reelección del presidente.

El contexto de las nuevas elecciones de 1998 fue todavía favorable a la personalidad del ejecutivo nacional. Los efectos del modelo neoliberal a nivel macroeconómico eran claros: crecimiento anual del PIB, fuerte inversión extranjera y, sobre todo, el control de la inflación. “El crecimiento económico fue más alto en los 90 que en los 80, acelerándose en la segunda mitad de la década: entre 1994 y 1997, el PBI creció 16.8%, alcanzando un promedio anual de 4%. La entrada de inversión directa ha crecido sustancialmente y se estima que alcanzó 18,5 millones de dólares en 1997, más del doble que la suma registrada para los dos años anteriores” (Panizza F., en Palermo, 2003: 81). Otra cosa se tiene que decir sobre la pobreza y desigualdad en Brasil, que no fue mejorada con esta transformación en el modelo de desarrollo nacional, pero las cifras macro de la economía daban mucho para presumir y hablar de la esperanza de que tarde o temprano la riqueza tendría que despararramarse hacia la población. Este va a ser el talón de Aquiles del modelo neoliberal que, con sus programas de ajuste a favor de la privatización, achicamiento del estado, la predominancia del mercado, etc. puede llegar o no a estabilizar la economía o hacerla crecer, pero nunca tiene intrínsecamente el objetivo de buscar la redistribución de la riqueza social; en este punto, los propios documentos de la ONU sobre el desarrollo mundial ya han dejado claro que crecimiento sin redistribución no es desarrollo y que por lo tanto los programas de combate a la

pobreza y la desigualdad deben ser paralelos junto con los alicientes al crecimiento económico.

Los éxitos de la estabilidad económica en Brasil en los 90s alcanzaron para una reelección holgada de Fernando Enrique Cardoso en 1998, pero no alcanzarían para la continuación de los gobiernos del PSDB en las elecciones del 2002 cuando la presidencia transitó hacia el PT de Lula. Pero el neoliberalismo de Cardoso no fue el extremo de un capitalismo salvaje; este gran sociólogo metido a la política y devenido presidente tenía un gran conocimiento de los problemas del desarrollo latinoamericano como lo muestran sus escritos en la época de la teoría de la dependencia pero optó por la liberalización del mercado, las privatizaciones y los programas de ajuste sin dejar de lado cierta parte de la política social como responsabilidad del propio estado.

“Cuando, en octubre de 2002, la ONU otorgó a FHC el recientemente creado premio Mahbub ul Haq, Kofi Annan informó que los jurados habían tenido en cuenta la caída de la tasa de mortalidad infantil (de 38 para 30 por mil), la atención de 50 millones de personas en la red de atención médica a domicilio, el aumento en el número de atendidos por servicios de agua potable y desagües, y los avances en el combate al analfabetismo (la escolaridad subió del 93 al 97%) entre otros indicadores. Según Vinod Thomas, director del Banco Mundial, el avance de Brasil en indicadores sociales básicos estuvo durante los 90 entre los tres más rápidos del mundo. Las estimaciones son que el gasto en programas de asistencia social pasó de 15 mil millones de reales en 1994 a 30 mil en 2002, cubriendo de 10 a 35 millones de beneficiados, y con una focalización mucho más afinada. Aunque la desigualdad social se mantuvo, la línea de pobreza bajó del 42% al 34% y la de la miseria del 19 al 14%” (Palermo, 2003: 17-18).

En este sentido, el viraje político de Brasil hacia el PT en el 2002 no significaba un rompimiento total con el modelo neoliberal sino un acierto de este partido al irse corriendo desde

las posiciones radicales de izquierda de los 80s hacia unas posiciones de centro izquierda que lo hicieron más aceptable en numerosos sectores del electorado, proponiendo no una ruptura total con el pasado sino una transformación más acelerada bajo la perspectiva de un desarrollo social más acertado.

De cualquier manera, se puede ver que el desenvolvimiento de los gobiernos civiles después de la época militar no ha sido uniforme. Después de los vaivenes de Sarney, Collor de Mello y Franco, en donde hay una verdadera transición de una autoridad central a una descentralización con gran poder de los estados, municipalidades y actores locales, el país ha aterrizado en un bipartidismo (PSDB y PT) desde 1996. Si bien por su declaración de principios, ambos partidos se sitúan en la izquierda, resulta claro en esta contradicción que el PT está más a la izquierda que el PSDB y por ello, en el juego de confrontación política, se acusa continuamente a Cardoso de estar representando a la derecha. Tanto al interior de Brasil como en toda América Latina, el triunfo de Lula en el 2002 fue recordado como un gran cambio de signo político hacia la izquierda: su principal contrincante del PSDB, José Serra, fue derrotado como lo sería también en el 2006 el mismo partido con su candidato Geraldo Alckmin. Por ello nos podemos preguntar cómo se ha dado esta segunda transición brasileña después de los gobiernos civiles inaugurados en 1985 y si estamos hablando de una corriente política más estable dentro del vaivén permanente de las múltiples opciones electorales.

El triunfo de Lula con el PT

En la década de los 80s y después de la experiencia de Fernando Collor de Mello, la situación política en Brasil se iba a polarizar en dos principales opciones: la del PSDB y la del PT. Este último era un partido político reciente, creado en 1980, como proyecto de varios líderes sindicales (vinculados sobre todo a la principal asociación sindical, la Central Única de los Trabajadores CUT), organizaciones progresistas de la iglesia

católica y diversas agrupaciones de izquierda. La figura de antiguo líder sindical de los trabajadores metalúrgicos fue emblemática desde sus inicios. Durante el primer gobierno de Cardoso (1994-1998), el PT se convirtió en el principal partido de oposición: en 1994 obtuvo 49 escaños en la Cámara de Diputados y 5 en el Senado de la nación.

Por su parte, el PSDB también tenía una creación reciente puesto que nació en 1988 como una escisión del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), el cual venía desde los años 60s cuando el régimen militar empezó a permitir algún tipo de oposición. La principal bandera del PMDB había sido la transición a la democracia donde jugó un importante papel, sin querer situarse ideológicamente ni a la derecha ni a la izquierda; a pesar de la escisión que tuvo en 1988 del grupo que quiso formar el PSDB, este movimiento democrático tuvo un peso importante en el Congreso a principios de los años 90, pero frente a la candidatura de Cardoso, ya solamente logró un 4.4% de los votos, pero seguiría teniendo parte en la vida política del país durante el gobierno de Lula porque el ex presidente José Sarney, del PMDB, fue apoyado por el PT para la presidencia del Senado.

Por su parte, el PSDB, adoptando los principios ideológicos de la social democracia europea, tuvo en los 90s un ascenso político vertiginoso al postular a Henrique Cardoso llevándolo a la presidencia y teniendo la dirección de estados importantes como Sao Paulo, Río de Janeiro y Minas Gerais; en el congreso, en las elecciones de 1994 obtuvo 62 diputados y 11 senadores (Cfr. Palermo, 2003: 92).

En el escenario político de los 80s, también participaban otros partidos importantes como el Partido Progresista Brasileño (PPB), ligado a los militares y con una ideología de derecha; el Partido Democrático de los Trabajadores (PDT), con una ideología de centro izquierda y que había sido fundado por Getulio Vargas y disuelto luego por los militares; el Partido del Frente Liberal (PFL), con ideología de centro derecha,

que había apoyado a los militares. Después apareció también el Partido Popular Socialista (PPS), que fue una transformación del izquierdista Partido Comunista Brasileño después de la desaparición de la antigua URSS; su trayectoria fue tambaleante puesto que en 2002 apoyó a Lula como candidato a presidente y en el 2006 apoyó en la práctica a Geraldo Alckmin, el principal opositor del PT en el 2006. En el mismo bando de la izquierda hay que mencionar al Partido Socialista Brasileño (PSB) que había sido fundado en 1947, disuelto por los militares y resucitado en la vida política en 1988; presentó candidato propio en las elecciones del 2002 y apoyó informalmente a Lula en el 2006.

Después de haber postulado a Luiz Inácio Lula da Silva en tres ocasiones anteriores, el Partido de los Trabajadores (PT) logró llevarlo a la presidencia en el 2002. Pero aunque Lula ganó las elecciones del 6 de octubre del 2002, no le fueron suficientes los votos en la primera ronda porque no logró llegar al 50% de la votación, y por ello, acorde a las leyes electorales de ese país, la contienda se trasladó al domingo 27 de octubre, cuando se realizó la segunda vuelta electoral, solamente entre los dos candidatos que habían conseguido la mejor votación en la elección presidencial: Lula había logrado el 46% de los votos el 6 de octubre, y José Serra, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), partido al que pertenecía el mismo presidente Fernando Henrique Cardoso, había logrado el 23.6%. Al día siguiente de la primera ronda, Lula declaró: “ayer, el 76% de la población votó a favor de un nuevo modelo económico para este país... quiero agradecer a todo el pueblo que en esta ocasión no tuvo miedo al cambio” refiriéndose a los votos conjuntos del PT, del PSB y del PPS (Cfr. LADB, NotiSur Oct 11,2002).

La victoria contundente de Lula fue ratificada en la segunda vuelta electoral el 26 de octubre del 2002 cuando logró más de 52 millones de votos (el 61.27% de la votación) frente a José Serra, quien conquistó poco más de 33 millones de votos (el

38.73%). Lula, entonces, se convirtió en el presidente de los brasileños ⁵⁰ a partir de Enero del 2003 y hasta enero del 2007, cuando tomó posesión como presidente reelecto.

La contienda para la presidencia de Brasil en la primera vuelta se debatió entre varios candidatos; aparte de Lula y Serra, quienes ocuparon el primero y segundo lugar respectivamente el 6 de octubre, había participado también Anthony Garotinho, del Partido Socialista Brasileño (PSB), un pastor evangélico que logró el 16.3% de la votación, ocupando el tercer lugar: el partido logró 22 legisladores (los aumentaría a 27 en el 2006). El cuarto candidato a la presidencia había sido Ciro Gómez, del Partido Popular Socialista (PPS), quien quedó con el 12.4% de la votación general. Hay que tener en cuenta que tanto Ciro Gómez como Anthony Garotinho, después de los resultados de la primera ronda electoral, le otorgaron públicamente su apoyo político al candidato del PT, en un intento de parar la continuidad del PSDB con su candidato José Serra; aparte de los cuestionamientos al desempeño del presidente Cardoso en su segundo período, el descrédito del modelo económico del libre comercio se había sentido indudablemente por la terrible crisis del vecino del sur y socio en el MERCOSUR, Argentina, a partir del mes de diciembre del 2001. Ante los ojos de los electores, entonces, se empezó a materializar la posibilidad de una opción diferente, el PT, partido que ya había mostrado victorias parciales en municipios y regiones con experiencias políticas innovadoras.

Finalmente, con una abstención de solamente un 20.5%, es decir con una participación del 80% de los electores brasileños (de 115 millones de electores registrados, acudieron a las urnas más de 91 millones de habitantes), Lula, a sus 57 años, fue

⁵⁰ En la Cámara de Diputados, el nuevo gobierno de Lula tendría, sin embargo, la necesidad de negociar con todas las otras fuerzas políticas para lograr acuerdos: de los 513 asientos legislativos, el PT obtuvo 91, el PFL obtuvo 84, el PMDB logró 74, el PSDB conquistó 71, el PSB consiguió 49, y el PPS 15. (Cfr. LADB, NotiSur, Oct. 11, 2002).

proclamado triunfador en la contienda presidencial de Brasil y, con ello, marcaba una coyuntura significativa para el devenir de toda América Latina.

¿Quién ha sido Lula da Silva? Proveniente de un estrato pobre en Brasil, Lula se desempeñó como obrero metalúrgico durante varios años; su actuación entre los trabajadores lo llevó a ser secretario general del sindicato; movilizó la organización laboral hasta la huelga en una situación delicada durante el gobierno militar en Brasil; estuvo preso; fue liberado y, junto con otros sectores de la sociedad, fundó en 1980 el Partido de los Trabajadores (PT) que, en esa década empezó a tener sus primeras conquistas políticas en gobiernos locales; ayudó a crear la importante Central Única de Trabajadores en 1983. No tuvo oportunidad de una educación superior, pero aglutinó a numerosos sectores de la sociedad frente a un modelo económico y político que, aunque dio cierta estabilidad y crecimiento económico en su momento, llegó a profundizar los problemas sociales de todo el país con la concentración de la riqueza en pocas manos y el aumento de la pobreza en gran parte de la población.

Lula había sido candidato a la presidencia de Brasil en cuatro ocasiones; perdió frente a Fernando Collor de Mello en 1990; perdió frente a Fernando Henrique Cardoso, en 1994; volvió a perder frente al mismo F.H. Cardoso, en 1998, y finalmente ganó las elecciones presidenciales en la segunda vuelta del 27 de octubre del 2002.

Se dice que los grandes enemigos de Lula han sido los mercados sobre todo por el nerviosismo de algunos voceros norteamericanos queriendo representar las finanzas internacionales ante las posiciones novedosas que pueda tomar luego el nuevo presidente de Brasil. Por lo pronto, Lula y el PT han sido bastante hábiles para llegar a donde llegaron: moderó sus posiciones frente a los organismos económicos internacionales, prometió seguir pagando la deuda externa y forjó una alianza electoral sin precedentes al llevar como compañero de

fórmula a José Alencar, un empresario del Partido Liberal. Formó un gabinete plural, con el intento de proseguir la estabilidad y crecimiento económico del país pero afrontando el gran problema de un pequeño sector de la población privilegiada que se apoderaba de gran parte de la riqueza nacional mientras que numerosos habitantes no participan de ella. No anunció cambios radicales para el país antes de tomar posesión sino que empezó a ejercer un hábil pragmatismo político⁵¹ que tranquilizó a los mercados sin dejar de insistir en sus prioridades sociales.

Hay que señalar, además, las grandes afinidades de Lula con el proyecto de integración del MERCOSUR, enfrentando explícitamente la tentativa norteamericana de la Alianza del Libre Comercio de las Américas (ALCA); decía Lula: “la propuesta del ALCA no significa integración sino un intento de anexas las economías latinoamericanas a la economía de los Estados Unidos” (LADB, NotiSur, Oct. 11, 2002).

Existían múltiples interrogantes sobre la futura actuación de Lula; sin embargo, tenía que definir un camino delicado, riesgoso y ambivalente: por un lado, tenía que afianzar los logros ya hechos por los gobiernos anteriores que, a pesar de la crisis del *real*, mostraban una cierta estabilidad y crecimiento económico; pero también, el gobierno de Lula, debido a la naturaleza ideológica del PT y los antecedentes del candidato y sus promesas de campaña, no podría ser igual al de F. H. Cardoso y, por tanto, se abrían grandes posibilidades de alternativas de innovación en la política económica y social; la decisión de los electores había sido clara por algún tipo de cambio en relación a un modelo desarrollado en varios períodos; los antecedentes históricos de Lula y sus aliados naturales le habían

⁵¹ Como parte de dicho pragmatismo se había considerado la elección de José Alencar como su compañero de fórmula y, de la misma forma se pensó sobre el nombramiento de Henrique Meirelles, alguien experimentado en las finanzas internacionales y en el libre mercado, a la cabeza del Banco Central.

otorgado un enorme capital político y se convertían en un elemento importante para hacer mostrar una nueva cara al gobierno de Brasil, a pesar de que el margen de maniobra estructural fuera muy estrecho.

De cualquier manera, se podría reconocer que “la elección reflejaba el desencanto en gran parte de Latinoamérica con la reformas del libre mercado, que han fallado en el mejoramiento de la vida de la mayoría de la población” (LADB, NotiSur, Nov. 1, 2002). Se aspiraba a un cambio significativo con la llegada de Lula a la presidencia, como lo reflejaba el dominico Frei Betto, al señalar la gran diferencia de lo que había representado Cardoso y lo que podía representar el nuevo presidente del PT: “Cardoso, alguien a quien respeto por su prestigio intelectual, pero lo identifico como un portavoz de las elites y las empresas multinacionales. Cardoso es un hombre muy identificado con el Consenso de Washington” (Betto F., 2005); pero, a diferencia de los socialdemócratas, “Lula presidente sorprenderá a la nación, pues adoptará otra gramática de poder, con firma propia, como hizo en el sindicalismo y, sobre todo, en la política, al crear un partido combativo y ético. No rehusará el trabajo en equipo, movilizándolo a todos los sectores de la sociedad brasileña, sin prestarse al juego rastreador de las transacciones fraudulentas y el favoritismo” (Betto F., 2002). Esta esperanza de gran parte de brasileños y latinoamericanos iba a exigir cambios y reformas profundas en relación a los gobiernos anteriores. Como lo expresaba Emir Sader para ese momento: “Habíamos luchado contra las privatizaciones, habíamos luchado contra las (contra) reformas neoliberales, de menos Estado, menos políticas sociales, menos reglamentación, menos derechos laborales, menos empleos formales, menos soberanía, menos esfera pública, menos educación pública, menos cultura pública. Habíamos luchado contra la cesación de los derechos de los trabajadores, de los jubilados, de los trabajadores sin tierra, de las universidades públicas, de la salud pública. Habíamos resistido y en aquel día sentíamos

que, a pesar de todo lo que se había dilapidado del país, habíamos derrotado al proyecto neoliberal de FHC, habíamos triunfado” (Sader E., 2006). Por eso, algo tendría que haber de diferente en el nuevo gobierno.

Primer gobierno de Lula y la reelección del 2006

La toma de posesión de Lula se realizó el 1 de enero del 2002 y fue muy claro en su discurso: “El tiempo ha llegado para comenzar un nuevo camino... Sí, vamos a cambiar cosas, con coraje y con cuidado, con humildad y atrevimiento... No soy el resultado de una elección sino de la historia. Yo estoy trayendo a la vida el sueño de generaciones y generaciones anteriores a mí, que nunca pudieron llegar a realizarlo... Voy a cumplir con mis objetivos si logro que todos los brasileños pueden tener desayuno, comida y cena, cada día” (LADB, NotiSur, Jan. 10, 2002). Repitió su propósito de fortalecer el MERCOSUR construyendo una estable y unificada Sudamérica pero con una relación madura con los Estados Unidos.

Pero, desde el principio de su gobierno –y aun antes–, diversos sectores de la izquierda radical dudaron de su proyecto como gobernante. James Petras y Henry Veltmeyer, por ejemplo, quisieron hacer un análisis metodológico del régimen de Lula, a finales de marzo del 2003, y querían confrontar las grandes expectativas que había despertado el gobierno de Brasil considerándolas como vanas y producto de gente poco informada, acusando de ingenuidad a personalidades como Leonardo Boff o Frei Betto. Para Petras y Veltmeyer no había en Brasil ni un fin del neoliberalismo ni una agenda progresista sino simplemente un hombre y un partido pragmático que habían olvidado todos sus objetivos iniciales de izquierda con el fin de acceder al poder; llegaron a comparar a Lula con el caso de Alejandro Toledo en el Perú, quien había empezado siendo campesino pobre y limpiabotas y terminó con un doctorado *honoris causa* en Estados Unidos y colaborando ampliamente con el Banco Mundial. Para estos autores, los alcances

del gobierno brasileño estaban determinados por los nombramientos del director del Banco Central y de los funcionarios en los ministerios de Finanzas, Economía, Asuntos Exteriores y el de Agricultura, todos ellos apoyando el modelo neoliberal.

En Mayo del 2004, el sociólogo Ricardo Antunes publicó una entrevista con el título: “El PT concluyó su ciclo como un partido de izquierda”. Afirmaba que la política económica de Lula se había aliado a la derecha y se había subordinado al FMI y la banca internacional y que por tanto no tenía esperanza de mantener la ideología de una izquierda socialista; mencionaba que él y otros personajes como Paulo Arantes y Chico de Oliveira habían decidido salir del PT, sobre todo a raíz de la expulsión de parlamentarios como Luciana Genro, Babá, Joao Fontes y Heloísa Helena. Deseaba entonces la formación de una nueva agrupación política: “Pienso que el PT gobernante quebró a la izquierda brasileña produciendo un vacío que debe ser llenado. En ese sentido hay presión de las bases del partido, de los trabajadores públicos, a los que el PT trató como los enemigos de la nación. No lo hizo con el FMI ni los bancos, tampoco con las transnacionales o sus capitales, para el PT los enemigos son los trabajadores públicos. Estos sectores sociales que están en clara oposición al PT comenzaron a exigir la creación de un nuevo movimiento político que tenga la forma de un partido. Por otro lado, los parlamentarios que fueron expulsados son figuras de la lucha social y acreditan que ésta debe tener una organización política, radical y anticapitalista. Mi posición junto a otros intelectuales marxistas es la de apoyar este movimiento, participando en él y procurando que sea un movimiento radical” (Antunes, 2004).

Por su parte, Emir Sader reflejaba también la decepción de un sector de la izquierda que había esperado cambios radicales en relación con el gobierno de Cardoso: “Nunca sentimos tanta amargura. Porque una cosa era ver al país despedazado por los que nos habían derrotado, otra era ver un equipo en el Banco Central, completamente ajeno a toda la tradición de los

economistas del PT, atribuirse el derecho de predominar sobre lo dio notoriedad al PT: sus políticas sociales. Otra cosa era ver a los grandes empresarios imponer sus intereses ligados a los agro-negocios-exportadores, de diseminación de los transgénicos, sobre los de los sin tierra, la reforma agraria, la economía familiar, la autosuficiencia alimentaria en nuestro gobierno. Otra cosa era ver a las radios comunitarias reprimidas en lugar de ser apoyadas, la prensa alternativa sobrevivir a duras penas, mientras el gobierno continuaba alimentando a los grandes monopolios anti-democráticos de los mass media privados. Otra cosa era ver a los softwares alternativos subestimados o excluidos en favor de los grandes lobbies de las corporaciones privadas. Todo eso, por nuestro gobierno. Fue duro, fue muy duro” (Sader E., 2006). Sin embargo, el mismo Sader apoyó posteriormente la reelección de Lula, reconociendo que, a pesar de todos los defectos y errores, el gobierno del PT había sido mejor que los anteriores.

Otro ejemplo de crítica acerva al nuevo gobierno de Lula lo ha constituido el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), cuyas movilizaciones siguieron en la misma proporción como lo hicieron con gobiernos anteriores. Este movimiento tiene su origen estructural en las enormes concentraciones de tierra y latifundios de Brasil, que dejan a numerosas familias campesinas sin tierra. Durante el régimen militar, hubo sectores conservadores que promovieron la organizaciones de campesinos para que se fueran a ocupar territorios alejados de los centros de poder; así sucedió en algunas ocasiones, pero el movimiento comenzó a plantear sobre todo la ocupación de tierras improductivas de los terratenientes en todo el país. La transición brasileña hacia los gobiernos civiles ofreció las condiciones para la creación de una organización formal estable que luchara por una reforma agraria nacional y por ello el MST surgió formalmente en el país en enero de 1985 en Curitiba, estado de Paraná, a través de un órgano máximo de gobierno que es el Congreso Nacional. Se basó

posteriormente en una demanda basada en la Constitución que permite expropiar la tierra y otorgarla a campesinos que no la tengan. Se han utilizado numerosas formas de lucha: manifestaciones públicas, huelgas de hambre, negociaciones con autoridades, ocupación de tierras improductivas, organización comunal de servicios en los asentamientos conquistados, etc. Apoyaron a Lula en su candidatura del 2001-2002 tanto por su ideología de izquierda como por la promesa de asentar 400 mil familias campesinas durante su gobierno, pero poco a poco el MST⁵² se fue distanciando del presidente y de su partido, anunciando movilizaciones y tomas de tierra desde abril del 2003, simbolizando el fin de una luna de miel.

Uno de los dirigentes de este movimiento que decía tener alrededor de 500 mil integrantes y presencia en 23 de los 27 estados, hacía el siguiente análisis en el 2005: “El pueblo brasileño eligió al gobierno de Lula para hacer cambios, al votar por el programa de compromisos de campaña, distribuido ampliamente en toda la población. El gobierno electo se comprometió también a promover los cambios, pese a mantener su entendimiento con los dueños del capital. Las articulaciones políticas del gobierno frustraron a todos y desfiguraron la voluntad manifiesta de por lo menos 55 millones de electores. Hubo una perversa componenda entre fuerzas políticas, incluyendo a los conservadores de derecha, que asumieron puestos destacados en el Banco Central y en los ministerios de Hacienda, Agricultura y Desarrollo, Industria y Comercio. En julio pasado, en medio de una profunda crisis política, el gobierno promovió una reforma ministerial que reforzó aún más la alianza con los sectores conservadores. Por eso decimos que este gobierno está desfigurado. No contamos de ninguna ma-

⁵² Según el MST, la distribución de la tierra en Brasil es una de las más inequitativas del mundo: el 20% de la población posee el 90% de la tierra arable, mientras que el 40% de los campesinos pobres solamente tienen la propiedad del 1% de la tierra. Estiman que hay cerca de 4.5 millones de campesinos sin tierra.

nera con el gobierno que elegimos en 2002. No tenemos un gobierno de izquierda ni de centroizquierda: vivimos bajo un gobierno de centro, mientras la derecha controla la política económica. Digamos adiós al gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y a sus compromisos históricos... se mantiene un estado administrativamente organizado contra los pobres, para atender sólo a los ricos” (Stedile J.P., 2005). A pesar de estas críticas, el MST decidió después apoyar electoralmente a Lula en su intento de reelección para el 2006. Como lo dijo posteriormente Mmarina dos Santos, la coordinadora de la gran marcha nacional para la Reforma Agraria de mayo de 2005 donde los trabajadores sin tierra buscaban presionar al gobierno para acelerar la repartición de la tierra: “No tenemos duda de que Lula es nuestro amigo. No queremos romper con él. Lo que queremos es que cambie su política económica” (LADB, NotiSur, Jun. 3, 2005).

Dentro de toda esta discusión académica y política sobre los rumbos que podría tomar el nuevo gobierno de Lula, el presidente se dedicó a sacar los proyectos de reforma que juzgaba urgentes y necesarios para el país: la laboral, la política, la fiscal, la de seguridad social y la del sistema de pensiones. Y para ello, empezó a ejercer un verdadero arte de la política a través de las negociaciones con los numerosos partidos representados en el Congreso. El 13 de febrero del 2003, en el Consejo de Desarrollo Económico y Social dijo lo siguiente: “Dentro del mapa general de la distribución del ingreso, Brasil es uno de los peores en el planeta, y ello simplemente no ha cambiado durante los últimos 30 años... Pero tenemos un objetivo común: contribuir a hacer que Brasil apruebe las reformas necesarias para superar la crisis actual y volver al camino de un crecimiento económico sostenido y una verdadera justicia social” (LADB, NotiSur, Feb 21, 2003). Y al mismo tiempo comenzó a realizar el ambicioso programa de “Hambre Ce-

ro”⁵³, con el objetivo de que a ningún brasileño le faltaran las tres comidas del día, considerando un subsidio en efectivo ligado a que por lo menos un niño de la familia estuviera vacunado y estuviera yendo a la escuela, y que las mujeres embarazadas tuvieran una atención prenatal; era un programa con un presupuesto de 514 millones de dólares para el primer año y que estaría acompañado de otras actividades para generar empleos, asegurar la calidad de la educación, elevar el salario mínimo y extender la reforma agraria. También había añadido un objetivo inmediato: acabar con la esclavitud moderna de Brasil, calculada en unas 25 mil personas, y que se ubicaba en la mayoría en los estados amazónicos de Para, Tocantins y Maranhao. En el ámbito internacional, Lula ratificó su decisión de fortalecer el MERCOSUR⁵⁴ y, al mismo tiempo, fortalecer sus lazos con las naciones de América del Sur para hacer un frente común frente a la imposición del ALCA pretendida por los Estados Unidos; esta posición se ratificaría posteriormente, por ejemplo, en el Consenso de Buenos Aires, que se firmaría en Octubre del 2003 entre Brasil y Argentina, en un intento de vincular crecimiento económico y justicia social a través de la integración propia del Sur en un camino propio diferente al del ALCA; con ello, se llegaría a la reunión de ministros del ALCA, el 20 y 21 de noviembre del 2003 en Miami,

⁵³ El programa “*Fome zero*” tardó bastante en arrancar y tuvo muchas críticas aun dentro del PT porque algunos lo consideraban paternalista, asistencialista y limitado. Hubo además diversas dificultades administrativas para su implantación: ¿quiénes eran las familias necesitadas y cómo transferirles el recurso? ¿en efectivo o con tarjeta bancaria? ¿cómo comprobar que realmente sería utilizado el recurso en alimentos?

⁵⁴ Ésta sería una línea de acción permanente como se empezó a mostrar luego en la XXIV cumbre del Mercosur, el 18 de junio de 2003, en Asunción, Paraguay; esta posición se vio más fortalecida con la presencia del electo presidente de Argentina Néstor Kirchner y con el invitado presidente de Venezuela Hugo Chávez. Se pedía, además, un acercamiento mayor con los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones.

sin llegar a acuerdos definitivos y solamente elaborando una propuesta de una ALCA *light* o flexible⁵⁵.

A pesar de las primeras dificultades, al cumplir sus 100 primeros días de gobierno, el 75% de la población lo aprobaba mientras que solamente el 13% lo rechazaba. Sin embargo, las tensiones continuaron especialmente porque el MST demandaba con fuerza el apresuramiento de la reforma agraria mientras que los terratenientes⁵⁶ armaban milicias para defenderse contra las tomas de tierra por parte de los campesinos. Por otro lado estaban los proyectos de reformas y los acuerdos con el FMI. Lula parecía haberse movido hacia el centro pero tampoco podía agradar a todos por igual. En el mes de septiembre 2003, el gobierno se mostró en otro asunto controversial: se aprobó para los productores rurales la siembra de semillas genéticamente modificadas⁵⁷ para la siguiente temporada, lo que provocó una reacción opositora de los movimientos ambientalistas que lo habían apoyado.

⁵⁵ Desde ese momento, pareció que Estados Unidos vio como imposible de realizar su proyecto global del ALCA porque el gobierno norteamericano se dedicó a implementar una estrategia alternativa en el 2004, negociando tratados de libre comercio bilaterales con naciones como Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, la República Dominicana, Panamá y posiblemente Uruguay.

⁵⁶ Humberto Sa, presidente de la Asociación de Productores Rurales de Laranjal en el estado de Parana, creó un combativo grupo anti-MST, criticando las promesas de Lula de repartir la tierra: “Es totalmente inaceptable que el gobierno abra las puertas a un grupo guerrillero violento como el MST mientras que se niega a dialogar con los productores rurales... No vamos a quedarnos con los brazos cruzados dejando que ocurran las ocupaciones de tierra... ¿Estamos armados? Claro que lo estamos, y sería hipócrita si lo negara o si negara la existencia de una milicia armada” (LADB, NotiSur. Jul. 11, 2003).

⁵⁷ Se trataba en la práctica de aceptar un hecho ya dado puesto que había numerosas tierras ya sembradas con granos genéticamente modificados traídos de contrabando; de otra manera, el gobierno se hubiera comprometido por ley a destruir 6 millones de toneladas de soya que se esperaba para el tiempo de la cosecha.

Con todo ello, el año 2003 representó una fase de estabilidad y crecimiento económico, sin romper con los marcos generales del neoliberalismo pero proyectando enfrentar el panorama social. Decía Palocci, el secretario de finanzas en una entrevista concedida a El País: “La agenda está bien definida para este año. Arrancaba con un ajuste fiscal y monetario para lograr el control de la inflación. Pasados los primeros seis meses, el riesgo de una inflación galopante se ha eliminado... Ahora se hará la reforma de las pensiones públicas que, pese a alguna oposición, sacaremos adelante. Luego vendrá la reforma fiscal y después la ley que garantice la autonomía del banco central... Seguidamente, habrá otras tres reformas: la del mercado de trabajo, la política y la agraria; ésta última es más un proceso que una ley” (Palocci, El País. Madrid 16/07/2003)

Cuando llegó el inicio de su segundo año de gobierno en el 2004, los indicadores económicos del país (inflación de 8.5% en el 2003, tasa de cambio estable, deuda externa, crecimiento de las exportaciones en más de 20% en relación al año anterior, etc.) seguían mostrando solidez, y el gobierno de Lula fue felicitado por el FMI como un ejemplo de comportamiento económico, aunque la política social todavía era cuestionada por diversos sectores por no haber logrado logros efectivos suficientes (el desempleo había estado en 12%, la pobreza llegaba al 30% de la población, el programa Hambre Cero solamente había llegado a 1.3 millones, y numerosos campesinos seguían demandando tierra). A pesar de todo, los índices de aprobación para el gobierno eran bastante altos fluctuando en alrededor del 70%, mientras que a nivel internacional su liderazgo era reconocido en el mundo de los países subdesarrollados, especialmente por la autonomía de su proyecto frente a los proyectos impositivos de los Estados Unidos y su impulso a los lineamientos de una integración propia de Sudamérica, como se mostró luego en la Cumbre Sudamericana de 12 naciones que se unieron en el gran proyecto de la Co-

munidad Sudamericana de Naciones ⁵⁸, en diciembre del 2004 en el Cuzco, Perú. En el mismo ámbito internacional, también Lula ejerció un papel notable impulsando relaciones especiales con la India, con China, con Sudáfrica y algunos países árabes, algo que despertaba inquietudes desde la perspectiva norteamericana.

A nivel de la negociación con los partidos políticos, Lula había tenido un éxito al lograr la aprobación por el Congreso de dos importantes reformas en diciembre del 2003: la de las pensiones y la fiscal. Especialmente la primera fue controvertida, sobre todo al interior del propio PT debido a que, con el objetivo de mantener viable, seguro y estable el sistema, se tuvo que quitar algunos beneficios a los empleados de gobierno y se tuvo que ampliar la edad del retiro. Lula logró el apoyo mayoritario de su propio partido pero cuatro legisladores votaron en contra y fueron expulsados: la senadora Heloísa Helena y los diputados Joao Fontes, Joao Batista Oliveira, y Luciana Genro; pero la reforma tuvo en la práctica una aprobación del 80% de la población.

Moviéndose más hacia el centro, Lula cedió dos importantes ministerios al PMDB: el de Comunicaciones y el de Seguridad Social. Sin embargo, para fortalecer más el programa de Hambre Cero, creó un nuevo Ministerio de Desarrollo Social dirigido por Patrus Ananias, antiguo alcalde del PT en Belo Horizonte.

Sin embargo, a mitad de febrero del 2004, el partido en el gobierno empezó a sufrir una severa crisis al ser golpeado desde dentro por escándalos de corrupción. La revista *Época* describió cómo Waldomiro Diniz, amigo cercano y ayudante de José Dirceu —el segundo mando fuerte del gobierno—, para el trabajo en el Congreso, pedía contribuciones ilegales a Car-

⁵⁸ Estas 12 naciones fueron las siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, y se añadieron Guyana y Suriname. Fue un paso simbólico muy importante aunque no pudieron asistir los presidentes de Ecuador, Paraguay, Uruguay y Argentina.

los Ramos, un apostador de Rio de Janeiro. Además fue mostrado un video en la televisión nacional en donde ambos conversaban pidiendo Diniz dinero a Ramos para las campañas de dos candidatos a gubernaturas, en donde el primero exigía una comisión del 1% y asegurando que el dinero no se reportaría a las autoridades electorales. Aunque Diniz fue despedido, el PSDB exigió la creación de una comisión del Congreso para realizar una investigación. Esta petición iba a afectar la gobernabilidad política en la coyuntura de un congreso donde apenas se iba consiguiendo un frágil equilibrio a través de la coalición gubernamental. No sólo era un asunto sobre Diniz sino también sobre Dirceu, que le había dado empleo; la oposición empezó a demandar también la salida de Dirceu, apoyada también por las encuestas que lo pedían fuera del gobierno. Finalmente el exguerrillero y preso político —había luchado contra los militares en los años 60s— convertido en político profesional del PT y luego jefe del gabinete del presidente Lula tuvo que dejar el puesto el 16 de junio de 2005; aunque Dirceu volvió como legislador, después de unos meses, también fue expulsado del congreso⁵⁹ con la prohibición de no volver a cargos políticos hasta el 2015.

Aunque la figura del presidente Lula no fue tocada en un primer momento (su imagen sí se devaluaría en el verano del 2005), la relación con los medios de comunicación empezó a deteriorarse. Esto se agudizó más, en agosto del 2004, cuando el gobierno propuso la creación de un Consejo General de Periodismo que tendría la capacidad de poder orientar, disciplinar y supervisar la práctica de esta actividad profesional; la reacción fue acerva recordando los tiempos de la censura de los gobiernos militares.

⁵⁹ En el mes de diciembre 2005, Dirceu, quien se había negado a renunciar alegando que no había pruebas en su contra, fue sometido a juicio político en el Congreso y expulsado; fueron 293 votos contra 192, aunque solamente se hubiera requerido una simple mayoría de los 513 legisladores.

El ritmo de las acusaciones de corrupción en el gobierno de Lula no se detuvo puesto que para el 2005 también el presidente del Banco Central, Henrique Meirelles, sería investigado por el Abogado General de la nación por delitos contra el sistema financiero, por evasión de impuestos y por delitos electorales. De igual manera, durante el verano de ese mismo año, un buen número de dirigentes del PT fueron develados en sus prácticas ilegales de intercambio de grandes cantidades de dinero con diversos políticos brasileños. Estos escándalos de corrupción hicieron que el comité ético de la cámara baja pidiera la remoción de 18 legisladores; numerosos dirigentes fueron obligados a renunciar (el presidente del PT, el tesorero, el secretario general, etc.) mientras que Lula se decía traicionado por dichos actos de corrupción, que –afirmaba– no conocía con anterioridad. El mismo vicepresidente Alencar, a finales del 2005, fue sometido a una investigación por un depósito no reportado en el 2002 de una cantidad de un millón de reales (unos 454 mil dólares) en su empresa Monteminas; también el ministro de Finanzas, Antonio Palocci, enfrentaría investigaciones del Congreso y renunciaría a su puesto el 27 de marzo del 2006, bajo la acusación de haber aceptado pagos ilegales de apuestas cuando había sido alcalde de Riberão Preto traspasando fondos ilegales para la campaña del PT. Una encuesta de agosto del 2005 mostró que en una posible elección en ese momento, Lula perdería frente a José Serra, que había sido su contrincante en el 2002, por una diferencia de 48 a 39%. Fue la crisis más severa por la que cruzó el PT durante el gobierno de Lula.

De hecho, una muestra del rechazo de gran parte de la población a estos escándalos de corrupción se dio cuando el gobierno puso a consideración un referendun para tratar de prohibir armas y balas a los civiles. Si se calcula que Brasil se encuentra entre los países con más muertes causadas por armas de fuego –alrededor de 36,091 en el 2004, según el Ministerio de Salud, cuando en Estados Unidos solamente fueron

unas 30 mil en el 2002—, se puede entender la campaña del gobierno para intentar prohibir su venta legal. Pero el referendium del 23 de octubre del 2005 resultó en un apabullante no a la prohibición; la población mayoritaria consideraba que el gobierno no era efectivo en la defensa contra la delincuencia y por tanto que los individuos debían tener el derecho a defenderse. Esta opinión en el contexto de los escándalos gubernamentales fue suficiente para la derrota de la propuesta sobre la prohibición; hay que sumar también el apoyo masivo que el “no” recibió de la National Rifle Association (NRA) norteamericana.

En enero del 2005 se había llevado a cabo el Foro Social Mundial (FSM) de nuevo en Porto Alegre. Las primeras concentraciones mundiales para el FSM se habían llevado a cabo en Brasil, pero en 2004 se cambió la sede a Mumbai, India, para volver luego a Porto Alegre. A partir de ese año 2005, se decidió una realización del evento ya no anualmente sino cada dos años y por ello se proyectó el siguiente para el 2007 en África. Los organizadores del FSM en el 2005 calcularon la presencia de alrededor de 155 mil asistentes y contaron con la presencia tanto de Hugo Chávez como del mismo presidente Lula. Chávez tuvo más apoyo entre las multitudes del FSM mientras que Lula recibió severas críticas de diversos sectores; quedaba claro que en visión del movimiento altermundista, ambos estaban a la izquierda, pero se simpatizaba más con la radicalidad del presidente de Venezuela.

Los temas tratados en el Foro eran compartidos por ambos presidentes: defender la tierra y sus recursos naturales; construir una cultura creativa de resistencia con prácticas anti-hegemónicas; defender la identidad, diversidad y el pluralismo; lucha por los derechos humanos; defensa de las economías nacionales; luchas por la justicia social y democracia alternativa; lucha por la paz y la desmilitarización; socialización de nuevos conocimientos y tecnologías; impulso a los procesos de integración de los pueblos, etc. En su discurso en este

evento, Lula defendió la política económica de sus dos años de gobierno señalando la estabilización de las finanzas y la creación de miles de empleos, permaneciendo Brasil como fuerte portavoz de la lucha contra la pobreza en todo el mundo: “Por ahora –dijo– yo soy el presidente de este país, pero mis raíces están en los movimientos sociales. Yo soy un militante político” (LADB, NotiSur, Feb. 18, 2005).

Por otro lado, la participación de los países americanos en la IV Cumbre de las Américas en noviembre del 2005, en Mar del Plata, Argentina, fue también otra ocasión para que el gobierno del PT siguiera expresando su filiación en la izquierda latinoamericana, insistiendo particularmente en los procesos de integración del Sur de una manera diferente a la propuesta de la integración subordinada que se encontraba en el ALCA. Ciertamente los gobiernos que encabezaron la rebelión latinoamericana para oponerse al ALCA fueron, en este caso, los gobiernos de Venezuela y Argentina, pero con amplio apoyo del resto de las naciones; el presidente de los Estados Unidos, George Bush llegó al Mar del Plata, por primera ocasión, en una situación política adversa porque sus únicos apoyos claros se encontraban solamente en México, Colombia y El Salvador. Hubo, además, numerosas y significativas manifestaciones de altermundistas de todo el mundo en protesta contra Estados Unidos tanto por su proyecto del ALCA como por su intervención guerrera en Irak. Los discursos de Chávez y de Kirchner fueron particularmente severos al señalar la influencia histórica de la política norteamericana como una de las causas principales del subdesarrollo y pobreza de la región sur de América y que recientemente en las últimas décadas se ha expresado en los severos programas de ajuste neoliberal. Una encuesta realizada entre agosto y septiembre del 2005 entre gente de negocios, de gobierno y de educación, por el Miami Herald y la University of Miami mostraba que solamente el 17% de los líderes argentinos y un 12% de brasileños tenían una visión positiva del presidente Bush.

Sin embargo, a diferencia de Kirchner en Argentina en su enfrentamiento abierto con las exigencias de la banca internacional, Lula en Brasil llevó una relación complaciente con el FMI, algo que los críticos de la extrema izquierda le reprocharon siempre. Sin embargo, el primer gobierno del PT mantuvo estable la economía y controló la inflación. El crecimiento económico, sin embargo, hizo posible que Brasil ya no llegara a necesitar la supuesta “ayuda” del Fondo: los créditos con el FMI ya no fueron renovados en marzo del 2005 –situación que había comenzado en 1998 ante la crisis del *real* para implementar las recetas de la banca internacional– porque, como mencionaron los gobernantes brasileños, el país podía ya caminar con su propio pie; incluso el país pagó, en diciembre del 2005, 15.5 billones de dólares norteamericanos al FMI, como también lo haría Argentina en ese mismo mes, para ya no estar supeditado a las presiones de ese organismo internacional en materia económica: Brasil lo pudo hacer sin que se vieran afectadas su reservas internacionales que eran de 54 billones de dólares, como lo afirmó Antonio Palocci, el ministro de finanzas. La baja tasa de inflación, el crecimiento económico, suficientes reservas internacionales y el surplus en el comercio exterior le dieron las bases al gobierno de Lula para tener más autonomía en las decisiones sobre su modelo de desarrollo ⁶⁰. La deuda externa seguía siendo un enorme peso pero manejable en la medida en que podía irse disminuyendo año con año ⁶¹. Ni siquiera la renuncia de Palocci, el ministro de finan-

⁶⁰ Una muestra más de la fortaleza de la economía fue la decisión gubernamental en mayo del 2005 de hacer avanzar la capacidad del país para enriquecer uranio como medio para favorecer su autosuficiencia en la industria nuclear

⁶¹ El peso de la deuda externa en el 2003 había llegado a significar el 58.5% del PIB, calculada en alrededor de 201.4 billones de dólares, según el Banco Central de Brasil en diciembre del 2003, y que era la más alta en todos los países latinoamericanos. El crecimiento económico era el gran contrapeso de la deuda puesto que el PIB había crecido 0.5% en el 2003 y 4.9%

zas, el 27 de marzo del 2006, cambió la tendencia a favor de Lula; el ministro fue reemplazado y se aprovechó para hacer una reorganización del gabinete en el período previo a las elecciones.

La estabilidad de la situación económica representaba los mejores puntos para el presidente Lula, pero corría parejo con los reclamos sociales en el sentido de no haber hecho cosas significativas para combatir la pobreza y la desigualdad. Los desórdenes ocurridos en 70 cárceles brasileñas y los cerca de 200 enfrentamiento de la policía con bandas callejeras atacando autobuses públicos, bares y tiendas, que dejaron más de 170 muertes entre el 12 y el 19 de mayo del 2006, fueron los más violentos en toda la historia de Brasil. Otro dato más se añadía por sus críticos y era lo referente al deterioro de la región amazónica: en octubre del 2005 se había publicado un reporte hecho por científicos brasileños y norteamericanos, señalando que la deforestación en Brasil se había estimado 60% menos de lo que era en la realidad, comparando los datos vía satélite con los datos de investigación empírica de campo realizados por ellos⁶². Todo esto corría paralelo a los escándalos de corrupción gubernamental dentro de un contexto de preparación inmediata de las elecciones presidenciales del 2006, en donde los partidos de oposición tenían un ánimo muy elevado sobre la esperanza de derrotar al PT en la siguiente contienda electoral.

Sin embargo, en el mes de marzo del 2006, el presidente Lula había recobrado el apoyo popular para un segundo mandato. Por un lado, influyó la pugna entre sus oponentes para designar al candidato del PSDB, partido que finalmente hizo a un lado al más popular José Serra, alcalde de la ciudad de Sao

en el 2004, según el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Autónoma de Madrid (www.cesla.com).

⁶² El gobierno de Lula estimó que este estudio publicado en el US Journal Science tenía cifras exageradas y afirmó que la deforestación del Amazonas había disminuido al 50% gracias a sus políticas de protección de la zona.

Paolo y quien había contendido ya contra Lula en el 2002, para elegir a Geraldo Alckmin, el gobernador del estado de Sao Paulo. Por otro lado, en el pueblo brasileño había influido más la percepción de que, a pesar de todas las irregularidades y corruptelas del PT, el presidente Lula nunca estuvo directamente involucrado en ellas y por lo tanto no habían sido su responsabilidad directa.

El Instituto Brasileiro de Opiniao Publica e Estatistica (IBOPE) señalaba en su encuesta del 15 de marzo 2006 que Lula ganaría con el 43% de los votos si la elección hubiera sido ese día, mientras que Alckmin solamente recibiría el 19% de la votación; en esta misma encuesta se mostraba que si Lula compitiera con Serra, recibiría el 40% de los votos frente al 31% de este último (Cfr. LADB, NotiSur, March 24, 2006). Esta percepción mayoritaria reflejaba lo que ya había mencionado el sacerdote dominico Frei Betto, quien había aceptado ser asesor del presidente en el 2002 pero que salió de los círculos gubernamentales en el 2005: la culpa, decía él, no fue del presidente, sino de un sector del partido: “Hubo un problema político en el PT, donde parte de sus dirigentes creyeron que los métodos políticos de la derecha podían servir a la izquierda. La izquierda cayó en la trampa de creer que los medios justifican los fines” (Betto Frei, 2005).

Fue hasta el 24 de junio del 2006 cuando Lula da Silva inició oficialmente su campaña por la reelección como presidente, acompañado por el vicepresidente José Alencar; era su quinta campaña presidencial, pero en esa ocasión sometiendo a consideración de todos los brasileños su actuación de varios años en el poder ejecutivo. Su discurso era claro: falta mucho por hacer en Brasil para abatir la pobreza y la desigualdad, pero se ha tomado en su gobierno el camino correcto. “No hemos hecho todo lo que queríamos hacer, pero hemos hecho mucho más de lo que algunas gentes creían posible... De nuevo soy candidato porque los pobres son ahora menos pobres, y ellos van a continuar teniendo una mejor calidad de vida si

los programas sociales que hemos realizados son mantenidos y expandidos... En estos tres años y medio, hemos mostrado al mundo que un trabajador puede dirigir los destinos de Brasil” (LADB, NotiSur, July 14, 2006).

En el imaginario social brasileño, en la pugna electoral, el recién designado candidato por el PSDB en marzo del 2006, Geraldo Alckmin, comenzó a presentarse contrario al proyecto de Lula, anunciando recortes en los gastos del estado, mejoramiento de la calidad de la inversión pública y el impulso de mejores reformas fiscales, todo lo cual fue forjando de nuevo el enfrentamiento de dos proyectos: o la vuelta al proyecto neoliberal de mayores privatizaciones y vinculación con el ALCA o la continuación de reformas radicales hacia un crecimiento económico estable con mayor distribución de la riqueza social. En este contexto, movimientos sociales radicales como el MST, aunque opuesto a Lula en numerosos momentos de su gobierno 2002-2006, volvió a anunciar que lo apoyaría para su reelección.

El discurso de Alckmin se centró en dos frentes: sembrar descontento en el ámbito económico señalando cómo estaba disminuyendo el ritmo de crecimiento y cómo con sus programas de ajuste se podría encarrilar al país en una atracción espectacular de capitales y, por otro lado, aprovechar todos los escándalos de corrupción dentro del PT para originar mayor rechazo de la población hacia el candidato de ese partido. El discurso de Lula se centraba también en dos niveles: en el económico al apuntar, por un lado, hacia la consolidación de los logros en materia de crecimiento y control de la inflación (hechos comprobables en su primer período de gobierno) y, por otro, hacia programas sociales que hicieran más efectivo el combate a la pobreza y la desigualdad; en el político, al aceptar la realidad de la corrupción sucedida al interior del PT con acciones para separar de sus cargos a los líderes desleales y al insistir en que Lula jamás había participado ni tenido conocimiento de dichos actos de corrupción. Incluso el escándalo de

último minuto cuando aparecieron revelaciones de que miembros del PT habían buscado comprar con 770 mil dólares un dossier donde se desacreditaba a Geraldo Alckmin no pudo influir en el electorado de manera definitiva; Lula despidió a tres miembros clave de su equipo por este asunto, incluyendo a su director de campaña, Ricardo Berzoini.

Una encuesta publicada por la Folha de Sao Paolo el 9 de julio del 2006 mostraba que en ese momento, Lula obtendría 45% de los votos mientras que Alckmin solamente el 29%. Otras encuestas provenientes de otras fuentes también le daban la ventaja a Lula pero casi todas coincidían en que no podría vencer a Alckmin en la primera vuelta y, por tanto, se tendrían que ir a una segunda ronda.

Las predicciones resultaron ciertas en este punto porque a Lula solamente le faltó el 1.4% de votos para llegar al 50%, con lo cual no se hubiera necesitado una segunda vuelta. Lula obtuvo el 48.6% (46.662,365 votos) mientras que Alckmin el 41.6% (39.968,369 votos). El resto de los candidatos presidenciales fue muy poco significativo puesto que Heloisa Helena y Cristovam Buarque solamente llegaron al 6.85% (6.575,393 votos) y 2.64% (2.538,844) de votación respectivamente. Estos dos últimos candidatos habían sido miembros del PT pero con sus críticas acervas al incumplimiento de las promesas de Lula, salieron del partido y formaron o se unieron a otras agrupaciones; en la práctica, los votos de estos dos candidatos le impidieron a Lula ganar en la primera vuelta. El esquema de dos fuerzas principales contendientes del 2002 se repitió en el 2006, con los dos importantes imaginarios sobre el proyecto de país. Sin embargo, aunque se esperaba la segunda vuelta electoral, en términos de correlación de fuerzas, el PT y sus aliados no obtuvieron mayoría en el Congreso (solamente contaban con 223 asientos de los 513 totales) y había que contar también que la gubernatura de Sao Paolo fue ganada por el PSDB con su candidato José Serra. “Aunque el PT conquistó la presidencia con más de 60% de los votos en el *ballotage*, ape-

nas controla 26% de la Cámara de Senadores y 29% de la de Diputados. De las 21 fuerzas que obtuvieron representación en el Senado, 16 no tienen un vínculo con la alianza que apoyó a Lula” (Echegaray F., 2006: 31)

Un dato interesante en esta elección fue el retorno de Fernando Collor de Mello a la política nacional al ganar la curul por Alagoas en el Senado de la República, postulado por el Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB). De Mello había ganado la presidencia de Brasil en 1989 precisamente contra Lula, pero dos años más tarde fue sacado del poder ejecutivo en 1992 acusado de actos de corrupción en contratos de obras públicas; además, el Senado por su parte le quitó sus derechos políticos por ocho años. Volvía, entonces, al escenario nacional entre los oponentes a Lula.

De cualquier manera, Lula, como sucedió en el 2002, volvió a ganar con claridad en la segunda ronda electoral con el 60.83% de los votos, el 29 de octubre del 2006, teniendo el apoyo de más de 58 millones de brasileños, mientras que Alckmin solamente lograba el apoyo de 37.5 millones de los votos válidos, el 39.17% de la votación. Había acudido el 81% de los brasileños en la segunda vuelta, dentro de 125 millones de electores registrados. Según Raúl Zibechi, en el primer período de gobierno de Lula, “las políticas sociales han estado dirigidas a los más pobres y algunas reformas castigaron a las capas medias y a los trabajadores” y por eso se explican ciertas modificaciones de los votos: “Respecto a las elecciones anteriores de 2002, el Partido de los Trabajadores (PT) perdió 2,1 millones de votos, lo que representa una disminución del 13%: 13.990.000 frente a 16.094.000 de cuatro años atrás. Consiguió sólo 83 diputados de los 513 que integran la Cámara de Representantes, frente a 91 que tuvo en el período anterior. Las principales pérdidas del PT se registran en el Sur (menos 22%) y en el Sureste (menos 23%), donde perdió casi dos millones de votos. En el estado de Sao Paulo, el más rico, poblado y poderoso del país, perdió un millón de votos, el 21%. Sin em-

bargo, creció en el Nordeste (más 13%) y en el Norte (más 31%), las regiones más pobres del país” (Zibechi R., 2006). El país se había ido polarizando pero, de cualquier manera, una gran mayoría lo quiso de nuevo al frente del país.

Resultados de la elección presidencial 1 de octubre 2006/ 29 octubre 2006

Partido	Candidato	Resultados primera vuelta	Segunda vuelta
DOS TRABALHADORES, REPUBLICANO BRASILEIRO, COMUNISTA DO BRASIL.	Luiz Inácio Lula da Silva	48.6%	60.83%
SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA, FRENTE LIBERAL	Geraldo Alckmin	41.6%	39.17%
SOCIALISMO Y LIBERTAD, PARTIDO SOCIALISTA UNIFICADO DE LOS TRABAJADORES, PARTIDO COMUNISTA BRASILEÑO	Heloísa Helena Lima de Moraes Carvalho	6.85%	
DEMOCRÁTICO TRABALHISTA	Cristovam Buarque	2.64%	
REPÚBLICANO PROGRESISTA	Ana Maria Rangel	0.13%	
SOCIALDEMOCRATA CRISTIANO	José Maria Eymael	0.07%	
SOCIAL LIBERAL			
Total de electores	125.912,656		
Total de votantes	104.820,145		
Total votos válidos	95,996,733		
Abstencionismo		16.75%	

Fuente: Datos del Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de Brasil.

Los lineamientos del segundo gobierno de Lula fueron expuestos en su discurso de victoria después de la segunda ronda electoral y se pueden sintetizar en tres elementos: desarrollo educación y combate a la pobreza. “Vamos a hacer muchas

cosas mejores en esta segunda etapa de gobierno que lo que hicimos en la primera... Vamos a continuar gobernando Brasil en beneficio de todos, pero le vamos a dar la principal atención a aquellos que más lo necesitan. El pobre tendrá la preferencia en nuestro gobierno... El nombre de mi segundo mandato será desarrollo, desarrollo con distribución del ingreso y calidad en la educación”. Y atendiendo a los hechos de corrupción registrados en su primer gobierno, señaló categóricamente: “todas las denuncias sobre corrupción serán plenamente investigadas, y los culpables serán castigados” (LADB, NotiSur, Nov., 3, 2006).

De nuevo, como en el 2002, se volvió a depositar una gran esperanza en el gobierno de Lula, pero, a diferencia de entonces, se quitaba gran parte de la utopía sobre los cambios inmediatos y radicales. Emir Sader, que había sentido gran decepción durante el primer gobierno de Lula, volvió a mostrar su entusiasmo por la reelección del presidente en el 2006: “Ganamos el derecho a luchar, a luchar por un gobierno que por fin promueva la prioridad de lo social, que sea un gobierno posneoliberal, trabaje por la construcción de una democracia con alma social. Celebremos, porque merecemos la victoria, a pesar de nuestros errores. Pero para estar a la altura de nuestra victoria, tenemos que hacer de ella una victoria de la izquierda. Una victoria que esté a la altura del emocionante apoyo que el gobierno recibió, a lo largo de toda la campaña, de los más pobres, de los más marginados, de los que constituyen la amplia mayoría de los brasileños, de los que trabajan más y ganan menos. De los que supieron, como nadie, resistir al torrente de propaganda que los mass media difundieron sobre todos. Hacer del nuevo gobierno, ante todo el gobierno de ellos. De todos los brasileños, pero sobre todo de los que siempre habían sido marginados, excluidos, reprimidos, que siempre vivieron y murieron sobreviviendo, en el anonimato, en el silencio, en el abandono” (Sader E., 2006).

Consideraciones finales

El segundo triunfo de Lula al lograr la reelección como presidente de Brasil fue claro tanto en la primera como en la segunda vuelta. Y en la región latinoamericana, a fines de ese año, esta situación fue acompañada, de manera casi simultánea, por las victorias de Daniel Ortega, del FSLN en Nicaragua, de Rafael Correa en Ecuador y la reelección de Hugo Chávez en Venezuela. Ello, sin embargo, no significaba una tendencia convergente y definitiva hacia un nuevo rumbo de la región porque sus puntos programáticos no eran necesariamente los mismos ni tampoco el triunfo en cada país fue una victoria aplastante.

Cabe, entonces, señalar una conclusión importante para Brasil pero también para el resto de los países. La posición que triunfa en el poder ejecutivo ya no puede ser una presidencia omnipotente sino que tiene que sentarse a negociar con todas las otras fuerzas políticas para poder implementar las reformas que se pretenda. “El gobierno federal debe olvidarse de cualquier aspiración hegemónica y disponerse a negociar con las demás fuerzas, fortaleciendo los pesos y contrapesos. El elector, en suma, decide estratégicamente, y su prioridad pareciera ser minimizar la concentración de poder, lo que coloca serios impedimentos al ejercicio de una presidencia imperial” (Echeagaray F., 2006: 31)

Por otro lado, siempre será importante el contexto económico de la población, que condiciona las posibilidades de algún político para llegar o continuar en un puesto que, en un modelo electoral-democrático, se lo debe a sus electores. De esta manera, el crecimiento económico, la estabilidad financiera, la percepción sobre la posible mejora de las condiciones de vida,... siempre serán un factor importante más allá del voto duro que rodea a cada uno de los partidos. En el caso de Brasil, los electores juzgaron que, a pesar de los escándalos de corrupción del partido en el gobierno, el presidente podría continuar una tendencia que ya habían experimentado como

positiva en su primera etapa de gobierno. En otras circunstancias, puede existir el llamado voto de castigo. En este sentido, Leonardo Boff comentaba sobre el carácter ético de los proyectos políticos de los candidatos: “en qué medida rompe con la tradición de privilegios que han caracterizado a la política brasileña y qué mediaciones usará para promover la justicia y la inclusión de los millones desposeídos. Éste es el nudo de la cuestión. Los ciudadanos tienen derecho a conocer los proyectos políticos de cada candidato y las formas de llevarlos a cabo” (Boff L., 2006). De esta manera, no tenemos más que afianzarnos en las posibilidades de un sistema democrático en donde hay que dejar que los electores decidan el rumbo de su propio país; hay que tener confianza en que los electores mismos irán ratificando al gobierno del PT o lo quitarán del gobierno en caso de no cumplir las promesas fundamentales de campaña. Éste debe ser el reto permanente de la izquierda y de la derecha.

Finalmente, para el caso de Brasil, hay que notar una tendencia hacia el bipartidismo en las últimas dos décadas. Si bien con el surgimiento de la democracia electoral en los 80s surgieron fuertes partidos políticos, en los 90s la vida política brasileña se fue decantando en dos opciones principales (el PSDB y el PT) en donde la población puede, con mayor facilidad, distinguir las diferentes propuestas. Se trata, sin embargo, de un bipartidismo nacional que no quita el multipartidismo en el congreso y mucho menos en las escalas regionales y municipales. Así como se podía distinguir en 1994 y 98 las propuestas de la bina Cardoso-Lula, también pudieron distinguirse los lineamientos diferentes de las propuestas de Lula-Serra en el 2002 y Lula Alckmin en el 2006.

6.4 ECUADOR: superación de una democracia restringida

“América Latina y el Ecuador no están viviendo una época de cambios, están viviendo un verdadero cambio de época”. Rafael Correa. Discurso de toma de posesión como presidente, 15 enero 2007.

El Ecuador de 1978 distaba mucho de ser el Ecuador del 2008. Señalo una distancia de 30 años porque en aquel año fue la primera vez que conocí ese país recorriéndolo en autobús de sur a norte; era mi primera experiencia al sur de México, incluyendo también Perú, Colombia, Venezuela y todos los países centroamericanos. En aquel momento se empezaba a vivir la transición a la democracia después de una década de militarismo; se experimentaba, además, una transición de un modelo económico proteccionista hacia el libre comercio con sus características neoliberales dentro de los programas de ajuste. Por otro lado, aunque ya se había firmado desde 1969 el Pacto Andino entre los gobiernos de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, como un acuerdo de integración subregional, todavía pesaba poco el anhelo de recobrar el sueño de Simón Bolívar.

Ecuador se había convertido en una dictadura civil cuando José María Velasco Ibarra, que había ganado las elecciones presidenciales en 1968, disolvió el congreso en 1970; él mismo, sin embargo, fue derrocado por las fuerzas armadas en un golpe de estado incruento en febrero de 1972, proclamándose por los militares un gobierno nacionalista y revolucionario bajo la dirección del General Guillermo Rodríguez Lara, quien luego sería sustituido en 1976 por un triunvirato militar. Los gobiernos llamados democráticos comenzarían en Ecuador con un referendun en 1978 que inició el retorno a los procesos electorales en donde fue elegido Jaime Roldós Aguilera, quien falleció en un accidente de aviación en 1981 y fue sustituido por el entonces vicepresidente Osvaldo Hurtado.

El país, después de la época de uno de los grandes caudillos latinoamericanos, José María Velasco Ibarra (fue presidente

del país en cinco ocasiones) y de varios golpes militares, ha mantenido su sistema democrático por más de dos décadas, pero con sucesivas convulsiones que lo catalogan como una democracia inestable dentro del contexto latinoamericano, en donde las elecciones ya parecen ser en lo general el método pacífico para las sucesiones en el poder pero sin resolver para nada los ingentes problemas de desigualdad social y corrupción generalizada.

En 1979 se logró la transición de las dictaduras militares a los gobiernos civiles electos en procesos electorales cuando Jaime Roldós conquistó la presidencia; pero Roldós murió en 1981 y la presidencia fue ocupada por el vicepresidente Osvaldo Hurtado para cumplir el período de 4 años hasta 1984. El siguiente período presidencial fue encabezado por León Febres Cordero, de la democracia cristiana, quien pudo terminar su cuatrienio en 1988, aunque el país fue acechado por dos rebeliones de militares en esos años. El siguiente presidente, Rodrigo Borja (1988-1992), de la llamada socialdemocracia, pudo gobernar con cierta paz. Volvió luego otro conservador, presidente Sixto Durán Ballén, que inició con intensidad la era de privatizaciones, pero también cumplió sus 4 años de gobierno aunque sufriendo las tensiones del conflicto bélico de 1995 con el vecino Perú, gobernado entonces por Alberto Fujimori.

Posteriormente en 1996, llegó a la presidencia de nuevo la democracia cristiana con el folclórico presidente Abdalá Bucaram, elegido democráticamente pero quien solamente pudo permanecer 6 meses en el poder ejecutivo debido a las masivas protestas de la población, con lo cual los legisladores lo destituyeron por “incapacidad mental” al año siguiente 1997 y designaron como jefe de gobierno a Fabián Alarcón como mandatario interino. Durante el período de Alarcón, se realizó una Asamblea Constituyente en 1998 para proceder luego a elecciones generales, en donde fue electo Jamil Mahuad. Sin embargo, este nuevo presidente solamente pudo permanecer en el

poder ejecutivo durante un año y medio; la crisis económica fue el escenario propicio para un levantamiento popular, indígena y militar que se generalizó en el país y obligó a Mahuad a abandonar el puesto a principios del año 2000. Con ello, el vicepresidente Gustavo Noboa pudo llegar al poder ejecutivo donde se mantuvo hasta el proceso electoral del 2002. Ecuador estaba viviendo en todo este proceso una endeble democracia electoral con diversos presidentes que no podían brindarle una estabilidad política ni económica y, con ello, las presiones y los movimientos populares los obligaban a abandonar el puesto sin terminar el período para el cual habían sido electos.

El siglo XX estaba terminando con un Ecuador que podía presumir de estar llegando a la democracia electoral pero a la que Agustín Cueva⁶³ podía aplicarle el concepto de “Democracia restringida” semejante a la situación de otros países latinoamericanos que con los gobiernos civiles no experimentaron mejora en su nivel de vida ni una consolidación de sus instituciones políticas nacionales. “En el umbral de sus quinientos años de existencia *latina*, esta América mestiza se encuentra... flotando, como nunca, a la deriva, sin un perfil histórico claro ni un proyecto político y económico que la definan. Ello, en un complejo contexto internacional caracterizado por la despiadada recomposición del sistema de dominación hegemonizado por Estados Unidos, así como por la aguda crisis en que se debate la casi totalidad del mundo socialista” (Cueva, 1989: 8). Efectivamente, cuando vemos un país que en

⁶³ El profesor Cueva fue profesor investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y escribió un libro que se ha hecho clásico: “El desarrollo del capitalismo en América Latina”; abundó luego sobre las nuevas democracias latinoamericanas en su libro “Las democracias restringidas de América latina”. Y sobre su país tenemos su libro “El proceso de dominación política en el Ecuador”. A pesar de la crudeza de sus análisis, cuando lo conocí en la ciudad de Guadalajara, mostraba su optimismo sobre el futuro de la región.

10 años (de 1996 al 2006) ha tenido 8 presidentes, no puede dejar de sorprender la fragilidad de estas democracias latinoamericanas, a las que Rafael Correa ha mencionado como “democracias de plastilina” (Correa R., 15-I-2007).

La transformación de Ecuador se ha acelerado en el naciente siglo XXI; es el proceso que trataremos de analizar en el presente capítulo para entender cómo la propuesta de un post neoliberalismo se ha estado enraizando en el modelo propuesto por el gobierno de Rafael Correa, triunfante en las elecciones presidenciales del 2006.

Las insurrecciones del nuevo siglo

El nuevo siglo para Ecuador comenzó con un amplio levantamiento popular que tuvo como resultado la renuncia del presidente Jamil Mahuad. El gobierno del presidente Mahuad había originado la crisis con la Ley de Racionalización y Reordenamiento de las Finanzas públicas, que significaba en la práctica la privatización de la electricidad, el petróleo y las telecomunicaciones, al mismo tiempo que subían los impuestos y especialmente la gasolina en un 107%. Ocurrieron movilizaciones populares en marzo y julio de 1999 que aglutinaron a amplios sectores de la población como campesinos, estudiantes, petroleros, trabajadores de la seguridad social, taxistas, transportistas y, sobre todo, al movimiento indígena.

“Hablamos de un país con 12.5 millones de habitantes, de los cuales entre 25 por ciento y 45 por ciento es indígena, y un 80 por ciento de la población rural vive en la pobreza extrema. Desde 1996, año en que Ecuador entró a la Organización Mundial de Comercio, se impuso una fuerte devaluación de la moneda. En febrero de 1997, un levantamiento popular derrocó al entonces presidente Abdalá Bucaram y en 1998, después de un breve periodo de gobierno provisional, Jamil Mahuad, del partido Democracia Popular, asumió el cargo de presidente en condiciones de empate técnico”. (Vera H. R., 2000).

Las manifestaciones ocurridas en la capital y en los lugares más importantes del país que paralizaron el país del 18 al 23 de enero del año 2000 lograron la caída del presidente Mahuad. Existía la aspiración en diversos líderes del movimiento de derrocar a los tres poderes del país para transitar hacia un gobierno democrático, pero finalmente solamente sucedió la caída del poder ejecutivo que se encontraba en un estado de gran descomposición⁶⁴, tanto por sus alianzas con la oligarquía económica como por la sumisión al gobierno de los Estados Unidos.

El ascenso del movimiento se manifestó de manera especial el 21 de enero del 2000 cuando el llamado Parlamento Nacional de los Pueblos, con 44 delegados de las 22 provincias ecuatorianas logró sesionar en el recinto del Congreso nombrando una Junta de Salvación Nacional que nombraba al coronel Lucio Gutiérrez (militar que junto con otros mandos medios del ejército había apoyado el levantamiento) como presidente, a Antonio Vargas como presidente del Parlamento popular y a Carlos Solórzano como presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El presidente de la república dejó de tener el apoyo del ejército y tuvo que renunciar, pero las negociaciones entre militares y élites políticas y económicas no favorecieron la llamada Junta de Salvación Nacional sino el nombramiento de Gustavo Novoa quien, habiendo sido vicepresidente, pasó a ocupar el lugar del jefe del ejecutivo. Se había logrado sacudir el sistema ecuatoriano y hubo cambio de mando en la nación, pero permaneció el mismo modelo con otra persona al frente del gobierno. La fuerza de dicho levantamiento radicaba en el

⁶⁴ Entre las consignas que se gritaban a diario durante los días de las manifestaciones se veía la siguiente: "robaplatas Jamil, diablo Jamil, oscuro Jamil, chupacabras Jamil, surgido del infierno Jamil, muerte del pueblo Jamil..." La gente también coreaba en las calles: "Banqueros y empresarios, hijoeputas mercenarios, con la plata de los pobres, se hicieron millonarios". "No queremos y no nos da la gana, ser una colonia norteamericana" (Vera H., 2000).

llamado Parlamento Nacional de los Pueblos (integrado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador y por la Coordinadora de Movimientos Sociales) y en el Frente Patriótico de Unidad Nacional; su logro fue la caída del presidente y el estupor causado a la oligarquía económica, a los organismos financieros internacionales y al propio gobierno de Estados Unidos⁶⁵.

Sin embargo, los grandes problemas económicos y políticos permanecieron con el nuevo gobierno de Novoa, a quien solamente le correspondía terminar el período de su antecesor y, por ello, le llegó pronto el proceso de sucesión presidencial en el 2002.

Las elecciones ocurrieron el 20 de octubre del 2002 en Ecuador y no hubo un candidato ganador:

ELECCIONES EN ECUADOR 2002

Lucio Edwin Gutiérrez Borbua <i>PSP / MUPP-NP</i>	913,113	20.43%
Alvaro Fernando Noboa Pontón <i>PRIAN</i>	776,132	17.37%
Leon Roldós Aguilera <i>RP</i>	689,438	15.43%
Rodrigo Borja Cevallos <i>ID</i>	627,501	14.04%
Antonio Xavier Neira Menéndez <i>PSC</i>	544,335	12.18%
Jacobo Bucarám Ortíz <i>PRE</i>	529,938	11.86%

Fuente: Tribunal Supremo Electoral de Ecuador.

⁶⁵ El 12 de noviembre de 1999, el gobierno de Ecuador había firmado con Estados Unidos un acuerdo por 10 años para que los militares norteamericanos utilizaran la base aérea de Manta con todas sus instalaciones portuarias, gozando de inmunidad diplomática y facilitando todo tipo de importación y exportación de bienes, apoyando incluso las operaciones del Plan Colombia.

Hubo necesidad de una segunda vuelta electoral al no conquistar ningún candidato la mayoría requerida y fue hasta entonces que el coronel Lucio Gutiérrez, de 45 años, derrotó en la segunda vuelta, el 24 de noviembre del 2002, a su contrincante Álvaro Noboa. Gutiérrez tomó el poder ejecutivo de Ecuador el 15 de enero del 2003 para un período programado de 4 años en la presidencia.

La organización que llevó a Gutiérrez a la presidencia, el Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero (apoyado por la organización indígena Pachakutik) había derrotado al partido de Noboa, el Partido Renovador Institucional Acción Nacional; ambas organizaciones representaban el fracaso de todos los partidos políticos tradicionales anteriores, puesto que ambos habían sido de reciente creación queriendo representar los anhelos de cambio de gran parte de la población ecuatoriana.

El derrotado multimillonario Álvaro Noboa, de 52 años, el hombre más rico de Ecuador, aceptó su derrota, cuando el Tribunal Supremo Electoral reconocía la ventaja de Gutiérrez con el 54% de los votos mientras que su propia votación solamente alcanzaba el 45%. El mismo presidente de Ecuador, Gustavo Noboa, también reconoció el triunfo de Gutiérrez.

La historia de Ecuador en sus últimas décadas mostraba la fragilidad política del país con sus casi 13 millones de habitantes, en un contexto donde se reconocen altos niveles de pobreza principalmente en la densa población indígena (65% de los ecuatorianos viven en la pobreza, según algunos analistas), y con una deuda externa de 14 mil millones de dólares, de las más altas de América Latina si se considera la relación con la población y el producto interno bruto. “El salario mínimo asciende a 50 dólares mensuales, ingreso que en Estados Unidos y Europa obtienen en dos o tres días 2 millones de ecuatorianos que emigraron en los últimos años. El desempleo afecta a 10 por ciento de la población activa (330 mil personas) y el sub-empleo a 32 por ciento (un millón 123 mil). Contexto en el que otros indicadores (mortalidad infantil, materno infantil,

salud, analfabetismo, educación, contaminación ambiental) se disparan exponencialmente, sin que la dolarización haya podido atenuar la magnitud terminal de la crisis... En diciembre de 2001 la inflación alcanzó 22.5% (¡pero en dólares!), casi diez veces el nivel inflacionario de Estados Unidos” (Steinsleger J., La Jornada. 25-XI-2003). A esta situación habría que añadir la sujeción económica del país a los organismos financieros internacionales que exprimían al país con gravosos intereses: “Veinte y tres años de pago de deuda externa, esto es que entre el 40 y 50% del presupuesto va hacia la banca internacional y los tenedores de papeles de la deuda, añadido a ello la multiplicación de las prácticas de corrupción empezando por las altas esferas oficiales y privadas, que dejan en soletas a aquello que está destinado a la reproducción social del conjunto. El pastel se lo llevan ellos (la banca internacional y los círculos oligárquicos criollos); apenas quedan las migajas para la población” (Hidalgo F.F., 2005).

Ecuador estaba considerado por las Naciones Unidas en 2002 en el lugar 94 (entre 173 países) bajo los criterios señalados en los Índices de Desarrollo Humano, combinando el ingreso, la salud y la educación.

Gutiérrez había adquirido gran notoriedad durante el levantamiento popular, indígena y militar del 2000: mantenía ideología de izquierda, con posiciones en contra el modelo neoliberal en América Latina y una oposición declarada contra la dolarización del país que había sido decretada por Mahuad; expresaba también una gran oposición al proyecto norteamericano de la Alianza para el Libre Comercio de las Américas (ALCA), una oposición a la influencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), y mantenía una fuerte vinculación en sus discursos con los intereses de los indígenas como población mayoritaria en Ecuador. Gutiérrez había sido encarcelado durante 5 meses después del intento del golpe de Estado de enero del 2000; sin embargo, desde entonces se lanzó a la lucha política por la vía electoral con su nuevo partido político, vin-

culándose con casi todos los grupos de izquierda para presentarse como candidato a la presidencia en el 2002, en donde, habiendo votado el 71% de los 8.1 millones de electores inscritos, conquistó el 54% de los votos.

El triunfo del ex coronel solamente fue posible debido al bloque histórico de alianzas políticas que confluyeron para el proceso electoral del 2002; los impulsores de su candidatura fueron el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik Nuevo País y el Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero.

La figura y la campaña electoral de Gutiérrez guardan un parecido –aunque por diferentes razones– con Hugo Chávez en Venezuela y con Lula da Silva en Brasil. El antecedente golpista de Gutiérrez lo asemeja claramente a Chávez; las alianzas con los movimientos indígenas y populares le dan un parecido a Lula. Gutiérrez mantuvo un rechazo verbal frontal al modelo neoliberal latinoamericano, que no ha resuelto ni los problemas del crecimiento económico y mucho menos la desigual distribución de la riqueza social. Muchos analistas encontraban en Gutiérrez un gran parecido con Chávez debido precisamente al antecedente de la insurrección militar y por el hecho de que ambos fueron encarcelados por un tiempo; sin embargo, aunque el ecuatoriano enfatizó en su discurso los intereses de grandes mayorías empobrecidas, no se acercó explícitamente ni quiso asemejarse en público al mandatario venezolano.

Las demandas de los sectores populares para el gobierno de Gutiérrez en Ecuador fueron numerosas debido también a las múltiples promesas hechas durante el período electoral: mejor distribución de la riqueza, reconocimiento del carácter multinacional de Ecuador, reconocimiento de las lenguas indígenas, una educación multicultural, mejores sistemas de salud y medicina integrando los saberes andino y occidental, un presupuesto participativo, compatibilizar legislación nacional con legislaciones indígenas, etc. Uno de sus principales aliados políticos lo fueron

las comunidades indígenas de Ecuador, que se han caracterizado por ser de las más organizadas en toda América Latina.

El gobierno de Gutiérrez pronto empezó a olvidar sus promesas de campaña, especialmente hacia los grupos populares e indígenas. El gobierno de los Estados Unidos, el FMI, las compañías petroleras, los grandes empresarios de Ecuador, los grupos de la derecha, etc. comenzaron a ejercer presión. El candidato derrotado, Noboa, representando al 45% de los votantes que lo apoyaron era un fuerte opositor. En el Congreso había una mayoría parlamentaria contraria a Gutiérrez, que contaba con el ex presidente León Febres Cordero como presidente del parlamento, que había prometido combatir a Gutiérrez en todas las formas políticas posibles. Sin embargo, la confrontación del nuevo presidente no fue con la derecha sino con sus aliados de izquierda que lo habían llevado a la victoria: “asciende a la presidencia con el apoyo del movimiento indígena y partidos de izquierda, para inmediatamente deshacerse de ellos; entonces pacta con el Partido Socialcristiano y más tarde se pasa al otro bando oligárquico con Bucaram y Noboa” (Hidalgo F. F., 2005).

De esta manera, una vez declarado presidente electo y ya en funciones, Gutiérrez empezó a moderar su lenguaje: manifestó que mantendría la relación con el FMI, que respaldaría y fortalecería la dolarización, que intensificaría el ingreso del país al ALCA, que gobernaría por consenso con todos los sectores de la población, que abandonaría el traje militar para no parecerse a Hugo Chávez, y que seguiría dejándole a los norteamericanos la base que tienen en el puerto de Manta, etc. Las contradicciones no se hicieron esperar y, desde el comienzo, a raíz de estos pronunciamientos, se empezó a alterar su vinculación con todos los aliados indígenas y populares, muchos de los cuales habían contribuido a su victoria electoral. El distanciamiento con el movimiento indígena fue bastante claro cuando declaró que ellos eran importantes pero que no constituían el único sector social en Ecuador.

La CONAIE y especialmente el movimiento indígena Pachakutik habían participado activamente y fueron determinantes para la salida de los presidentes Bucaram y Mahuad; también lo fueron para que Gutiérrez ganara la presidencia en el 2002 debido a las promesas del candidato del Partido Sociedad Patriótica 21 de Enero. Quedó claro que Gutiérrez los había utilizado con fines electorales porque su lenguaje izquierdista cambió rápidamente y más su actuación durante el primer año de gobierno, llegando incluso a perseguir a dirigentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en un acuerdo con el presidente colombiano Álvaro Uribe.

De manera particular, Nina Pakari y Luis Macas participaron directamente como funcionarios gubernamentales (ella como Ministra de Relaciones Exteriores y él en el Ministerio de Agricultura) en una alianza que se rompió en agosto del 2003, cuando ya estaba claro que el gobierno no tomaba en cuenta la agenda económica y social que los indígenas habían presentado. Durante el primer año de gobierno, Pakari era desmentida a cada momento por el presidente cuando el Ejecutivo sentía que había declaraciones que podían incomodar a Estados Unidos; al Ministerio de Agricultura se le bajó el presupuesto de tal manera que apenas podía pagar la nómina de sus trabajadores.

Cuando Pakari y Macas renunciaron al gobierno, Gutiérrez se dedicó a combatir abiertamente el movimiento indígena: cooptación de dirigentes, uso discrecional para otorgar recursos a organizaciones populares, favoreciendo a grupos indígenas adversarios de la CONAIE. Fue encarcelado el presidente de ECUARUNARI, una organización miembro de la CONAIE; hubo un intento de asesinato de Leónidas Iza, presidente de la CONAIE. Según Dávalos, un asesor de Macas en el Ministerio de Agricultura, el presidente Gutiérrez utilizó una lógica militar para intentar destruir políticamente la organización indígena, aliándose explícitamente con las fuerzas tradicionales que habían tenido los gobiernos anteriores: "el ejérci-

to, la embajada de Estados Unidos y la oligarquía de Guayaquil" (Cfr. Periódico La Jornada, 26-IV-2005). La campaña tuvo un éxito parcial. Uno de los principales dirigentes de la CONAIE, Antonio Vargas, se quedó con el presidente hasta el final y por ello fue expulsado de la organización.

Cuando vino la "rebelión de los forajidos" ocurrida del 13 al 21 de abril del 2005, los pocos diputados de Pachakutik que quedaban en la asamblea también votaron la destitución de Gutiérrez el 20 de abril del 2005. A diferencia de los levantamientos populares e indígenas que originaron la caída de Bucaram y Mahuad, el movimiento del 2005 para tumbar al presidente de Ecuador tuvo una característica pluriclasista en donde el elemento fundamental fueron las clases medias que gritaron "todos somos forajidos", haciendo mención del calificativo que Gutiérrez había utilizado para llamar a los manifestantes que habían ido a protestar en su domicilio la noche del 13 de abril de ese año.

"La fortaleza de esta *rebelión de los forajidos* estuvo en la participación abierta de sectores sociales diversos que se levantan contra el deterioro del sistema político ecuatoriano, principalmente la corrupción, e impugnan a todos los partidos políticos... barras bravas de grupos deportivos, congregaciones religiosas, asociaciones estudiantiles, clubes juveniles, gremios profesionales, comités barriales, etc... Profesores no agremiados, militares retirados, abogados en *libre ejercicio de la profesión*, madres de familia, jubilados con pensiones de miseria, abuelitas, jóvenes de universidades particulares, desempleados y también sectores económicamente acomodados" (Hidalgo F.F. 2005). La causas del movimiento se encontraban en un rechazo generalizado a la corrupción gubernamental abierta⁶⁶ del gobierno de Gutiérrez y a la percepción sobre la sumisión total que manifestaba hacia el mandatario norteamericano

⁶⁶ Muchos analistas señalan que el regreso del ex presidente Bucaram, perdonado por el Congreso nacional de todos los delitos cometidos, fue lo que colmó la paciencia de los ecuatorianos.

George Bush. “Gutiérrez armó los pilares de su régimen sobre la base de un alineamiento absoluto con la administración Bush, traicionando a los grupos indígenas y de izquierda que permitieron sus triunfos electorales. En su primer viaje a Washington, en el 2003, se auto-proclamó como *el mejor aliado de los Estados Unidos*, en la reunión de presidentes de Guadalajara, en el 2004, se refirió a dicha potencia como *nuestro hermano mayor*. Educado en las escuelas de entrenamiento del Pentágono, se convirtió en una pieza incondicional a la estrategia del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos para la región andina” (Hidalgo F.F, 2005).

Bastó que una radiodifusora alternativa de comunicación popular, Radio La Luna, llamara a una movilización a un *cavero-lazo* el miércoles 13 abril 2005 a las 9 de la noche para que salieran a la calle numerosos ciudadanos que se autodenominaron “forajidos” y que empezaron a levantar sus consignas: “Vamos a ver quien lleva la batuta, el pueblo ecuatoriano o Lucio hijo de puta”; “Vamos ecuatoriano que esta noche, lo vamos a botar”; “No queremos y no nos da la gana, de ser una colonia norteamericana”; “Que se vayan todos, primero el dictador”; “La democracia no es de espectadores, es de actores”, etc. Entre los *forajidos* también había aparecido la personalidad de Rafael Correa, quien posteriormente jugaría un papel importante como ministro de finanzas de un gobierno posterior, el de Alfredo Palacio, pero con postulados antineoliberales y reaccionando contra las imposiciones de los organismos financieros internacionales.

Después de otro gobernante que no pudo terminar su período como jefe de gobierno, fue nombrado presidente el médico Alfredo Palacio González, quien había sido Ministro de Salud en el gobierno de Sixto Durán y que había aceptado acompañar a Lucio Gutiérrez como compañero de fórmula en las elecciones del 2002, postulados por la Sociedad Patriótica; Palacio se había distanciado de Gutiérrez desde diciembre del 2005 cuando el mandatario había destituido a los jueces de la

Suprema Corte de Justicia para reemplazarlos con amigos en lo que él llamó una “ruptura constitucional”, y fue juramentado para el puesto del poder ejecutivo el 20 de abril 2005 y así se desempeñó hasta el término del mandato, el 15 de enero del 2007.

El gobierno de Palacio quiso retomar declarativamente algunos de los postulados iniciales del programa de Lucio Gutiérrez, pero no tuvo tiempo para implementar cambios trascendentes. Su labor se tradujo en la preparación de la transición al siguiente gobierno.

Palacio había tenido como asesor, cuando fungió como vicepresidente, al economista Rafael Correa. Cuando Palacio llegó al poder ejecutivo, lo nombró Ministro de Economía y Finanzas. Sin embargo, dadas sus críticas radicales al modelo económico, Correa solamente duró cuatro meses en funciones; renunció señalando las presiones del Banco Mundial y del FMI a Ecuador para que siguiera aceptando las recetas clásicas de los programas de ajuste estructural. Con ello, Correa pudo presentarse abiertamente al proceso electoral como un candidato ciudadano independiente.

Las elecciones presidenciales de 2006

Para las elecciones presidenciales del 13 de octubre del 2006 se habían registrado 13 candidatos, pero ninguno parecía tener una ventaja clara en las encuestas como para definir todo en la primera vuelta electoral. El candidato León Roldós⁶⁷, de Izquierda Democrática, lidereaba en los sondeos del mes de septiembre pero apenas con una preferencia entre 24 y 26%. Según la encuestadora privada Cedatos, Cinthya Viteri, diputada en el congreso y perteneciente al ala derecha del Partido Social Cristiano se encontraba en segundo lugar con un 17% de preferencias mientras que el economista Rafael Correa,

⁶⁷ León era hermano de Jaime Roldós, quien había sido presidente de Ecuador de 1979 a 1981 y que había muerto en un accidente de aviación.

postulado por Alianza País, solamente contaba con el 12%. En cuarto lugar de los sondeos se encontraba el millonario empresario Álvaro Noboa, del Partido Renovador Institucional de Acción Nacional (PRIAN) con solamente un 9% de intención del voto. Hay que recordar que Noboa ya había competido y perdido con Jamil Mahuad en 1997 y con Lucio Gutiérrez en el 2002. En esa ocasión, el movimiento indígena Pachakutik también presentaba como candidato a la presidencia a uno de sus líderes, Luis Macas.

De manera sorpresiva en contraste con los sondeos de septiembre, el resultado de las elecciones del 15 de octubre 2006 mostraba a Álvaro Noboa como puntero mientras que el segundo lugar lo conseguía Rafael Correa y el tercero le llegaba a Gilmar Gutiérrez, hermano del presidente depuesto el año anterior. El autonombrado izquierdista León Roldós, muy nombrado en los sondeos, cayó hasta el cuarto puesto. El abstencionismo se había elevado al 28.5%, a pesar de que el voto es obligatorio en Ecuador: 6,617,167 ecuatorianos fueron a votar y dejaron 315,3376 boletas en blanco mientras que 775,694 votos fueron declarados nulos.

Independientemente de quien ganara luego la presidencia, los puestos en el Congreso se definieron en la primera ronda, otorgando una mayoría a los partidarios de Noboa. El PRIAN se proyectaba como la primera fuerza con 27 curules; se formaría un bloque con el PSP, afín a Noboa, para tener un bloque común fuerte de 48 diputados. Por otro lado, la Izquierda Democrática tendría 13 posiciones. El antiguo partido fuerte en el congreso, el conservador PSC, caería a la cuarta posición con 12 asientos. La organización indígena Pachakutik solamente ganaría 7 asientos. El PRE dirigido por el ex presidente Bucaram logró solamente 6 diputados. Las proyecciones daban tres diputados al MPD y dos a la UDC. Los otros 9 asientos se repartirían en diferentes pequeñas agrupaciones (LADB. NotiSur Nov 10, 2006). En el conjunto de los 100 diputados totales, se perfilaban como un bloque mayoritario las posicio-

nes afines a Álvaro Noboa. En protesta contra la flagrante corrupción en el congreso, Correa había realizado un movimiento arriesgado: su organización no había propuesto candidatos para ser legisladores.

La segunda vuelta electoral, entonces se hizo indispensable, puesto que según las leyes ecuatorianas, para ser declarado presidente en la primera vuelta, el candidato debe haber alcanzado el 50% de la votación o tener el 40% y una ventaja de 10 puntos porcentuales sobre el siguiente contendiente. Ninguna de estas cosas sucedió.

Resultados elecciones presidenciales 15 octubre 2006

Partido	Candidato	Primera vuelta
RENOVADOR INSTITUCIONAL DE ACCIÓN NACIONAL	Álvaro Noboa	26.83% 1,464,251 votos
ALIANZA PAIS	Rafael Correa Delgado	22.84% 1,246,333 votos
PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA 21 DE ENERO	Gilmar Gutiérrez	17.42% 950,895 votos
IZQUIERDA DEMOCRÁTICA	León Roldós Aguilera	14.84% 809,754
SOCIAL CRISTIANO	Cynthia Viteri	9.63% 525,728
PACHAKUTIK	Luis Macas	2.19%
ROLDISTA ECUATORIANO	Fernando Rosero	2.08%
MOVIMIENTO DE LA REIVINDICACIÓN DEMOCRÁTICA	Marco Proaño Maya	1.42%
MOVIMIENTO POPULAR DEMOCRÁTICO	Luis Villacis	1.33%
CONCENTRACIÓN DE FUERZAS POPULARES	Jaime Damerval	0.46%

Partido	Candidato	Primera vuelta
MOVIMIENTO ALIANZA TERCERA REPÚBLICA ALBA	Marcelo Larrea Cabrera	0.43%
MOVIMIENTO REVOLUCIONARIO DE PARTICIPACIÓN POPULAR	Lenin Torres	0.28%
INTEGRACIÓN NACIONAL ALFARISTA	Carlos Sagnay de la Bastida	0.25%

Segunda vuelta electoral: 26 noviembre 2006

ALIANZA PAÍS	Rafael Correa Delgado	56.67% 3,517,635 votos
PRIAN	Álvaro Noboa	43.33% 2,689,418
Total Votantes: 9,165,125	Abstención: 25.36%	

Fuente: Tribunal Supremo Electoral de Ecuador (*www.tse.gov.ec*)

Los dos candidatos punteros tenían que enfrentarse el 26 de noviembre del 2006, en una intensa campaña donde estaba muy claro el contraste entre ambos, perfilando dos imaginarios de gobierno totalmente distintos para la población. Por un lado, estaba Noboa, de 55 años, el hombre más rico de Ecuador con una posición totalmente favorable a los Estados Unidos; por el otro, se encontraba Correa, de 43 años, un economista crítico del modelo neoliberal impuesto por los organismos financieros, crítico abierto del gobierno norteamericano de G. Bush⁶⁸ y admirador de la figura de Hugo Chávez.

⁶⁸ Correa había declarado que "Bush es un presidente tremendamente torpe que ha hecho mucho daño a su país y al mundo"; sin embargo, hacía muy bien una distinción: "Una cosa es lo que pienso del señor Bush y otra lo que pienso del pueblo norteamericano, al cual quiero mucho y con el cual

Los enfrentamientos verbales fueron violentos. Noboa acusaba a Correa de comunista, de chavista, de populista, de amigo de Cuba, de intentar traer el caos a Ecuador; Correa acusaba a Noboa de haber evadido impuestos en sus 110 empresas y de utilizar mano de obra infantil en sus plantaciones bananeras y cafetaleras. Noboa se presentaba públicamente con su Biblia en mano y dispuesto a regalar dinero, medicinas, computadoras, etc. y ofreciendo empleos, vivienda, salud y servicios; obtuvo además el apoyo explícito del PRE. Correa no tenía experiencia en política pero manifestaba claramente sus posiciones: quería renegociar los contratos con las compañías petroleras para que dejaran más beneficios a Ecuador; se oponía a un pacto de libre comercio con los Estados Unidos; no les quería renovar el uso de la base militar de Manta; buscaba apoyo para disolver el Congreso nacional y sustituirlo por una Asamblea Constituyente; quería enfrentar con posiciones más nacionalistas las presiones del BM y del FMI; se refirió a los insurgentes de las FARC de Colombia no como terroristas sino como guerrilleros y se negaba a apoyar el plan Colombia del gobierno norteamericano. Roldós, de Izquierda Democrática estaba más cerca de las posiciones de Alianza País que de las del PRIAN y por ello le ofreció su apoyo a Correa en la segunda vuelta.

El resultado final del 26 de noviembre contrastó con las predicciones de los sondeos pero fue bastante claro, mostrando la ventaja de Correa sobre Noboa con 13% de la votación, que significaban 828,217 votos más que su contrincante. Aunque Noboa había ganado la primera vuelta electoral, la población votante tuvo temor de darle el poder gubernamental al hombre más rico de Ecuador y que representaba, además, la vieja guardia de los políticos; la población, por el contrario, le dio su confianza a las promesas de cambio de Correa con el fin de renovar las instituciones del país y remover toda la vieja

vivi cuatro años” (El mundo.es internacional. 26-XI-2006), refiriéndose a su etapa de estudios de doctorado en economía en la University of Illinois.

guardia de políticos tradicionales. Para Noboa era su tercera derrota en sus aspiraciones presidenciales: así le había ocurrido frente a Jamil Mahuad y frente a Lucio Gutiérrez. El reconocimiento de la victoria de Correa fue casi inmediato aunque el Tribunal Supremo Electoral lo confirmó hasta el 4 de diciembre 2006.

En el contexto internacional latinoamericano, no cabía duda, al final del 2006, el fortalecimiento de lazos ideológicos con gobiernos como el de Castro en Cuba, el de Chávez en Venezuela (reelección), el de Lula en Brasil (reelección), el de Evo Morales en Bolivia, el de Ortega en Nicaragua, e incluso con Tabaré Vázquez en Uruguay, Kirchner en Argentina y Michelle Bachelet en Chile.

Al interior del país, sin embargo, los retos de Correa eran enormes de acuerdo a las promesas realizadas: renegociar la deuda con los organismos internacionales⁶⁹, implementar programas sociales para la población desprotegida, reformar la Constitución a través de una asamblea constituyente, no renovar la base militar norteamericana en Manta, volver a integrarse a la OPEP a la que Ecuador⁷⁰ había dejado en 1993. Todo ello se miraba muy difícil, especialmente con una mayoría parlamentaria en su contra, que había sido decidida en la primera ronda electoral.

La segunda ronda electoral del 26 de noviembre 2006 incluyó también preguntas sobre tres temas de referendium, que habían sido propuestas por el presidente Alfredo Palacio: sobre mayor inversión en salud, mayor inversión en educación y sobre repartición del ingreso a partir de la extracción del pe-

⁶⁹ Correa había amenazado con una moratoria de pagos si la banca internacional no aceptaba bajar a la mitad los servicios de la deuda. El 26 de noviembre 2006 afirmó en una entrevista para la red de televisión Ecuavisa: “No me importa si el riesgo del país sube debido a la preocupación de los especuladores acerca de nuestra capacidad de pago de la deuda... El mayor riesgo del país que más me preocupa son los niños sufriendo”.

⁷⁰ El país tiene buenas reservas petroleras y produce 535,000 barriles de petróleo al día.

tróleo. Las tres preguntas recibieron un sí mayoritario: 67.08% aprobaron la inversión en salud (6.16% se opuso, 18.99% quedó en blanco y 7.77 fueron declarados nulos); 66.12% favorecieron la inversión en educación (7.67% se opuso, 17.99% quedó en blanco y 8.22% fueron declarados nulos); el 64.23% apoyó el mayor uso de recursos petroleros para gasto social (8.24% se opuso, 19.52% quedó en blanco y 8.01% fueron declarados nulos) (NotiSur, Dec 8, 2006).

Consideraciones finales

Rafael Correa y su compañero de fórmula Lenín Moreno tomaron posesión como presidente y vicepresidente el 15 de enero del 2007. La organización que lo postuló Alianza País había sido apoyada durante la segunda ronda electoral por la Izquierda Democrática, el Partido Socialista Frente Amplio, el movimiento Alternativa Democrático, el movimiento Nuevo País, el Movimiento Poder Ciudadano y el movimiento indígena Pachakutik. Sus temas de campaña fueron retomados en su discurso de toma de posesión y expresados en cinco ejes de acción para su gobierno: la revolución constitucional, la lucha contra la corrupción, la revolución económica, la revolución en educación y salud, y el rescate de la dignidad, soberanía y búsqueda de la integración latinoamericana.

Los personajes históricos nombrados en su discurso de toma de posesión fueron los siguientes: Simón Bolívar (el más mencionado) y Manuela Sáenz, el general Rafael San Martín, el maestro Simón Rodríguez, el poeta Pablo Neruda, el General Eloy Alfaro impulsor del liberalismo, el pensador crítico del autoritarismo Juan Montalvo, el poeta cubano José Martí, el Papa Juan Pablo II, el poeta negro Antonio Preciado, el precursor de la independencia Francisco J. Eugenio Espejo, el luchador norteamericano por los derechos civiles Martin Luther King.

Su propuesta inmediata como jefe de gobierno, aparte de rebajar el salario a la mitad de todos los altos funcionarios de

estado, estaba enmarcada en el eje de la revolución constitucional y fue la decisión de preparar la formación de una Asamblea Constituyente. Debido a que no contaba con un apoyo mayoritario en el congreso y a que la misma propuesta significaba una anticipada disolución del organismo legislativo, logró que los legisladores –mediante múltiples presiones y manifestaciones populares– aprobaran un referendun que se realizó el 15 de abril del 2007: el resultado fue un apoyo mayoritario del 81.7% de los votantes (frente a un 12.5% que optaron por el NO. Se logró entonces la aprobación de una asamblea especial de 130 ciudadanos que se encargarían de redactar la propuesta de una nueva constitución. Fue un proceso complejo y conflictivo, pero la población que había elegido a Correa en noviembre del 2006 también le expresaron su aprobación para reformar la Carta Magna. Los miembros de la asamblea constituyente tendrían seis meses para redactar su propuesta de redacción, la cual tendría que ser, de nuevo, sometida a otro referendun en relación a su contenido. Al mismo tiempo, Correa anunciaba que Ecuador había ya saldado sus cuentas con el FMI y que, con ello, ya no tendría nada que ver ni quería escuchar más sobre esa burocracia internacional; de entonces y hacia adelante “económicamente, vamos a dejar atrás ese desastroso modelo neoliberal” (LADB, NotiSur, April 20, 2007).

Más de un año después y en medio de controversias entre el legislativo y el ejecutivo, se realizó, el 28 de septiembre del 2008, el referendun sobre el contenido de la nueva constitución propuesta. Y de nuevo el triunfo del SI fue claro al obtener al día siguiente el 63.97% de los votos mientras que el NO solamente logró el 28.11%. En Ecuador, entonces, sigue la gran esperanza del cambio con el proyecto de Correa tendiente a un post-neoliberalismo. Los enemigos del proyecto fueron visiblemente identificados: la tradicional oligarquía ecuatoriana especialmente la de Guayaquil, la jerarquía de la Iglesia Católica, la vieja partidocracia y los hilos estadounidenses dentro del país.

Según el comunicador social Luis Angel Saavedra, algunas propuestas esenciales de la nueva constitución son las siguientes: “La nueva constitución comienza con el reconocimiento de que el pueblo tiene una ancestral diversidad social y que es necesario incorporar sus visiones cósmicas dentro de la estructura del estado. Por ello, la constitución reconoce, por ejemplo, que la naturaleza tiene inalienables derechos y define a la naturaleza no sólo como fuente de recursos sino como la Pachamama (madre tierra) *donde la vida se reproduce y se desenvuelve*. La naturaleza, entonces, tiene el derecho a *existir, persistir, mantener y regenerar sus ciclos de vida, funciones y procesos evolutivos*. Sobre esta base de derechos de la naturaleza, la Constitución llama a construir un modelo de desarrollo social y solidaridad en donde los seres humanos, en armonía con la naturaleza se constituyen como objeto de la política pública, dejando a un lado el supuesto protagonismo del mercado como eje de la economía. Esta nueva visión prioriza la inversión social y por eso la nueva Constitución establece la obligación del estado a satisfacer la demanda de ciertos derechos como la seguridad social universal de los trabajadores y de la gente que está desempleada y como la educación gratuita hasta el nivel de universidad. Se reconoce el derecho humano al agua, y su acceso debe ser garantizado y, por ello, se previene la privatización o el embargo de este recurso. También se reconoce la plurinacionalidad del Ecuador. La Constitución declara que Ecuador es un territorio de paz, libre de bases militares extranjeras, rechazando la imposición de bases militares que algunos países tienen en el territorio de otros. El documento también establece un sistema de protección de los migrantes, protegiendo el derecho de los ecuatorianos que han emigrado y los derechos de aquellos que han emigrado hacia Ecuador, para los cuales se establecen derechos iguales” (LADB. NotiSur, Oct. 10, 2008).

Siguiendo todas las reglas de la democracia representativa, el proyecto de Rafael Correa en Ecuador –no sin grandes dificultades– ha estado avanzando sólidamente. Se ha dado un

respaldo mayoritario a su proyecto de transformación de la economía y sociedad ecuatoriana, manifestando un rechazo al proyecto neoliberal que se había impuesto en las últimas décadas. El rechazo a dicho modelo estuvo claramente expresado en su campaña y en el discurso de toma de posesión en enero del 2007: “la política económica seguida por Ecuador desde finales de los ochenta se enmarcó fielmente en el paradigma de desarrollo dominante en América Latina, llamado *neoliberalismo*, con las inconsistencias propias de la corrupción, necesidad de mantener la subordinación económica y exigencia de servir la deuda externa. Todo este recetario de políticas obedeció al llamado *Consenso de Washington*, supuesto consenso en el que, para vergüenza de América Latina, ni siquiera participamos los latinoamericanos... el nefasto ciclo neoliberal ha sido definitivamente superado por los pueblos de nuestra América” (Correa R., 15-I-2007); el simplismo del libre comercio es una receta inservible, la cual ni siquiera la aplican los países que promueven su doctrina. Pero el reto actual es crear una alternativa, el nuevo modelo de desarrollo que apenas se está enunciando, pero en el cual Ecuador está proponiendo nuevos caminos: “Ecuador y Latinoamérica deben buscar no sólo una nueva estrategia, sino también una nueva concepción de desarrollo, que no refleje únicamente percepciones, experiencias e intereses de grupos y países dominantes; que no someta sociedades, vidas y personas a la entelequia del mercado; donde el Estado, la planificación y la acción colectiva recuperen su papel esencial para el progreso; donde se preserven activos intangibles pero fundamentales como el capital social; y donde las aparentes exigencias de la economía, no sean excluyentes y, peor aún, antagónicas del desarrollo social” (Correa R. 15-I-2007). En Ecuador ya no solamente son deseos y utopías sino un esfuerzo gubernamental con apoyo democrático que se puede traducir en el desarrollo alternativo por el que luchan muchos latinoamericanos.

6.5 NICARAGUA: el regreso del sandinismo

El 25 de febrero de 1990, de manera sorpresiva para muchos observadores nacionales e internacionales, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) fue derrotado en el proceso electoral presidencial; la aspirante Violeta Barrios de Chamorro postulada por la Unión Nacional Opositora (UNO) conquistó el triunfo con el 54.74% de la votación (777,552 votos) frente al 40.82% logrado por el Frente. Fue un triunfo contundente porque también los opositores lograron el 73% de las alcaldías del país y, dentro de los 90 escaños en la Asamblea Nacional, la UNO logró 51 frente al 39 del FSLN.

Una revolución que había derrocado en 1979 la dictadura de la familia Somoza, la más prolongada en Latinoamérica, permaneció en el gobierno del país durante 11 años: primero gobernó una junta colectiva de gobierno, luego lo hizo Daniel Ortega, quien fue electo como presidente en 1984 para un período de 6 años. Pero el gobierno sandinista acató las leyes electorales y dejó en 1990 la dirección del gobierno a los opositores.

Mucho se ha analizado sobre las razones por las que perdió el gobierno del FSLN en 1990 habiendo sido uno de los movimientos más populares en el país. No solamente había sido la larga lucha contra la dictadura sino también las numerosas acciones sociales de gobierno reconocidas nacional e internacionalmente como la exitosa campaña de alfabetización bajo la dirección de Fernando Cardenal. Entre las diversas razones, una de las más importantes ciertamente fue la guerra provocada por la intervención norteamericana; la belicosa administración del presidente republicano Ronald Reagan enfocó lo central de su política exterior en el área centroamericana, visualizando especialmente los países de Nicaragua y El Salvador como los principales destinatarios de sus apoyos económicos, políticos y militares: en el primer caso, favoreciendo todas las actividades que pudieran estar en contra del gobierno nicaraguense; en el segundo caso, brindando todos los recursos al gobierno salva-

doreño para luchar contra la insurgencia del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Para Nicaragua se trató de una dolorosa guerra civil puesto que a nivel interno surgieron los grupos de la contra-revolución, los llamadas “contras” a nivel interno o “luchadores por la libertad” por el gobierno norteamericano. En 1984, Daniel Ortega pudo conseguir la presidencia del país a través de un proceso electoral con amplio apoyo de la población pero en donde la oposición se negó a participar. Sin embargo, el tema de la guerra se hizo muy presente durante la campaña electoral de 1989-90 porque, de seguir el FSLN, podía preverse una continuación de la confrontación bélica. La población nicaraguense optó electoralmente por una oposición que se había aglutinado en contra de los sandinistas: 14 partidos que habían encontrado en la señora Violeta Barrios viuda de Chamorro un símbolo de su lucha. Y la UNO conquistó la presidencia de Nicaragua aunque de manera inmediata con el nuevo gobierno la coalición se esfumó en sus contradicciones internas: la señora Violeta gobernó sin un proyecto determinado aliándose con quien pudo en cada momento, menos con los sandinistas. Pero se logró lo fundamental en el país: desmantelar la confrontación armada a través de un complejo y difícil proceso que dio origen a nuevas denominaciones como “recontras”, “recompas”, “revueltos”, que se referían a los nuevos grupos surgidos de la desmilitarización del país y a los cuales se les habían prometido múltiples apoyos para su reincorporación a la vida política (promesas que muy poco se cumplieron).

16 años después de la derrota, y en el cuarto intento⁷¹ como candidato a presidente de Daniel Ortega, el FSLN ha vuelto al gobierno. Pero ha sido un proceso complejo que trataremos de analizar en este capítulo.

⁷¹ Se trata en realidad de un quinto intento de Daniel Ortega de acceder a la presidencia de Nicaragua, si contamos también la victoria electoral del Frente en 1984, aunque en esa ocasión, la oposición rechazó participar.

Segunda derrota electoral de los Sandinistas en 1996

En el modelo económico, el período de Violeta Chamorro se caracterizó por un regreso a la cobija que ofrecía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, aunque en la práctica el gobierno norteamericano dejó de interesarse en Nicaragua y no le ofreció recursos para su desarrollo como sí los había canalizado hacia la contrarrevolución. En el nivel político, la oposición se había unificado contra el sandinismo pero, a la hora de gobernar, ya no hubo unidad sino una pluralidad de grupos dentro del gobierno. “El cambio de régimen iniciado en 1990 con la victoria de Violeta Barrios de Chamorro no se produjo en el contexto de un consenso social sobre la manera de organizar la sociedad después del experimento revolucionario. El marco normativo de la reforma económica neoliberal impulsada por el gobierno de Barrios de Chamorro fue prácticamente impuesto por los organismos financieros internacionales que apoyaban la transición” (Pérez-Baltodano A., 2006). Se vino un período de privatización de la economía con decaimiento de los anteriores programas sociales y Nicaragua, a pesar de estabilizar el nivel macroeconómico de la inflación, en 1996 se encontraba entre los países más pobres de América Latina (con un ingreso promedio de 435 dólares por habitantes) y con altos niveles de delincuencia debido a que todos los desmovilizados no encontraban lugares de inserción en la actividad económica institucional del país; los cinturones de miseria se agrandaron alrededor de la capital Managua y comenzó un movimiento masivo de migración ilegal hacia el país vecino del oriente, Costa Rica, considerado como un fuerte polo de atracción en su economía y modo de vida.

El nuevo proceso presidencial electoral de 1996 se realizó con un nuevo realineamiento de grupos políticos en donde el FSLN se había convertido en el principal partido de oposición

al gobierno, a pesar de las propias deserciones y divisiones⁷² que sufrió en esa década. Se presentaron 23 candidatos a la presidencia: 18 estuvieron con el respaldo de un solo partido y los otros 5 con apoyo de alianzas entre diversas organizaciones. Sin embargo, la contienda se definió alrededor de dos posiciones fundamentales: la de Daniel Ortega que volvía a contender bajo las siglas del mismo FSLN, y la de Arnoldo Alemán con una ideología de derecha radical ligada a antiguos personajes del somocismo a través de una coalición que se presentó como Alianza Liberal. Siendo los principales contendientes, los sondeos electorales los colocaban casi a la par en las preferencias de la población. Fue probablemente la intervención de la Iglesia Católica a favor de Alemán e influyendo miedo en la población por el temor de volver a la situación de los 80s lo que determinó una segunda derrota para el FSLN.

De cualquier manera, el Frente se iba transformando al abandonar posturas radicales para intentar presentarse como una alternativa socialdemócrata. Iba dejando las posturas de confrontación abierta con los Estados Unidos; postulaba el respeto a la propiedad privada y fue acompañado por miembros de los grandes productores ganaderos; quiso atraer a los antiguos “contras” ofreciéndoles puestos en el futuro gobierno; insistía sobre todo en la reactivación de los programas sociales enfocados hacia los sectores más empobrecidos del país. El FSLN estuvo casi a la par de Arnoldo Alemán en los últimos días de la jornada electoral a pesar de que Mons. Obando y Bravo advirtió a la población sobre los lobos que se presentaban con piel de ovejas.

La Alianza Liberal jamás ocultó sus vínculos con los grandes empresarios del país postulando los intereses de la iniciativa privada como la parte importante de su programa de gobierno; logró incluir a importantes sectores de la clase media

⁷² Una de ellas fue la de Sergio Ramírez Mercado, quien había sido vicepresidente en el gobierno de Daniel Ortega pero que se separó del Frente y quiso formar su propia agrupación, el Movimiento Renovador Sandinista.

relacionados con el comercio y a propietarios cuyos bienes habían sido confiscados por la Reforma Agraria de los sandinistas; quería dar facilidades para atraer a los exilados nicaraguenses en los Estados Unidos; prometía una mayor transformación del ejército nacional para quitarle todo vestigio de la era gubernamental de los sandinistas. La alianza con la Iglesia católica fue estratégica porque el mismo Obando instó a votar por la Alianza Liberal.

Días antes de las elecciones del 20 de octubre de 1996, ambas fuerzas realizaron su cierre de campaña con grandes movilizaciones de la población. Alianza Liberal logró conjuntar a cerca de 80 mil personas en la Plaza de la República mientras que el sandinismo llenó la Plaza Juan Pablo II con 150 mil gentes.

Hasta el 8 de noviembre de 1996, el Consejo Supremo Electoral ofreció públicamente los resultados completos: Alianza Liberal había conseguido 904,908 votos (51.03%) mientras que el FSLN solamente había logrado 669,443 sufragios (el 37.65%. En el Congreso, Alianza se quedaba con 42 escaños mientras que el Frente con 36 legisladores. Las otras 15 curules del Congreso (son 93 legisladores en total) se distribuyeron entre los 11 partidos minoritarios que pudieron permanecer con reconocimiento legal. Según la ley electoral nicaraguense, además, si el candidato puntero obtenía más del 45% de la votación no se necesitaba ir a una segunda ronda y por ello Alemán fue declarado inmediatamente como presidente de la República, a pesar de las acusaciones de fraude denunciadas por el FSLN, que luego fueron atestiguadas por otras fuentes: “el proceso de votaciones del 20 de octubre se vio atravesado por un conjunto de anomalías o acciones fraudulentas localizadas en varios municipios” (Envío. Nov-Dic 1996). De cualquier manera, el triunfo de Alemán poco a poco fue siendo reconocido por los observadores nacionales e internacionales. La campaña del temor sembrada por la Iglesia católica y numerosos dirigentes empresariales pudo funcionar

de nuevo para impedir el retorno del Frente a la Presidencia y por ello Arnoldo Alemán tomó posesión del puesto el 10 de enero de 1997.

El gobierno de Alemán y las elecciones del 2001

“En las elecciones de 1996, la alianza antisandinista liderada por Arnoldo Alemán y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) obtuvo una clara victoria sobre el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y su candidato, Daniel Ortega. Contó con el abierto apoyo de Estados Unidos y de la Iglesia Católica nicaraguense. Entre 1997 y 2002, Alemán mantuvo el modelo económico adoptado por el gobierno de Barrios de Chamorro e inició uno de los períodos más corruptos en la historia de Nicaragua” (Pérez-Baltodano A., 2006).

La confrontación de fuerzas fue abierta en los primeros 100 días de gobierno de la Alianza Liberal, especialmente a partir de las políticas económicas de Alemán. En el caso específico de las tierras confiscadas a grandes propietarios por el gobierno del Frente en los años 80s, el gobierno de Violeta Chamorro había intentado procesos de conciliación proponiendo determinadas indemnizaciones; sin embargo, el gobierno de Alemán quería simplemente devolver las tierras a sus antiguos dueños lo que ponía en peligro numerosos títulos de propiedad de los campesinos. El FSLN se manifestó en las calles de todo el país como gran fuerza de oposición, a tal punto que en el mes de abril se abrió un período de negociación: compartir el poder era la propuesta de Daniel Ortega debido a que eran las principales fuerzas políticas del país y con ello los temas más importantes de la política nacional debían decidirse conjuntamente.

La política real se impuso y Alemán pidió al poder legislativo suspender la tentativa de hacer ilegales los títulos de propiedad repartidos durante el gobierno sandinista y luego junto con Ortega firmaron públicamente un pacto en donde se crearon diversos comités conjuntos entre sandinistas y gobierno

para analizar las propiedades confiscadas, el transporte, problemas de producción y programas sociales. Con ello terminaron las movilizaciones y se instaló una especie de cogobierno, que fue visto con mirada crítica por sectores de ambos bandos. Muchos criticaron a Alemán por acceder y subordinar el gobierno a las demandas del Frente; muchos criticaron a Ortega por colaborar con un gobierno catalogado como oligárquico. Sin embargo, el pacto del 18 de abril de 1997 fue el inicio de una nueva época en donde más que la confrontación violenta de fuerzas se prefirió la continua negociación política. “El FSLN empezó a colaborar con el PLC. Utilizando su aplastante mayoría en la Asamblea nacional, liberales y sandinistas terminaron repartiéndose el poder en la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, el Consejo Superior de la Contraloría, la Procuraduría de Derechos Humanos y la Superintendencia de Bancos. El pacto, además, hizo posible la aprobación de una ley que legalizó la piñata y dejó abiertas las puertas para la introducción de una reforma constitucional que perpetuaría el poder de los dos grandes partidos” (Pérez-Baltodano A., 2006).

El terreno para la negociación nunca fue fácil dado el contexto de confrontación entre ambas fuerzas y sobre todo la gran diferencia en asuntos como las tierras confiscadas por el gobierno en los 80s y otros temas como el financiamiento de la educación pública. El tema de las tierras confiscadas volvió de hecho a la postura que había tenido Violeta Chamorro: el estudio caso por caso para examinar dónde habían ocurrido abusos pero en general ofreciendo indemnización ⁷³ en la mayoría de los casos en que la tierra se había repartido a pequeños propietarios. Pero siempre había inconformes y, en este caso, eran los antiguos propietarios, la “Federación de Confiscados”, que se habían imaginado la nulificación de todas las

⁷³ De hecho, se creó una Oficina de Cuantificación de Indemnizaciones con el objeto de medir en cada caso el derecho de los antiguos propietarios a ser retribuidos por el valor de las tierras confiscadas.

tierras confiscadas⁷⁴ a partir del triunfo de la revolución en 1979. Desde 1999, integrantes de la familia Somoza y grandes propietarios de tiempos de la dictadura habían formado el Frente Democrático Nicaraguense, manifestando intereses explícitos de participar de nuevo en la vida política. Como varios nicaraguenses somocistas se habían asilado en los Estados Unidos y habían devenido ciudadanos norteamericanos, sus exigencias adquirieron relieve internacional porque tenían el apoyo del gobierno norteamericano. El propio Vicepresidente Enrique Bolaños se apartaba de las posiciones de Alemán al negarse a otorgar cualquier cosa que significara concesión a los sandinistas.

En otro nivel, hay que señalar que el gobierno de Alemán siempre estuvo acusado de corrupción y no solamente desde que asumió la presidencia sino también desde que había sido Alcalde de Managua. Particularmente, después del azote del huracán Mitch en 1998 sobre gran parte de Nicaragua y Honduras, el presidente fue acusado de malversar los fondos de ayuda provenientes de organismos internacionales. Por ello, existía la batalla del Contralor General en 1999, Agustín Jarquín, para que el presidente declarara el origen de todos sus bienes, debido que consideraba que el patrimonio personal de Alemán había crecido en 900% desde su período como alcalde de Managua hasta el momento en que se desempeñaba en el poder ejecutivo. El presidente consideraba que, según la ley, solamente debía dar cuenta de sus bienes al momento de dejar el puesto. En esta disputa, es interesante notar que la demanda de Jarquín no tuvo el apoyo del FSLN; si bien no lo atacaron directamente, nunca se pusieron de su parte, especialmente cuando Jarquín en vez de acusador resultó acusado de fraude

⁷⁴ Incluso hubo algunos familiares de Somoza Debayle que pidieron que se les restituyeran 340 propiedades, una de las más importantes era un terreno donde se había construido la nueva Catedral de Managua. Dicho terreno la presidente Violeta Chamorro lo había donado incondicionalmente a la iglesia católica.

en el mes de noviembre de 1999; inclusive, el Frente apoyó una ley para quitar facultades a la figura de contralor independiente. Un juez ordenó el arresto de Jarquín el 10 de noviembre: lo sacaron de su oficina y lo metieron en la cárcel.

El arresto de Jarquín puso de nuevo a luz pública las críticas al pacto de cogobierno entre el Partido Liberal Constitucionalista de Alemán y el FSLN de Daniel Ortega. Las comisiones se seguían reuniendo para discutir por ejemplo la propuesta de reforma a la contraloría con un número mayor de integrantes, o el aumento de mayor número de asientos en la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Supremo Electoral, pero la atención pública estaba centrada en la ambivalencia del FSLN para el caso de Jarquín encarcelado y sobre el enriquecimiento ilícito de Alemán. A pesar de ello, el pacto llevó a la asamblea de diputados una serie de propuestas de reformas constitucionales en el mes de diciembre. Estas fueron aprobadas con 74 votos a favor y 17 en contra con dos abstenciones. Entre los que votaron en contra hubo 4 sandinistas.

Las reformas aprobadas fueron las siguientes: un asiento permanente en la asamblea legislativa para los presidentes y vicepresidentes salientes; se reducía el porcentaje de votación de 45 a 40% para ser declarado presidente en la primera vuelta de elección presidencial para el candidato que llevara la ventaja; creación del Consejo Superior de la Contraloría compuesto por 5 miembros (2 puestos para los liberales, 2 por el FSLN y uno por acuerdo común de ambos) en sustitución del contralor independiente; establecer el requerimiento de que los funcionarios gubernamentales y magistrados dejen su puesto un año antes de la competición para el Congreso; un incremento del número de magistrados en la Suprema Corte de Justicia (de 10 a 12) y en el Consejo Supremo Electoral (de 5 a 7). Esto fue otra manera más de materializar el cogobierno que se había establecido entre liberales y sandinistas.

En la opinión pública, sin embargo, la situación no iba bien para el gobierno a tal punto que hubo presiones de organis-

mos internacionales como la misma Unión Europea que criticaban la falta de gobernabilidad en el país. El mismo FMI y Banco Mundial amenazaban con no incluir a Nicaragua en el programa de cancelación de deuda para los países pobres. De hecho varios países industrializados suspendieron grandes cantidades de ayuda económica a Nicaragua⁷⁵ a causa de la ingobernabilidad del país y las acusaciones contra el presidente Alemán.

En Diciembre 24 de 1999, una corte de Managua desechó los cargos de fraude contra Jarquín y lo puso en libertad; con ello, Jarquín volvió a su labor justo antes de que entrara en vigor la restructuración de la contraloría general ordenada por los legisladores y, antes de dejar el cargo, renovó las acusaciones contra el presidente Alemán a través de un reporte detallado, aduciendo actos ilegales, malversación de fondos y actos de nepotismo enriqueciendo a sus familiares, pretendiendo incluso removerlo del cargo. La Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica (CODEHUCA) mencionó en su reporte de diciembre de 1999 a Nicaragua como el peor de los países de la región en cuestión de derechos humanos “con altos niveles de ingobernabilidad, deficiencias democráticas, impunidad y una pobre administración de justicia” (LADB, January 13, 2000).

Pero tampoco la situación resultó positiva para el FSLN porque aparecieron divisiones internas sobre todo a partir de las fuertes críticas al pacto de cogobierno con Alemán. En el mismo diciembre de 1999, el líder sandinista Carlos Guadamuz, director de la estación Radio Ya, criticó abiertamente a Daniel Ortega por su pacto con el gobierno llamándolo traidor a los principios del propio Frente. Las represalias de Ortega fueron inmediatas: Guadamuz fue suspendido el 17 de diciembre y Radio Ya fue clausurada. Sin embargo, otros grupos

⁷⁵ El 20 de julio del 2000, por ejemplo, la Unión Europea suspendió una ayuda prometida de 4.65 millones de dólares.

de sandinistas se fueron creando⁷⁶ con el objeto declarado de revertir lo que llamaban la tendencia derechista del Frente y la cooperación con el gobierno.

La realización del Foro de Sao Paolo, realizado en Managua en el mes de febrero del 2000, sirvió también de ocasión para que los sandinistas disidentes expresaran su crítica hacia las posturas oficiales del FSLN; se le acusaba de haberse subordinado al modelo neoliberal cooperando con el nuevo somocismo. Pero tanto Ortega como Tomás Borge siguieron defendiendo abiertamente los nuevos lineamientos del Frente señalando que era el camino correcto para el retorno al poder del gobierno por parte del sandinismo.

En el mes de marzo del 2000, la Asamblea Nacional aprobó la nueva Ley del Sistema de Ahorros para Pensiones en donde se privatizaron los fondos que antes eran manejados por el Estado a través del Instituto Nicaraguense de Seguridad Social, transfiriéndolos a las Administraciones Privadas de los Fondos de Pensiones. Los nuevos trabajadores tendrían que poner sus contribuciones en cuentas individuales de retiro. La razón fundamental de la propuesta gubernamental era la falta de contribuciones reales para garantizar las pensiones en los siguientes años bajo el esquema estatal; se planteaba que la administración privada sería más efectiva y garantizaría las cuentas individuales a través de las contribuciones personales y de otros sectores.

Los sindicatos y otros sectores sociales se opusieron a la propuesta de ley. El mismo FSLN lo hizo también de palabra, pero siempre quedó duda sobre si la forma en que se aprobó dicha propuesta fue una maniobra orquestada por el mismo pacto de cogobierno: el 15 de marzo del 2000, la propuesta fue

⁷⁶ Otro ex dirigente sandinista Joaquín Cuadra también haría en junio del 2000 un intento de formar una tercera fuerza, el Movimiento de Unidad Nacional, que no sería parte del pacto entre la derecha y la izquierda sino de tendencia centrista, con el objeto de enfrentar el cogobierno del PLC y FSLN.

aprobada por la asamblea con 45 votos a favor, 7 en contra y una abstención; hubo 28 diputados que se habían salido en protesta, de los cuales 24 eran sandinistas. Formalmente el FSLN había llamado a votar por el “no”, pero la delegación mayoritaria salió de la asamblea como signo de protesta y solamente quedaron tres diputados sandinistas para votar efectivamente por el “no”. De hecho los diputados del Frente que permanecieron hicieron posible mantener el quorum oficial de la asamblea, en donde se hizo oficial la aprobación de la ley privatizadora.

El presidente Alemán continuó en serios problemas políticos porque diversos legisladores plantearon la demanda de quitarle la inmunidad para luego proceder a su destitución. Los dineros que estaban dejando de llegar al país provenientes de países donadores a causa de la inestabilidad y de la figura del propio presidente motivaron que sectores de la iniciativa privada y grupos legislativos de la antigua alianza esgrimieran una razón fundamental para su destitución: estaba inhábil mentalmente para gobernar. La propuesta se presentó a la Asamblea aduciendo 20 criterios a los que debía ser sometido Arnoldo Alemán para sopesar su incapacidad mental; algunos de estos criterios eran el grado de arrogancia personal, la falta de respeto a la ley, el desprecio de la oposición, el abuso del alcohol y la sobrealimentación (pesaba 171 kilos con una estatura de tan solo 1.68 metros). Pero, de nuevo, este intento no logró pasar en la asamblea debido al pacto entre liberales y sandinistas.

A pesar de todas las críticas sobre el cogobierno con Alemán, el FSLN se anotó un gran triunfo en las elecciones municipales del 2000 al ganar la alcaldía de Managua con su candidato Herty Lewites. Con ello, el propio Daniel Ortega manifestó su intención de competir por tercera ocasión para las presidenciales del 2001, augurando que el Frente volvería al poder del gobierno. En número de municipalidades, el PLC triunfó en la mayoría (97, de 151 totales), pero el Frente ganó 49 incluyendo Managua y las principales ciudades del país. En

Enero del 2001, los dos principales partidos nominaron a sus candidatos para las elecciones presidenciales del siguiente noviembre: el PLC nombró a Enrique Bolaños, y el FSLN a Daniel Ortega, aunque con acusaciones de malversación de votos en sus propias filas.

Todo el año 2001 hasta noviembre fue de campaña electoral, sobre todo de ataques entre las dos principales fuerzas contendientes. El pacto entre el PLC y el FSLN había terminado en la práctica porque se trataba de decidir de nuevo el puesto de gobernante nacional. Los ataques verbales se multiplicaron: Alemán atacaba a los sandinistas de enriquecimiento constante y hasta de quererlo asesinar a través de los “rearmados”; el Frente atacaba a Alemán por corrupción, enriquecimiento ilícito e ineficacia en solucionar los problemas del país. El propio presidente de Nicaragua dio motivo a otra disputa en su contra al construir un helipuerto en Los Chiles, una propiedad suya al sur de Managua, y otro helipuerto en la propiedad de su hermana Amelia Alemán. Se le acusaba de que tanto el helicóptero a todo lujo como los helipuertos fueron construidos con fondos públicos, en un asunto que llegó de nuevo a la contraloría general. En ella ya no estaba Jarquín, pero el sandinista Luis Angel Montenegro que era uno de los integrantes aprovechó para darle cauce a la acusación; Alemán tuvo que admitir que la construcción del helipuerto era con fondos públicos pero que le fue recomendado por razones de seguridad y señaló que el helicóptero no era de su propiedad sino rentado para asuntos oficiales.

El presidente Alemán sumó acusaciones en su contra de otros campos. Por ejemplo, el empresario de Miami Ricardo Mas Canosa lo acusó formalmente en septiembre del 2001 en una corte nicaraguense de haberse apropiado de 2.5 millones de dólares que él le había donado para su campaña electoral de 1996; Alemán nunca utilizó el dinero para la campaña sino que lo depositó a su cuenta en un banco extranjero. Lo que logró Mas Canosa fue una orden de aprehensión en su contra.

Por otro lado, en el FSLN se dio la oportunidad de reencontrarse con el MRS ⁷⁷a través de una alianza electoral debido a que este último no tuvo reconocimiento como partido. Sergio Ramírez había abandonado el Frente y se había lanzado como candidato presidencial en 1996 pero sin conseguir una votación significativa; en el 2001, a pesar de las críticas que permanecían al Frente por haber abandonado la izquierda y haberse sumado al cogobierno, tratando de vencer de nuevo a los liberales, volvieron a caminar juntos en la arena electoral. Los pronunciamientos sandinistas de hecho seguían cambiando, enfatizando posiciones de una ideología de centro en política económica; manifestaban incluso su deseo de incluir a los antiguos *contras* o aun miembros de la antigua Guardia Nacional de Somoza. La organización que postuló a Ortega se llamó Convergencia Nacional y tuvo la oportunidad de aglutinar a algunos pequeños partidos que no habían obtenido el registro. Ortega llegó a estar en la punta de las preferencias electorales antes de la fecha de la elección. La campaña de Enrique Bolaños se basó de nuevo en el temor, acusando al FSLN de vínculos con el terrorismo internacional queriendo aprovechar el acontecimiento de los ataques a las torres de Nueva York. El mismo gobierno de Estados Unidos envió emisarios para que colaboraran con el PLC e impidieran el regreso de Ortega al gobierno: el mismo embajador Oliver Garza y funcionarios del Departamento de Estado norteamericano emitieron declaraciones públicas sobre las terribles consecuencias que se vendrían sobre Nicaragua en caso de ganar el FSLN, al cual denunciaban por sus vínculos con los gobiernos que favorecían el terrorismo internacional; el gobernador de Florida Jeb Bush,

⁷⁷ A pesar de la alianza formal con el MRS, algunos personajes vinculados anteriormente al sandinismo expresaron que se abstendrían de votar; entre ellos sobresalieron las declaraciones de Sergio Ramírez, la novelista Gioconda Belli y el sacerdote Ernesto Cardenal. Consideraban, por un lado, que Bolaños seguía representando los intereses somocistas y, por otro, que el FSLN ya no era lo que fue, un representante de la revolución.

una semana antes de la elección, insertó propaganda explícita en dos periódicos nicaraguenses para apoyar a Bolaños y atacar explícitamente a Ortega como “un enemigo de todo lo que Estados Unidos representa y como un amigo de nuestros enemigos”; añadía: “es inconcebible que la gente pueda escoger un regreso al pasado totalitario” (LADB, NotiCen, nov. 8, 2001).

Aunque el candidato del FSLN mantuvo una ligera ventaja sobre Bolaños en las semanas previas a la fecha electoral del 4 de noviembre del 2001, la victoria del PLC se mostró con claridad, sobre todo a partir del voto de los indecisos puesto que solamente hubo un 8% de abstencionismo. Los resultados fueron los siguientes: “contando el 94% de la votación emitida, el Consejo Supremo Electoral (CSE) anunció el 7 de noviembre que Bolaños había obtenido el 56.04% de los votos... Ortega consiguió 42.59%, y el candidato del Partido Conservador (PC) Alberto Saborio solamente el 1.37%. Bolaños y su vicepresidente electo José Rizo tomarán posesión el 10 de enero del 2002” (LADB, Nov. 8, 2001).

El gobierno de Bolaños (2002-2006)

La victoria de Bolaños fue clara y por ello tanto Ortega como su candidato a vicepresidente Agustín Jarquín lo reconocieron de manera inmediata, aunque reprochaban la injerencia de los Estados Unidos, quienes habían aprovechado la coyuntura de los ataques del 11 de septiembre en suelo norteamericano para infundir más temor en la población. Bolaños había sido vicepresidente de Alemán y tenía gran resentimiento con los sandinistas: al ser electo tenía 73 años pero tenía presente cómo el gobierno del FSLN en los 80s había confiscado sus tierras (incluso estuvo encarcelado por un tiempo); había sido empresario y llegó a ser presidente de la poderosa organización del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Pero también el nuevo gobierno quiso distanciarse del anterior presidente. “El PLC obtuvo una nueva victoria,

con un 56.3% de los votos, mientras que el FSLN alcanzó un 42.3%. Para evitar convertirse en un títere controlado por Alemán, Bolaños aprovechó el descontento popular creado por la corrupción y emprendió una campaña contra los principales funcionarios del gobierno saliente involucrados en escándalos” (Pérez-Baltodano A., 2006).

Sin embargo, iba a permanecer una correlación de fuerzas semejante a la del gobierno anterior: había perdido el FSLN de nuevo la presidencia, pero seguía siendo la principal fuerza de oposición⁷⁸ con la cual el gobierno debía entenderse y negociar pero sin llegar al nivel de cogobierno sucedido en el período anterior. Bolaños reconoció esta situación de manera inmediata pero además quiso distanciarse inmediatamente de la imagen del anterior gobierno al señalar su prioridad de atacar la corrupción, en la cual se había visto envuelto continuamente Arnoldo Alemán; este asunto, de hecho, se puso en obra en el mes de abril 2002 cuando los 5 auditores gubernamentales en común acuerdo empezaron a auditar el período en que éste había sido alcalde de Managua y el período presidencial 1996-2002, a pesar de que gozaba de inmunidad por el asiento legislativo que se le había otorgado sin elección. El ex-presidente había hecho una declaración de bienes al dejar su puesto por un valor de 1.3 millones de dólares, pero no había incluido sus inversiones en las Telecomunicaciones y 10 propiedades que podían valer hasta 60 mil dólares cada una. Numerosos ex-colaboradores⁷⁹ de Alemán fueron acusados y puestos en pri-

⁷⁸ De los 90 asientos legislativos en la Asamblea Nacional (más dos curules que se le otorgaron, una al expresidente Alemán y otra a Daniel Ortega), el PLC había conseguido una mayoría de 49, pero los sandinistas conquistaron 41 posiciones. Después habría una agria disputa porque el Consejo Supremo Electoral (CSE), en un nuevo conteo de votos, le adjudicaba 53 curules al PLC, 38 al FSLN y una al PC, que no había alcanzado el mínimo de votación requerido por la ley. Sin embargo la Corte Suprema de Justicia avaló la decisión del CSE.

⁷⁹ Fue arrestado Byron Jerez, antiguo director de la Dirección General de Ingresos (DGI) y varios directores del Canal 6 de televisión. Se logró en-

sión por la justicia mientras que se exigía que se quitara la inmunidad al ex-presidente.

El gobierno de Bolaños había nombrado a Alberto Novoa como el fiscal perseguidor de la corrupción, quien logró éxitos sonados al lograr órdenes de aprehensión y cárcel para varios funcionarios del anterior gobierno, pero su labor fue fugaz porque fue cesado en el mes de junio 2002 por haber hecho comentarios sobre operaciones irregulares de organizaciones dependientes de la Iglesia Católica; en su lugar fue designado el antiguo juez José Eduardo Boza. Mucho se especuló entonces si la lucha contra la corrupción iniciada por Bolaños tenía sus límites bien precisos.

De cualquier manera, el esfuerzo de Bolaños estaba enfocado contra Alemán y sus antiguos colaboradores. Y las pruebas no faltaban sobre los millones de dólares que habían sido robados⁸⁰ pero chocaban contra la inmunidad del expresidente. La solicitud para desaforarlo dividió al partido en el gobierno: en PLC se distinguieron los bolañistas y los alemanistas, a tal punto que en junio 2002 realizaron convenciones diferentes del mismo partido. Por otro lado, dentro del FSLN se mostró una simpatía por apoyar a Bolaños a tal punto que se le ofrecieron al presidente los votos sandinistas en caso de querer llegar al 60% requerido en la Asamblea para el desafuero. Un nuevo fiscal especial contra la corrupción acusaba a Alemán en agosto del 2002 de daños contra el Estado por haber robado millones de dólares y pedía por lo menos 30 años de cárcel; para ello enviaba toda la documentación a la Asamblea Nacional y también al PARLACEN en donde también tenía un

carcelar a 6 exfuncionarios. Otros excolaboradores como la ministra de Salud Mariangeles Arguello y Jorge Solís Fariás, antiguo presidente de la empresa de Telecomunicaciones (ENITEL), el ministro del Tesoro Esteban Duque Estrada, el superintendente de Pensiones Martín Aguado, etc. lograron huir del país.

⁸⁰ Manuel Ignacio Lacayo, uno de los empresarios más ricos del país estimó públicamente que Alemán había robado 60 millones de dólares durante el tiempo que gobernó como presidente.

asiento legislativo⁸¹. La alianza entre los liberales de Bolaños y los diputados del FSLN lograron cambiar en septiembre del 2002 la junta directiva de la Asamblea. Finalmente el 12 de diciembre de ese año, el expresidente fue desaforado; le quitaron la inmunidad parlamentaria con una votación de 47 votos a favor y cero en contra (38 votos sandinistas y 9 del PLC partidarios de Bolaños); hubo quorum suficiente aunque 35 legisladores “alemanistas” habían abandonado el salón en protesta. El día 22 de diciembre fue encontrado culpable de numerosos cargos y sentenciado a 20 años de cárcel. Se puede argumentar con esto un triunfo de la justicia nicaraguense con el nuevo presidente apoyado por los sandinistas, pero Alemán no pisó la cárcel sino que sufrió arresto domiciliario en su finca de Los Chiles, a 26 kilómetros al sur de Managua, aprobado por el presidente Bolaños y Daniel Ortega; había sido encontrado culpable de fraude, conspiración contra el estado, mal uso de los recursos públicos, crímenes electorales. Se señaló que había robado del gobierno 97.2 millones de dólares y los había escondido en cuentas personales y familiares en Panamá y otros lugares.

Más tarde, en 2004, el mismo Bolaños sería acusado por la misma Contraloría General de la República por no dar suficiente información sobre ciertos fondos que utilizó en la campaña electoral a la presidencia en el 2001, y de hecho se inició un procedimiento legal para quitarlo del puesto de presidente dentro de la Asamblea Nacional. Los auditores habían encontrado que Bolaños había recibido 7 millones de dólares de contribuciones ilegales que utilizó para su propia campaña (LADB, NotiCen Nov 11, 2004). El presidente pudo seguir a la cabeza del gobierno, pero la Asamblea Nacional, con 74 de los 91 votos totales, pudo aprobar enmiendas a la constitu-

⁸¹ Esta distinción de ser miembro del Parlacen se otorga a todos los expresidentes de Centroamérica. Pero, una semana después, la doble inmunidad argumentada por el expresidente le fue denegada por un juez nicaraguense.

ción⁸² con las que se intentaba limitar severamente los poderes presidenciales, aunque de común acuerdo fueron congeladas hasta 2007. De cualquier manera, la popularidad de Bolaños iba en descenso, sobre todo cuando el 30 de mayo del 2005 decretó un estado de emergencia nacional suspendiendo garantías de los ciudadanos, al imponer un alza del 11.83% en el pago de la electricidad de aquellos que consumieran más de 150 KW de luz al mes.

El FSLN se había ido transformando⁸³ en el desarrollo de la política real práctica siendo partido de oposición: durante las dos campañas a la presidencia (1996 y 2001), los discursos se habían ido recorriendo hacia el centro al disminuir la confrontación con los Estados Unidos, al plantear el respeto a la propiedad privada, al buscar acercamiento con grupos de los antiguos “contras” y miembros de la guardia nacional somocista, al haber negociado con el gobierno de Alemán estableciendo un Pacto de gobernabilidad, etc. pero no abandonaban el lenguaje de la izquierda en cuanto al compromiso con los pobres, al impulso sobre los programas sociales e incluso al hablar del modelo de una sociedad socialista. El festejo conmemorativo del 23 aniversario de la revolución sandinista, el 19 de julio del 2002, tanto Ortega como el vicepresidente Tomás Borge remarcaron su creencia en los principios del socialismo, su reclamo a los gobiernos norteamericanos por todos los daños de guerra en la década de los 80s y la exigua ayuda económica

⁸² Las enmiendas a la constitución nicaraguense eran bastante radicales a tal punto que proponían un modelo semi-parlamentario: el presidente no podría nombrar los jueces, no tendría poder para controlar los servicios públicos, no podría designar ni despedir a ministros o embajadores,... Todas estas propuestas fueron pospuestas.

⁸³ Muchos se preguntan, por ejemplo, por qué un individuo como Ricardo Mas Canosa, hermano del líder del movimiento anti-Castro en Miami, pudo apoyar a Daniel Ortega en el 2001 durante la campaña presidencial; dijo que lo seguiría apoyando en sus aspiraciones presidenciales en el 2006, al asistir al 24 aniversario del triunfo de la revolución sandinista, el 19 de julio del 2003.

posterior a los gobiernos posteriores, su posición de resistencia frente al modelo neoliberal que se quería imponer a Nicaragua por las presiones del FMI y el Banco Mundial. El mismo liderazgo de Daniel Ortega era cuestionado por algunos dentro y fuera del Partido. Sergio Ramírez, del MRS, lo llamaba “caudillo”; su hijastra Zoilamérica Narváez lo había acusado públicamente de haberla obligado en los 80s a tener relaciones sexuales; Víctor Hugo Tinoco, miembro del Consejo Político Nacional del Frente, expresaba dudas sobre la democracia interna de la organización y denunciaba el clientelismo político. Posteriormente, durante la disputa por la ratificación del CAFTA en Nicaragua durante el 2005, aunque el FSLN votó en contra y una mayoría legislativa de 49 votos lo aprobó, Ortega mencionaba su intención de no bloquear el tratado y continuar con el diálogo con funcionarios de la embajada norteamericana.

De cualquier manera, el FSLN tuvo sus coincidencias y sus disensos con el gobierno a través de las disputas en la Asamblea Nacional. En el 2003, por ejemplo, los sandinistas coincidieron con el presidente Bolaños para hacer pasar una reforma fiscal que, a su entender, recogería más recursos para dedicarlos a obras sociales; en su mismo partido, el presidente encontró oposición de aquellos legisladores que se identificaban totalmente con los empresarios y quienes se habían opuesto a una mayor recaudación fiscal. Por otro lado, en el mismo año 2003, el presidente Bolaños mandó la propuesta de enviar a 230 oficiales nicaraguenses para apoyar a los tropas norteamericanas en la guerra sobre Irak; a ello ciertamente se opuso el FSLN, pero la propuesta pudo pasar con 50 votos sobre 37 que votaron en contra. Sin embargo, para 2004, en el contexto del triunfo de José Luis Rodríguez Zapatero en España y su anuncio de que retiraría las tropas españolas de Irak, otros países también siguieron el ejemplo como lo hizo Honduras; en el caso de Nicaragua, se tomó la decisión del regreso del

personal pero por razones de falta de recursos económicos para sostenerlas.

En el mismo año 2004, algo nuevo empezó a ocurrir en la correlación de fuerzas políticas. En la coyuntura de las elecciones presidenciales anteriores al 2006, la contradicción se expresaba claramente en dos fuerzas contendientes: el FSLN y el PLC. Sin embargo, al distanciarse el gobierno de Enrique Bolaños del ex presidente Alemán acusándolo de corrupción y llevándolo incluso a prisión, la derecha empezó a dividirse. El bipartidismo de facto empezó a resquebrajarse cuando Bolaños propició la creación de un nuevo partido, la Alianza por la República (APRE), que ciertamente aprovechaba la coalición de diversos partidos y agrupaciones (la Gran Unión Liberal, el Partido Conservador de Nicaragua, el Movimiento Democrático Nicaraguense, el Partido Social Cristiano Nicaraguense, y el Movimiento de Unidad Nacional) pero con la intención de hacer una organización duradera. Siendo miembro del PLC, Bolaños asistió a la inauguración del nuevo partido e invitó a otros miembros liberales a incorporarse a la organización lo mismo que a otros individuos y grupos.

Aunque esta situación apuntaba a romper el bipartidismo, esto no ocurrió con claridad en las elecciones municipales del 7 de noviembre del 2007. Los primeros resultados dejaron al FSLN en primer lugar con un 46% del voto; el PLC bajó al segundo lugar con 36%, y el APRE consiguió un 12% de la votación (LADB NotiCen, Nov. 11, 2004). Aprovechando la división de la derecha, el resultado fue un triunfo para los sandinistas; el gran perdedor fue el PLC porque perdió muchos votos y presidencias municipales importantes, y además la APRE no logró un resultado alentador. Sin embargo, hay que notar que el abstencionismo en esa ocasión fue el gran ganador al sobrepasar el 50% de los electores.

A partir de las elecciones legislativas del 2004, las perspectivas de los sandinistas para las presidenciales del 2006 se miraban florecientes. Sin embargo, para marzo del 2005 también

se les presentaron perspectivas de crisis. La alcaldía de Managua la había ganado de nuevo el sandinismo, pero el presidente municipal saliente (2000-2004), Herty Lewites, había logrado tal popularidad que sobresalía también como posible candidato del FSLN para presidente nacional, disputando las aspiraciones que seguía manteniendo Daniel Ortega, que quería ir por su cuarta oportunidad. Una encuesta en enero del 2005 mostraba que Lewites claramente ganaba a Ortega en las preferencias electorales con un 74%. La disputa se transformó en guerra civil. Tomás Borge, por ejemplo, quería prohibirle a Lewites que usara las insignias sandinistas en los mítines y que cantara los himnos propios del partido; Ortega hablaba de una conspiración contra el FSLN y llamaba “traidor” al ex alcalde de Managua; por otro lado, otros líderes como Luis Carrión, Henry Ruiz y Víctor Hugo Tinoco apoyaban a Lewites. Este llegó a decir: “se trata de la rebelión sandinista contra la dictadura de Ortega dentro del Partido... Ortega no quiere dar libertad al partido para elegir su candidato” (LADB, NotiCen, March 10, 2005). Y esta disputa se trasladó a las calles entre los partidarios de uno y otro. Finalmente, el FSLN ignoró todo el movimiento de Lewites y, el 6 de marzo del 2005, organizó su propio congreso para escoger a Daniel Ortega como candidato a la presidencia para las elecciones del 2006, en medio de una aclamación general. Más tarde, en agosto del 2005, Lewites, expulsado del Frente Sandinista, aceptó ser candidato por los evangélicos a través del Partido Alternativa Cristiana (AC), en una propuesta que fue apoyada también por el Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

En el entorno político nacional durante 2005 se acrecentó la crisis de gobernabilidad en Nicaragua por el enfrentamiento entre el ejecutivo y el legislativo. El presidente, alejado del grupo de partidarios del ex mandatario Alemán en su propio partido –tanto por haberlo enviado a prisión como por el intento de crear un partido alternativo–, y enfrentado también al FSLN, se encontraba en minoría en la asamblea legislativa.

Fue una crisis de gobernabilidad en donde incluso Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos, quiso intervenir con su mediación. El propio Daniel Ortega solicitó formalmente la renuncia de Bolaños para que pudiera formarse una Asamblea Constituyente proponiendo un nuevo sistema político para el país. Fue probablemente la mediación de la Iglesia Católica, llamando a la moderación a la población y a todas las fuerzas políticas, el factor más importante para que el país siguiera su curso en el marco ya establecido.

Y el curso entonces se empezó a enfocar abiertamente hacia las elecciones presidenciales del 2006. El FSLN ya tenía a Daniel Ortega. Lewites era también un candidato importante por el AC. Se perfiló también como candidato importante de la derecha otro ex alcalde de Managua, el empresario Eduardo Montealegre, que había sido expulsado de las filas del PLC. Montealegre formó su propio partido, la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), que empezó a hacer coalición con el Partido Liberal Independiente (PLI), con el Movimiento de Salvación Liberal (MSL) y con el Partido de la Resistencia Nicaragüense (PRN). Finalmente, para completar el escenario de los 4 más importantes candidatos, el vicepresidente José Rizo Castellón renunció a su puesto para poder inscribirse como candidato del PLC; todo mundo sabía que era el hombre manejado por Arnoldo Alemán, en prisión domiciliar. En la clasificación política hecha por diversos analistas nacionales e internacionales, Rizo era la extrema derecha, Montealegre la derecha, Lewites la centro izquierda, y Ortega la extrema izquierda. “En la campaña electoral nicaragüense se presentan de manera predominante cuatro partidos políticos: dos liberales y otros dos que se refieren al sandinismo. Los dos partidos liberales son claramente de derecha. Se trata, por una parte, del partido Alianza Liberal Nicaragüense, que tiene como candidato a Eduardo Montealegre, y el otro es el Partido Liberal Constitucionalista, del cual José Rizo es su candidato. El primer partido está ligado con el actual presidente de la república, Enrique

Bolaños, un terrateniente y empresario de origen conservador, y el otro se sitúa como la herencia de Arnoldo Alemán, de siniestra reputación” (Houtart, 2006).

Con este escenario de fuerzas políticas, prácticamente todo el 2006 se convirtió en campaña electoral. Sin embargo, las preferencias electorales colocaban con gran ventaja a Montealegre (con casi un 50% de votación en febrero 2006) sobre el segundo lugar Lewites, y quedaba en tercer lugar el FSLN; en sólo dos meses, sin embargo, Ortega empató en las encuestas con Lewites, aunque ambos estaban todavía atrás de Montealegre⁸⁴.

Es útil señalar la intervención abierta del gobierno de los Estados Unidos en el proceso electoral de Nicaragua. Las simpatías por Montealegre eran bastante claras; con Lewites, a pesar de haber sido sandinista en años anteriores, también habían estrechado lazos. Las intervenciones fueron claras para tratar de impedir que llegara de nuevo Daniel Ortega a la cabeza del gobierno: hubo intervención abierta del embajador norteamericano Paul Trivelli, y hubo declaraciones explícitas de funcionarios gubernamentales como Robert Zoellick, John Negroponte y Jeanne Kirkpatrick manifestando su temor por el regreso del FSLN. Incluso llegó a hacerse presente, Oliver North, combatiente norteamericano en apoyo a los “contras” que había sido capturado en tierras nicaraguenses en la década de los 80s. “El Embajador de EE.UU., tres ministros del gabinete de Bush, y una lista inacabable de congresistas de derecha se tomaron el estrado para hablar en Nicaragua, a veces parecía que ellos mismos eran candidatos. Ellos aprovecharon cada

⁸⁴ Según la empresa M&R Consultores publicada en el diario La Prensa, la ALN con Montealegre tenía en el mes de abril 2006 el 26% de las intenciones de voto; Ortega tenía el 23.5%, y Lewites el 22.3%. En ese momento, todavía no entraba el PLC en las preferencias porque todavía no había nominado oficialmente a Rizo. Pero ya en el mes de mayo, la misma empresa ponía a Ortega con 27.9% y a Montealegre con 27.2%. El tercer lugar lo tenía Rizo y el cuarto Lewites.

ocasión pública o privada para alertar al electorado acerca de las calamitosas consecuencias de una victoria de Ortega —la suspensión de la ayuda y el bloqueo de las remesas de los inmigrantes en EE.UU. (de las que la mitad de la población depende directa o indirectamente) , hacían parte de la campaña de intimidación” (Bendaña, 2007).

Pero el Frente ya no estaba encerrado solamente en la ideología radical de los años 80s sino que se manifestaba claramente en un intento de coalición muy amplia: en el congreso extraordinario de mayo 2006 se anunció públicamente la lista total de candidatos con una gran amplitud de ideologías. Ahí estaba su compañero de fórmula electoral, Jaime Morales Carazo, quien había sido miembro fundador del PLC y asesor de Alemán durante su presidencia y luego había sido expulsado; había sido fundador de la Universidad Centroamericana y era empresario, banquero, columnista y había apoyado a los “contras”. En la lista estaba también Broklin Rivera, quien anteriormente había enfrentado a los sandinistas luchando por la autonomía de los indígenas. Estaba también Agustín Jarquín Anaya, de la agrupación conservadora Convergencia Nacional. Y con todos ellos naturalmente había sandinistas tradicionales como Tomás Borge. El mismo expresó su consentimiento para las diversas alianzas de la siguiente manera: “Hemos tenido que hacer ciertas concesiones, pero conservamos intactos nuestros principios fundamentales” (LADB, NotiCen, Jun 8, 2006).

El escenario de fuerzas políticas se alteró parcialmente con la muerte súbita por un ataque al corazón de Herty Lewites el 2 de julio del 2006. No tenía posibilidades de ganar pero significaba un 15% de votos que probablemente le iban a restar a los sandinistas. Al ser enterrado, fue colocada la bandera de Nicaragua y la del Frente Sandinista. Su posición como candidato fue ocupada por el poco carismático Edmundo Jarquín (que estaba postulado para vicepresidente) quien fue acompañado por el cantante Carlos Mejía Godoy en el puesto para la vicepresidencia.

Los discursos de los candidatos querían provocar la vinculación de su propio imaginario con el de la población. Para Rizo, se trataba de una lucha contra el populismo que tanto le había hecho daño al país y a toda América Latina, marcando un temor sobre todo lo que se pareciera a los Chávez, los Castro, los Morales, etc. que engañan a la población con sus promesas de acabar con el hambre y el subdesarrollo. Ortega no había dejado las banderas de la izquierda pero quería mostrar que había dejado los extremismos de la confrontación bélica con los Estados Unidos y que estaba dispuesto a establecer una alianza muy amplia de fuerzas sin peligro para la propiedad privada y los empresarios aunque —citando la frase de Juan Pablo II— condenando “los peligros del capitalismo salvaje”. Lewites y luego Jarquín quisieron mostrarse como los verdaderos sandinistas señalando a Ortega como un traidor a la verdadera causa de Carlos Fonseca Amador al haberse convertido en dictador dentro de la organización y haberse aliado con la derecha del ex presidente Alemán. Según la encuestadora CID-Gallup, si las elecciones se hubieran realizado en agosto del 2006, “Ortega recibiría más del 35% de los votos; en segundo lugar seguía Eduardo Montealegre... que recibiría lo equivalente al 28% de los votos efectivos. Ortega habría obtenido la victoria en la primera ronda electoral” (CID-Gallup, August 2006).

En la última etapa de las campañas surgió un tema delicado en la agenda nacional. Jarquín, como candidato de AC y apoyado por el MRS, fue apoyado explícitamente por el Movimiento Autónomo de Mujeres en Nicaragua (MAM). Las integrantes de este movimiento se vinculaban desde antes con Lewites y luego le expresaron su apoyo a Jarquín queriendo mostrar un enemigo común, el pacto entre el PLC y el FSLN, a quien señalaban como causante de muchos males para el país. Su plataforma expresaba varias demandas fundamentales como la búsqueda de una institucionalidad democrática, un estado laico, una democracia que reconozca los derechos de

las mujeres, justicia social,... Pero en el contexto de esta alianza con las mujeres, Jarquín tuvo la siguiente declaración: “Apoyo categóricamente el aborto terapéutico” (LADB, NotiCen, Aug. 31, 2006). En Nicaragua, el aborto estaba penado por la ley, pero el aborto terapéutico ⁸⁵ estaba permitido con ciertas condiciones.

El asunto se elevó a debate nacional, emergiendo particularmente la iglesia católica con la demanda de que el aborto terapéutico debería ser criminalizado en el código penal, queriendo intervenir en las preferencias electorales: Sócrates René Santiago, el secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, refiriéndose a Jarquín, señaló abiertamente: “esta persona no puede ser electa como presidente porque entonces tendríamos en la presidencia a un partidario del aborto, a un asesino” (LADB, NotiCen, Aug. 31, 2006). En la discusión no solamente estaba el aborto sino también los postulados de Jarquín de querer para el país una total separación entre el estado y la iglesia.

Esta coyuntura fue aprovechada por Daniel Ortega para tener un gran acercamiento con la Iglesia católica. Particularmente el Cardenal Obando y Bravo había sido importante en las dos elecciones presidenciales anteriores para influir en los votantes en contra del sandinismo, pero en esta ocasión, en el debate nacional sobre el aborto y las relaciones entre la iglesia y el estado, se mostró un acercamiento entre ambos. Las declaraciones de Ortega y su esposa Rosario Murillo mostraban un viraje sobre las posiciones tradicionales del sandinismo: no al aborto, sí a la vida, sí a las creencias religiosas. Esto influyó necesariamente en la posición de los diputados sandinistas, que lograron pasar la resolución condenando cualquier tipo de aborto: el 26 de octubre, la Asamblea Nacional aprobó la pe-

⁸⁵ Según la antigua ley nicaraguense, cuando la vida de la mujer esté en peligro, es posible realizar legalmente un aborto, teniendo en cuenta la intervención de tres médicos especialistas del Ministerio de Salud y el consentimiento expreso de la mujer.

nalización del aborto, condenando a cualquier doctor que la realizara a una pena de entre 10 y 20 años, y a la mujer en cuestión de esta acción a una pena de 4 años de prisión. La Iglesia católica y el FSLN mostraron entonces una reconciliación pública, que podía tener consecuencias en el resultado electoral.

Para los resultados finales había que tener en cuenta las modificaciones que se habían hecho a la ley electoral. Si un candidato obtenía al menos el 35% de la votación y con una ventaja del 5% sobre el siguiente contendiente, no habría necesidad de una segunda ronda electoral. Y así sucedió el 5 de noviembre del 2006, en donde, una vez disminuidas las preferencias sobre el candidato Edmundo Jarquín, lo que pesó realmente, a diferencia de las dos elecciones presidenciales anteriores (1996 y 2001) fue la división de la derecha; ello dio la oportunidad del regreso del FSLN al poder del gobierno, en el cuarto intento de su candidato Daniel Ortega.

Nicaragua: elecciones presidenciales 5 de Noviembre 2006

Partido	Candidato	Resultado
FRENTE SANDINISTA DE LIBERACION NACIONAL	Daniel Ortega Saavedra	38.07%
ALIANZA LIBERAL NICARAGÜENSE	Eduardo Montealegre	29%
PARTIDO LIBERAL CONSTITUCIONALISTA	José Rizo	26.21%
MOVIMIENTO DE RENOVACION SANDINISTA	Edmundo Jarquín	6.5%
ALTERNATIVA POR EL CAMBIO	Edén A. Pastora	Menos del 1%

Fuente: Consejo Supremo Electoral de Nicaragua, 2006 (www.cse.gob.ni).

Tanto para Daniel Ortega como para cualquiera de los candidatos que hubiera ganado, el gran reto se encuentra en las condiciones generales del país. Según el World Bank, tenemos los siguientes indicadores.

Indicadores generales en Nicaragua

POBLACIÓN	5.48 Millones de personas
INGRESO PER CAPITA	400 USA dólares anuales
ESPERANZA DE VIDA	69 años
NIVEL EN EL IDH	106
POBLACIÓN ADULTA ALFABETIZADA	69%
MORTALIDAD INFANTIL	34/1000 nacidos
MORTALIDAD MATERNAL	150/100,000 nacimientos
FUERZA DE TRABAJO FEMENINA	36%
LIBERTAD DE PRENSA	60/100
PERCENTIL DE GOVERNABILIDAD	37
RANGO DE CONFIANZA EN EL PAÍS	24-47

Fuente: <http://info.worldbank.org/governance/kekz2005/>

Haber pasado del militarismo a los gobiernos electos en el modelo de la democracia fue un gran paso en América Latina, pero grandes sectores de la población no experimentaron ninguna mejora en su nivel de vida; más aún, bajo el modelo del neoliberalismo, dichas condiciones se han agravado. La búsqueda de alternativas es lo que ha llevado a nuevas opciones gubernamentales: el sandinismo tuvo 11 años de oportunidad y fue derrotado electoralmente en 1990; ahora en el 2006 regresó al poder gubernamental. Se tiene entonces una nueva oportunidad de mostrar que sus propuestas pueden ser mejores que las de la derecha.

Consideraciones finales

Si consideramos los principios actuales del sandinismo, se puede asegurar que la izquierda ha vuelto al poder en este país. Esto lo podemos afirmar porque sus principales adversarios –ALN, PLC y el gobierno de los Estados Unidos– estaban claramente iden-

tificados con la derecha. No es la izquierda radical de los sandinistas de los años 80s porque también se puede afirmar con toda certeza que el FSLN del nuevo siglo es muy diferente del gobierno de la década de los 80s. El nuevo frente sandinista ha sufrido muchas escisiones, es mucho más pragmático y ha hecho muchas concesiones en su programa tratando de vincularse a un frente más amplio de ciudadanos, incluyendo a varios de sus antiguos enemigos y opositores. Para numerosos grupos disidentes y escindidos del Frente, los virajes de Daniel Ortega y Tomás Borge significan una traición a la revolución sandinista. Incluso algunos analistas no le reconocen al Frente su pertenencia actual a la izquierda; es lo que cuestiona, por ejemplo, Alejandro Bendaño, del Centro de Estudios Internacionales de Managua: “uno se puede preguntar qué es la izquierda, qué significa ser izquierda en 2006, qué significa ser izquierda en el 2006 en Nicaragua, y si el victorioso Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) es esa izquierda”, y él mismo responde: “El punto clave que necesita ser comprendido, especialmente por las organizaciones internacionales progresistas, es que no es una fuerza de *izquierda* la que ha llegado al poder en Nicaragua” (Bendaño, 2007).

Pero el hecho es que sus principales contrincantes electorales –ALN y PLC– eran claramente de derecha. De esta manera, por lo menos en términos relacionales de posición ideológica, el Frente está a la izquierda de ellos en gran parte de sus programas sociales. Por otro lado, la confrontación con los Estados Unidos o por lo menos la búsqueda de la autonomía nacional en vez de la subordinación a la potencia del Norte también ha sido típica de las organizaciones de izquierda. De esta manera, no se le puede quitar a los sandinistas triunfantes ese adjetivo histórico. Lo que se le puede cuestionar es ese corrimiento de posiciones después de 1990 hacia posiciones más amplias y más incluyentes. De hecho, es precisamente su estrategia de amplitud de alianzas con otros sectores antes

considerados enemigos lo que ha resultado exitoso desde el punto de vista electoral.

Existen cinco factores que influyeron en este resultado del 2006: en primer lugar, hay una base orgánica de militantes que han permanecido firmes durante todo el tiempo que estuvo la organización en la oposición, a pesar de las personalidades y grupos que decidieron separarse; en segundo lugar, hay que tener en cuenta las reformas hechas a la ley electoral que le permitieron a Daniel Ortega ganar en el 2006 en la primera vuelta con menos votos de los que había logrado en el 2001. En tercer lugar, el imaginario proyectado sobre la sociedad nicaragüense, especialmente sobre un buen número de indecisos y opositores (entre los cuales, hay que señalar explícitamente cierta reconciliación con la Iglesia católica), ha logrado convencer sobre la factibilidad del proyecto, a pesar de los errores y excesos cometidos en los 80s. En cuarto lugar, hay que señalar el intervencionismo abierto que tuvo el gobierno de los Estados Unidos contra el Frente Sandinista: la manera descarada en que mostraron su aversión a la organización y sus preferencias electorales por sus candidatos se revirtió en su contra para constituir el resultado en derrota de la administración Bush. Por último, y el más importante factor, hay que considerar la división de la propia ideología de la derecha en dos candidatos.

En este último factor, puede uno ver claramente que si la ALN y el PLC hubieran ido con un solo candidato, la suma matemática de votación entre ambas organizaciones (29 y 26%) hubiera sobrepasado con facilidad el porcentaje del Frente. Pero la división entre los liberales del presidente Bolaños y del ex presidente Alemán era irreparable. Sin embargo, para la derecha de ambos candidatos hubiera sido formidable la oportunidad de haber pasado a una segunda vuelta: Ortega se hubiera enfrentado solamente con Montealegre, con la gran posibilidad de que, a pesar de las diferencias, el enemigo común del sandinismo los hubiera unificado.

Otra versión de los factores de la victoria la expresa de esta forma un analista de la Universidad Centroamericana: “En primer lugar, el desgaste del modelo económico neoliberal y el voto por el cambio. Daniel Ortega supo capitalizar el descontento popular por el continuado deterioro de las condiciones de vida en este país centroamericano... El segundo factor que explica la victoria de Daniel Ortega es el fraccionamiento del voto anti-danielista. Esta elección tuvo la particularidad de que no se polarizó en dos únicas opciones sandinismo-antisandinismo, como ocurrió en las anteriores. En las elecciones de 2001 Daniel Ortega obtuvo 42.3% de los votos y perdió, y hoy está ganando con el 38.07%. Por el contrario, el voto no danielista unificado en 2001 permitió la victoria de Enrique Bolaños, candidato del PLC y actual Presidente, con casi el 56.3% de los votos. El tercer factor que explica la victoria de Daniel Ortega es la reducción del porcentaje de votos necesarios para obtener la victoria en primera vuelta. Como se ha explicado, el pacto que asumió forma constitucional en el año 2000 entre Daniel Ortega y Arnoldo Alemán, permitió la reducción del porcentaje para ganar en primera vuelta, pasando de 45% al 40% y hasta el 35% si el candidato ganador le sacaba al menos cinco puntos de ventaja al candidato del segundo lugar. Esta reforma a la constitución y la ley electoral permite en esta ocasión la victoria de Daniel Ortega en primera vuelta” (Ortega M., 2006).

La experiencia del 2006 ahora solamente servirá para que todos los contendientes redefinan sus estrategias para el futuro. Por lo pronto, el FSLN, después de tres derrotas consecutivas de un mismo candidato, se encuentra de nuevo, en otro contexto, ante la formidable oportunidad de dirigir el gobierno y mostrar si es capaz de hacer avanzar al país de mejor manera que la derecha. Como dice el sacerdote belga François Houart, “el Frente Sandinista ha sido perjudicado por varios factores. El primero fue la falta de ética de varios de sus dirigentes presentes y pasados. La segunda razón fue la lógica de las

alianzas políticas constituyentes de la democracia parlamentaria, a fin de garantizar partes de poder, que llevaron a contradicciones insostenibles política y éticamente. Empero, el Frente Sandinista cuenta con un apoyo popular real. Tiene también un programa de gobierno más claramente de izquierda que incluye una aproximación con el eje progresista latinoamericano” (Houtart, 2006).

En el ámbito internacional, ciertamente crece la tendencia autodenominada de izquierda puesto que de manera inmediata Daniel Ortega se ha vinculado expresamente al proyecto de la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) junto a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Bolivia.

6.6 VENEZUELA: el nuevo proyecto bolivariano

Para el primer semestre del 2006 ya se veía como excepcional en el campo político latinoamericano el ascenso a la presidencia de Evo Morales en Bolivia y de Michelle Bachelet en Chile; Couffignal las llama “elecciones emblemáticas” (Couffignal, 2007: 7). Sin embargo, en el segundo semestre de ese mismo año, la tendencia latinoamericana hacia la búsqueda de un cambio del modelo de desarrollo dominante se reafirmó con claridad a través de los triunfos de Rafael Correa en Ecuador, la reelección de Lula da Silva en Brasil y de Hugo Chávez en Venezuela, y la victoria de Daniel Ortega por el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua. Con el primer gran antecedente de la victoria de Hugo Chávez en 1998 y 2000 en Venezuela, la de Lula da Silva en 2002 en Brasil, la de Kirchner en 2003 en Argentina y el triunfo de Tavaré Vázquez en Uruguay en el 2004, el segundo semestre del 2006 podía confirmar el deseo de gran parte de la población sobre “cambios profundos en el comportamiento y funcionamiento de los sistemas políticos” (Idem).

Dentro de todos estos cambios políticos nacionales, es importante centrar la atención en la figura de Hugo Chávez, quien ya había aparecido en la vida política nacional como

militar insurreccionado en los años 90s para convertirse luego en un símbolo de la revolución bolivariana con su triunfo como presidente de Venezuela en 1998 –el primer triunfo de la izquierda latinoamericana por la vía electoral en el período contemporáneo– y su ratificación posterior en el año 2000 después de la aprobación de la nueva constitución bolivariana. Contra él han enfocado sus baterías los representantes del gobierno norteamericano de George Bush y ciertos intelectuales como Enrique Krauze que quieren denominarlo como “un estereotipado aprendiz de dictador, populista y palabrero” (Krauze, 2008) pero en cuyo país se está jugando “el destino de todo el subcontinente”.

Haremos nuestro propio análisis sobre el proceso de esta revolución bolivariana ubicando primero el contexto general del país para llegar al primer período de gobierno de Chávez y en especial al momento de su reelección como presidente a finales del 2006.

Venezuela: rompiendo con el pasado

Por mucho tiempo, el país llegó a ser considerado un ejemplo de la democracia latinoamericana, sobre todo cuando transitaban los gobiernos civiles de uno y otro partido de forma pacífica mientras que en el resto del continente imperaban los gobiernos militares y las dictaduras. Por otro lado, junto con México, Venezuela parecía tener una solidez económica a partir del petróleo desde las primeras décadas del siglo XX, lo que le permitió un crecimiento económico constante, por lo menos hasta el desplome de los precios de los hidrocarburos en los años 80s.

El sistema político integraba numerosos partidos políticos, pero el poder gubernamental se estancó en un bipartidismo que se hizo tradicional después de 1958 expresado en el Partido Acción Democrática (AD), los “adecos” de tendencia socialdemócrata, y en el Partido de la democracia cristiana (COPEI: Comité de Organización Política Electoral Independiente).

diente), los “copeianos”, de centro derecha, fundado en 1946. AD nació en 1941 como partido de tendencia centrista y tiene afinidad ideológica con la socialdemocracia y afiliación con la Internacional Socialista. El COPEI tiene vínculos ideológicos con el PAN de México, con el PP de España, con la CDU de Alemania, con el partido demócrata cristiano de Chile. La alternancia de estos dos partidos en el gobierno marcó la estabilidad de Venezuela por varias décadas, fundamentalmente a través de un pacto realizado el 31 de octubre de 1958, el Pacto de Punto Fijo, en donde los partidos políticos se comprometieron a respetar los resultados electorales.

Pero este modelo de bipartidismo político tenía sus bases en la explotación del petróleo. “La democracia venezolana tal como fue fundada por el Pacto de Punto Fijo y consolidada en la Constitución de 1961 descansaba sobre una base material: la distribución de las rentas petroleras internacionales a través de un sistema de clientelismo... La bonanza petrolera de 1973 a 1983 y la nacionalización del petróleo en 1976 fueron la culminación de este proyecto que asociaba la democracia, el nacionalismo petrolero y el desarrollo. El puntofijismo se aseguraba que el dinero llegara a todos los estratos sociales y existía cierta confianza y optimismo en que el país estaba avanzando” (Murillo G.A., 2007: 22).

La izquierda venezolana no tenía oportunidad de avanzar mientras existía la percepción sobre una renta petrolera distributiva; esta percepción se consolidó en la década de 1970 con el aumento de los precios del petróleo y la nacionalización de la industria petrolera en 1976; el estado aumentó sus ingresos y pudo aumentar el gasto público en los programas sociales.

Sin embargo, el “viernes negro” ocurrido el 28 de febrero de 1983, cuando el gobierno devaluó la moneda nacional, el *Bolívar*, a causa de la baja de los precios del petróleo y la crisis económica, produjo un gran golpe a los venezolanos bajo la presidencia de Luis Herrera Campins, de COPEI, durante el período 1979-1984. La inversión, el gasto social, los salarios, el

PIB, el poder adquisitivo, etc. se vinieron abajo. El gobierno siguiente presidido por Jaime Lusinchi (1984-1989), de AD, significó la prolongación de la crisis pero acompañado por notables actos de corrupción en la esfera gubernamental. Posteriormente volvió a ser elegido Carlos Andrés Pérez en 1988, de AD, quien ya había gobernado al país de 1973 a 1979 en otras condiciones de bonanza. En 1989, el nuevo gobierno propuso una serie de ajustes estructurales en el marco del dominante neoliberalismo, que consideraban una serie de privatizaciones de sectores industriales importantes. El rechazo popular a tales medidas fue inmediato: las medidas que se pretendían adoptar no eran sino la antítesis de las promesas de campaña de Pérez (Ellner, 1998). Las clásicas medidas de austeridad del modelo neoliberal (recorte de la inversión del estado en programas sociales, libre comercio, etc.) tuvieron como consecuencia numerosas protestas populares y sobre todo el *caracazo*, ocurrido el 27 de febrero de 1989, y posteriormente varios intentos de golpe de estado como el de 1992 dirigido por Hugo Chávez. El *caracazo* en particular consistió en un levantamiento popular detonado por los choferes, quienes, para enfrentar el aumento al 30% del combustible, quisieron duplicar las tarifas del transporte público, ocasionando inconformidad y violencia que se extendió a 19 ciudades venezolanas prolongándose hasta el 5 de marzo; se llegó a mencionar una cifra superior a mil muertos. La respuesta del gobierno había sido la clásica represión sobre los ciudadanos en forma indiscriminada.

Carlos Andrés Pérez, acusado de malversación de fondos, no pudo terminar su período presidencial y fue destituido en 1993; en su lugar fue nombrado Octavio Lepage como presidente provisional y luego el Congreso designó a Ramón José Velázquez para el período restante. Andrés Pérez no solamente perdió la presidencia sino que también su propio partido, AD, lo expulsó de la organización, condenando los múltiples actos de corrupción cometidos en su gobierno; en 1998, un

Tribunal ordenó su detención por enriquecimiento ilícito y fue inhabilitado políticamente.

Rafael Caldera, quien ya había sido presidente de 1969 a 1974 por COPEI, pero que se había separado de esa organización política y había formado el movimiento político Convergencia⁸⁶ y quien había mostrado simpatías⁸⁷ por el *caracazo* y las protestas populares, fue electo de nuevo presidente de Venezuela para el período 1994-1998, con el apoyo de varios grupos de izquierda. Ese año de 1994 fue el momento de la superación del bipartidismo tradicional y el fin del Pacto de Punto Fijo, porque tanto AD como COPEI fueron desplazados después de haber gobernado entre ambos durante 35 años.

Rafael Caldera, mientras fue candidato, prometió evitar el paquete de reformas neoliberales, pero al llegar a la presidencia adoptó el programa Agenda Venezuela, el cual, aunque, dirigido por el ministro y teórico de izquierda, Teodoro Petkoff, no fue más que un paquete similar al del gobierno de Pérez, que incluía numerosas privatizaciones. La consigna de Petkoff era la siguiente: “Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario” (Petkoff citado en Ellner, 1998); sin embargo, salvo por la petrolera PDVSA y la eléctrica Edelca, todos los sectores deberían pasar a manos privadas. A la ola de privatizaciones se le sumaron numerosas propuestas de reformas laborales que acabarían con la protección de los trabajadores, en un intento de adecuarse a los niveles de exigencia globales.

⁸⁶ La organización Convergencia, que llevó al poder del gobierno a Caldera, tuvo un éxito momentáneo: en el año 2000 solamente tenía un representante en la nueva Asamblea Nacional unicameral y, en 2005, tuvo que retirarse de las elecciones.

⁸⁷ En un discurso pronunciado en el Congreso en 1992, se le atribuye la siguiente frase: “es difícil pedirle al pueblo que se inmole por la libertad y por la democracia, cuando piensa que la libertad y la democracia no son capaces de darle de comer”. Su simpatía por las protestas populares le ayudó para su segunda vuelta al gobierno.

De manera semejante a como le ocurrió a Carlos Andrés Pérez, el segundo gobierno de Caldera estuvo marcado por la crisis, especialmente en el ámbito financiero, que provocó una gran fuga de capitales. Caldera había prometido no acudir al FMI, pero tuvo que solicitarles un préstamo de emergencia de 1,400 millones de dólares en 1995 para seguir cumpliendo los compromisos financieros; continuó, además, la política de privatizaciones del gobierno anterior. Su administración marca el período en que la población rechazó drásticamente a todos los partidos políticos tradicionales y puso los ojos en el insurgente Hugo Chávez, quien, habiendo sido indultado por el propio gobierno de Caldera en 1994 debido a su insurrección militar, buscaba la presidencia a través de una nueva organización, el Movimiento V República, en alianza con otros partidos.

Chávez junto con otros compañeros militares, desde 1982, habían formado una organización clandestina llamada Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), jurando rescatar los valores patrios, dignificar la carrera militar y luchar contra la corrupción. Durante los 80s realizaron diversos contactos con dirigentes de organizaciones políticas de izquierda, incluyendo a la guerrilla del Partido de la Revolución Venezolana (PVR). La reacción represiva del gobierno ante el *caracazo* los orilló a preparar un levantamiento en armas que ocurrió el 4 de febrero de 1992, pero fracasaron. Ese día, “para las nueve de la mañana cuando Chávez entendió que el objetivo principal, el arresto del presidente, era imposible de cumplir, se rindió y solicitó hablar por la televisión a sus compañeros de armas para pedirles que lo hicieran también y evitar una masacre... Esa intervención que duró poco más de un minuto, le dio rostro a la insurrección, capturando el imaginario colectivo de amplios sectores de la población” (Murillo G.A., 2007: 34). Gran parte de los participantes en esa rebelión fueron encarcelados. Sin embargo, dos años después, en 1994, el nuevo presidente Caldera les otorgó un sobreseimiento de causa; Chávez recobró la libertad y se dio a la tarea de construir una

organización política en todo el país a partir de organizaciones locales llamadas “círculos bolivarianos”.

En 1997, el MBR-200 solicitó su inscripción en el Consejo Supremo Electoral con la intención de participar en las elecciones de 1998 a través de un nuevo nombre: el Movimiento V República (MVR)⁸⁸. La candidatura de Hugo Chávez a la presidencia por parte del MVR llegó en el contexto de una crisis económica y ante el descrédito de todos los partidos políticos tradicionales: su discurso fue radical en contra del modelo neoliberal del país, orillando con claridad la distinción con la mayoría de las organizaciones políticas que habían tenido el poder en Venezuela en las últimas décadas, pero abriendo un gran puente de alianzas con otras fuerzas políticas (el PPT y el MAS) integradas al Polo Patriótico (PP). Era una postura radical que tenía como objetivo el cambio total en el país: Venezuela no se va a arreglar por una pequeña parte primero, para ir avanzando hacia el todo. [...] Aquí el todo es más importante que las partes. Aquí o se arregla el todo o las partes no tienen arreglo” (Chávez en Dieterich, 2004).

Los dos partidos tradicionales –AD y COPEI– iban en descenso vertiginoso, pero habían surgido otras opciones. Una de ellas fue Irene Sáez, quien había sido Miss Universo en 1981 y había tenido un éxito local como alcaldesa en Chacao a partir de 1992, en donde logró reelegirse en 1995; había formado su propio partido político (Integración y Renovación Nueva Esperanza: IRENE) para contender en las presidenciales de 1998 pero cayó en descrédito al ser apoyada oficialmente por COPEI⁸⁹: solamente logró el 3% de la votación nacional. En otro ámbito, diversos sectores empresariales apoyaron la can-

⁸⁸ El cambio de nombre (de MBR-200 a MVR) obedeció sobre todo a la prohibición que existe en la ley electoral venezolana de utilizar el nombre de Bolívar en el registro de cualquier organización política.

⁸⁹ En los vaivenes súbitos de la política venezolana, a unos pocos días de realizarse la votación presidencial, el COPEI le quitó su apoyo a Irene Sáez para respaldar a Salas Romer del Proyecto Venezuela.

la candidatura de Henrique Salas Romer, economista formado en universidad norteamericana, quien había sido gobernador del estado de Carabobo y fue postulado por el partido “Proyecto Venezuela”. Por otro lado, AD había propuesto a su líder fundador Luis Alfaro Lucero –aunque luego sería expulsado de esa organización– para contender por la presidencia, aunque también, poco antes del proceso electoral, el partido le quitó su apoyo para tratar de darle la victoria a Salas Romer.

En Septiembre 1998, se veía clara la figura de Chávez creando temor entre empresarios e inversionistas pero liderando las encuestas electorales: “Chávez ha levantado el fantasma de las barreras proteccionistas al comercio extranjero, ha amenazado con una moratoria de uno o dos años para los pagos de la deuda y ha prometido revisar las concesiones del estado a las compañías petroleras. Ha llamado para poner fin a la privatización de los bienes públicos por lo menos hasta que el país pueda garantizar los ingresos al tesoro nacional más que a las cuentas personales de los oficiales corruptos en Miami. Para sus oponentes, la caída del mercado, los altos intereses, la compra masiva de dólares y los temores de la devaluación son causados por la posibilidad de que Chávez gane las elecciones... El apoyo a Chávez está alimentado por la convicción de muchos venezolanos de que la bonanza del petróleo pueda garantizar salarios decentes, los servicios gubernamentales, la protección del empleo y los beneficios del retiro. Con el 80% de la población viviendo en pobreza, la oposición a lo que se describe como un capitalismo salvaje ha ido creciendo ampliamente” (LADB: Sept. 4, 1998). La candidatura de Hugo Chávez tenía como principal propuesta la creación de una Asamblea Constituyente que se encargara de crear una nueva constitución para buscar una reestructuración total. Los detractores de Chávez expresaban su temor sobre un posible totalitarismo puesto que la Asamblea Constituyente le abriría las puertas a Chávez, en caso de triunfo, para acumular demasiado poder en su persona, aunado al hecho de la gran influen-

cia que tendrían de nuevo los militares retirados dentro de su gobierno (Ellner, 1998).

Los resultados de las elecciones presidenciales fueron contundentes: Hugo Chávez ganó con el 56.20% de la votación; el segundo lugar fue para Henrique Salas Romer con 39.97% de los votos, dejando muy lejos en un tercer lugar a IRENE, cuya candidata solamente consiguió el 2.82%. El resto de los partidos no logró llegar al .5% de la votación general (CNE, 2000).

Primeros años de gobierno de Hugo Chávez

La década de 1980 y 1990 coincide con la implantación del modelo neoliberal en casi todos los países latinoamericanos. Así ocurrió, por ejemplo, a partir de los años 80s, en México con el gobierno de Miguel de la Madrid, en Argentina con el gobierno de Carlos Menem. Para el caso de Venezuela, se implementaron las políticas de libre comercio y privatizaciones pero en una época de marcada crisis económica en donde la población solamente conocía desempleo, inflación, falta de inversión del estado en programas sociales, aumento de la pobreza, la eliminación de subsidios y numerosos casos públicos de corrupción. Si en Argentina y en Ecuador se provocó el grito generalizado de “que se vayan todos”, en Venezuela fue el ocaso de las organizaciones políticas gobernantes de las últimas décadas.

Chávez ganó de manera contundente en las elecciones del 6 de diciembre de 1998 a través de su propuesta de romper con el pasado y por su oposición al neoliberalismo salvaje aplicado al país y tomó posesión como presidente el 4 de febrero de 1999. Sin embargo, en el nivel económico, realizó una política moderada encaminada a combatir la corrupción, aumentar la recaudación fiscal e incentivar la producción con cierta regulación del estado que reconocía el papel del capital privado sin llegar a las expropiaciones. El contexto de 1999, a pesar de todo, se expresó en un panorama de recesión agravada con fuga

de capitales; pero la elevación de los precios del petróleo y control de la inflación ofrecieron un panorama de estabilidad.

La urgencia inmediata para 1999 –y así lo manifestó en su discurso de toma de posesión– fue la convocación para la formación de una Asamblea Nacional Constituyente para crear una nueva Constitución; la propuesta de la nueva carta nacional fue aprobada mayoritariamente en diciembre de 1999. En abril de ese año, se había convocado a un referéndum con el fin de elegir a una Asamblea Nacional Constituyente que se encargara de redactar la constitución que sentaría las bases de la nueva nación bolivariana; tres meses después se efectuaron las elecciones para designar a los representantes que se encargarían de ello. Los resultados favorecieron a los partidarios del nuevo proyecto bolivariano: se hizo el referendun para autorizar la asamblea que redactaría la nueva Constitución y la ganó de manera abrumadora el Polo Patriótico (PP) al lograr 121 de los 131 asientos.

Una vez ratificada la nueva constitución, y tras seis meses de trabajo, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fue disuelta. En ese periodo, los constituyentes hicieron una total reingeniería del Estado venezolano. El actuar de la Asamblea no se limitó solamente a la elaboración de la nueva ley sino que, por sus facultades “supraconstitucionales”, tuvo ingerencia sobre los poderes. En ese sentido, se limitaron las facultades del Congreso (que terminaría por ser disuelto) y nombraron nuevos jueces de la Suprema Corte; también fue relevado al mismo tiempo el ministro de justicia y al contralor (LADB, NotiSur Feb. 11, 2000). Fue el mismo presidente quien se encargó de formalizar la ruptura con la constitucionalidad anterior, mediante la proclamación de una “emergencia judicial” y una “emergencia legislativa”; Chávez pudo acceder al control político del Tribunal Superior de Justicia y del Poder Judicial (Boersner, 2006).

Se aprobó también con abrumador SÍ el texto de la nueva Constitución en diciembre de 1999 donde el país adquirió un

nuevo nombre (República Bolivariana de Venezuela) y se plasmó el principio de la participación permanente de los ciudadanos en las decisiones públicas: “Con la llegada de Hugo Chávez al poder, se aprueba una nueva constitución donde queda plasmado un modelo de descentralización, con cambios profundos en materia de participación ciudadana, sobre lo cual se ha avanzado a través de numerosas leyes y en particular con Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública y la ley de los Consejos Comunales” (Ochoa, Fuenmayor y Enríquez, 2007).

Con la aprobación de la Constitución, se convocó para julio del 2000 a nuevas elecciones en donde todos los funcionarios electos debían ser de nuevo sometidos al voto popular. Los comicios tendrían lugar supuestamente en mayo del 2000 pero a causa de ciertas fallas técnicas tuvieron que ser pospuestos hasta el 30 de Julio. Esta decisión derivó en la renuncia de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE); un nuevo Consejo tuvo que ser nombrado para reanudar el proceso electoral. Los integrantes del nuevo CNE, por primera vez en la historia de Venezuela, fueron elegidos por la Comisión Legislativa Nacional (CLN)⁹⁰ de una lista de nominados presentados tanto por la sociedad civil, la iglesia Católica como por los empresarios.

La llamada “megaelección” (presidenciales, gubernaturas y poder legislativo) se llevó a cabo el 30 de julio del 2000. También el PP ganó esta contienda para que Chávez iniciara un mandato de seis años con posibilidad de reelegirse después, lo que ocurrió en el 2006. Los resultados de la elección confirmaron lo que las encuestas predecían: la victoria de Chávez fue aplastante; logró un 59.76% mientras que el opositor Francisco Arias Cárdenas obtuvo solo el 37.52% de los sufragios (CNE, 2000). De esta forma Chávez se afianzó en la presiden-

⁹⁰ La Comisión Legislativa Nacional, cuyos 20 integrantes fueron nombrados por la Asamblea Nacional Constituyente, fue creada como órgano legislativo interino entre la disolución de la Asamblea y la elección del nuevo órgano: la Asamblea Nacional.

cia de la república por un periodo que, gracias a la nueva constitución, ahora sería de seis años con la posibilidad de reelección inmediata. El COPEI prácticamente había desaparecido como fuerza política mientras que AD sólo obtuvo 20 asientos en el congreso. La popularidad de Chávez fue extraordinaria durante 1998-2000 mientras los partidos tradicionales decaían sensiblemente.

El nuevo gobierno del presidente Chávez evitó el proceso de privatización de la empresa petrolera PDVSA garantizando la participación fija del estado en la economía bajo el supuesto keynesiano de que el mercado no puede regularse por sí mismo, pero reconocía el papel que jugaba la propiedad privada en el proyecto económico; por otro lado, puso un gran énfasis en la política social, especialmente en un sistema de seguridad social a partir de fondos públicos del propio Estado, queriendo garantizar a todos los ciudadanos sus derechos al trabajo, a la salud, a la educación, etc. Al mismo tiempo, se incorporaron nuevas formas de participación directa de la población en la política pública, aunque se concentraron mayores facultades al poder ejecutivo.

Para apresurar la aplicación de las medidas de política social, el presidente pidió a los legisladores que le otorgaran una ley habilitante que le permitiría legislar libremente en materia económica y social (Boersner, 2006). La Asamblea nacional que tenía una mayoría del Polo Patriótico, a pesar de los intentos de la oposición, concedió a Chávez los poderes necesarios para reformar a discreción la forma en que opera PDVSA, aprobar reformas agrarias para redistribuir la propiedad, y una injerencia dentro del Banco Central (LADB, NotiSur, Nov. 10, 2000). Con ello Chávez pudo poner en marcha diferentes programas sociales, de educación y salud. Para ello destinó más de 2 mil millones de dólares para combatir la pobreza e intentar crear 100,000 empleos en el lapso de un año.

Aunque muchos opositores acusaban de comunista al nuevo gobierno, especialmente por la gran relación de amistad de

Hugo Chávez y Fidel Castro, la política gubernamental fue moderada enfatizando un sistema de economía mixta: el énfasis estaba puesto en una mayor distribución de la riqueza social sin desconocer el papel de la inversión privada. James Petras, profesor en New York State University y de una tendencia ideológica radical, señalaba que “Chávez es un político extremadamente moderado, que es atacado solamente por no permitir los vuelos de vigilancia de droga en Venezuela, por oponerse al Plan Colombia y por trabajar con la OPEP” (LADB, NotiSur, 22 Marzo 2002).

Del 2000 al 2002, la situación fue muy difícil para el gobierno en el nivel económico y político: baja del precio del petróleo, déficit en la balanza de pagos, fuga de capitales, la reorganización de la oposición, las acusaciones del gobierno norteamericano de Bush y de los organismos internacionales, crecimiento de la pobreza y la delincuencia, etc. La nueva Ley de Tierras que aprobó el legislativo estableciendo un número máximo de hectáreas para los propietarios (en un contexto donde el 70% de la tierra cultivable pertenecía al 3% de ellos) con impuestos a las tierras ociosas y amenazas de expropiación también provocó más conflictos en el campo.

En particular, la relación del gobierno con el sindicato de la empresa petrolera del estado se agravó. Los trabajadores del petróleo se encontraban afiliados mayoritariamente a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), una organización que tradicionalmente estuvo vinculada a Acción Democrática (AD) y que se había venido desprestigiando por su apoyo a las reformas neoliberales de los anteriores gobiernos. La relación de la CTV con el gobierno de Chávez fue tensa pero calmada durante los primeros años. El gobierno había favorecido la nueva agrupación Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT), pero la CTV seguía existiendo con su fuerza propia y eligió en el 2001 a su nuevo dirigente Carlos Ortega. El presidente Chávez había intentado tener líderes sindicales más afines a su proyecto de gobierno, pero gracias al poder que ostenta el

sindicato y al apoyo de organizaciones internacionales, entre ella la OIT, falló el intento gubernamental de intervenir en la organización laboral a la hora de las elecciones de los líderes sindicales: en sus elecciones internas de octubre del 2001, el candidato pro-Chávez (Aristóbulo Isturiz), con 16% de los votos, perdió frente a Carlos Ortega, quien logró el 57% de la votación; éste último, durante su campaña, había indicado su objetivo de mantener la CTV con independencia del gobierno. En la práctica, numerosas burocracias sindicales promovían los paros de trabajadores e incluso sabotajes como destrucción de equipos o bloqueo del transporte y de servicios.

Los problemas con la empresa petrolera del estado se hicieron agudos en febrero del 2002 cuando Chávez, utilizando las facultades del Ejecutivo, nombró un nuevo director de PDVSA, Gastón Parra, profesor universitario con fuerte tendencia nacionalista y a cinco de los siete miembros de la junta directiva. Su intención era impedir que la empresa fuera “un estado dentro del estado” y lograr una concordancia de la empresa del estado con las políticas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La burocracia obrera, apoyada por empresarios de Fedecámaras contrarios a Chávez, amenazó con irse a la huelga, frente a lo cual, el presidente amenazó con militarizar la empresa si acaso se dejaba de trabajar (LADB, NotiSur, 22 marzo 2002).

El líder sindical Carlos Ortega, uniéndose a la demanda de directivos y empresarios —que eran sus tradicionales enemigos—, ratificó la amenaza de una huelga nacional; los efectos económicos serían de proporciones inmensas, considerando el producto del petróleo⁹¹ ya que la CTV reúne a cerca de un millón de trabajadores. La oposición llamó a un “Paro Cívico

⁹¹ Según la Statistical Review of world energy 2007, las reservas probadas de Venezuela constituyen el 6.6% del total en el mundo. Comparativamente Irán posee el 11.4% y Saudi Arabia el 22%. Tan sólo el complejo de Paraguana de PDVSA, con capacidad de producir 950 mil barriles al día, parecía desde el 8 de abril estar operando al 50%.

Nacional” mientras que el gobierno rechaba el “chantaje petrolero” y despedía a todos los directivos que apoyaban el paro. De hecho, comenzó un paro indefinido de labores el 9 de abril promovido por la CTV y por la Federación de empresarios, apoyados por las televisoras, partidos políticos opositores y la jerarquía de la Iglesia católica: se exigía la renuncia de los 7 miembros de la junta directiva de PDVSA. La situación se agudizó cuando el líder sindical hizo un llamado a las fuerzas armadas para apoyar a la oposición⁹². La huelga nacional logró paralizar varios sectores primordiales de la economía venezolana, incluido el petrolero; con esto no sólo se afectó al mercado interno sino que Venezuela se vio obligada a interrumpir el suministro de grandes cantidades de petróleo al exterior.

Golpe de estado y referendum revocatorio

Todo este contexto fue el precedente para el intento de golpe de estado contra un gobierno democráticamente electo. Ciertamente el presidente se había apoyado en diversos sectores militares afines, especialmente aquellos que habían participado en el intento de tumbar al gobierno de Andrés Pérez de 1992, pero otros sectores militares se habían sentido desplazados al ser removidos de sus cargos; estos últimos fueron quienes quisieron aprovechar la situación de descontento.

El 11 de abril del 2002 hubo varias manifestaciones en la calle en donde, con una multitud marchando hacia la sede del gobierno para exigir la renuncia del presidente y habiendo también en la calle simpatizantes de Chávez, policías y militares, se dio un enfrentamiento violento y muerte de diversos ciudadanos participantes⁹³, lo que permitió que un grupo de

⁹² Fue un llamado del líder sindical a los militares en la televisión Globovisión: “En un momento de crisis, las fuerzas armadas tienen que tomar el lado del pueblo, el lado de las mayorías... Es una situación explosiva que requiere de una acción inmediata” (LADB, NotiSur. April 12, 2002).

⁹³ Algunos calculan que pudieron ser 40 muertos entre el 11 y el 14 de abril del 2002, pero oficialmente el número de decesos investigados relacionados

conservadores radicales ocuparan el gobierno y proclamaran al presidente de la Federación de Cámaras Empresariales (Fedecamaras), Pedro Carmona, con el apoyo de varios militares, como jefe de Estado, quien de manera inmediata disolvió el Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional. Pero el golpe de Estado no duró más que dos días, puesto que Hugo Chávez, con gran apoyo interno (manifestaciones multitudinarias a su favor en las calles y a nivel internacional (por ser un gobernante elegido democráticamente), recuperó el control de la presidencia el 13 de abril. El presidente pudo mantenerse en el gobierno pero sin abandonar su objetivo de reestructurar la empresa petrolera hizo varios cambios importantes con intención negociadora: un nuevo vicepresidente, el experimentado José Vicente Rangel; una nueva cabeza para PDVSA (con algunos miembros de la Junta Directiva), Alí Rodríguez Araque, anterior secretario general de la OPEP; la reinstalación de algunos de los ejecutivos de la empresa que habían sido despedidos. El presidente se entrevistó con jerarcas de la Iglesia en el mismo mes de abril. Y finalmente, pidiendo perdón por los errores cometidos, formó una Comisión de Diálogo Nacional para dejar abierto un canal continuo de negociación para evitar futuras confrontaciones. Incluso se invitó al expresidente norteamericano Jimmy Carter para que fuera mediador en el diálogo; Carter visitaría después Venezuela en el mes de julio.

El fallido golpe de Estado dejó en claro que la oposición estaba fragmentada, unida solamente por el antichavismo: no tenían una propuesta alterna unificada frente al proyecto bolivariano; el breve golpe de estado “no sólo planteó dudas sobre las credenciales democráticas de la oposición; también dio a Chávez el pretexto ideal para asumir el control de las fuerzas armadas y purgar a todos los disidentes” (Shifter, 2006). La oposi-

con estos enfrentamientos fueron 19; posteriormente, el presidente solicitó al poder judicial una sería investigación para encontrar y castigar a los responsables de las muertes. La misma Asamblea Nacional creó una Comisión de la Verdad con el mismo objetivo.

ción, desunida y mal organizada, se debilitó mucho más con la captura y exilio de algunos de sus líderes; varios de ellos habían sido acusados de rebelión civil, conspiración y destrucción.

Por otro lado, aunque el gobierno norteamericano siempre lo negó, salieron numerosas evidencias de la participación de Estados Unidos en el apoyo a quienes habían promovido el golpe de estado: según el *New York Times*, la National Endowment for Democracy (NED), institución creada y financiada por el congreso estadounidense había canalizado en meses anteriores cientos de miles de dólares a los grupos opositores a Chávez en Venezuela, incluyendo explícitamente a la CTV de Ortega. Incluso ciertos militares de inteligencia confesaron haber tenido contactos con militares venezolanos para analizar la posibilidad de un golpe de estado. El periódico londinense *The Guardian* analizaba de esta manera la intervención de Estados Unidos: “Norteamérica apoya la democracia cuando la democracia está del lado de Norteamérica; el punto decisivo no es si los ciudadanos de todo el mundo tienen el derecho de escoger a sus líderes sino si los líderes de cualquier nación, sean electos libremente o no, tienen el derecho de elegir una dirección en contra de lo que Estados Unidos considere que son sus intereses en un determinado momento” (LADB. NotiSur. May 3, 2002). Dado que el hecho había ocurrido en el mes de Abril y recordando el ataque a Cuba en Bahía de Cochinos, el reportero del periódico londinense Duncan Campbell llamó a este intento de golpe en Venezuela la “*Bush's Bay of Piglets*”.

El golpe falló pero quedó la duda sobre los principales instigadores. El gobierno nombró posteriormente a Danilo Anderson como encargado federal especial para las investigaciones de la Fiscalía General de Venezuela sobre los autores de la conspiración, centrándose especialmente en los que habían firmado el apoyo a Pedro Carmona durante su interinato de dos días, pero cuando estaba a punto de anunciar las acusacio-

nes contra los inculpados murió la noche del 18 de noviembre del 2004 por la explosión de un coche bomba.

Posteriormente, la declaración que tuvo que hacer la propia Embajada de Estados Unidos en Caracas, en el marco de las manifestaciones de octubre 2002, le quitó las alas a la oposición: el gobierno norteamericano⁹⁴ a través del Embajador Charles Shapiro tuvo que declarar su oposición a cualquier acción ilegal o violenta que quisiera derribar un gobierno democráticamente electo. En la práctica, sin embargo, la administración norteamericana de George Bush continuó obstaculizando la administración de Chávez en Venezuela. Posteriormente en abril del 2005, el presidente venezolano tuvo que cancelar un acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos que había durado 35 años mientras en Venezuela se detuvo a varios ciudadanos norteamericanos que estaban tomando fotos de instalaciones militares; en ese año, Venezuela empezó a vender varias instalaciones de CITGO, que es sucursal de PDVSA en territorio norteamericano. Otro punto de enfrentamiento entre Venezuela y Estados Unidos fue la aprehensión, en mayo del 2005, en territorio norteamericano de Luis Posada Carriles⁹⁵, agente de la CIA que había colaborado en numerosos actos terroristas en Guatemala, México, Nicaragua, Cuba y Venezuela; los norteamericanos solamente los aprehendieron por entrada ilegal al país y desecharon toda otra acusación. En otro episodio de confrontación con los Estados Unidos, Chávez se retiró, en octubre del 2005, del acuerdo antinarcoóticos con ese país, señalando que los norteamericanos de la Drug Enforcement

⁹⁴ Algunos analistas señalan que el gobierno de Bush se vio obligado a hacer esta declaración para suavizar su posición ante Hugo Chávez en el contexto de la preparación de la guerra contra Irak; de cortarse allá los suministros del petróleo, Estados Unidos no podía poner en peligro una fuente de abastecimiento de petróleo tan importante como la de Venezuela.

⁹⁵ Posada Carriles fue quien planeó la explosión de un avión cubano, en 1976, que salió de Caracas hacia La Habana, donde murieron 73 personas. Fue apresado por este hecho en Venezuela, pero pudo escapar en 1985.

Administration (DEA) estaban utilizando a sus agentes solamente para el espionaje.

A pesar de que el paro nacional costó más de 7 mil millones de dólares a la economía venezolana, este acontecimiento repercutió positivamente en un mayor ascenso político de Chávez; los hechos del 2002 le empezaron a otorgar al gobierno un mayor control de PDVSA al ubicarla bajo la tutela del Ministerio de Energía y Petróleo y posibilitar una reestructuración que continuaría hasta el 2003 (por ejemplo, la nueva Ley de Hidrocarburos), aunque el golpe a la economía nacional había sido muy pesado. Es a partir de ese año que el petróleo de Venezuela se comenzó a utilizar en más concordancia con los programas de desarrollo y en una visión a largo plazo como lo muestra el plan estratégico “Siembra Petrolera 2005-2030”. Estos recursos fundamentales en manos del Estado son los que pudieron hacer posibles los nuevos programas de política social expresados en las “Misiones Bolivarianas”.

Por otro lado, la oposición no quiso aceptar mediación alguna para el diálogo; ni siquiera la presencia de James Carter pudo lograr un encuentro directo entre las dos fuerzas; de cualquier manera, el presidente de Venezuela aceptó en julio del 2002 algunas de las sugerencias de la oposición presentadas a través del expresidente norteamericano como el reconocimiento de Carlos Ortega como dirigente de la CTV y la ayuda brindada por la ONU y la OEA para ayudar en el proceso de negociación. La demanda principal de la oposición se redujo entonces a exigir la salida del presidente mediante medios pacíficos; surgió la idea del referéndum revocatorio. Sin embargo, los enfrentamientos verbales continuaron eventualmente: en Junio se había hecho público un video donde un grupo de oficiales militares enmascarados autollamados los “Comacates” hacían un llamamiento para matar a todo miembro de los Círculos Bolivarianos; en el mes de julio, Los Angeles Times hacía referencia a una declaración de José Antonio Gil, empresario importante de agencias encuestadores en Venezuela, en

donde mencionaba que la única solución para la crisis política del país era que Chávez debía ser asesinado.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), César Gaviria, se ofreció a mediar para entablar el diálogo entre el gobierno y la oposición con el fin de llegar a un acuerdo pacífico; visitó el país en el mes de octubre en medio de grandes tensiones verbales y manifestaciones en la calle, sin tampoco lograr encuentros directos de diálogo. Se sucedieron varias visitas más de Gaviria en el 2002 sin lograr avance alguno.

La oposición formó su organización, la Coordinadora Democrática, para seguir con sus protestas y manifestaciones y se planteó el reto de buscar el cambio de gobierno a través de presiones públicas. Pero las marchas y huelgas de los opositores (alentadas por los empresarios de Fedecámaras y los sindicalizados de la CVT) como la ocurrida el 10 de octubre con la pretendida “toma de Caracas” encontraban su némesis en las también masivas marchas de los simpatizantes del gobierno como la de dos días después el 13 de octubre⁹⁶. Por su parte, el gobierno se ganó a la Federación de Trabajadores Petroleros (Fedepetrol) al firmar un contrato laboral con ellos concediéndoles un 35% de aumento de salario junto con otras prestaciones; la Fedepetrol marcó su distancia con las huelgas opositoras. La proyectada huelga de 12 horas para el 21 de octubre, impulsada por la Coordinadora Democrática, Fedecámaras y la CTV tuvo poco eco y muy diferenciado: poca actividad en los barrios ricos de Caracas; casi todo normal en el resto de la ciudad, especialmente en los barrios pobres. Al día siguiente, el 13, se dio a conocer un comunicado de 14 oficiales militares que se declaraban en desobediencia civil llamaban a todos los militares y a la población a la Plaza Altamira a levantarse co-

⁹⁶ Según la agencia France Press, las dos manifestaciones (10 y 13 de octubre 2002) fueron inmensas, pero la de los simpatizantes de Chávez sobrepasó con mucha claridad el número de los opositores que se habían congregado dos días antes.

ntra Chávez y hacer de la plaza un territorio liberado; varios de ellos estaban acusados de haber liderado el golpe de Abril de ese año. Esta acción fue condenada por Gaviria, el secretario general de la OEA pero apoyada por la CTV y los tres pequeños partidos opositores (AD, COPEI, Primero Justicia); los oficiales decían que no se retirarían de ahí hasta que Chávez renunciara, pero su acción minoritaria nunca funcionó en sus objetivos explícitos aunque la Plaza se convirtió en centro de actividades de la oposición; el sector militar, a diferencia del mes de abril, estaba completamente con el gobierno.

Se proyectó otra huelga para el 2 de diciembre de ese año planeada por los mismos organizadores (CD, CTV, Fedecame-ras) a pesar de la mediación del Secretario General de la OEA. Habían también recolectado miles de firmas solicitando la remoción inmediata del presidente porque no querían esperar al referendun revocatorio. El resultado de la huelga fue de nuevo un éxito parcial en algunos lugares, pero entre la oposición ya no hubo unidad sobre si terminarla en las 72 horas o continuarla indefinidamente. Por la interrupción de vías de circulación, empezó a haber enfrentamientos con la policía; para el 6 de diciembre había 3 muertos y 28 heridos. Pero las manifestaciones progubernamentales también se sucedían, especialmente alrededor de los medios masivos de comunicación. De nuevo, algunos opositores quisieron sabotear la producción y distribución del petróleo en un esfuerzo que continuaría hasta enero del 2003; pero la reestructuración de PDVSA estaba decidida, incluso con el proyecto de dividirla en dos empresas para lograr una mayor efectividad en sus costos de producción; al comienzo del año y habiendo despedido a numerosos directores propiciadores del sabotaje, la empresa empezaba a recuperar su producción de un millón de barriles por día⁹⁷. La huelga seguía, pero era claro que el daño que se

⁹⁷ Según el propio presidente Chávez, la producción planeaba retomar a finales de febrero 2003 la producción de 2 millones de barriles por día,

estaba haciendo a la economía provenía de los huelguistas y no del gobierno; éste fue un punto importante a considerar por los instigadores del movimiento; muchos dueños de negocios se quejaban de no haber vendido nada durante la Navidad a causa de haber cerrado. Para el 17 de enero, el gobierno ordenó a la Guardia Nacional la toma de bodegas llenas de cerveza, refrescos y agua embotellada en el estado de Carabobo para distribuir las entre la población; se fue convenciendo, por otro lado, a capitanes de tanques petroleros para volver a su labor pacíficamente. Más que huelga general de trabajadores, desde el 2 de diciembre del 2002 lo que se había orquestado era un paro patronal y una serie de sabotajes premeditados a la industria petrolera.

De cualquier manera, la situación de Venezuela seguía complicada y, desde la perspectiva internacional, un grupo de 6 países, un “*grupo de amigos*”, a principios del 2003, tuvieron la iniciativa de mediar en el conflicto interno. Este grupo estuvo formado por Estados Unidos, México, Brasil, Chile, España y Portugal. Sin embargo, aunque Chávez vio con benplácito la intervención de Brasil, en su conjunto juzgó que el grupo estaba muy cargado hacia los intereses de los opositores a su gobierno y prefirió insistir en el principio de la no intervención en los asuntos internos. Pero los incidentes internacionales no dejarían de estar presentes como cuando en mayo del 2004 fue desmantelada una red de paramilitares colombianos en las afueras de Caracas; varios de los arrestados de ese país portaban uniformes militares venezolanos. Posteriormente en octubre del 2004, seis soldados y un ingeniero de PDVSA fueron asesinados en las inmediaciones de la frontera con Colombia. Debido a la oposición de proyectos gubernamentales entre Venezuela y Colombia, las tensiones fueron escalando; se llegó al momento de rompimiento de las relaciones comerciales cuando, en diciembre de 2004, gente contratada por el minis-

aunque la situación antes de las huelgas habían alcanzado los 3.2 millones de barriles (LADB. NotiSur Feb. 28,2003).

tro de defensa colombiano secuestró en Caracas al vocero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y lo transportó al vecino país, ocasionando una crisis diplomática que solamente se aminoró hasta febrero del 2005, con la mediación de varios países y en un encuentro directo entre los dos presidentes Chávez y Uribe.

Los opositores manejaban numerosas opciones posibles: renuncia inmediata del presidente, un referendun decisivo, una reducción del término presidencial de seis a cuatro años, el referendun revocatorio establecido por la constitución. Se había causado un enorme daño económico al país sin haber logrado los objetivos del movimiento, pero en ese momento había que reconsiderar las opciones puesto que Chávez emergía políticamente con más fuerza. Fue hasta el 18 de febrero del 2003 cuando tuvo un éxito parcial la mediación de César Gaviria, el secretario general de la OEA, porque logró una declaración conjunta para que gobierno y oposición firmaran una declaración conjunta en contra de la violencia política declarándola “completamente injustificable”: fueron ocho puntos de acuerdo en contra de la violencia y a favor de la paz y la democracia dentro del marco constitucional.

Sin embargo, las tensiones continuaron y se expresaban especialmente con ocasión de la discusión de la nueva propuesta de ley sobre los medios masivos de comunicación, la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, en el mismo mes de febrero, que quería poner límites legales. La mayor parte de los medios de radio y televisión privados habían participado activamente a favor de la oposición, instigando incluso a la violencia contra el gobierno: Venevisión, Globovisión, Radio Caracas Televisión, Televen, la estación regional Tachira. Además, el gobierno acusó formalmente y mandó detener al dirigente de Fedecámaras, Carlos Fernández, y al dirigente de la CTV, Carlos Ortega; la acusación era de traición y rebelión (implicándolos en el golpe de estado de abril 2002), sabotaje, destrucción económica, conspiración (todo esto último

relacionado con la huelga comenzada en diciembre). A Fernández le desecharon los cargos de traición y rebelión y con ello quedó solamente en arresto domiciliario, y se refugió luego en los Estados Unidos; Carlos Ortega pudo esconderse por un tiempo y buscó luego asilo en Costa Rica, que le fue otorgado en marzo 2003. Desde mediados del 2002, Pedro Carmona, el anterior presidente de Fedecámaras y presidente de Venezuela por dos días en el efímero golpe de Estado de abril había sido arrestado y había pedido asilo en Colombia, que le fue otorgado. Por otro lado, en el mismo mes de febrero, el ministro de Energía y Minas confirmó que se habían despedido a 9 mil empleados de PDVSA que habían participado en la huelga y saboteado la empresa; incluso se ordenó la detención de varios directores de ella implicados en lo mismo, aunque posteriormente los cargos fueron desechados. En el ámbito económico, para evitar la fuga de capitales y estabilizar las reservas internacionales, el gobierno estableció un tipo de cambio y prohibió las transferencias de dinero corriente hacia fuera del país que no tuvieran autorización de la Comisión de Administración de Divisas.

El marco legal para buscar la destitución de Chávez lo daba la propia constitución aprobada al inicio del gobierno, porque ahí se contemplaba la posibilidad de un referéndum revocatorio, es decir, la posibilidad de decidir la continuación del ejercicio del presidente y otros funcionarios, a la mitad de su periodo, por medio de una consulta ciudadana; y éste fue finalmente el camino que tuvo que aceptar la oposición después del fracaso de la huelga de dos meses (2 de diciembre 2002 a 3 de febrero 2003). Una oposición desalentada y dividida tuvo que aceptar verbalmente, con la mediación del secretario general de la OEA, en abril 2003, el referéndum revocatorio como único medio para sus fines, adhiriéndose totalmente a la Constitución de Venezuela y a los principios de la Carta Democrática de la misma OEA. Dicho acuerdo fue firmado oficialmente hasta el 29 de mayo 2003 y tenía en cuenta que el

referendum debía ocurrir después del 19 de agosto y debía tener la tarea inmediata para los demandantes de cumplir con la exigencia legal de recolectar 2.5 millones de firmas, que significaba el 20% del electorado. Someter al presidente bajo el mismo marco constitucional creado por el gobierno era la única vía posible.

El mes de abril fue también la ocasión para celebrar, por parte de los simpatizantes de Chávez, el primer aniversario del fracaso del golpe de estado del 2002, una ocasión que el presidente aprovechó para volver a plantear los lineamientos de la revolución bolivariana: la lucha contra el imperialismo global y el “neoliberalismo salvaje”, la lucha contra la “oligarquía fascista”, la lucha por la independencia continental y la “globalización de la revolución” (LADB, NotiSur, April 25, 2003). Cada determinado tiempo, especialmente en los escenarios internacionales, Hugo Chávez aprovechaba momentos para definir los rasgos de su proyecto bolivariano; así lo hizo también, por ejemplo, en la cumbre del G-15, a finales de febrero del 2004, cuando criticó severamente el modelo neoliberal que tanto había dañado a los países latinoamericanos en años anteriores, creándose un gigante abismo entre el Norte y el Sur: “la globalización no ha traído una supuesta interdependencia sino una profundización de la dependencia; más que globalizar la salud, es la pobreza lo que se ha expandido” (LADB, NotiSur, March 5, 2004).

Se había alcanzado el acuerdo entre oposición y gobierno para una solución pacífica de los conflictos. Una vez acordado el referéndum aceptando la mediación de la OEA, del Carter Center en Atlanta y de las Naciones Unidas, la oposición debía presentar las firmas para que la consulta pudiera tener lugar. Aquellos que querían sacar a Chávez de la presidencia se anticiparon a que el acuerdo fuera oficial y comenzaron a juntar firmas; pero éstas fueron apeladas por el Ejecutivo, argumentando legalmente que las firmas debían ser recogidas a partir del momento en que se había acordado oficialmente llevar a

cabo el referéndum. Según la ley, tampoco contarían las firmas de los venezolanos expatriados. Se iba a necesitar, además, que los votos a favor de la remoción del presidente superaran los votos obtenidos por él mismo en las elecciones del 2000: la oposición debía lograr que 3.8 millones de personas votaran en contra de Chávez puesto que él había sido electo con el 60% de la votación. Se tendrían también que nombrar nuevas autoridades en un Consejo Nacional Electoral. Pero las condiciones eran diferentes respecto del año anterior: en el 2002, la oposición tenía miles de gente en las calles, segmentos de militares a su favor y numerosos directivos de la empresa petrolera en el movimiento; en el 2003, todo eso se había debilitado.

En el mes de agosto 2003, el Tribunal Superior de Justicia nombró a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE). Su labor debía ser inmediata para validar los 3.3 millones de firmas que la Coordinadora Democrática estaba presentando para solicitar la remoción; debía resolver sobre numerosas demandas para tener también referendun revocatorio para autoridades municipales y regionales, y debía revisar y limpiar el padrón electoral. Debido a las irregularidades presentadas en las firmas (especialmente porque muchas fueron recogidas desde febrero y no a partir del 19 de agosto), el CNE dictaminó la invalidez de las firmas presentadas por la CD el 12 de septiembre 2003. Con ello, comenzó de nuevo la tarea de recolección de firmas por la oposición, pero estableciendo que no eran válidas las de aquellos que vivieran fuera del país, porque era imposible supervisarlas. Por su lado, los partidarios de Chávez también se dieron a la tarea de recoger firmas pero para solicitar un referendun revocatorio de los legisladores contrarios al proyecto bolivariano. Este tipo de acciones políticas encontradas continuarían en el 2004 cuando la oposición, por ejemplo, levantó una acusación contra el gobierno de Chávez por crímenes contra la humanidad, por asesinato y tortura con motivos políticos, ante la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda, durante los meses de marzo y abril

2004, queriendo presentar numerosos casos de víctimas de violencia política; por su parte, el gobierno expresó posteriormente su intención de presentar una demanda sobre crímenes contra la humanidad, a raíz del asesinato de 62 líderes campesinos simpatizantes del presidente que habían sido asesinados en los estados de Zulia, Apure y Tachira por elementos de la oposición.

Gobierno y oposición se dieron a la tarea de zanjar sus diferencias en el marco constitucional, pero eventualmente los ánimos volvían a explotar. Así ocurrió en la última semana de febrero del 2004 cuando Caracas fue la sede para la reunión del G-15⁹⁸, un grupo original de 15 países (que luego se elevó a 19), cuando los opositores chocaron violentamente con la Guardia Nacional venezolana, atrayendo también a miles de simpatizantes del gobierno. Hubo un muerto y varios heridos. La oposición quería llamar la atención internacional justo en las fechas en que la Comisión Nacional Electoral (CNE) debía anunciar su decisión sobre la validez de las firmas para el referéndum; la posición se dio a conocer en los inicios de marzo 2003 cuando el CNE determinó que de las firmas presentadas por los opositores, 1.1 millones tenían irregularidades graves⁹⁹ y eran puestas en cuestión; de esta manera, solamente se reconocían como válidas 1.832,493 firmas y que por tanto les faltarían alrededor de 600 mil para llegar a las 2.4 millones que eran necesarias según la ley: la primera semana de marzo fue de protestas callejeras que produjeron 9 muertos y 110 heridos, según el reporte de la policía, entre el 27 de febrero y el 4 de

⁹⁸ Este G-15 se había formado en 1989 por Algeria, Argentina, Colombia, Brasil, Chile, Egipto, India, Indonesia, Irán, Jamaica, Kenya, Malasia, México, Nigeria, Sri Lanka, Perú, Senegal, Venezuela y Simbawe. Su fin era crear un foro consultivo estable para fomentar la cooperación entre ellos. Venezuela tenía la presidencia desde 2001.

⁹⁹ Los errores consistían en los siguientes: estaban los nombres de las personas pero no había firma, había menores de edad; había nombres de gente fallecida, nombres de gente viviendo en el extranjero o que no estaban en el padrón electoral, diversas firmas puestas por una misma persona.

marzo. En este contexto, el 9 de marzo, los diputados anti-Chávez fueron al Tribunal Supremo Electoral a pedir la anulación del dictamen de la CNE.

Después de las apelaciones de la oposición, las instituciones electorales determinaron el 8 de junio que la fecha para el referendun revocatorio se fijara para el 15 de agosto del 2004¹⁰⁰. Las dos partes aceptaron plenamente la decisión y lo celebraron con marchas; empezaron a trabajar inmediatamente para ganar el voto de la población. Para Chávez, el referendun constituía una batalla fundamental contra la oligarquía local venezolana y especialmente contra Bush y la intervención norteamericana.

El reto para esta coyuntura era garantizar por ambas partes una votación transparente. Se había aceptado claramente la vigilancia de la OEA y del Carter Center de Atlanta, pero también fueron invitados numerosas personalidades internacionales y organizaciones de la sociedad civil para monitorear el proceso. De esta manera, Venezuela tuvo la presencia de figuras como Raúl Alfonsín, Eduardo Duhalde, Nelson Mandela, Mikhail Gorbachov, Gabriel García Márquez, Adolfo Pérez Esquivel, Belisario Betancourt, Rodrigo Carazo, Eduardo Galeano, Joseph Stiglitz, Noam Chomsky y otros artistas, funcionarios gubernamentales, arzobispos, etc.

Para el CNE, había 13.9 millones de venezolanos registrados que podían participar; entre ellos había 31 mil venezolanos residentes fuera del país que podrían votar en las embajadas: el SI implicaba que Chávez debía dejar el cargo; el NO significaba que debía terminar su mandato hasta las elecciones del 2006.

¹⁰⁰ Quedaron cosas inciertas para el caso de que Chávez perdiera la elección. Si la decisión se daba antes del 19 de agosto, tendrían que hacerse nuevas elecciones, y en ellas no quedaba claro si Chávez podría postularse otra vez; si el resultado se daba después del 19 de agosto, el vicepresidente José Vicente Rangel se convertiría en presidente sin necesidad de nuevas elecciones.

Los resultados volvieron a ser contundentes en la 8ª ocasión en que Chávez se enfrentaba electoralmente a sus oponentes en 5 años de gobierno: el presidente se reafirmó en el cargo al obtener el NO el 58.25% (4.991,483) de aprobación mientras que la oposición que deseaba retirarlo del cargo con el SI logró el 41.74% (3.576,517) (LADB. NotiSur. August 20, 2004). El resultado fue avalado por el Centro Carter y por la OEA, a pesar de las acusaciones de fraude de quienes no aceptaban el resultado. Este referendun significó la profundización del proyecto democrático bolivariano, que tenía un apoyo amplio de la población.

Harnecker analiza de esta manera las tres grandes derrotas de la oposición que le fueron dando grandes triunfos en la arena política y en el marco de la democracia al presidente de Venezuela: “El fracaso del golpe militar de abril del 2002 (más del 80% de los generales con mando operacional se mantiene fiel a Chávez y a la constitución) constituye la **primera gran derrota de la oposición** y un verdadero regalo para Chávez... Crearon el terreno propicio para avanzar en la depuración de la institución militar... El intento frustrado de parar el país 2 de diciembre del 2002 **fue la segunda gran derrota a la oposición**. El país no se detuvo. Chávez no se doblegó. Pero lo más importante, la industria petrolera pasó desde entonces realmente a control del Estado venezolano... Por su actitud subversiva, saboteadora, alrededor de 18 mil cuadros gerenciales de alto y mediano nivel opositores al gobierno –y que de hecho ejercían el control de la empresa– crearon las condiciones para que pudieran ser legales sus despedidos. La ratificación del mandato del presidente Chávez en el referendo revocatorio del 15 de agosto de 2004 –un proceso inédito en la historia mundial– fue la **tercera gran derrota** que sufrió la oposición venezolana en su intento de terminar con el gobierno del Presidente Chávez” (Harnecker, 2007)

Hacia las elecciones presidenciales del 2006

Los problemas de Venezuela vienen de muchas décadas anteriores, en donde toda la riqueza del petróleo no ha sido capaz de desbordarse hacia la mayoría de la población. Sin embargo, hasta los años 70s del siglo XX, el país parecía tener una estabilidad política. La situación cambió radicalmente con la aplicación del modelo neoliberal en la década de los 80s porque empezó a quedar clara la concentración de la riqueza en muy pocas manos y por la corrupción flagrante de los partidos políticos gobernantes. El fenómeno “Chávez” es una reacción de protesta donde por medios políticos en el marco de la democracia electoral se produce un cambio radical de orientación. El nuevo proyecto político del presidente triunfa a pesar de los fuertes y sucesivos ataques de la oposición, pero el país no tiene todavía en el inicio del siglo XXI grandes cambios estructurales. Estos son, por ejemplo, los datos generales sobre Venezuela que nos ofrece el Banco Mundial:

VENEZUELA 2005: DATOS GENERALES

Población	25.55 millones de personas
Ingreso per Capita	4,310 USA dólares
Esperanza de vida	73 años
Índice de Desarrollo Humano	61
Población adulta alfabetizada	93%
Mortalidad infantil	20/1000
Mortalidad materna	60/100,000 nacimientos
Fuerza de trabajo femenina	35%
Libertad de prensa	66/100
Percentil de gobernabilidad	17
Grado de confianza	11-26

Fuente: World Bank, 2005. <http://info.worldbank.org/governance/kekz2005>

El indicador manifestado en el índice de Desarrollo Humano (lugar número 61) es fundamental para ver comparativa-

mente cómo otros países como México, Costa Rica, Argentina, Chile, Uruguay se encuentran por arriba de Venezuela combinando los criterios establecidos de ingreso, salud y educación. Se puede notar también cómo el percentil de gobernabilidad es muy bajo teniendo en cuenta la inestable situación política durante los primeros años del gobierno de Chávez. Sin embargo, es la percepción de la población sobre el rumbo del país lo que les hace poner su confianza en el proyecto del presidente. Y esa confianza debía estar fundamentada en actividades reales de gobierno.

La victoria en el referendun ofreció la oportunidad de consolidar la presidencia de Chávez, implementando los lineamientos específicos de un proyecto propio, en el contexto de un proceso de recuperación económica después de los años de crisis. Uno de esos lineamientos esenciales era profundizar el aprovechamiento de la riqueza petrolera para beneficio social, algo que ya había comenzado en sus primeros años de gobierno y que ha sido reconocido internacionalmente: “El aumento de la inversión social durante la era Chávez ha sido realmente estimulante; así lo prueban los índices de desarrollo humano manejados por Naciones Unidas y las evaluaciones de resultados de las denominadas *misiones sociales* chavistas” (Samper, 2006).

Otro de los elementos fundamentales de dicho proyecto era la reforma agraria en donde, de acuerdo al censo de 1998, el 60% de la tierra era propiedad de menos de 1% de la población. Desde la ley agraria del 2001, el gobierno podía expropiar tierras ociosas o tierras donde los supuestos dueños no acreditaran legalmente la propiedad. En el 2005, el plan del ministro agrario era tomar 96,570 hectáreas de tierra y otorgarlas a los desposeídos, con lo cual el gobierno fue acusado de comunismo por la oposición; muchos de los terratenientes se apresuraron a formar sus propias bandas paramilitares para impedir la reforma. De cualquier manera, el proyecto de repartición de tierra se profundizó en todo ese año: las expropiaciones se fueron implementando y fueron acompañadas por la indem-

nización de ley a los legítimos propietarios; esto, sin embargo, no paró las acusaciones contra el gobierno por atentar contra la propiedad privada.

Otro gran proyecto que inició el 24 de julio del 2005 fue TELESUR, con trasmisión las 24 horas del día, en colaboración con otros países sudamericanos. Se pretendía contrarrestar la influencia cultural norteamericana de cadenas como la CNN o Univisión para ofrecer la visión desde el sur con otro tipo de interpretación y análisis sobre lo que pasa en América Latina y el mundo entero. El proyecto nació con una inversión inicial de 2.5 millones de dólares y tiene su sede en Caracas: Venezuela tiene el 51% de las acciones, Argentina el 20%, Cuba el 19% y Uruguay el 10%. Sin embargo, la red tiene correspondientes en numerosas naciones latinoamericanas, incluso en Estados Unidos. Se trata de un ambicioso proyecto cultural que tratará de ofrecer una imagen propia desde el sur, contrarrestando las visiones distorsionadas que se dan desde el norte. Telesur es comparada en su nivel con otros grandes proyectos de integración latinoamericana como Petrosur y Petrocaribe, que ofrecen los recursos del petróleo a otros países en condiciones preferenciales. Al mismo tiempo, en octubre del 2005, anunció el presidente su intención de solicitar el ingreso de Venezuela como miembro formal del MERCOSUR, la asociación de países de sudamérica¹⁰¹ que buscan una integración más sólida y menos dependiente de los Estados Unidos. En contraparte, debido a los tratados de libre comercio con Estados Unidos de varios países andinos, Venezuela amenazaría luego en abril del 2006 con salir de la Comunidad Andina de

¹⁰¹ En diciembre del 2004 se había formado en el Cusco, Perú, la Comunidad Sudamericana de Naciones, que luego se transformaría en Unión de Naciones del Sur (UNASUR). Es un gran proyecto de integración sudamericana pero que solamente está delineado; desde una perspectiva más regional, el MERCOSUR es el que avanza de manera más sólida y en él estaría contemplada, por ejemplo, la construcción del gran ducto transamazónico de gas natural de cerca de 10 mil kilómetros de longitud y que iría de Venezuela a Argentina, atravesando Brasil, como se anunciaría en enero 2006.

Naciones (CAN). En el mismo ámbito regional, otro gran proyecto como el Banco del Sur entraría en operaciones hasta el 2007.

Otro movimiento fuerte en la economía lo dio el gobierno cuando en octubre del 2005 decidió retirar sus reservas extranjeras de los bancos norteamericanos para trasladarlos a Europa; se trataba de una cantidad de 20 mil millones de dólares, según el Banco Central de Venezuela. Las razones del Banco eran de tipo financiero debido al descenso del dólar por el gran déficit estadounidense y a la elevación del euro, aunque varios analistas vieron también razones de tipo político y una menor autonomía del banco central.

En todos estos proyectos se consolidaba el marco de un proceso revolucionario con gran apoyo de la mayoría de la población que podía darle otro rumbo al país y al que Chávez le ponía un adjetivo: “Ya es una revolución ética, en el sentido de que los pueblos se organicen y salgan pacíficamente a clamar por algo y se sientan atendidos por un gobernante, por un grupo de gobernantes. Ahí hay un cambio ético. Se está rehaciendo el lazo que se rompió aquí. Eso es ya una revolución en lo ético, en el comportamiento de ambos actores: la masa desheredada y el gobernante que se siente legítimo representante de esa masa. Hay una revolución ética. Y está comenzando apenas” (Chávez en Dieterich, 2004: 70).

El tremendo golpe de la derrota paralizó a la oposición y la dejó sin iniciativa. La misma situación del referendun de agosto se repitió en las elecciones locales y estatales del 31 de octubre 2004, donde el gobierno ganó 20 de los 22 estados del país, de nuevo a través de elecciones transparentes; de las 337 presidencias municipales, los partidarios del presidente ganaron 270.

Ante los diversos proyectos gubernamentales, la oposición tuvo siempre un rechazo pero con una actitud pasiva y sin ningún líder que la coesionara. Así llegó el tiempo de las elecciones parlamentarias del 4 de diciembre del 2005, donde to-

dos los opositores prefirieron el abstencionismo: decidieron no participar en los comicios, aduciendo condiciones injustas y desiguales para la participación, en un intento por deslegitimar al gobierno. Diversos partidos como Acción Democrática (AD), Proyecto Venezuela (PV), Primero Justicia (PJ), COPEI,... realizaron explícitamente acciones de boicot. Sin embargo, la estrategia no fue la adecuada puesto que, con ello, toda la corriente partidaria del proyecto de Chávez logró un control total de la Asamblea Nacional, a pesar del abstencionismo: el Movimiento V República (MVR) ganó 114 asientos en la Asamblea y el resto de posiciones quedó para todos los partidos partidarios del mismo gobierno. Con algunos reclamos sobre irregularidades, los comicios fueron declarados justos y transparentes por los agentes que los monitorearon provenientes de Europa y de la OEA, a pesar de ciertos señalamientos al presidente por el excesivo uso de los medios de comunicación. El proceso se desarrolló con calma, con excepción del bombazo ocurrido la noche anterior a la elección, cuando desconocidos destruyeron parte del oleoducto que va a Paraguana.

Con el triunfo electoral en la asamblea legislativa en diciembre 2005, el panorama para las elecciones del siguiente año era muy claro, frente a una oposición cuyo principal error fue la desunión, la falta de organización, la selección de una mala estrategia; ahí donde Chávez identificó grandes problemas sociales, la oposición se negó a voltear la vista, a reconocerlos (Shifter, 2006).

Derrotada la oposición y con el apoyo total de la asamblea legislativa, Chávez prosiguió con su propuesta de reformas en el 2006, pero en el entusiasmo por el futuro empezó a someter a la población la consulta sobre su posible reelección en los sucesivos términos de su mandato, si la oposición seguía sin participar en los procesos electorales; el 6 de mayo del 2006, en un discurso a simpatizantes en el estado de Lara les propuso lo siguiente: “Voy a preguntarles a ustedes, a toda la gente,

si están de acuerdo con que Chávez sea presidente hasta el 2031” (LADB. NotiSur, July 21, 2006). Y expresó su propósito de convocar a un referendun para ver si la gente lo quería de presidente de manera indefinida.

Sin embargo, diversos líderes de oposición empezaron a manifestarse como posibles candidatos frente al presidente en funciones. Se había destapado ya Teodoro Petkoff, de 74 años, antiguo simpatizador de la guerrilla en Cuba y quien se separó del Partido Comunista de Venezuela para formar el Movimiento al Socialismo (MAS) como partido político; había colaborado con el presidente Rafael Caldera en la década de 1990 y luego se había convertido en un acervo crítico de Chávez. También Julio Borges, del partido Primero Justicia, quería ser candidato a la presidencia, lo mismo que el gobernador del estado de Zulia, Manuel Rosales, de 54 años, por la organización Un Nuevo Tiempo. Roberto Smith Perera quería competir por el partido Venezuela de Primera.

Los grupos opositores empezaron a aprender de la experiencia y trataron de dirimir sus diferencias con el objetivo de lograr un candidato único que pudiera enfrentar a Chávez. Fue un proceso difícil, pero para el mes de agosto 2006 ayudó la popularidad del gobernador de Zulia y antiguo presidente municipal de Maracaibo, Manuel Rosales, para que los diversos grupos pudieran tener una convergencia en su postulación. Tanto Petkoff como Borges y Smith desistieron de sus candidaturas para apoyarlo como único candidato de todas las corrientes antichavistas; en total diez posibles candidatos desistieron para unirse al gobernador de Zulia, aunque en la práctica hubo varios candidatos¹⁰² más aparte de los dos prin-

¹⁰² Estaba también Benjamín Rausseo, un comediante de alta popularidad, que se postuló por su nuevo partido PIEDRA, pero que se retiró en noviembre, al ver que no tenía posibilidades de ganar. Al final hubo otros 12 candidatos que compitieron por la presidencia (Luis Reyes, Venezuela da Silva, Carmelo Romano, Alejandro Suárez, Eudes Vera, Carolina Contreras, Pedro Aranguren, José Tineo, Judith Salazar, Angel Irigoyen, Homer

cipales contendientes. De cualquier manera, los antichavistas habían logrado una unidad que había sido impensable en el pasado: extremistas de izquierda, extremistas de derecha, industriales, burocracias sindicales, algunos intelectuales.

Manuel Rosales implementó un mejor discurso para ganar el imaginario de las diversas clases sociales. Para él, Chávez había dividido a la sociedad; su pretensión sería trabajar tanto para los ricos como para los pobres, sin malgastar en armas y fusiles rusos y sin enfrentamientos inútiles con Estados Unidos; pretendía también combatir eficazmente el nivel de inseguridad y delincuencia existente en el país. Por parte del gobierno, sería calificado como el candidato de la oligarquía y un instrumento del imperialismo, en particular de George Bush. La fortaleza de Chávez estaba en su popularidad como luchador social, enfocando los recursos del petróleo por primera vez hacia la política social y declarándose el dirigente de la revolución bolivariana en contra del neoliberalismo y el desastre del capitalismo.

Una vez más, el 3 de diciembre 2006, en unas elecciones de nuevo monitoreadas por organismos internacionales, Hugo Chávez obtuvo una victoria demoledora al conseguir, según la CNE en información del 5 de diciembre, un 62.84% de los votos (7.161,637); lejos de él estuvo Manuel Rosales, quien representaba la voz de una oposición unificada pero que capitalizó solo el 36.9% de los sufragios (4.196,329). Con una abstención del 25% en un país donde el voto es voluntario, se habían presentado a elegir al presidente poco más de 11 millones de venezolanos.

Rodríguez, Isbelia León) pero que resultarían insignificantes en la elección final de diciembre al no llegar ninguno al .05% de la votación general.

Elecciones 3 diciembre 2006

Partido	Candidato	Resultado
Movimiento V República	Hugo Chávez Farias	62.84%
Un Nuevo Tiempo Contigo	Manuel Rosales	36.90%

Fuente: Consejo Nacional Electoral de Venezuela (*www.cne.gov.ve*)

En su derrota, la oposición de Venezuela avanzó en el marco institucional de la democracia electoral: había logrado unificarse y participar, y Rosales reconoció oficialmente la derrota. Así lo señaló Ernesto Samper, expresidente de Colombia: “La oposición al presidente Chávez logró hacerse visible en las últimas elecciones, se compactó, envió mensajes coherentes y obtuvo unos resultados tan dignos como el inmediato reconocimiento de su derrota por parte del candidato perdedor” (Samper, 2006). En sí mismo, esto ya fue un gran paso adelante para la vida política institucional.

El presidente, en su discurso de victoria después del anuncio oficial de la CNE, se refirió al triunfo de la revolución venezolana: “Aquellos que votaron por mí, no lo hicieron por mí. Ellos votaron por el socialismo, por construir una Venezuela completamente diferente”. Tendría otros seis años más de gobierno para seguir este proyecto en donde los ingresos del petróleo¹⁰³ en ascenso y los frutos de una economía consolidada serían destinados a los programas sociales (alimentos subsidiados, educación libre y gratuita, ayuda especial para madres solteras, asistencia médica, cooperativas agropecuarias, etc.) y, además, prometió someter ante la población la posibilidad de continuar como presidente después del 2012. La relación conflictiva con Estados Unidos también fue aludida por

¹⁰³ El precio del barril de petróleo se había elevado hasta 60 dólares en el mes de noviembre del 2006.

el presidente: “otra derrota del demonio, que trata de dominar el mundo”.

Por último, el día que tomó posesión como presidente, hizo una referencia importante al sustento de su gobierno a través de un sistema democrático. Nueve veces repitió la palabra “democracia” en su discurso de toma de posesión, sobre todo en el tema clave de la búsqueda del socialismo del siglo XXI. La democracia es “la regla de oro” de todo el proceso porque lo fundamental es que “asumamos la decisión de la mayoría”. Y en ello, el proceso de Venezuela desde 1998 ha dado una pauta irrefutable: apoyo mayoritario para su elección, apoyo mayoritario para la constitución de la república bolivariana de Venezuela, apoyo mayoritario para vencer las fuerzas que apoyaron el golpe de estado, apoyo mayoritario su reelección en el 2006: “aquí hay una voluntad mayoritaria que priva, que impone la democracia”. Y esta situación entonces impone continuamente una lucha ideológica para hacer prevalecer el proyecto gubernamental con el apoyo de la población.

Chávez compara de hecho los regímenes anteriores del Pacto de Punto Fijo con una dictadura por todas las imposiciones de una minoría de intereses que se impusieron sobre la mayoría de la población: “¡Dictadura! Y todavía, todavía hoy tenemos presente en Venezuela vestigios de esa dictadura que pretende revertir la democracia revolucionaria, que pretende imponer su voluntad de minoría a una mayoría”. Por eso recuerda los casos del intento de golpe de estado y especialmente las presiones nacionales e internacionales de la derecha para hacer prevalecer una cadena de televisión privada a la que se le acababa la concesión.

Pero también en enero del 2007 adelantaba su propuesta de una nueva reforma a la constitución donde entre otras cosas importantes para acelerar los cambios, el punto polémico ya se anunciaba con la posibilidad de reelección indefinida del presidente de la República. Y Chávez también adelantaba su posición porque la propuesta de reforma iba a ser consultada a la

población en general: “lo importante es que es el pueblo el que va a tomar las decisiones... Democracia! No se puede hacer nada si no lo aprueba el pueblo. La propuesta, si es rechazada, yo seré el primero en aplaudirla”. Y en este punto, las palabras presidenciales fueron proféticas, porque efectivamente durante el 2007 se planteó la reforma constitucional y se llevó a un referéndum en el mes de diciembre; la decisión, por un mínimo margen, fue de rechazo a la propuesta gubernamental. Con ello, Chávez y todo el gobierno tuvo que acatar la decisión mayoritaria; su período presidencial terminaría entonces en el 2013. Sin embargo, otro referéndum del 15 de febrero del 2009 aprobó el SÍ para permitir la reelección indefinida de cualquier cargo de elección popular.

Junto a la victoria de Correa en Ecuador y de Daniel Ortega en Nicaragua, la reelección de Chávez enfatizó también una postura anticapitalista, antimercado. La tendencia hacia una búsqueda de alternativas al neoliberalismo, dado su fracaso en la producción de un modelo de desarrollo estable de crecimiento económico y de distribución más equilibrada de la riqueza social, se estaba profundizando al final del 2006. Criticando el consenso de Washington, el ex presidente de Colombia Ernesto Samper menciona lo siguiente: “El modelo neoliberal de los 90 no fue capaz de generar crecimiento ni mucho menos equidad. El *eje social* que se ha venido formando en el hemisferio como reacción al viejo paradigma y del cual participan los gobiernos de Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Panamá y, más recientemente, Nicaragua y Ecuador se ve hoy reforzado con la reelección del presidente Chávez. La revisión implícita en todos estos proyectos del concepto de mercado y la insistencia en preservar algunas formas de intervención del Estado como lo propone Joseph Stiglitz y atender, para cada economía, sus propias especificidades como lo sugiere Dani Rodrik están formando un nuevo modelo de desarrollo en la región, más justo, más diversificado y, por qué no, más soberano. En la medida en que todos estos planes de go-

bierno se vayan homologando y legitimando por vías democráticas, como acaba de suceder en Venezuela, la región irá avanzando en el camino de definir su propia agenda frente al imperativo de una globalización que hoy la está desbordando” (Samper, 2006). La nueva gobernabilidad de América Latina estará dependiendo de estas nuevas alternativas y de su consolidación.

CAPÍTULO VII

LA CENTRO IZQUIERDA EN EL 2007: GUATEMALA Y ARGENTINA

A diferencia del año 2006 en que ocurrieron 12 transiciones de poder presidencial en América Latina, durante el año 2007 solamente se realizaron dos procesos presidenciales: el primero en Guatemala, el 9 de septiembre, que tuvo necesidad de una segunda ronda electoral el 4 de noviembre ya solamente entre dos candidatos; el segundo en Argentina, el 28 de octubre, que no necesitó una segunda ronda electoral al definirse el porcentaje legal suficiente para declarar a Cristina Kirchner como presidenta del país.

El panorama en el 2007 ofreció una gran sorpresa en Guatemala porque, aunque ya se tenían gobiernos civiles desde la década de los 80s, la población no había dado su voto más que a candidatos políticos de la derecha, ligados a los grupos de la oligarquía económica; el triunfo de Álvaro Colom, con una tendencia declarada de social democracia, vuelve a recordar la primavera de los gobiernos de Arévalo y Arbenz en los años 50s. Por otro lado, sin ser una gran sorpresa en relación al gobierno de Néstor Kirchner, el triunfo de Cristina Fernández representa continuidad con respecto al de su marido pero queda clara la gran diferencia que se marcó con respecto al modelo neoliberal de Carlos Menem, presidente por dos períodos en los años 90s y que había vuelto a contender en el 2003.

7.1 GUATEMALA: ¿transición a la socialdemocracia?

Después de 1954, Guatemala vivió 32 años de militarismo y dictadura con más de 200 mil víctimas. Se celebró la transición a la democracia hasta el proceso electoral de 1985 en donde se tuvo de nuevo un gobierno civil, el del presidente Vinicio Cerezo. Pero la situación crítica del país en lo económico y lo político no varió con los gobiernos civiles de la derecha y, por ello, han sido sorprendentes las elecciones presidenciales de noviembre del 2007 que dieron el triunfo a Álvaro Colom, con una tendencia socialdemócrata que recuerda los planteamientos de cambio del gobierno derrocado de Jacobo Árbenz en 1954.

En este momento, se mostrará el contexto histórico de Guatemala en su transición de la guerra civil a los acuerdos de paz de 1996 para llegar a la coyuntura de las elecciones del 2007. Y dentro de ésta, se analizará la contienda cerrada de posiciones de los dos principales candidatos a la presidencia para mostrar en lo general los lineamientos del proyecto ganador del nuevo presidente Colom.

De la guerra civil a los acuerdos de paz

El movimiento del 20 de octubre de 1944 en Guatemala organizado contra la dictadura del General Ponce ofreció al país, por primera vez en su historia desde la independencia en 1823, la oportunidad de mayores libertades políticas y, en particular, la posibilidad de organizar un proceso electoral competitivo. Con una nueva constitución, asumió la presidencia Juan José Arévalo con el 86% de los votos en 1945 e inició una etapa de reformas para suprimir los trabajos forzados sobre los indígenas, la libre sindicalización de los trabajadores, el establecimiento de salarios mínimos, la creación de instituciones de seguridad social. Estas tareas fueron enfatizadas por el siguiente presidente Juan Jacobo Árbenz, quien de manera particular propuso la iniciativa de la reforma agraria, con la

cual se comenzaron a expropiar miles de hectáreas de tierra a favor de los campesinos.

Después de una etapa de 10 años de democracia y reformas, el primero de Septiembre de 1954, fue derrocado Jacobo Árbenz por militares guatemaltecos apoyados por la oligarquía económica del país, por la United Fruit Co. (que se había sentido afectada por el proyecto de la reforma agraria) y por el gobierno de Estados Unidos, contando con la colaboración de los gobiernos de Nicaragua y Honduras. Monterroso lo dice de la siguiente forma: “el gobierno de los Estados Unidos decidió en 1954 derrocar el gobierno legítimamente constituido de Jacobo Árbenz Guzmán, y acabar de un solo golpe con el intento democrático y con las aspiraciones de una vida más justa para nuestras mayorías indígenas, y para los trabajadores guatemaltecos en general, de la ciudad y del campo” (Monterroso, 1996). Fue impuesto entonces el Coronel Castillo Armas y se inició la etapa del dismantelamiento de las reformas de los dos gobiernos anteriores: se devolvieron las tierras a sus antiguos dueños y se suprimieron las libertades otorgadas por la Constitución. La misma Constitución fue modificada en Febrero de 1956, instaurándose un régimen de persecución y represión sobre los simpatizantes de los gobiernos precedentes y sobre todos los movimientos populares.

Esta situación y la falta de salidas políticas a esta situación de opresión interna provocó el inicio de conflicto armado en Guatemala en 1960, ante la falta de salidas políticas: organizaciones guerrilleras surgieron para enfrentar al ejército gubernamental, las cuales formaron varios grupos que finalmente se aglutinaron en la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)¹⁰⁴. Se provocó una situación de guerra durante cerca de 40 años que tuvo un elevado costo social. En Di-

¹⁰⁴ La URNG fue resultado de un proceso de unificación de diversos grupos de la guerrilla: las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), y el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), y la Organización del Pueblo en Armas (ORPA)

ciembre de 1996, la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamérica (CODEHUCA): 150,000 muertos, 50,000 desaparecidos, un millón de desplazados. De manera particular, la CODEHUCA enfatiza: "Estados Unidos es responsable de los abusos de los derechos humanos en Guatemala, al igual que los gobiernos de Israel, Taiwán, Corea del Sur y en su momento Chile y Argentina (durante las dictaduras castrenses), por el financiamiento y la asesoría que dieron a los militares guatemaltecos, a quienes enseñaron técnicas de tortura y desaparición forzada" (Shetemul H., 1996). Las consecuencias de esta prolongada guerra está bastante documentada: "Según el informe *La Memoria del Silencio*, elaborado por las Naciones Unidas, durante las más de tres décadas de enfrentamientos armados, más de 200,000 personas murieron por causas violentas y hubo 658 masacres, de ellas 626 cometidas por parte del ejército y las fuerzas paramilitares. El 83% de las víctimas de la guerra fueron Mayas... Como consecuencia de la guerra, hasta un millón de personas vivió temporalmente como desplazados internos, y unos 200,000 buscaron refugio en los países vecinos y en Estados Unidos y Canadá" (Kalny E., 2003: 3-4). El presidente triunfante de las elecciones de 2007, Alvaro Colom, en su discurso de toma de posesión, mencionó que "250 mil guatemaltecos quedaron en esa guerra" (www.guatemala.gob.gt)

En 1966, hubo otra coyuntura en donde se pudo haber retomado la participación de la oposición por la vía electoral cuando la guerrilla apoyó al Partido Revolucionario (PR), que se proclamaba como heredero de la revolución de 1944-54 quiso participar en la vida político. Sin embargo, cuando ganó el candidato del PR, Julio César Méndez Montenegro, el gobierno volvió a lanzar toda la fuerza del ejército en contra del movimiento guerrillero, en una confrontación que duró varias décadas.

Fue hasta las elecciones de 1985 cuando el gobierno pasó de manos militares a un civil, en la persona de Vinicio Cerezo,

presidente de la República de 1986 a 1981, del partido de la Democracia Cristiana. Sin embargo, el poder de los militares se mantenía casi intacto: "El gobierno electo del presidente Cerezo no logra poner fin a los métodos represivos ni modificar los dispositivos contrarrevolucionarios que los justifican y hacen posibles. Bajo el gobierno demócrata cristiano habrá no menos de 2000 muertes violentas, en su mayoría ejecuciones extrajudiciales, y 500 secuestros seguidos de desaparición" (Rouquié A., 1994: 325). Permanecía, pues, la estructura de la militarización del país dentro de los gobiernos civiles: "La militarización total del país significa que son escasos los rincones y actividades que no sufren la intervención del Ejército... La militarización del país ha significado un crecimiento de los gastos del Ministerio de Defensa, el cual absorbe no menos del 40% del presupuesto nacional" (Piedrasanta, en Medina, 1997).

Después de todo este período sangriento, el 29 de Diciembre de 1996, finalmente se firmó el "Acuerdo Final para una Paz Firme y Duradera" entre el gobierno del Presidente Álvaro Arzú (Partido Avanzada Nacional) y los representantes de las organizaciones guerrilleras que integran la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). La firma de la paz con el gobierno de Álvaro Arzú estuvo simbolizada, por parte de la URNG, con las firmas de Ricardo Ramírez –Rolando Morán–, del EGP, de Jorge Soto –Pablo Monsanto– de las FAR, de Ricardo Rosales –Carlos González– del PGT, y de Jorge Rosal, de la ORPA. El acuerdo establecía el cese de hostilidades entre gobierno y la insurgencia, la paulatina inserción de los combatientes en la vida política nacional, la posibilidad de conversión de la URNG en un partido político, y una amnistía para los responsables –tanto del ejército como de la guerrilla– que hubieran cometido violaciones contra los derechos humanos.

Ricardo Ramírez, uno de los dirigentes de la antigua guerrilla, afirmó durante la firma del acuerdo de paz: "la lucha armada fue inevitable cuando se suprimieron todos los caminos

políticos para recuperar la democracia" (IRIPAZ, 1996:123). Pero las condiciones habían cambiado. Por un lado, la guerrilla comprendió que no estaba ya en condiciones de aspirar a la toma del poder político en el país por la vía armada. "Después de 30 años de guerra, la guerrilla debilitada, dispersa, no puede aspirar a tomar el poder" (Rouquié A., 1994:325). Y, por otro lado, el gobierno guatemalteco, a pesar de la represión sangrienta, tampoco podía aspirar a una victoria contundente sobre el movimiento armado. La necesidad del diálogo partía, pues, de la aceptación de la imposibilidad de derrotar completamente al adversario. Finalmente, también el contexto político regional con el proceso del grupo de Contadora¹⁰⁵ y la reunión de presidentes centroamericanos en Esquipulas¹⁰⁶ animaron también el proceso para terminar un conflicto armado que ya estaba asfixiando la economía de la zona y exacerbando los problemas más que resolverlos.

"Internamente, a partir de 1982, se inició en Guatemala un proceso de transición a la democracia que, aunque de lento curso, modificó los posicionamientos asentados en el autoritarismo y la ideología que no habían hecho viable el inicio de la negociación. En efecto, en el marco de la nueva realidad interna y externa, la insurgencia empezó a considerar la imposibilidad del triunfo militar y de obtener algunos resultados negociados, en tanto que el Estado en proceso de democrati-

¹⁰⁵ El grupo de Contadora, constituido por México, Colombia, Venezuela y Panamá, y al que posteriormente se unió Perú, Argentina, Brasil y Uruguay para formar el llamado "Grupo de los 8", fue la primer propuesta seria para tratar de afrontar la conflictividad bélica existente en la región mediante el diálogo y la negociación.

¹⁰⁶ Esquipulas logró un reconocimiento internacional mayor que el de Contadora, sobre todo a partir de la integración de los gobiernos de otros cuatro países para formar el "Grupo de los 8", el cual logró, además atraer a representantes de las Naciones Unidas (ONU) y de la Organización de Estados Americanos (OEA).

zación, a su vez, inició la consideración de una solución política en vez de militar al largo conflicto" (IRIPAZ, 1996:3).

Sin embargo, antes que Guatemala, ya Nicaragua y El Salvador se habían adelantado en la firma de acuerdos paz para poner fin a la guerra en sus respectivos países. Las elecciones en Nicaragua en 1990 en donde triunfó y se respetó la victoria de la Sra. Violeta Barrios de Chamorro a través de la Unión Nacional Opositora (UNO) dieron otra dirección al conflicto nicaragüense pero reafirmando una vez más que las causas eran internas y no provenientes de la confrontación Este-Oeste. Por su lado, en El Salvador, solamente hasta después de la gran ofensiva político militar del FMLN en Noviembre de 1989, que llegó hasta la propia capital del país, la ciudad de San Salvador, el gobierno de ARENA con el Presidente Alfredo Cristiani pudo aceptar un diálogo y una negociación real; este proceso de acercamiento llevó a los acuerdos que pusieron fin a la guerra, que fueron aceptados ante el secretario General de la ONU el último día de 1991 y que fueron firmados de manera pública ante múltiples representantes internacionales en el mes de Enero de 1992, en la ciudad de México.

En Guatemala hubo un proceso de 11 acuerdos firmados antes de llegar al definitivo en diciembre de 1996. Se trataba no solamente de un cese al fuego entre las fuerzas beligerantes sino de la formulación de un nuevo pacto social enfocado a un desarrollo con mayor justicia social.

Con más de 2,000 invitados a la firma del Acuerdo final de Diciembre de 1996, estuvieron diversos jefes o ministros de Estado y presidentes latinoamericanos (Colombia, Venezuela, Estados Unidos, Centroamérica, México, Noruega). Junto a los comandantes de la URNG estuvo el presidente de Guatemala, Álvaro Arzú, y los representantes de la Comisión Gubernamental por la Paz (COPAZ): Gustavo Porras, Raquel Zelaya, Richard Aithenhead Castillo y el General Otto Pérez Molina. Como figura especial estuvo el Secretario General de la ONU, Boutros Ghali.

Con esta firma definitiva de la paz entre la URNG y el gobierno, se cerró un ciclo del conflicto bélico para abrirse otro de reestructuración del país a todos los niveles. Existe, con ello, un avance fundamental para Guatemala y el resto de América Latina: son preferibles los acuerdos políticos a través del diálogo y la negociación que cualquier tipo de guerra, o, como lo señaló públicamente Rigoberta Menchú Tum, la premio Nobel de la paz, el gran reto de la reconciliación en adelante sería que el diálogo se convierta en el único camino para solucionar las diferencias en Guatemala.

Sin embargo, la conversión de las antiguas organizaciones guerrilleras en Guatemala en organización política capaz de competir en los procesos electorales no se ha logrado de una manera eficaz y en ese sentido no han logrado influir en el mundo de las opciones electorales. En diciembre de 1996 decían tener 3 mil combatientes y 1,500 colaboradores y a partir de ahí querían constituir un frente de fuerzas democráticas para presentarse como alternativa electoral. Pero ello no ha sucedido, a diferencia de El Salvador, donde el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), antiguo frente guerrillero, es una opción real para alcanzar el poder ejecutivo en los procesos electorales, lo mismo que en Nicaragua, el Frente Sandinista para la Liberación Nacional (FSLN) perdió las elecciones en 1990 pero volvió a recuperar la presidencia con apoyo popular en el 2006. En Guatemala, a manera de ejemplo, la URNG –aliado con otra organización política–, en las elecciones presidenciales del 2007, solamente pudo lograr el 2.14% de la votación nacional, con su candidato Miguel Angel Sandoval.

Elecciones presidenciales de 2003

No cabe duda que ha existido una transición generalizada en América Latina desde la época de los gobiernos militares hacia los gobiernos civiles electos mediante la votación de los ciudadanos. Con mayores o menores dificultades en cada país,

se ha llegado al convencimiento de que es la vía política la que debe definir a los gobernantes en cada país y no los golpes de estado. A ello ha ayudado también las posiciones declarativas de los gobiernos norteamericanos en la nueva etapa de fines de siglo XX al ensalzar los modelos democráticos en comparación con etapas anteriores en donde abiertamente apoyaron gobiernos como el de Somoza en Nicaragua, el de Stroessner en Paraguay, el de Trujillo en República Dominicana, el de la familia Duvalier en Haití, etc.

De manera particular en Centroamérica, a pesar del bajo perfil de numerosos partidos políticos, de numerosas instituciones democráticas que no acaban de funcionar sólidamente y de varios casos de marcado abstencionismo, hay que señalar el avance en este consenso sobre la vía política para la elección de los gobernantes. “Los procesos electorales llevados a cabo hasta ahora han sido avalados por observadores imparciales, si bien se han hecho señalamientos sobre la necesidad de mejorar los procedimientos de inscripción de los potenciales electores, ampliar el número de casillas para facilitar la emisión de los votos y perfeccionar los mecanismos de conteo, de modo que la ciudadanía disponga de información veraz sobre los resultados en el menor tiempo posible. No cabe duda, entonces, de que en los últimos veinte años se ha avanzado por el camino de la institucionalidad democrática” (Rojas M., 2006).

El telón de fondo de los procesos políticos, aunque no depende mecánicamente de ello, se encuentra en las promesas incumplidas de los dirigentes gubernamentales que no han podido (o querido) mejorar el nivel de vida de la población. En el caso de Centroamérica, las cifras no mejoran sino que se agravan, con cierta excepción del caso costarricense. En El Salvador la pobreza llega al 48.9% de la población en el 2001; en Nicaragua al 69.3% en el 2001; en Guatemala al 60.2% en el 2002, y en Honduras al 77.3% en el 2002 (CEPAL, 2004). De alguna manera, se puede decir que las causas que dieron origen a la guerra en Centroamérica en cuanto a la inconfor-

midad por la explotación económica no han desaparecido, pero se empieza a consolidar el consenso sobre la búsqueda de soluciones desde la lucha política.

Guatemala vivió claramente una transición de la época del militarismo a los gobiernos políticos de civiles el 14 de enero de 1986, cuando fue electo Vinicio Cerezo, pero poco ha cambiado la situación económica con los siguientes presidentes civiles: Jorge Serrano fue electo en 1991 y quiso realizar un autogolpe de estado y por ello fue depuesto; siguió Ramiro de León Carpio en 1993, quien gobernó hasta 1996, cuando comenzó la presidencia de Álvaro Arzú, el que firmó los acuerdos de paz con la insurgencia; en el 2000, ganó la presidencia Alfonso Portillo, venciendo a Oscar Berger, quien a su vez ganaría las elecciones para el poder ejecutivo en el 2003... Sin los militares en el poder, han persistido los niveles de pobreza, la corrupción política y un ambiente bastante generalizado de delincuencia y violencia.

Las elecciones presidenciales del 2003 expresaron la continuidad de las mismas elites políticas y económicas de los gobiernos anteriores a través de la victoria de Oscar Berger.

La disputa por la presidencia en 2003 se decidió hasta una segunda vuelta electoral entre el candidato que resultó victorioso Oscar Berger y el candidato Álvaro Colom, quien competía por segunda ocasión por el puesto de jefe del ejecutivo. Si aplicamos las categorías políticas de derecha e izquierda tradicionales, Berger, como empresario textil y académico conservador, estaba en la primera, y Colom en la segunda, pero ambas podían tener los adjetivos de moderadas puesto que también habían competido en la primera vuelta el ex-dictador Efraín Ríos Montt por el ultraderechista Frente Republicano Guatemalteco (FRG) y Rodrigo Asturias¹⁰⁷ representando a la antigua organización guerrillera de la URNG.

¹⁰⁷ Rodrigo Asturias había sido militante en el movimiento insurgente y es hijo de Miguel Ángel Asturias, quien fuera premio nobel de literatura en 1967.

En la segunda ronda electoral del 28 de diciembre del 2003, el Tribunal Supremo Electoral de Guatemala otorgó la victoria a Oscar Berger, representando a la organización Gran Alianza Nacional (GANAN) con el 54% de los votos, mientras que la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de Álvaro Colom, solamente había llegado al 45.84% de la votación.

El gobierno de Berger, que inició con su toma de posesión el 14 de enero de 2004, adoptó un estilo gerencial que no pudo resolver ninguno de los problemas del país. La corrupción, la profundización de la desigualdad social y el enfrentamiento de todos los actores políticos fue la constante de su gobierno, sin acordarse para nada del posible cumplimiento de los acuerdos de paz firmados en 1996. Por un lado “son cotidianos los violentos asaltos en autobuses del transporte urbano y extraurbano y los asaltos callejeros. Los secuestros con fines extorsivos y los asaltos a agencias del sistema bancario permanecen con tendencia inalterada. El narcotráfico ha registrado un repunte” (Martínez C.A., 2005). Según el informe presidencial al congreso en el 2004, ese año hubo 1,340 homicidios, 25 secuestros, 3,534 robos y 5,261 hurtos de vehículos. Según el mismo autor Martínez, es en el rubro de la corrupción donde el gobierno de Berger tenía sus mejores resultados y, por otro lado, la imagen que el ejecutivo explícitamente quiso presentar como camino para el desarrollo era el de “un gobierno de empresarios para los empresarios”, no solamente por quiénes fueron los principales funcionarios gubernamentales sino por la labor práctica que ejercieron a favor de las empresas, en medio de la profundización de la desigualdad social.

Elecciones presidenciales del 2007

Para el 2007, Guatemala es un país con una población de 12.3 millones de habitantes, con el 67% de la población indígena, y en un contexto socioeconómico de pobreza y desigualdad social que los gobiernos civiles no han enfrentado con ningún éxito.

La información básica general sobre el país que nos ofrece el Banco Mundial es la siguiente:

GUATEMALA 2005: DATOS GENERALES

POBLACIÓN	12.31 millones de personas
INGRESO PER CAPITA	1,680 dólares anuales
ESPERANZA DE VIDA	65 años
NIVEL EN EL IDH	108
POBLACIÓN ADULTA ALFABETIZADA	69%
MORTALIDAD INFANTIL	40/1000 nacidos
MORTALIDAD MATERNAL	190/100000 nacimientos
FUERZA DE TRABAJO FEMNINA	29%
LIBERTAD DE PRENSA	51
PERCENTIL DE GOVERNABILIDAD	28/100
RANGO DE CONFIANZA EN EL PAIS	17-37
CAPITAL DEL PAÍS	Ciudad de Guatemala

Fuente: World Bank, 2005. <http://info.worldbank.org/governance/kkz2005>

Los nuevos aspectos que se están incorporando para el análisis de los países por algunas instituciones internacionales no se refieren solamente a los aspectos económicos sino también a otros elementos que ya se consideran parte indispensable del nuevo concepto de desarrollo. Uno de ellos por ejemplo se refiere a la categoría de “Desarrollo humano” que ha sido adoptada por la ONU en su índice sobre los países del mundo, en donde no solamente se mide el ingreso de las personas sino también su situación en la salud y en la educación. Con este indicador, podemos ver, por ejemplo, que Guatemala se encuentra en el lamentable lugar 108. Con datos del Instituto Nacional de Estadísticas, se percibe también que el 51% de los poco más de 12 millones de guatemaltecos viven en la pobre-

za, afectando particularmente a la población indígena. A la pobreza, hay que sumar también ese fenómeno lamentable de la corrupción, el crimen organizado y la violencia en todas sus formas, particularmente contra las mujeres (603 mujeres asesinadas en el 2006) y activistas de los derechos humanos. Sólo en el primer semestre de 2007 se cometieron 2.857 homicidios, en su mayoría con armas de fuego, según informes oficiales.

En este contexto, se prepararon las elecciones presidenciales del 2007, donde contendieron 16 partidos buscando el poder ejecutivo, 158 curules y estando 332 municipalidades en disputa. Pero era un proceso que ocurría de manera separada y paralela con la percepción de las necesidades sociales, sobre todo porque los partidos políticos en general en Guatemala tienen poca credibilidad. Sin embargo, las preferencias electorales de los interesados hacían prever lo cerrado de la contienda entre dos principales candidatos: la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), de tendencia socialdemócrata, con su candidato Álvaro Colom tenía 22%, a un mes de la fecha electoral, tenía el 22% de la intención de voto; el candidato a la vicepresidencia era Rafael Espada, un personaje vinculado a la Cámara de Industria del país. Por otro lado, el Partido Patriota (PP) con su candidato, el exgeneral retirado Otto Pérez Molina tenía una intención de voto del 17.5% y llevaba como candidato a la vicepresidencia a Ricardo Castillo Sinibaldi, perteneciente a la Corporación Castillo Hermanos, que tienen el monopolio de la cerveza, bebidas azucaradas, agua embotellada y el Banco Industrial.

El contexto de violencia del país se expresó también en el período electoral con un promedio de 16 asesinatos diarios. Ya en Febrero del 2007 había ocurrido el crimen escandaloso de varios diputados salvadoreños en territorio guatemalteco, y luego sus asesinos, dentro de una cárcel de seguridad —en un escenario claro de crimen de estado—, fueron a su vez masacrados para impedir el descubrimiento de los autores intelectuales. Los expertos de la OEA expresaron su preocupación por el ambiente de inseguridad e impunidad

por el ambiente de inseguridad e impunidad existente en el país sobre todo cuando en los 4 meses de campaña habían sido asesinados más de 50 candidatos, parientes de candidatos o activistas dentro del proceso (LADB, 2007: NotiCen 2007-08-30); la misma OEA llegó a sostener que el crimen organizado, en ciertos municipios, iba a marcar el resultado electoral, que, finalmente tuvo los siguientes resultados:

Resultados elecciones Guatemala 2007
Primera ronda:

Partido	Candidato	Votos	Porcentaje
Partido Patriota	Otto Pérez	771,813	23.54%
UNE	Alvaro Colom	926,236	28.25%
GANAN	Alejandro Giammatiel	565,017	17.23%
FRG	Luis Rabbé	239,204	7.30%
PU	Gritz García	95,280	2.91%
UCN	Mario Estrada	103,695	3.16%
URNG-MAIZ	Miguel Angel Sandoval	70,208	2.14%
ANN	Pablo Monsanto	19,640	0.60%
PAN	Francisco Arredondo	83,369	2.54%
DCG	Marco Cerezo	16,461	0.50%
EG	Rigoberto Menchu	100,365	3.06%
DIA	Héctor Rosales	18,395	0.56%
CASA	Eduardo Suger	244,373	7.45%
UD	Manuel Conde	24,893	0.76%

FUENTE: Cuadro oficial de TSE (Tribunal superior Electoral de Guatemala), complementado *www.tse.org.gt*

Las cifras de la primera ronda electoral en Guatemala nos dan una muestra de la polarización de los electores en torno a dos posturas sobre los problemas de la nación: la del partido de Colom que ponía énfasis en la lucha contra la pobreza y la

delincuencia a través de medidas preventivas de política social, y la del Partido Patriota del exgeneral, en donde la solución propuesta con claridad era la de la mano dura de la policía y el ejército con el objeto de luchar contra la delincuencia y poner orden en el país. Ganó ciertamente la primera postura, pero no es desdeñable la fuerza del Partido Patriota con su 23.5% de votación en la primera ronda y el 47.1% en la segunda.

Guatemala: Resultados de la segunda ronda electoral 4 noviembre 2007

Álvaro Colom Caballero (UNE)	1.449,533	52.81%
Otto Pérez Molina (PP)	1.295,108	47.19%

FUENTE: Cuadro oficial de TSE (Tribunal superior Electoral de Guatemala), complementado *www.tse.org.gt*

Durante la segunda vuelta electoral, Álvaro Colom ganó con claridad el 4 de noviembre del 2007 sobre Otto Pérez y, posteriormente, tomó posesión como presidente del país, el 15 de enero del 2008, en la ciudad de Guatemala, señalando lo siguiente: “le toca a Guatemala, por primera vez en 50 años, un cambio hacia un gobierno socialdemócrata”. Si el programa de gobierno de Colom se cumple aunque sea en un mínimo porcentaje, se puede afirmar que la segunda transición a la democracia no ocurrió en Guatemala con el gobierno de Cerezo en 1985 sino hasta el 2008. Si Luis Cardoza y Aragón había mencionado que los años del período de 1945 a 1954 en Guatemala fueron los “diez años de primavera en el país de la eterna tiranía”¹⁰⁸, algo puede estar cambiando en la historia del país cuando por medio de procesos electorales ha sido posible

¹⁰⁸ En numerosos textos de la literatura guatemalteca se cita esta famosa frase de Luis Cardoza y Aragón, sobre ese período de Guatemala. Aquí tomamos la cita del discurso de Augusto Monterroso, cuando recibió el doctorado honoris causa de la Universidad de San Carlos de Guatemala, citado en La Jornada Semanal, 21 julio de 1996.

de nuevo que una izquierda moderada llegue al poder ejecutivo. Los propios resultados del nuevo gobierno de Colom enfrentando la enorme complejidad de los problemas nacionales podrán determinar si se avanza mejor en la consolidación del proceso democrático.

La candidatura de Rigoberta Menchú

Sobre los resultados de estas elecciones presidenciales en Guatemala, nos ha parecido necesario abordar también la participación de Rigoberta Menchú, quien había sido premio Nobel de la Paz en 1992 y siendo indígena y en una nación con mayoría de indígenas logró un resultado negativo sorpresivo de apenas un 3.06% de los votos. Aunque obtuvo este insignificante resultado electoral, queremos profundizar en una posible respuesta a esta interrogante: ¿Cómo una mujer maya, defensora de las causas de los pueblos originarios a nivel nacional e internacional, en un contexto donde los propios indígenas sufrieron la peor parte de la acción represiva de los últimos gobiernos militares,¹⁰⁹ no pudo obtener una simpatía generalizada por parte de los votantes guatemaltecos? Una pregunta similar formuló el jesuita Ricardo Falla: “la Premio Nóbel de la Paz de 1992, que despertó tanta ilusión entre los pueblos indígenas del continente y entre muchos otros pueblos nativos, incluso los de los países escandinavos, ¿cómo está teniendo tan poco eco en su propuesta política?” (Falla, 2007)

Rigoberta Menchú había nacido en una aldea indígena y desde pequeña tuvo la experiencia de la pobreza, violencia, discriminación y racismo en el que se envuelve la historia de Guatemala. Esta situación junto con la pérdida de sus familiares más cercanos a raíz de las mismas circunstancias de represión, la llevó a involucrarse en los movimientos que buscaban

¹⁰⁹ En los informes oficiales de recuento histórico sobre el período 1954-85, de las 150,000 víctimas que dejaron las diversas décadas de dictaduras militares, 83% eran indígenas

la defensa y reivindicación de los derechos de los pueblos indios. En un libro autobiográfico¹¹⁰ escrito por Elizabeth Burgos en 1982-82 narró ampliamente los detalles de su proceso personal de transformación en una mujer comprometida en las luchas sociales. Por su participación en los movimientos sociales de Guatemala, estuvo exilada en México de 1981 a 1987.

A partir de 1982, ella empezó a tener una participación activa dentro de la ONU, primero a través de la Comisión de Derechos Humanos y, posteriormente, en la Asamblea General; ha llegado a ser Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO, durante el gobierno de Oscar Berger. El renombre internacional¹¹¹ del que la han dotado todos los reconocimientos que ha recibido la han colocado en una posición de notoriedad, que ha tratado de utilizar para sus causas a través de la Fundación Rigoberta Menchú Tum.

Su incursión explícita en la política guatemalteca se dio en febrero del 2007 cuando presentó su movimiento político, el Winaq, en alianza con el organismo Encuentro por Guatemala (EG), dirigido por la diputada y activista de derechos humanos Nineth Montenegro. A través de este movimiento, se buscaba hacer efectivo el derecho constitucional de los indígenas a ser votados. Formalmente fue la EG quien la postuló como candidata a la presidencia de la República, aunque diversas organi-

¹¹⁰ El libro “Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia” fue publicado en México por la editorial siglo XXI. Es un libro escrito por Burgos pero a partir de numerosas conversaciones con Rigoberta. Aunque luego fue controvertido por la posible inautenticidad de algunos detalles históricos descritos, nadie puede negar el proceso mediante el cual salió su figura a la luz pública.

¹¹¹ Entre otros reconocimientos, Rigoberta Menchú fue premio Nobel de la Paz en 1992; recibió un doctorado honorario en Humanidades de De Paul University en Chicago; la medalla de la Legión de Honor en Francia; un doctorado honorario por la Universidad de Saskatchewan, en Saskatoon, Canadá; un doctorado honorario por la Universidad de San Carlos de Guatemala.

zaciones indígenas decidieron no apoyar esta aspiración de Rigoberta al no sentirse representadas en el proyecto de EG.

El resultado electoral para Rigoberta Menchú Tum y el partido Encuentro por Guatemala (EG) que la postuló fue decepcionante. La sorpresa ha sido más impactante en el ámbito internacional porque desde las condiciones internas de Guatemala el resultado fue bastante previsible a través de las intenciones de voto. Por un lado, la incursión en la política electoral fue muy tardía, cuando los otros candidatos ya llevaban una ventaja importante. A pesar de su fama internacional, Rigoberta nunca antes había sido una figura de la política nacional; su imagen más bien apareció como un instrumento de la EG para atraer votos de los indígenas.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que en la historia latinoamericana, el nombre indígena es común para hablar de los habitantes nacidos en el continente antes de llegar la conquista de los españoles, pero quita las especificidades de cada uno de los grupos étnicos. En Guatemala, si bien los llamados indígenas son la mayoría de la población, es imposible hablar de una concepción única de los nativos a pesar de su amplio origen maya. En Guatemala, en particular, son 24 pueblos indios. Decía Rigoberto Quemé, ex alcalde de Quetzaltenango: “es una falacia muy racista decir que la candidatura de un indígena tiene que aglutinar a todos los pueblos indígenas”. Por otro lado, entre las comunidades mayas, los procesos electorales guatemaltecos históricamente están muy desprestigiados por haber sido siempre instrumento de líderes y caciques corruptos; cuando Menchú incursiona en la política electoral, su imagen más bien se deterioró en amplios sectores, al aparecer como ya vendida al sistema dominante. Numerosos grupos indígenas desprestigiaron la campaña de Rigoberta al considerarla muy ajena a los intereses de las comunidades, a tal punto que la III Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas, en marzo del 2007, decidió no apoyar la campaña de EG, al no verse identificados con sus líderes y su plan de gobierno.

Menchú Tum perdió también mucha credibilidad al asociarse con el rico empresario mexicano Víctor González Torres (el doctor Simi) y permitir la entrada de Farmacias Similares al mercado guatemalteco; su alianza con las altas esferas político-económicas la distanciaron cada vez más de aquellos por los que decía luchar. No fue la figura de Menchú lo que la llevó a la derrota; fue la forma en que apareció su figura en la política guatemalteca, al no permanecer independiente de los grupos tradicionales de poder político y económico; Rigoberta no se tomó el tiempo suficiente para crearse una imagen en la vida política nacional, pensando solamente en su reputación internacional. En su aventura electoral, además, la elección de su candidato a la vicepresidencia fue también desafortunada en cuanto al símbolo que se transmitió: su compañero de fórmula fue Fernando Montenegro, un hombre de negocios que fue presidente de la Cámara de Agricultura, Comercio, Industria y Finanzas (CACIF), una organización que representa a la oligarquía de ricos guatemaltecos, una elite adinerada y empresarial no muy popular.

Citando de nuevo a Ricardo Falla, se puede decir que su figura poco a poco fue desilusionando a quienes confiaban en ella. “Esta desilusión tiene varias explicaciones y razones. La primera y principal es que Rigoberta no tiene tras sí una organización de masas, un movimiento social, como lo tenía y lo tiene en Bolivia Evo Morales. No tiene tampoco una estructura partidaria que cubra las muchas regiones indígenas del país, ni mucho menos el país. Su principal fortaleza, que es su dimensión internacional, su presencia internacional, su trabajo internacional es, en Guatemala, su principal debilidad. La Fundación Menchú es tan sólo una ONG y, por eso, es sólo un grupito de gente ubicada en la ciudad capital. Esto demuestra que el sólo pegamento de la identidad étnica no funciona si no existe una pita, un cáñamo, un hilo que estructure y coordine esa identidad. Y sobre todo, que la mueva. La identidad indígena, por ser de viento, es muy poderosa, pero necesita de

ese hilo visible, concreto y tangible, que logre llegar hasta los caseríos indígenas. Una segunda razón es que Rigoberta es vista por el pueblo indígena –según lo que vengo oyendo– como una persona que ya se distanció de su pueblo. Recibió el Premio Nóbel y no lo repartió –eso dicen–, sino que lo invirtió en una empresa de farmacias. Dicen también que es soberbia, que ya no quiere hablar con los pobres, que no va a Chimel, su aldea, que ya se olvidó del sufrimiento de su gente” (Falla, 2007)

Con todos estos errores, parece haber sido un desacierto la candidatura de Menchú. Sin embargo, habrá que ver hacia adelante en un largo plazo el poder simbólico de un primer paso que ya se ha dado, a pesar de su raquítrico resultado electoral: Rigoberta fue la única mujer –y además, indígena– entre los 14 candidatos a la presidencia, algo nunca visto en la historia de Guatemala. Es el valor que le ve a este proceso Manfredo Marroquín, director del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos: “Aunque en términos de voto los logros sean modestos, su candidatura es importante como señal de apertura de un sistema político tradicionalmente dominado por criollos”. Menchú no se asemeja al Evo Morales de Bolivia, pero sus aciertos y errores tienen cabida en el difícil camino de instauración y consolidación de la democracia.

Dos imaginarios: mano dura vs mano solidaria

¿Qué es Guatemala actualmente? Dice, por ejemplo, Daniel Wilkinson, director de Americas Division of Human Rights Watch (HRW): “Guatemala se encuentra actualmente en una terrible situación, en donde hay extrema pobreza, instituciones decadentes y unas mafias despiadadas que han crecido virtualmente sin ningún control por más de una década” (LADB, NotiCen, 8 nov 2007)

En el caso de Guatemala, aunque su nivel de pobreza y desigualdad es considerable dentro de América Latina, lo que resalta, según la mayoría de los analistas, es el nivel de violencia, delincuencia organizada y narcotráfico dentro del país.

Con más de 6 mil asesinatos en el 2006, Guatemala tiene una de las mayores tasas de homicidios en el mundo. Y por ello, los interesados en la contienda electoral estuvieron mirando las posiciones de los candidatos en relación a este enorme problema: “Colom y Pérez representaron visiones totalmente diferentes para intentar solucionar el problema” (LADB, NotiCen 13 sept 2007). El Partido Patriota centró su campaña en la propuesta de introducir la pena de muerte, en el incremento del 50% en el tamaño de la fuerza de la policía, y en la declaración del estado de emergencia para introducir la acción del ejército; la UNE, por el contrario, prometía medidas preventivas para disminuir la pobreza, el combate contra la evidente corrupción de las fuerzas de seguridad en un disfuncional sistema judicial, y la tolerancia entre los diversos grupos sociales para ir a la raíz de los problemas.

La personalidad del propio ex general Ottón era particularmente significativa en su campaña electoral: aunque fue parte del equipo gubernamental que negoció la paz con la guerrilla, también fue *kaibli*¹¹², de la elite de los militares que se distinguió por su brutalidad en la represión a la población; fue acusado de numerosas atrocidades durante los años de guerra contrainsurgente, especialmente cuando estuvo dirigiendo tropas en el Departamento de El Quiché en los años 80s, que fue escenario de numerosas masacres de indígenas. Pérez también estuvo en el Estado Mayor Presidencial, famoso también por su brutalidad en los años 90s, y aun estuvo implicado públicamente en el asesinato del Obispo Juan José Gerardi Conedera (LADB, NotiCen: 14 jun 2001), que había sido coordi-

¹¹² La institución de formación y capacitación de militares en Guatemala, por instrucción del Ministerio de Defensa, cambió su nombre, el 5 de marzo de 1975, por el de escuela Kaibil. Lo hicieron para recordar a Kaibil Balam, rey del imperio maya que fue perseguido pero nunca capturado por los españoles. Los kaibiles en Guatemala se convirtieron en la práctica en protectores de los terratenientes y perseguidores de cualquier persona o grupo que perteneciera o simpatizara con la insurgencia.

nador de la Oficina de Derechos Humanos ¹¹³ del Arzobispado en Guatemala. En su concepción no hay lugar para la tolerancia puesto que el problema ha llegado a tal nivel que no hay más que la fuerza para remediarlo: cárcel y pena de muerte para todos los malvados. Ésta fue de hecho una estrategia electoral que en años anteriores le permitió al dictador Ríos Montt tener un alto grado de popularidad, incluso realizando ejecuciones extrajudiciales. De esta tradición viene el lema del ex general Pérez: “mano dura, cabeza y corazón”.

Ciertamente, con mínima diferencia, Otto Pérez perdió la presidencia pero nadie puede negar el alto número de votos que obtuvo. En este sentido, aunque sus posiciones de derecha lo hicieron afín a los grupos poderosos en la economía, su ideología llegó a tener impacto también en la clase media y diversos sectores de la población. Un empresario de Antigua Guatemala, Eduardo Pérez, apoyando al Partido Patriota, decía lo siguiente: “Aquí en Guatemala, cuando uno deja su casa, sólo Dios sabe si va uno a poder regresar con vida. El general nos va a traer seguridad” (LADB, NotiCen 13 sept 2007). Por ello, en el imaginario social de muchos guatemaltecos, la violencia ha llegado a tal nivel que solamente este militar tendrá la fuerza para poner el orden.

La propuesta de Álvaro Colom se deslizó por una vía alternativa, que fue la que finalmente prevaleció en la segunda ronda electoral en el sentir de la población votante y que se expresó en su lema “mano solidaria”. El período de los 36 años de militarismo y represión también pesa en el imaginario social y por eso la mano dura también se representó como una cierta

¹¹³ Esta Oficina entrevistó a miles de sobrevivientes del conflicto interno de 36 años en Guatemala, y con ello la Iglesia informó que la gran mayoría de los abusos habían sido cometidos por el ejército guatemalteco y sus aliados paramilitares. El obispo Gerardi hizo público este informe el 24 de abril de 1998 y dos días después fue asesinado brutalmente en su casa. En junio de 2001, tres miembros de servicios de inteligencia militar fueron condenados por este crimen.

vuelta al pasado. Y es que la represión históricamente alentó la insurgencia y con ello una confrontación armada en la que todos salieron perdiendo. Por ello, la propuesta de Colom sobre la tolerancia también hizo mella entre los electores. El mismo había tenido una experiencia en la búsqueda de la conciliación, a la cabeza del Fondo Nacional para la Paz, durante el gobierno de Álvaro Arzú, quien seguía teniendo una función política importante en la dirección del municipio de Guatemala. Colom calificaría posteriormente su victoria como un decir “NO a la trágica historia de Guatemala”, recordando las más de 250 mil víctimas de la guerra sucia.

El otro elemento en el origen histórico del conflicto armado en Guatemala también está representado por la pobreza, cuando se ve que no es precisamente que no haya riqueza sino que ésta se encuentra muy mal repartida. Por ello, cuando Pérez Molina no hablaba sobre este problema social mientras Colom se refería continuamente a él también tuvo un impacto en el electorado. La discusión sobre las causas de la pobreza puede ser un tema bastante abstracto, pero en Centroamérica en general llegó a las calles abiertamente la discusión sobre el tratado de libre comercio (Central America Free Trade Agreement: CAFTA), con los Estados Unidos. Aquí se mostraba una crítica cada vez más aceptada sobre el capitalismo como sistema social en donde unos pocos sacan la gran ventaja a costa de los otros. Las palabras de Colom llegaron a encarnarse en la reflexión de la población, más allá del sentimiento de la inseguridad: “el capitalismo es bueno para crear riqueza pero malo para repartirla... Los capitalistas y los burgueses son esclavos de su riqueza, y los pobres son esclavos de su pobreza” (LADB, NotiCen: 13 sept 2007). Más que la mano dura, entonces, lo que prevaleció fue la opción por una serie de programas sociales que deberían atender las causas de la pobreza, del crimen y de la delincuencia.

Es interesante en este sentido la percepción de César Verduga, uno de los asesores del candidato de la UNE: “se hizo

una decisión difícil al permanecer en un discurso más reflexivo que emocional en el asunto de la inseguridad”... Se mostró claramente en la segunda ronda electoral que “la gente tiene la capacidad de entender que la *mano dura*, que es un llamado emocional, no resuelve ningún problema. El otro discurso de la *mano solidaria* da mucha más importancia a la generación de empleos lo mismo que al fortalecimiento de la policía y el sistema judicial para combatir la inseguridad. Es un discurso mucho más complejo. No tiene tanta fascinación como el primero pero al final resultó más sincero y más ventajoso” (LADB, NotiCen: 8 nov 2008).

Desgraciadamente –también hay que hacerlo notar–, fue una minoría la que decidió la victoria electoral, puesto que Colom fue electo solamente por el 18% de los 5.9 millones de votantes. También hay que recordar que, aunque Colom ganó 20 de los 22 departamentos, perdió en la ciudad de Guatemala y sus alrededores: el apoyo le vino del área rural mientras que la población urbana prefería al ex general.

Los resultados de la votación impactaron al mismo Pérez Molina, que tenía la seguridad de la victoria a partir de las encuestas que le otorgaban de antemano la presidencia¹¹⁴. Y es que para la historia de Guatemala es algo sorprendente que un electorado que siempre ha favorecido las ideologías de derecha e incluso el perfil de dictadores haya podido el 4 de noviembre optar por la UNE, un partido de ideología socialdemócrata, un partido que está dentro del modelo del capitalismo pero incorporando reformas importantes en el ámbito redistributivo. En la perspectiva histórica, hay que hacer la referencia al gobierno de Árbenz (1951-1954), que había intentado una serie

¹¹⁴ La Prensa Libre le otorgaba a Pérez el 31 de octubre del 2007 una ventaja de 52.3% sobre 47% de Colom; la empresa mexicana BGC Ulises Beltrán y Asociados le dieron el mismo día una ventaja de 53% sobre 48%. Demoscopia, una empresa costarricense, le otorgaba 52.6% sobre 47.4% de Colom, el 2 de noviembre 2007.

de reformas en bienestar de la población y que fue depuesto por la oligarquía local y el gobierno norteamericano. De hecho, con estas elecciones de 2007, en la práctica se estaba mostrando un renacimiento de la democracia en Guatemala puesto que el período de 32 años de militarismo y dictaduras de 1954 a 1986 había desembocado a gobiernos civiles pero no a un gobierno con propuesta de reformas profundas como lo es el gobierno de Colom.

Consideraciones finales

El nuevo presidente tomó posesión el 15 de enero de 2008 y afirmó enfáticamente que por primera vez en 40 años habrá un gobierno al servicio de los pobres. Tendrá ciertamente una tarea de titanes: hacer crecer la economía, consolidar la infraestructura del país, fortalecer las instituciones estatales, particularmente las referentes a la justicia, la salud y la educación, y redistribuir la riqueza nacional. Con su ideología de la socialdemocracia, tendrá que someterse en la práctica a un vínculo mayor con la Alianza Bolivariana de las Américas (ALBA) – hay que notar que estuvieron presentes en su toma de posición Hugo Chávez y Daniel Ortega y el gobierno fue invitado a ingresar a Petrocaribe– o a la presión que pueda ejercer el gobierno de los Estados Unidos a través de sus modelos latinoamericanos de México y Colombia, porque de hecho Guatemala está en el CAFTA.

Para implementar su proyecto tiene el poder ejecutivo, pero no el legislativo, puesto que la UNE solamente tiene 48 legisladores de los 158 totales del congreso; además, no controla tampoco la capital de Guatemala, cuyo presidente municipal Álvaro Arzú, quien fuera presidente de la república (1996-2000), ha sido reelecto por el partido Unionista para el período 2008-2012.

El cambio político en Guatemala, Colom lo reconoció en su toma de posesión, ha sido un milagro. Más lo será todavía si llega a cumplir los compromisos fundamentales de campaña.

Ya en mayo del 2007 había mencionado los 4 ejes de su futuro gobierno: “el primero, de solidaridad, abarca las áreas de salud, educación, Seguro Social, vivienda, tercera edad, todo el tema social. El segundo es el eje de productividad, referente al tema económico, micro y macroeconomía, desarrollo rural integral. El tercer programa es el de gobernabilidad, basado en un estado de Derecho. Queremos establecer certeza jurídica y todo lo que tiene que ver con justicia. El cuarto programa es referente a la regionalización. Guatemala orientada hacia el exterior” (El Periódico. 20-V-2007). Esto lo ratificó en el Discurso de toma de posesión el 14 de enero del 2008 al enfatizar su prioridad de “un gobierno con enfoque social”, señalando la necesidad de un cambio: “Ese cambio empezará con una definitiva prioridad: para el que menos tiene. Manteniendo la unidad nacional, manteniendo a todos los guatemaltecos por igual, pero hoy empieza el privilegio de los pobres, empieza el privilegio de los sin oportunidad. Es un compromiso adquirido, es un compromiso adquirido en estos últimos nueve años de lucha por el plan de esperanza. Estoy convencido que dándole al que menos tiene, vamos a tener más todos”.

7.2 ARGENTINA: la continuidad de un proyecto político (Néstor-Cristina)

Al hablar de Argentina durante los años de la dictadura argentina, viene a la mente inmediatamente el “*Recuerdo de muerte*” de Miguel Bonasso. Casi toda América Latina sufrió dictaduras militares, pero cada país tiene su historia particular que tiene que ser expresada múltiples veces y de diversas maneras para que quede en el recuerdo algo que nunca debe volver a ocurrir. Los sucesivos gobiernos militares hasta finales de la década de los 70s se inspiraron en la Doctrina de la seguridad nacional e impusieron un terrorismo de estado (cfr. Tapia V., 1980); es a partir de esta terrible experiencia que puede hablarse positivamente de una transición a la democracia, por lo menos en el

sentido de que se ha venido institucionalizando una forma de transitar de los gobiernos a partir de los procesos electorales.

Ciertamente nos referimos a un período que llega a casi toda América Latina, especialmente en los años 60s: “los ejércitos derrocan preventivamente a gobiernos considerados demasiado débiles con respecto al peligro comunista o demasiado tibios en su solidaridad con Estados Unidos” (Rouquié, 1989: 220). Sin embargo, el militarismo latinoamericano de los años 60s y 70s es muy diferente en cada contexto nacional; sí existe esa tendencia de los militares a desplazar a los civiles de la dirigencia gubernamental y también existe en los 80s otra tendencia casi obligada –apoyada incluso ideológicamente por los Estados Unidos– a que los civiles vuelvan de nuevo a las élites gubernamentales bajo el voto popular, pero el militarismo de esa época es muy particular en cada país y por eso conviene de manera general ofrecer este contexto histórico de Argentina.

Transición de la dictadura a la democracia.

El 1° de Julio de 1974 había muerto Juan Domingo Perón después de haber regresado del exilio. Había regresado a Argentina de manera triunfal en 1972 pero ya tenía 77 años y, aunque obtuvo una clara victoria electoral en marzo de 1973 que lo llevó de nuevo a la presidencia, la situación había cambiado notablemente en relación a la primera época del peronismo. “La sociedad se reconocía en él como astucia, no como entrega auténtica. Distintas clases, partidos y jefes depositaban en su figura carismática la resolución de intereses diferentes, algunos irreconciliables” (Corbière, 1983). El gobierno se centraba en su persona y, con su muerte, el peronismo quiso mantener la ilusión a través de su última esposa, ya viuda, María Estela Martínez de Perón, “Isabelita”. Fue la primera mujer en la dirección del gobierno pero ni fue a través de elecciones ni tampoco el período tuvo su sello personal puesto que en realidad fue una parte de la cúpula militar la que marcaba las decisiones gubernamentales. Fue el segundo período importante

de los peronistas en el poder; el primero había sido el de 1946 a 1955 en la figura del mismo general Perón. El nuevo momento peronista 1973-1976 fue mucho más breve porque ya no pudo sostener esa ideología nacional-popular difusa frente a un enemigo reconocido como oligarquía compuesta por burguesía agraria de terratenientes agroexportadores. Por otro lado, el contexto era de una crisis económica aguda que se iba haciendo insostenible: para marzo de 1976, los precios habían subido un 566.3% y la tendencia parecía continuar. Las medidas de estabilización implementadas por el entonces ministro de Economía, Celestino Rodríguez, no hicieron más que empeorar la situación.

En ese contexto, el comandante en jefe del Ejército, Jorge Rafael Videla, envió un mensaje a la nación, con una velada amenaza en la que anunciaba al gobierno que debía “purificarse de la inmoralidad y la corrupción [...] la especulación política, económica e ideológica” o, de no hacerlo, serían desplazados (Novaro y Palermo, 2003: 18). El 24 de marzo de 1976, los militares dejaron las formalidades y se pusieron en el poder gubernamental en Argentina. Rápidamente difundieron los objetivos del llamado Proceso de Reorganización Nacional: restablecer el orden, reorganizar las instituciones y crear las condiciones para una auténtica democracia. Buscaban resaltar los valores cristianos, rescatar la argentinidad, luchar contra la amenaza comunista. Se trataba, decían, de un periodo de ordenamiento que, una vez logrado, entregaría el poder a los civiles. Pero la concepción imperante fue la Doctrina de Seguridad Nacional: “No es una doctrina sobre la guerra sino una doctrina sobre el gobierno, que identifica al Estado y las fuerzas armadas como conformando una sola institución. A partir de su propia estructura, organización y jerarquías, el ejército se autodefine como el representante de los intereses permanentes de la nación cuya protección es responsabilidad de un estado militar” (Tapia V., 1980: 166)

Desplazada “Isabelita”, la dictadura militar ejerció la represión; apenas tomaron el poder identificaron a todos aquellos que eran potenciales opositores; comenzó la lista de desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado. El miedo llegó a ser tal que no hacía falta la censura por parte del Estado; ocurrió más bien una autocensura en la que el miedo a ser detenido era mayor al deseo y la necesidad de expresarse. Los desaparecidos y numerosas personas que salieron al exilio fueron una característica de esos años: entre 1975 y 1980, salieron al exilio una cantidad que algunos calculan llegó a 40 mil personas. La persecución hacia las ideas contrarias es común denominador dentro de las dictaduras militares, el caso argentino no fue la excepción. Los grupos subversivos y guerrilleros, particularmente los Montoneros, fueron rápidamente inhabilitados, con una guerra contrainsurgente que logró su misión de acabar con los opositores. Solamente durante el período del campeonato mundial de fútbol en Argentina en 1978 se llegaron a escuchar voces de protesta: “Argentina campeón, Videla al paredón”.

Un sector de la población Argentina había apoyado a los golpistas bajo el argumento de que, en efecto, era necesario establecer un nuevo orden para salvar a la política y economía nacionales. El ambiente crítico en lo económico y en lo social a nivel nacional había hecho pensar a la sociedad que hacía falta la mano dura de los militares para poner orden y reasumir el progreso. Gran parte de la sociedad argentina otorgaba a los militares la condición que siempre se habían atribuido a sí mismos: ser la garantía última de la unidad y orden de la nación (Novaro y Palermo, 2003: 31).

Ese sentimiento de unidad nacional bajo el cobijo de los militares fue cayendo poco a poco ante la ineficiencia de las juntas de gobierno para mejorar la situación económica, sumado a esto el incremento en el clima de represión: En 1984 un reporte de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) habla de 10,000 personas en condición de desaparecidos-detenidos. La percepción de la situación

fue variando de tal manea que la misma sociedad que había apoyado el golpe empezó a demandar un esclarecimiento de las acciones represivas tomadas por el gobierno militar y sus consecuencias.

Los militares quisieron aprovechar la ocasión de buscar y apoyar eventos que pudieran devolver el sentimiento nacionalista y el apoyo a los militares. Tal fue el caso del Mundial de futbol de 1978 que, en condiciones sospechosas, fue ganado por la propia Argentina. Sin embargo, no tuvo el mismo resultado la guerra de las Malvinas en 1982, en donde los militares se toparon con la fuerza militar de Inglaterra y fueron vergonzosamente derrotados.

La disputa sobre la soberanía de las islas no era nueva; sin embargo, Inglaterra seguía ostentándola y las negociaciones no parecían avanzar. Esto hizo que el general Galtieri se embarcara en una misión que no podía terminar de otra forma más que en la derrota. Fue la derrota en las Malvinas el punto de quiebre de la dictadura militar. A su regreso, los soldados sobrevivientes fueron encuartelados para que no se supiera lo que realmente había sucedido durante la lucha. Comenzaron las disputas entre las cúpulas militares; los militares no podían sostener más su sistema y se vieron forzados a llamar a elecciones antes de lo previsto programándolas para 1983.

El gobierno militar había sido incapaz de estabilizar la economía nacional argentina. Dicha pretensión de estabilización se había basado en una liberación de los mercados, privatización de sectores industriales, eliminación de sindicatos, endeudamiento, en fin, una política neoliberal favorable a las grandes multinacionales. Fue el comienzo en Argentina para implementar el naciente modelo neoliberal hasta sus últimas consecuencias (Calcagno, 2002). La continuación de la crisis económica le había costado el cargo directivo en el gobierno al general Videla quien, en 1981, tras cinco años en el poder, fue depuesto. La percepción que tenía la sociedad sobre los militares fue cambiando y comenzaron a ver en los partidos políti-

cos a los nuevos y únicos instrumentos adecuados para negociar con el poder militar las características del inevitable proceso de transición.

El elegido por la junta para ocupar el lugar de Videla fue Roberto Eduardo Viola y fue, precisamente, durante su periodo que se vislumbró por primera vez el camino hacia la transición. Se comenzaron a presentar opciones para la transición a través de las negociaciones con la Multipartidaria.

La Multipartidaria se había formado en 1981 con el fin de presionar a la junta militar para que abandonara el poder. En ella se englobaron diferentes partidos políticos con diversas ideologías: la Unión Cívica Radical, el Partido Justicialista (peronista), el Intransigente, el Demócrata Cristiano y el Movimiento de Integración y Desarrollo. Su primer comunicado fue “un pronunciamiento de la democracia, para la democracia” que demandaba el retorno del poder a los partidos políticos.

Desde un inicio, la Multipartidaria dejó prácticamente en manos de los militares el proceso de transición. Las diferentes facciones de la Multipartidaria empezaron a mover sus piezas en la búsqueda de la presidencia; si bien la organización estaba conformada por muchos partidos, la contienda electoral fue una lucha entre el peronismo, representado por el partido Justicialista, y una facción del radicalismo, liderado por Alfonsín y su Movimiento de Renovación y Cambio.

El peronismo —a partir del gobierno militar de Juan Domingo Perón y su esposa “Evita”— había nacido a través del crecimiento y organización de la clase obrera; estuvo movido por un movimiento popular anticolonialista y nacionalista revolucionario, dando lugar a un paternalismo social reformista. Desgraciadamente, la organización obrera se fue transformando en un sindicalismo estatizado y encontró su más grande crisis en el gobierno que terminó en el golpe de Estado de 1976; sin embargo, fue el mismo gobierno militar de finales de la década de los 70s el que dio nuevas posibilidades al peronismo para acceder al poder, al convertirlo, dentro del imagi-

nario colectivo, en una fuerza representativa de las mayorías. “En el campo popular, el peronismo es la fuerza mayoritaria, integrado especialmente por la clase trabajadora, la pequeña burguesía, sectores medios y de la burguesía. Es un típico partido popular policlasista latinoamericano. Ha reunido tres millones de afiliados, una cifra de gran importancia se se considera que la población total de Argentina alcanza a 26 millones de habitantes” (Corbière, 1983).

Meses antes de las elecciones de 1983, las grandes dudas del peronismo giraban en torno a los temas críticos a resolver en ese momento. Querían ser capaces de convertirse en una opción capaz de resolver el estancamiento social y político de Argentina, renovar las instituciones y proyectar nacional e internacionalmente al país (Corbière E., 1983).

Por su parte, el radicalismo representaba a la oposición del peronismo, era la voz de la clase media y fue la que prevaleció en el gobierno al terminar la dictadura militar. Era “un partido típico de la clase media (profesionales, universitarios, burgueses, comerciantes y no pocos sectores oligárquicos)” (Corbière E., 1983).

El partido radicalista había sufrido fuertes divisiones pero, para 1983, la Unión Cívica Radical (UCR) presentaba diferentes frentes entre los que destacaba el Movimiento de Renovación y Cambio que presentaba tendencias liberales de izquierda. La tendencia de Alfonsín aparecía “como un movimiento democratista, que busca popularizar al electorado [...] puesta en escena (la ideología alfonsinista) aparece como *socialdemócrata*, que en la Argentina no quiere decir absolutamente nada, ya que hasta los sectores más reaccionarios utilizan esta denominación. En economía, las orientaciones alfonsinistas se vinculan al desarrollismo neocapitalista y políticamente se endereza hacia el antiperonismo como estrategia electoral, posición que trasunta su profundo enfrentamiento con la base obrera peronista” (Corbière, E., 1983)

Raúl Alfonsín comenzó a destacar desde su participación en la Multipartidaria gracias a su pugna por una nueva refundación de la Nación inspirada en la total y completa observancia de la ley, sin distinción alguna. De ahí que siempre fuera prioridad para Alfonsín el enjuiciamiento de los militares, el esclarecimiento de los delitos y los culpables y el hacer valer la ley sobre aquellos que la hubiesen violado¹¹⁵. El proceso de enjuiciamiento tuvo ciertas particularidades, pues se buscaba que fueran los mismos militares quienes, aceptando sus culpas, lo llevaran a cabo. Eran cuatro grandes objetivos los de Alfonsín: regresar a un orden democrático, evitar cualquier nuevo intento de establecer gobiernos *de facto*, definir las funciones de los militares dentro del Estado¹¹⁶ y, finalmente, recuperar el papel que le corresponde al Estado al servicio de la sociedad.

Finalmente llegaron las elecciones y, el 30 de octubre de 1983, Raúl Alfonsín venció en las urnas al peronismo con el 52% de los votos (7.659,530); Luder, el representante del peronismo había obtenido solamente un 40% (5.936,656). Sus primeras acciones fueron “reactivar los salarios, aplicar el salario mínimo y terminar con el hambre y la desocupación” (Novaro y Palermo, 2003: 539). El 6 de diciembre de ese año, la Junta Militar firmó su acta de disolución.

El gobierno de Alfonsín no sería en realidad un gobierno radical sino un conglomerado incluyente de radicales, intelectuales, activistas, demócratas, grupos anti-dictadura, etc.

¹¹⁵ Desde un principio, para la realización de los juicios, se hacían distinciones en los niveles de responsabilidad sobre los actos cometidos durante el terrorismo de Estado. Se aplicaría, pues, la “doctrina de los tres niveles de responsabilidad” haciendo distinción entre aquellos que habían ordenado dichos actos, los que los habían ejecutado (siguiendo órdenes) y los que, al ejecutarlos, se habían excedido en los métodos utilizados.

¹¹⁶ Militar: ciudadano armado miembro de una institución profesional comprometida con la seguridad, el desarrollo y el bienestar de la nación, pero asumida como un sector más del aparato estatal totalmente subordinada al poder político gubernamental (Ansaldi, 2007)

Los militares con su llamado “Proceso” habían fracasado en estabilizar la economía; Alfonsín se marcó el objetivo de derrotar a la inflación y rehabilitar los mecanismos de acumulación de capital, pero, al momento de tomar posesión, se tuvo que enfrentar a una deuda que ascendía a los US\$43,6 mil millones (García Lupo, 1984). Esa gran deuda se convertiría en el principal problema para el crecimiento de la economía nacional durante la presidencia del Alfonsín. Tuvo que negociar y aceptar los términos que impuso el FMI para poder frenar la inflación que, en momentos, llegó a ser de 672%. Los intereses sobre la deuda rápidamente la inflaron a niveles insostenibles.

La situación no era sencilla y se estaba saliendo de las manos del gobierno radical; el mismo gobierno emprendió un programa de reajuste estructural conforme a las recetas impuestas por el FMI, que no fueron vistas con agrado por gran parte de la población. A pesar de la lucha en pro de los derechos humanos que caracterizó el discurso de Alfonsín, gran parte de la sociedad se sintió traicionada cuando se aprobaron las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, que otorgaban amnistía a un gran número de militares. Alfonsín estuvo lejos de lograr aquello que había prometido y, con ello, abrió el camino para la llegada a la presidencia de los peronistas quienes, en 1989, recuperaron el poder en la figura de Carlos Menem; se estaba abriendo, sin embargo, otro trágico episodio en la historia de Argentina, cuyos resultados los iba a sufrir en carne propia toda Argentina y, en particular, el presidente Fernando de la Rúa. Los civiles habían vuelto al poder a través de los procesos electorales, pero el país estructuralmente seguía siendo el mismo.

La crisis del 2001

Al perder el peronismo las elecciones de 1983, el Partido Justicialista inició un severo proceso de transformación: “los reformadores dismantelaron los mecanismos tradicionales del peronismo en cuanto a la participación obrera y reemplazaron

con redes clientelistas todo el vínculo del partido con los sindicatos y las clases bajas trabajadoras... Para los 90s, el PJ se había transformado de un partido dominado por los sindicatos en una máquina partidaria en donde los sindicatos solamente eran actores marginales” (Levitsky, 2003: 4). Esto fue pretendido con el objeto de atraer también votos de la clase media y de sectores independientes, quitando al mismo tiempo la imagen de una izquierda radical. Desde el punto de vista electoral, esto resultó efectivo con la victoria de Carlos Menem en 1989. “Estos cambios beneficiaron al partido de dos maneras. Primero facilitaron el acceso del partido al electorado creciente de las clases medias sin divorciarse totalmente de la clase baja trabajadora. Segundo, después de 1989, estas reformas agrandaron la capacidad gubernamental de Menem para implementar las reformas orientadas al mercado” (Levitsky, 2003: 11).

Los reformadores del peronismo lograron tener un control total del partido en 1987 y se metieron de lleno en la campaña electoral con profesionales y el uso de nuevas tecnologías. Con ello, Carlos Menem ganó la presidencia con el 47% de los votos sobre una declinante UCR bajo el gobierno de Alfonsín. Posteriormente, aunque el PJ perdió la presidencia en 1999, permaneció como un fuerte partido en Argentina ganando en ese año 14 de las 23 gubernaturas.

El gobierno de Carlos Menem es el antecedente fundamental para la terrible crisis del 2001. Así como, en México, las reformas neoliberales de Carlos Salinas provocaron la crisis en el gobierno de su sucesor Ernesto Zedillo, de la misma manera, el neoliberalismo ortodoxo de Menem construyó los elementos fundamentales de la primera gran crisis económica latinoamericana del siglo XXI. Es interesante la comparación de estos casos de México y Argentina en el sentido de que sus presidentes Salinas y Menem en sus momentos fueron quienes más impulsaron dicho modelo neoliberal con alineamiento expreso a las políticas de Washington. En ambos casos, después de haber logrado la estabilización de los indicadores ma-

croeconómicos, se cayó en una estrepitosa crisis. Carlos Menem estuvo en el poder del gobierno argentino una década entera, a través de una reelección, pero los estragos del modelo económico le llegaron al siguiente gobernante Fernando de la Rúa, de la misma manera como la crisis mexicana explotó en el primer mes del gobierno de Zedillo.

Mucho se ha escrito sobre el llamado modelo neoliberal y sus consecuencias en los reajustes estructurales que tuvieron que hacerse para pagar la deuda externa, controlar la inflación y disminuir el déficit del estado a través de la disminución del gasto en programas sociales, la venta de empresas paraestatales, el cobro de servicios a la población que antes eran gratuitos, etc. Se pretendía ciertamente enfatizar las nuevas medidas económicas buscando sólo la producción y la productividad siguiendo las recetas del FMI enfocadas a la apertura de los mercados y eliminación del régimen de subsidios frente a un modelo anterior al que se concebía como estado interventor sobre la libre empresa. Pero los resultados no han sido satisfactorios. “En la práctica, el nuevo modelo ha estado produciendo un cambio tremendo en las reglas económicas, flexibilizando sobre todo los proteccionismos nacionales en beneficio de la movilidad de los agentes de las grandes corporaciones multinacionales; no cabe duda tampoco que se ha realizado un amplio programa mundial de privatización de empresas públicas y se han recortado programas y prestaciones sociales, sacrificándolos en aras de la recuperación económica nacional; la desregulación del mercado laboral, en especial, ha producido también un estancamiento de los salarios y pérdida de conquistas sindicales” (Medina y Delgado, 2003: 54-55).

No se puede afirmar que siempre haya consecuencias mecánicas necesarias posteriores a una crisis, pero en estos dos casos, dentro de la nueva etapa democratizadora en América Latina, las poblaciones han querido buscar nuevos líderes emergentes después de los fracasos económicos. Por ello, podemos señalar que el modelo neoliberal está seriamente cues-

tionado ya no sólo en el nivel académico sino incluso en la opinión general de una población que puede manifestarse en las urnas. “En el conjunto, los latinoamericanos han aprendido a canalizar su frustración hacia un comportamiento electoral de protesta: abstención, emergencia de candidatos fuera de las normas, alternancias... Las alternancias y la emergencia de los outsiders traducen la voluntad de los electores para castigar a los gobiernos y partidos políticos en un momento determinado... La izquierda, ligada constantemente a los movimientos sociales, se ha beneficiado por largo tiempo de este humor de protesta de los electores” (Badit et Didiot, 2006: 251). Podemos reconocer entonces en América Latina que estamos en un período en donde los votos realmente pueden empezar a contar en el mundo de la política; donde hay pluralidad de opciones, la alternancia en el poder es una realidad. Estamos viviendo entonces en una situación que antes no era posible vivirla en América latina.

En el caso de la Argentina de Menem, a partir de una encuesta realizada en 1997 por Steven Levitsky (2003: 29) entre los líderes sindicales, el 8.1% se declaraban neoliberales y seguían apoyando las reformas neoliberales; el 21.6% se manifestaron a favor de las reformas pero señalaban que había que modificarlas después de la crisis; había una mayoría de un 48.6% que criticaron seriamente las reformas y al gobierno de Menem aunque veían algunas como algo necesario, y había un 21.6% de oponentes abiertos que decían que las reformas económicas nunca debían haberse hecho. Los analistas políticos coinciden en señalar que la victoria de De la Rúa se debió al rechazo generalizado a la figura de Carlos Menem y a la imagen que tenía la población sobre el deterioro de la situación económica del país.

Si el peronismo siempre se había identificado con los pobres, con los descamisados y había llegado incluso a las clases medias y sectores de la burguesía, la crisis los golpeó a todos y, con ello, decayó la figura de Carlos Menem. El nuevo gobier-

no de Fernando de la Rúa, cuya organización que lo postuló en agosto de 1997, era el fruto de una alianza entre la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente para un País Solidario (FREPASO), había ganado las elecciones presidenciales de octubre de 1999 con el 40% de los votos y, por ello, era claro que el peronismo no había desaparecido. Pero más importante fue el hecho de que la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación que llevó al triunfo a De la Rúa se fue resquebrajando en dos años de gobierno; se habían unido en contra de Carlos Menem pero durante el ejercicio del gobierno las diferencias prevalecieron; se confrontaron con todos los sectores sindicalizados; los empresarios no tomaron un papel activo para apoyar al nuevo gobierno. A diferencia de Carlos Menem que fue un presidente directivo y autoritario, Fernando de la Rúa se forjó la imagen de un presidente débil que en la búsqueda de consensos no quedaba bien con ninguno de los sectores y a quien, una vez anunciadas algunas determinaciones gubernamentales, muy pocos le hacían caso en la práctica.

El peronismo, por otro lado, seguía siendo la primera fuerza de la oposición y, con ello, contribuyó también a la creciente ingobernabilidad del país. Se dio, por ejemplo, una situación simbólica de fuerte confrontación cuando el justicialismo nombró como presidente de la Cámara de Diputados al peronista Eduardo Caamaño y como presidente provisional del senado a Ramón Puerta. Con ello y con el hecho de no haber vicepresidente (Carlos “Chacho” Alvarez, vicepresidente y líder del FREPASO, había renunciado en octubre del 2000), cada vez que el presidente de la Rúa –de la UCR– se ausentaba del país, según la ley, su lugar sería ocupado por un político peronista.

El entorno económico internacional tampoco era favorable a Argentina debido a las presiones de los acreedores y la imposición de las fórmulas de funcionamiento del FMI. Estando De la Rúa cada vez con menos apoyos políticos en su gobierno y habiendo sido confiscados los depósitos bancarios a tra-

vés del llamado “corralito”¹¹⁷ por Domingo Cavallo como ministro de Economía, el gobierno tuvo que enfrentar abiertamente a los sectores de la clase media que iniciaron las campañas de los cacerolazos y otras formas de protesta. A la crisis económica general —con un peso argentino que ya no soportaba la igualdad establecida con el dólar estadounidense, una desocupación que había subido hasta el 18% y una gran baja de las reservas internacionales— y a la crisis política institucional entre las fuerzas políticas se sumaron las manifestaciones callejeras que culminaron en los hechos violentos de la Plaza de mayo el 20 y 21 de diciembre del 2001, en una represión ordenada por el gobierno. Con ello se dio la renuncia esperada del presidente De la Rúa¹¹⁸, quien salió huyendo en helicóptero de la Casa de gobierno cortando un mandato que se pensaba iba a durar hasta el 2003. Con su renuncia, asumió la presidencia Ramón Puerta, el presidente del Senado y, luego, el 23 de diciembre, el Parlamento nombró a Adolfo Rodríguez Saá, gobernador de la provincia de San Luis; pero solamente duró una semana porque renunció el 30 de diciembre. Ramón Puerta no quiso volver a asumir la presidencia y, por ello, quedó Eduardo Caamaño, presidente de la Cámara de diputados, como interino hasta que el Parlamento, el 3 de enero del 2002, designó como presidente a Eduardo Duhalde, quien junto con Ramón Ortega había competido y perdido con Fernando de la

¹¹⁷ Con este nombre se conoció en Argentina el decreto 1570/2001 que publicó el gobierno de De la Rúa el 3 de diciembre del 2001, en el que se prohibían los retiros en efectivo que superaran los 250 pesos argentinos por semana, lo mismo que las transferencias hacia el exterior del país. El gobierno pretendía con esta medida desesperada que la banca argentina no se descapitalizara.

¹¹⁸ La figura de Fernando de la Rúa quedó bien marcada en el imaginario de los argentinos: todavía en 2003, cuando fue a votar, la gente lo insultó y tuvo que ser retirado por los guardaespaldas en medio de un tumulto. Le gritaban traidor y le mencionaban que un helicóptero lo esperaba a la salida, en alusión a la forma como él mismo terminó su mandato el 20 de diciembre del 2001.

Rúa y Carlos Alvarez en las elecciones de octubre de 1999. El peronismo volvía a la presidencia argentina. “En menos de dos semanas, la Argentina tuvo cinco presidentes de la nación” (Moniz B, 2004: 525).

La última década del siglo XX había representado para Argentina un período de reorganización política, institucional y social después de la dictadura militar. El periodo de Alfonsín había terminado con resultados que distaban mucho de los que se pretendían. El poder regresó a los peronistas con Carlos Menem a la cabeza. Con las recetas fundamentales del modelo neoliberal y especialmente con la Ley de Convertibilidad buscó estabilizar la economía y combatir la hiperinflación que había dejado el periodo de transición; la recuperación económica y la estabilidad se mostraron en los primeros años y ello fue un factor importante para su reelección. Para 1998, la economía argentina parecía haberse recuperado en los índices macro: el PIB había alcanzado los 300,000 millones de dólares, mismos que colocaban a Argentina entre las primeras treinta economías del mundo; el PIB per capita era de los más altos en América latina.

Pero el sistema poco a poco se fue colapsando en medio de múltiples acusaciones de corrupción gubernamental; el peronismo perdió la dirección del gobierno mientras que la economía seguía hundiéndose hasta que, en 2001, fue presa de una de las mayores crisis de su historia. Los índices eran escalofriantes, Argentina perdió el 12% de su PIB, la pobreza llegó hasta un 60% de la población, y la Ley de Convertibilidad se vino abajo¹¹⁹. La gravedad de la crisis, sumada a la inoperancia del gobierno radical de De la Rúa llevó a la sociedad a tomar las calles y exigir la renuncia del presidente. Se sucedieron, en

¹¹⁹ El peso argentino se devaluó con respecto al dólar: de estar 1 a 1, llegó a 4 a 1. “*La esencia de ese modelo perverso terminó con la convertibilidad*, declaró Duhalde, considerando agotado el *liberalismo* que llevó a la Argentina a la Bancarota, al caos, e hiciera inevitable la devaluación” (Meniz B., 2004: 525).

pocos días, varios presidentes que terminaron con Duhalde en el poder, pero hundido el país en el fondo de la crisis.

Se puede volver a relacionar las crisis mexicana (1994-95) y argentina (2001-02) porque hay un gran simbolismo en ambas. Cada uno de los actores implicados quiere hacer un análisis particular y sacar consecuencias para reivindicar sus propias posiciones: Salinas quiso culpar de la crisis al gobierno de Ernesto Zedillo; Menem le atribuía a De la Rúa toda la responsabilidad de la debacle del 2001. Pero ambos olvidan que en cualquier proceso hay causas profundas de la crisis que se prepararon durante su correspondiente período gubernamental. En este sentido, teniendo en cuenta las medidas económicas del modelo neoliberal a través del ajuste estructural y sus consecuencias para la población, nuestro análisis enfatiza el significado de las acciones populares de protesta frente a la crisis que llegaron a traducirse también hacia las formas de representación político electoral. La emergencia del movimiento de los *Piqueteros*¹²⁰ argentinos fue un ejemplo de cómo los canales normales de acción institucional de protesta se estaban cerrando. Por otro lado, aunque en los procesos electorales de los 80s y 90s hay un importante nivel de abstencionismo en Argentina (Canton and Jorrat, 2003), no se puede negar un sentido manifiesto de castigo para quienes la población identifica como causantes de la crisis y, en algunos casos, se llega a un cuestionamiento de toda la política imperante. “El colapso económico de Argentina después de 1998 fue acompañado de una profunda crisis de representación política. La crisis se hizo manifiesta en Diciembre del 2001, cuando una masiva rebelión ciudadana contra la élite política (en el marco del slogan extra-

¹²⁰ Piqueteros fue el nombre que se le dio al movimiento de pobres y desempleados que bloquearon caminos y carreteras exigiendo empleo y protestando contra la política económica gubernamental del 2001: “Los piqueteros fue el movimiento más significativo de las clases bajas que emergió al margen del peronismo en un período de 60 años” (Levitsky, 2003: 31).

ordinario *que se vayan todos – throw them all out*) hizo caer a dos presidentes en un lapso de 10 días” (Levitsky, 2003: 30).

Duhalde como presidente cumplió el período faltante hasta el 2003, en la coyuntura electoral donde emergió la figura política de otro peronista, Néstor Kirchner.

Elecciones del 2003: diferentes facetas del peronismo

Si el país había llegado al fondo de la crisis a partir de diciembre del 2001, no se podía esperar más que una recuperación aunque fuese lenta. Habiendo registrado Argentina en el 2002 la baja del PIB más impresionante de toda Latinoamérica, el 12%, tanto el gobierno como la sociedad civil argentina empezaron un camino cuesta arriba a partir de algunos acuerdos fundamentales.

Duhalde como presidente tuvo un período efímero de dos años; junto a ciertas medidas económicas básicas para solventar la crisis, se dedicó a preparar las elecciones del 2003, queriendo impedir a toda costa el retorno de Menem. De las filas peronistas surgió la figura de Néstor Kirchner¹²¹, que fue apoyado por el presidente en funciones. En la primera vuelta de elecciones, Kirchner no obtuvo el primer lugar, sino que quedó 2 puntos porcentuales debajo de su principal opositor, el también peronista y ex presidente Carlos Menem. Su campaña y su gobierno mantuvieron una línea clara de centro-izquierda, rechazando la imposición de los tratados de libre comercio con los Estados Unidos y las políticas neoliberales (llegó a acusar tanto a Menem como a López Murphy de “thatcheristas” y marionetas de los bancos y corporaciones internacionales); enfatizaba la búsqueda de un modelo de integración re-

¹²¹ Hasta ese entonces, Kirchner no era una figura de la política nacional sino del ámbito regional. Había sido electo alcalde de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz en 1987; cuatro años, después pasó a ser gobernador de la provincia, donde fue reelecto en dos ocasiones, gozando de fama de buen administrador. De ahí saltó a la candidatura a la presidencia del país, con apoyo de Duhalde.

gional a través del MERCOSUR y un rechazo total y explícito al ALCA. Tenía una posición clara a favor de los derechos humanos, y se pronunciaba por la continuidad a los juicios de los militares responsables de crímenes de estado¹²².

El discurso de Kirchner impactó a la población. En el contexto de una nación herida resurgió la idea de un nacionalismo que se alejaba del autoritarismo de los militares (la seguridad nacional); se alejaba del pragmatismo de un Menem que había implementado tantas reformas estructurales sin anestesia en los años 90s, y se diferenciaba también de un populismo marxista utópico en donde se hubiera alentado a las clases populares en contra de la burguesía. El proyecto de Kirchner fue generando consensos en los diferentes ámbitos: “Hacia el mundo popular, el discurso de Kirchner ofrecía una retórica nacionalista que incluía la política de reactivación económica y tímidos gestos de distribución o de confrontación con aquellos grupos que concentraban la riqueza. Hacia las clases medias y altas, él les ofrecía una imagen de emprendedor eficaz... La idea de nación se transformó en el discurso presidencial en el horizonte de una promesa redentora de inclusión comunitaria” (Carlés y Semán, en Corten, 2006: 201).

En las elecciones del domingo 27 de abril del 2003, 80% de los argentinos acudió a votar mayoritariamente por diversas tendencias dentro del peronismo. El ex presidente Carlos Menem (1989-99) quería volver al poder ejecutivo pero representaba abiertamente a las élites de la derecha del modelo neoliberal y una alianza estrecha con los Estados Unidos; pero en el mismo peronismo también había surgido la figura progresista de Néstor Kirchner. Ambos estuvieron a la cabeza de las preferencias electorales sin lograr la mayoría legal en la primera vuelta y con ello se presentó la necesidad de una segunda vuelta electoral que fue programado para el 18 de mayo del 2003.

¹²² Menem había otorgado indulto a un gran número de militares. Cuando Kirchner llegó a la presidencia, el Congreso declaró la nulidad de la Ley de Punto Final y de Obediencia Debida, reabriendo los juicios.

Un día después de la fecha electoral, Menem se ubicaba al frente con 24.3 por ciento; (un millón 345,696 votos) seguido por Kirchner con 21.9 (un millón 209,030), de acuerdo con los resultados de 30.2 por ciento de las 66,747 mesas electorales y 22.3 por ciento de los votos escrutados, sobre un total de 25.5 millones de electores. Detrás de los dos principales candidatos se ubicaba otro candidato de pensamiento neoliberal ortodoxo, Ricardo López Murphy, que estaba consiguiendo el 17.2 por ciento (949,273 votos) y después el peronista de rasgos populistas Adolfo Rodríguez Saá con 14.2 (788,171). Por otro lado, también aparecía una tendencia radical de la candidata socialcristiana Elisa Carrió con el 13.1% con 726,901 votos (Cfr. Periódico Público, 28-IV-2003). El 80% de la población había salido a votar. Al final, las tendencias no variaron: “Menem recibió el 24.34% de los votos; Kirchner el 21.99%; Ricardo López Murphy del Movimiento Federal para Recrear el Conocimiento (RECREAR) estuvo en tercer lugar con el 16.34%; Elisa Carrió de Afirmación para una República de Iguales (ARI) recibió el 14.15%, y Rodríguez Saa obtuvo el 14.12%” (LADB, NotiSur, May 2, 2003).

En la práctica iba desapareciendo el bipartidismo que se preveía para Argentina al término de la dictadura militar. De hecho, la disputa electoral del 2003 iba a ser para la segunda vuelta entre dos peronistas pero con tendencias contrapuestas: la derecha de un anciano de 72 años, Carlos Menem, con su declarada ideología neoliberal, y la posición centro-izquierda de un Néstor Kirchner, relativamente desconocido en el ámbito nacional, que planteaba ciertamente la recuperación económica pero sobre todo una política social de mejor distribución de la riqueza social junto con un proyecto de integración que lo acercaba a los nuevos gobiernos de izquierda latinoamericanos. En el período que va de abril a mayo del 2003, Carlos Menem¹²³ hizo un rápido análisis de las preferencias electorales

¹²³ Todavía en el 2003 en la candidatura presidencial, Carlos Menem tuvo un gran número de votos a su favor. En el 2007 y a la edad de 77 años,

y, aunque había quedado dos puntos porcentuales arriba de Kirchner en la primera vuelta, concluyó con claridad que iba a perder abrumadoramente en la segunda. La previsión de Menem tenía bastante fundamento a partir de la percepción comprobada de gran parte de la población: sus períodos de gobierno, si bien elevaron las cifras macroeconómicas de Argentina, estuvieron caracterizados por terribles programas de ajuste, recorte de programas sociales, múltiples denuncias de corrupción (el ex presidente estuvo de hecho en prisión domiciliar durante varios meses del 2001); como gran apoyador del ALCA, su imagen era la de un subordinado a las políticas norteamericanas y de los órganos financieros internacionales, tal como se mencionaba en uno de los posters de campaña en su contra: “gobierno de Menem, poder de Bush”. De esta manera, con esta prospectiva ¹²⁴, esperó hasta 4 días antes de la programada segunda ronda electoral (el 18 de mayo 2003) para anunciar que no se presentaría a la segunda ronda electoral y, con ello, Néstor Kirchner fue declarado automáticamente por el Congreso como presidente para el período 2003-2007: tomó posesión el 25 de mayo. Pero la intencionalidad de Menem había sido maquiavélica: por un lado, su decisión le evitó a él mismo la humillación de una abrumadora derrota y, por otro, le restó legitimidad al siguiente gobierno. Kirchner, aunque tenía el pronóstico de una abrumadora mayoría sobre el ex presidente en la segunda vuelta, que podría haber sido hasta

Menem todavía quiso contender para tratar de ganar la gubernatura de la provincia de La Rioja, su tierra natal, pero 19 de agosto reconoció su derrota, habiendo sido colocado en un tercer lugar con solo un 22% de votación (LADB, NotiSur, Aug. 31, 2007). El Menem peronista conservador, defensor del libre mercado, fiel cumplidor de las órdenes de los organismos financieros internacionales y aliado incondicional de los Estados Unidos llegó prácticamente al fin de su carrera política.

¹²⁴ Dos empresas encuestadoras, después de la primera ronda electoral, consideraron claramente como favorito a Kirchner. La OPSM le daba una ventaja de 65.4% sobre Menem que solamente alcanzaba el 12.8%; Equis le daba a Kirchner el 59.2% y a Menem el 24.1%. (LADB, NotiSur, May 2, 2003)

por más de 40 puntos porcentuales, en la práctica, solamente ganó la presidencia habiendo quedado por debajo de Menem en la primera vuelta.

Sin embargo, el gobierno de Kirchner logró su propia legitimidad en el ejercicio gubernamental, tanto por una rápida recuperación de la economía nacional como por la estabilidad política que se fue alcanzando. Durante su período de cuatro años de gobierno, se logró el más alto nivel de crecimiento económico anual (el 8%), se bajaron los niveles de pobreza hasta un 25%, y el desempleo descendió a un 9% (en los tiempos de la crisis había llegado al 22%); en relación a las necesidades internas del país, canceló los pagos de la deuda externa con el FMI y la renegoció satisfactoriamente. En todo este proceso, Kirchner logró tener un gran apoyo de la población. Hay que considerar con atención la comparación entre la situación terrible de crisis del 2001-2002 y la recuperación de Argentina en pocos años. Los datos de Banco Mundial han vuelto a colocar a este país sudamericano entre los que tienen más alto índice de desarrollo humano dentro de América Latina.

ARGENTINA 2005: DATOS GENERALES

POBLACIÓN	38.38 millones de personas
INGRESO PER CAPITA	7,470 dólares anuales
ESPERANZA DE VIDA	74 años
NIVEL EN EL IDH	34
POBLACIÓN ADULTA ALFABETIZADA	97%
MORTALIDAD INFANTIL	18/1000 nacidos
MORTALIDAD MATERNAL	30 /100000 nacimientos
FUERZA DE TRABAJO FEMNINA	33%
LIBERTAD DE PRENSA	67 / 100
PERCENTIL DE GOVERNABILIDAD	59 / 100
RANGO DE CONFIANZA EN EL PAIS	51-67
CAPITAL DEL PAÍS	Ciudad de Buenos Aires

Fuente: World Bank, 2005. <http://info.worldbank.org/governance/kekz2005>

En el contexto de un país que tuvo a partir de la crisis del 2001 una caída impresionante de su PIB –12 puntos negativos durante 2002, la más grave crisis en toda la región con su secuela en el *efecto tango*–, es maravilloso observar todas las formas de recuperación que se implementaron tanto desde el nivel de gobierno como también desde la perspectiva de las organizaciones civiles. Durante el gobierno de Kirchner, electo en el 2003, se experimentó con claridad el signo de la recuperación económica, con un crecimiento promedio de 8% en la economía; en el ámbito político impulsó con énfasis el MERCOSUR, la UNASUR, la ALBA, y se opuso abiertamente al ALCA, en la Cumbre de las Américas realizada en Mar del Plata en el 2005. Sin embargo, en el ámbito de preferencias electorales tuvo un descalabro al perder su candidato en la ciudad de Buenos Aires: en el último año de su gobierno, la ciudad capital fue ganada por Mauricio Macri, empresario de la derecha. De cualquier manera, la votación general del 2007 a favor de Cristina Fernández mostraría con bastante claridad el apoyo a su proyecto político.

Cristina Kirchner: un proyecto gubernamental que permanece

Al término del periodo 2003-2007, el Frente Para la Victoria (misma organización con la que había logrado la presidencia Néstor Kirchner) presentó como candidata presidencial a la senadora, y esposa del presidente, Cristina Fernández. Representaba, tal y como lo dejó en manifiesto después en el discurso de toma de posesión, la continuidad de un proyecto de izquierda que ya había estado dando resultados. Sigue siendo un proyecto de reconstrucción nacional, con medidas alternas al neoliberalismo de Carlos Menem, que pretende salir adelante a través de una economía diversificada y manteniéndose ajeno a los préstamos de las instituciones bancarias internacionales tradicionales, “eliminando como política el endeu-

damiento irresponsable¹²⁵; en el ámbito político se ha manifestado por la continuación de los juicios a militares.

La carrera política de Cristina no ha sido improvisada ni ha sido producto de la influencia de su marido. Había ocupado el cargo de diputada y senadora en diversas ocasiones. Al igual que su esposo ha sido militante del peronismo de izquierda dentro del PJ; ha sido militante en la lucha en pro de los derechos humanos y ha buscado el esclarecimiento de las miles de desapariciones durante el tiempo del terrorismo de Estado. Como candidata a la presidencia tuvo un resultado muy claro al conseguir la victoria con un porcentaje mayoritario claro sin necesidad de ir a una segunda vuelta y con una participación del 71.81% de los votantes.

Ciertamente el triunfo del derechista Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, a través de Propuesta Republicana (PRO) en julio del 2007 pudo hacer pensar que la victoria de Cristina iba a ser difícil para octubre, pero no lo fue; ella ganó la presidencia y, por debajo de ella, se colocó la candidata Elisa Carrió quien representaba una izquierda más radical.

Elecciones presidenciales: 28 octubre 2007

Partido	Candidato	Votos	%
Frente para la Victoria	Cristina E. Fernández de Kirchner	8.204.624	44,92%
Confederación Coalición Cívica	Elisa M.A. Carrio	4.191.361	22,95%
Alianza Concertación UNA	Roberto Lavagna	3.083.577	16,88%
Alianza Frente Justicia, Unión y Libertad	Alberto J. Rodríguez Saa	1.408.736	7,71%
Partido Socialista Auténtico	Fernando 'Pino' Solanas	292.933	1,60%

¹²⁵ Plataforma electoral del Frente Para la Victoria, disponible en: <http://www.frenteparalavictoria.org/plataforma.php>

Partido	Candidato	Votos	%
Mov. Provincias Unidas Unión Popular Movimiento Acción Vecinal MODIN	Jorge Omar Sobisch	284.161	1,56%
Recrear para el Crecimiento	Ricardo López Murphy	264.746	1,45%
Movimiento Socialista de los Trabajadores	Vilma Ripoll	138.601	0,76%
Partido Obrero	Nestor A. Pitrola	113.004	0,62%
Alianza Frente PTS-MAS Izquierda Socialista	Jose a. Montes	94.777	0,52%
Alianza Frente Amplio Hacia la Unidad	Luis Alberto Ammann	75.692	0,41%
Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados	Raul Aníbal Castells	54.893	0,30%
Partido Popular de la Reconstrucción	Gustavo L. Breide Obeid	45.113	0,25%
Confederación Lealtad Popular	Juan Ricardo Mussa	12.832	0,07%

Fuente: Datos oficiales obtenidos de la Dirección Nacional Electoral
http://www.mininterior.gov.ar/elecciones/estadistica/e_07r.asp
www.resultados2007.gov.ar

En las elecciones del 2003 se había dado un fenómeno que también sería constante en los comicios de 2007. Los partidos tradicionales no se presentaban a las elecciones como tales sino que presentaban diversos candidatos que habían formado alianzas o frentes. Durante la década de 1980 y 1990, las elecciones en Argentina se las disputaba el Partido Justicialista (peronista) y la Unión Cívica Radical. Se podía hablar entonces de un bipartidismo, pero ya no. El sistema de partidos en Argentina se encuentra en un proceso de evolución en el que

diferentes fuerzas e ideologías encuentran un espacio para poder acceder al poder, ya sea dentro de un mismo partido (como es el caso de la confrontación entre los peronistas Menem vs Kirchner en el 2003) o también fuera de él de manera independiente o en coaliciones. Ya no es la confrontación PJ vs UCR lo que define la contienda; el enfrentamiento del 2003 fue entre peronistas de diferentes posiciones ideológicas; la misma Cristina postuló como candidato a vicepresidente a Julio Cobos, gobernador de Mendoza y miembro de la UCR. La confrontación electoral del 2007, de hecho, fue entre dos mujeres. Elisa Carrió había abandonado las filas de la UCR para buscar acceder al poder de manera independiente; había buscado la presidencia en el 2003 y, a través de la organización que la postuló la Coalición Cívica, realizó un trabajo más amplio y consolidado, quedando en el segundo lugar en los resultados de las elecciones del 2007; ella ha pretendido ser una oposición ya sea frente a los gobiernos peronistas como a ante los de la UCR; se había enfrentado a Carlos Menem, a Fernando de la Rúa, a Duhalde y a Kirchner.

El 28 de octubre del 2007 hubo 14 candidatos a presidente; se renovó también parte del poder legislativo. Cristina tenía una intención de voto en las encuestas entre el 39 y el 47% de la votación, mientras que Elisa Carrió, la que seguía en las preferencias, solamente tenía entre el 14 y el 18% favorable. Hay que tener en cuenta la legislación argentina que indica que el candidato que logre en la primera vuelta el 45% de los votos obtiene directamente la presidencia; pero también existe en la legislación una cláusula que señala que si un candidato suma entre el 40 y el 45% de la votación con una diferencia de más de 10 puntos porcentuales de diferencia con el candidato siguiente, tampoco habrá necesidad de segunda ronda electoral.

Teniendo en cuenta el pasado terrible de las dictaduras militares de las naciones latinoamericanas y el fracaso del modelo neoliberal, ante la falta de alternativas positivas en los movimientos armados contra los gobiernos, la posibilidad de proce-

tos electorales creíbles ha llevado a diversas poblaciones en el continente a buscar opciones alternas al libre mercado y diferentes a los modelos oficialistas. Antes parecía no haber otro camino más que las recetas neoliberales a través de los ajustes estructurales; sin embargo, los discursos de campaña de Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega,... terminaron en un triunfo en las urnas. Se podrá después históricamente analizar en qué medida han establecido realmente nuevas políticas económicas y sociales alternativas, pero en el ámbito electoral de diversos países, no se puede dudar que la gente ha votado por ellos. Esto se puede afirmar incluso en aquellos candidatos que no ganaron, por diversas razones, la presidencia como Andrés Manuel López Obrador en México, como Othon Solís en Costa Rica, como Ollanta Humala en Perú, durante el 2006, en cuyos casos se puede mostrar empíricamente el vendaval de votos recibidos por una población entusiasta.

Con Néstor Kirchner en Argentina en el 2003, el país también se embarcó en un proyecto que se unió a las nuevas izquierdas del subcontinente en busca de un desarrollo a través de una “economía diversificada con inclusión social”¹²⁶, y que enfatizaba la integración regional a través de alternativas diferentes a las de la Alianza del Libre Comercio de las Américas. Citando la opinión de *The Economist* (11/14/06), el proyecto de Kirchner puede catalogarse dentro de la izquierda y así se atestigua en el libro de Jorge Castañeda (2008): “para muchos observadores locales y extranjeros, Kirchner ha sido considerado como un presidente de izquierda debido a sus políticas económicas” (Tussie and Heidrich, en Castañeda y Morales, 2008); su administración ofreció grandes resultados en poco tiempo y desembocó en el gobierno de su esposa Cristina, quien pre-

¹²⁶ Tanto esta cita como otras más adelante del discurso de toma de protesta de Cristina Kirchner como presidenta provienen de textos de la página oficial del gobierno de Argentina.

tende ser un gobierno en el que “la novedad del cambio será seguir en una misma dirección”¹²⁷

Cristina es la primera mujer presidenta en Argentina. En el ámbito latinoamericano está precedida por Michelle Bachelet (electa en el 2006) en el país vecino Chile, por Violeta Barrios de Chamorro en Nicaragua (1990-1996) y por Mireya Moscoso en Panamá (1999-2004), en una tendencia novedosa pero ascendente de participación de las mujeres en la política. El género, sin embargo, no determina la tendencia política y por ello podemos calificar a Violeta Barrios y a Mireya Moscoso con una ideología de derecha mientras que Bachelet y Cristina Fernández se mantienen en proyectos progresistas vinculados en general con la izquierda.

Como figura femenina en Argentina, sin que fuera presidenta, encontramos en el siglo XX la polémica figura de Eva Perón, que trascendió incluso al imaginario latinoamericano; también se encuentra el antecedente de María Estela Martínez de Perón “Isabelita” (1974-76), quien tuvo la presidencia de Argentina por haber sido vicepresidenta a la muerte de su esposo Juan Domingo. Pero la situación de la actual presidenta de Argentina es muy particular porque no irrumpió en la vida política del país a raíz de la personalidad y actividades del esposo sino que contó con una trayectoria y carrera política propia, la cual en varios años la hicieron más conocida en el ámbito nacional que su propio esposo como alcalde o gobernador de una provincia. Habiéndose casado en 1975 vivieron en Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, donde trabajaron en el ámbito jurídico político y negocios inmobiliarios. Pero Néstor se quedó muchos años en el ámbito regional mientras que Cristina, habiendo sido diputada provincial en Santa Cruz en 1989, asumió luego el puesto de senadora nacional en 1995. Fue luego diputada nacional y volvió a ser senadora en el 2001, cargo que ocupó hasta la candidatura a la presidencia.

¹²⁷ http://news.bbc.co.uk/1/hi/spanish/latin_america/newsid_6907000/6907675.stm

Cuando Cristina Fernández tomó posesión del poder ejecutivo, el 10 de diciembre del 2007, en su primer discurso presidencial, delineó los principales lineamientos de su gobierno.

En primer lugar, se presentó como una continuación del proyecto de Néstor Kirchner, el cual había comenzado en el 2003. “Usted pudo junto a todos los argentinos –le dijo al presidente saliente–, revertir aquella sensación de frustración, de fracaso, de no poder, que millones de argentinos sentíamos en esos días que corrían. Lo hizo en nombre de un proyecto político”. Este proyecto no es de un solo individuo sino creación de una colectividad en donde el estado tiene la responsabilidad de intervenir, especialmente en una coyuntura en donde los organismos financieros internacionales se sentían con el poder de intervenir para determinar el rumbo de la nación. Esta perspectiva nacida con el proyecto de Kirchner en el 2003 y después de la caída nacional del 2001 la lleva a darle un nuevo enfoque al concepto de política como instrumento de la ciudadanía: fue Néstor quien “volvió a redituar la política como el instrumento válido para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y para torcer un destino que parecía incierto, que parecía casi maldito por momentos”.

A partir de ese hecho, la nueva presidenta reitera en varias ocasiones que el nuevo proyecto se preocupa por “resituarse la política” como acción colectiva. No existen los determinismos económicos sino que los sujetos sociales pueden cambiar y modificar sus modelos de desarrollo a pesar de las presiones de una globalización salvaje: “fue desde la política donde por primera vez en la República Argentina se empezó a gobernar sin déficit fiscal. Fue desde la política donde por primera vez se comenzó un proceso de desendeudamiento del país. Fue desde la política donde decidimos cancelar nuestras deudas con el Fondo Monetario Internacional”.

Esto último fue significativo en el imaginario popular porque el nuevo proyecto político empezó con “la hazaña de no pagar”, a pesar de las presiones internas y externas. Según al-

gunos analistas, el desafío del gobierno de Kirchner al Fondo Monetario Internacional (FMI) —a quien los argentinos culpan por la debacle económica del 2001—, reivindicado por Cristina Fernández, en razón de los intereses nacionales, fue uno de los elementos fundamentales en la campaña presidencial. “Jocelyn Olcott, profesora de historia latinoamericana en Duke University, categorizó los votos del 2007 como *el rechazo más contundente del proyecto neoliberal, ... un apoyo a la continuidad del programa de Kirchner, que había otorgado un gran énfasis a los programas sociales por encima del proyecto del FMI*” (LADB, NotiSur Nov2, 2007)

Pero la política vive sobre todo a partir de las instituciones. Por ello, a partir de una época de resquebrajamiento económico y político, que va desde la transición del militarismo hasta el año 2001, es necesario “reconstruir institucionalidad”, consolidando el sistema democrático constitucional, especialmente en lo que toca al Poder Judicial y su manera de hacer justicia. En este contexto, la presidenta volvió a recordar la correcta anulación de las leyes de Obediencia Debida, Punto Final e Indultos: el parlamento, la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales deben “adoptar y diseñar los instrumentos que, garantizando todos los derechos y garantías que otros argentinos no tuvieron, permitan finalmente enjuiciar y castigar a quienes fueron responsables del mayor genocidio de nuestra historia”. Esta es una demarcación clara frente a las posiciones del gobierno de Menem y los radicales.

La insistencia en una nueva manera de hacer política no solamente es para el nuevo gobierno sino también para la sociedad en general porque es necesario tener siempre presente el vínculo entre el estado y la ciudadanía. “Para cambiar un país hace falta un buen gobierno y una buena sociedad, donde cada uno de los ciudadanos sepa que todos los días cuando toma decisiones, está también construyendo el modelo de sociedad en la que quiere vivir”.

Pero, ¿se trata de la construcción de un nuevo modelo económico y social para Argentina? Hay algo nuevo en la pro-

puesta de la presidenta pero no se identifica con el lenguaje de Hugo Chávez y su nuevo socialismo. En este sentido, el nuevo gobierno argentino no tiene la radicalidad ideológica de Chávez pero plantea una serie de reformas radicales que no están contempladas en el llamado modelo neoliberal. Cristina propone un “nuevo modelo económico de matriz diversificada, de acumulación con inclusión social que se ha puesto en marcha la clave para los tiempos que vienen; un modelo que, reconoce en el trabajo, en la producción, en la industria, en la exportación, en el campo, la fuerza motriz que ha permitido que millones de argentinos vuelvan a recuperar no solo el trabajo, sino además las esperanzas y las ilusiones de que una vida mejor es posible”. Este énfasis en el papel del Estado para regular la economía, y animar una producción con inclusión social en el mercado interno es lo que rompe claramente con el modelo impuesto por Menem en la década de los 90s. No hay duda de que hay que poner una gran atención en la producción, la productividad, la competitividad, la ciencia y la tecnología, pero ella afirma con claridad: “Yo no he venido a ser Presidenta de la República para convertirme en gendarme de la rentabilidad de los empresarios; que se olviden. Tampoco he venido a ser Presidenta para convertirme en parte de alguna interna sindical o política”

En el proyecto de país que ella imagina para Argentina, junto con la economía y la política tendrá mucho que hacer la educación y, por ello, ésta es concebida como una de las prioridades de su gobierno. Reconoce la educación privada pero le da un gran énfasis a la educación pública como tarea prioritaria de estado, no solamente en su cantidad queriendo que llegue a toda la población sino sobre todo en su calidad: ella se propone la creación de “un Estado que ha decidido colocar a la educación como el otro eje fundamental de transformación y de agregar competitividad”.

Casi al final, la nueva presidenta retoma otro tema que ya había priorizado también el gobierno de Kirchner; agradece a

los presidentes latinoamericanos que vinieron personalmente a acompañarla (Brasil, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Venezuela, Uruguay) para retomar el marco de la integración de América latina, especialmente el proyecto del “MERCOSUR, nuestro espacio al que esperamos que se incorpore a la brevedad Venezuela”. Aprovechó ahí mismo la oportunidad para señalar las diferencias con Uruguay en el caso conflictivo de las pasteras en la frontera pero al mismo tiempo el deseo de resolverlo por la vía legal de la Corte Internacional de la Haya.

El término de su discurso lo ubica en el marco internacional con su propuesta de “la reconstrucción del multilateralismo”, con una crítica al papel militarista de los Estados Unidos después de los ataques terroristas del 2001: “Un mundo unilateral es un mundo más inseguro, más injusto... La lucha en la que estamos comprometidos contra ese terrorismo tampoco nos debe llevar a justificar que por temor al terrorismo global incurramos en la violación global de los derechos humanos”. Y tampoco pierde la oportunidad de manifestar “nuestro reclamo irrenunciable e indeclinable a la soberanía sobre nuestras islas Malvinas”, en donde denuncia al país ocupante a través del enclave colonial que tiene sobre ese territorio que históricamente ha sido argentino.

Consideraciones finales

En el caso de Argentina, a través del proceso electoral del 2007, se ha mantenido la continuidad de un proyecto político: una corriente del peronismo que ha roto ideológicamente con el neoliberalismo de Menem y que, habiendo mostrado, sobre todo a partir del 2003, una gran recuperación económica y una política social que tiende a una mayor distribución de la riqueza social, continua con claridad ahora bajo la personalidad de la primer presidenta electa en su historia. La conjunción de dos factores, la buena gestión gubernamental de Kirchner y la personalidad y propuestas de Cristina como candidata, favorecieron un resultado electoral claramente favorable al Frente

para la Victoria (44 sobre el 22% de la siguiente candidata Elisa Carrió), con lo cual no hubo necesidad de pasar a una segunda vuelta.

La transición democrática en Argentina no sólo ha llevado a gobiernos civiles al poder del gobierno mediante los procesos electorales sino que ha despertado líderes emergentes con propuestas de un postneoliberalismo. Se puede ver claramente que se ha desmentido la taxativa afirmación de M. Thatcher cuando gritaba hace 25 años en Inglaterra: *there is no alternative*.

En América Latina estamos presenciando el surgimiento de nuevas alternativas al neoliberalismo. Si bien hay propuestas más radicales como las de Hugo Chávez (Venezuela), Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador), también hay que reconocer que gobiernos como el de Argentina (Cristina), Brasil (Lula), Chile (Bachelet),... también representan propuestas novedosas frente a los drásticos programas de ajuste impuestos por el FMI y otros organismos internacionales; sus nuevas propuestas de política social han surgido con apoyo mayoritario de la población en sus respectivos países.

CONCLUSIONES

*“Nuestro enemigo principal no es el imperialismo, ni la burguesía, ni la burocracia.
Nuestro enemigo principal es el miedo y lo llevamos adentro”*
Domitila Barrios¹²⁸

La imagen social de América Latina por varias décadas ha sido la de una región subdesarrollada gobernada por diversas dictaduras. Este imaginario no solamente ha sido objeto de análisis sociales sino también se ha expresado en el mundo de la literatura, que es otra forma de captar la realidad. La pobreza y el subdesarrollo son una imagen común para la gran mayoría de los antiguamente denominados países del Tercer Mundo, pero de manera particular, esta parte del continente ha sido conocida, especialmente en los medios literarios, como algo emblemático en su forma autoritaria de gobernar. “En América Latina, que a través de los años ha tenido que ser testigo y víctima de diversas dictaduras, la fascinación por el tema ha quedado plasmada en obras que han intentado recrear el ambiente malsano, la represión, el miedo y el letargo que parecen acompañar las dictaduras; así *La novela de Perón* de Tomás Eloy Martínez, la descripción de la dictadura guatemalteca de Estrada Cabrera que consigue Miguel Ángel Asturias

¹²⁸ Domitila Barrios es una mujer boliviana que junto con otras cuatro mujeres inició una huelga de hambre en 1978 hasta que cayó la dictadura militar del país. Sus palabras son citadas por Eduardo Galeano al recibir el 3 de julio del 2008 el título de Primer Ciudadano Ilustre de la región por los países del MERCOSUR.

en *El Señor Presidente, Yo, el Supremo* de Roa Bastos, *El Recurso del Método* de Alejo Carpentier... o el delirio total y la soledad que trasudan el dictador de *El Otoño del Patriarca* de Márquez, son claros ejemplos del eterno embeleso que parece ejercer este ser omnipotente, megalómano y despiadado, llámese Trujillo, Duvalier, Stroessner o Ubico” (Torres, 2001: 195-196). Aun el caso de México, que aparentemente no tuvo este tipo de dictaduras militares, ha sido retratado en una obra histórica como la de Enrique Krauze en *La presidencia imperial* al hablar de la permanencia en el poder de un solo partido en el gobierno durante 71 años.

En América Latina, las dictaduras militares parecen haber estado sufriendo una fase de transición hacia gobiernos democráticos y por ello, por un lado, los gobiernos ahora son electos a través de elecciones periódicas y, y por otro, las personas en el gobierno ya no suelen ser esos señores omnipotentes que todo lo imponían. Pero ni las elecciones son una fase terminada ni el autoritarismo ha desaparecido. Peor aún, al iniciar el nuevo siglo XXI, no se ha experimentado una mejora en el bienestar material de gran parte de la población. Queda mucho quehacer todavía para que se consoliden las instituciones que organizan las elecciones en cada país y para que los resultados de votación final sean verdaderamente creíbles por la mayoría de la población; queda todavía muchísimo por hacer para que los mismos gobernantes electos permitan la participación ciudadana en su propio programa de gobierno. Y queda el reto más importante: ¿cómo lograr una política social que tenga repercusión efectiva en el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos?

El estudio de Deepa Narayan (2000) financiado por el Banco Mundial nos señala, en una de sus principales conclusiones, que ningún gobierno en los países de mayor pobreza y desigualdad ha logrado hasta ahora lograr avances significativos en este nivel. Hay numerosas causas que se pueden señalar en este fracaso: los intereses económicos de los grandes grupos

oligárquicos que pesan en las políticas de la mayoría de los gobiernos; el gran nivel de corrupción en los diferentes niveles de gobierno que hacen que los recursos destinados al área social lleguen a sus destinatarios reales a cuenta gotas; la ineficacia administrativa, duplicidad de funciones en las diversas agencias de política social; la poca o nula capacidad organizativa de los ciudadanos en la planeación, ejecución y evaluación de los diversos programas sociales.

Pero detrás de todo ello, hay un modelo económico bajo las reglas del neoliberalismo imperante de las últimas décadas que se ha mostrado tanto en su incapacidad para reactivar la producción como, sobre todo, en su gran capacidad para seguir concentrando la riqueza en pocas manos. Pero ahora ya no es un enemigo imbatible, porque los ciudadanos están aprendiendo a vencer el miedo al cambio. Uno de los principales enemigos a vencer, como lo señala Domitila en el epígrafe de estas conclusiones, es el miedo que todos llevamos dentro: le tenemos miedo a la imaginación, miedo a los poderes establecidos, miedo a pensar en un mundo diferente. Pero no se trata solamente de un miedo natural sino sobre todo de un miedo infundido en la cultura moderna por los mismos actores que se han perpetuado en el poder.

Nuestro amigo, el Dr. Robinson Salazar, ha iniciado, por ejemplo, un proyecto de investigación para mostrar cómo en América Latina ciertos sectores oligárquicos y gubernamentales han montado toda una estrategia compleja para influndir miedo en la población, desmovilizarla e inhibir su participación. Se trata de un miedo inducido, creado y fomentado; en su propuesta, él señala que “se requirió de sembrar el miedo en los lugares propensos a ciudadanizarse, a fin de que el sujeto colectivo fuese diluyéndose, los actos no transcurrieran en acciones, los sectores populares desagregaran el cemento social, los hilos asociativos se rompieran, los colectivos humanos desconfiaran entre si y se vieran como potenciales agresores, la angustia los carcomiera en su interior y se fragmentaran sin

ningún asomo cercano de aglutinar esfuerzos para cambiar el orden impuesto”. Vencer el miedo, entonces, se convierte en una de las principales estrategias para el cambio.

Pero la lucha no solamente se encuentra en el ámbito de la subjetividad. Si en este estudio hemos querido enfatizar el gran significado que tienen las nuevas alternativas que han aparecido en América Latina con líderes emergentes a través de la lucha electoral democrática, lo hemos hecho para señalar la importancia de la participación ciudadana en este nivel. Y ello se ha mostrado cuando la izquierda en general en sus diferentes tendencias ha aceptado participar en las reglas de la democracia electoral y, con ello, ha obtenido triunfos significativos en ámbitos locales y nacionales. En las experiencias exitosas –y también donde no se han logrado triunfos electorales– hay grandes lecciones por aprender. En el actual contexto latinoamericano, es posible afirmar que, a diferencia de las varias décadas del siglo XX, la participación electoral democrática tiene una enorme trascendencia en la vida de nuestras sociedades, porque en ella se define el proyecto de política social que aplicarán los gobiernos triunfantes en sus períodos respectivos. Si la izquierda ha logrado salir triunfante en los marcos institucionales establecidos, quiere decir que es posible lograr cambios sociales y reformas radicales por la vía política sin necesidad de recurrir a la confrontación armada.

Sin embargo, los problemas de nuestro subdesarrollo y autoritarismo son tan complejos que no podemos confiar –con lo importante que es la vía electoral mediante la consolidación de instituciones democráticas en cada país– en que es la única forma de lucha. Podemos constatar que, con ningún gobierno de derecha o de izquierda puesto en el poder de manera legítima, se puede garantizar la realización plena de las promesas de campaña; ya en el próximo futuro nos daremos tiempo para analizar la manera en que han gobernado los presidentes latinoamericanos, especialmente los de izquierda, que se se han contemplado especialmente en sus triunfos en el presente libro.

Junto con la revitalización de la participación en los procesos electorales como elemento de cambio, también debe quedar claro que los imaginarios sociales que están surgiendo en Latinoamérica no quedan acotados en la democracia representativa de los partidos políticos. Queremos revitalizar la política como instrumento de cambio. Hay un sector de la izquierda que se siente desilusionada de los partidos políticos, sean de derecha o de izquierda o centro, por su actuación en la sociedad contemporánea debido a la constante lucha por posiciones de poder; sin embargo, los partidos políticos son necesarios en el mundo real de la democracia representativa y, con ciudadanos votantes o abstencionistas, con ellos se deciden los gobernantes en los períodos establecidos en la constitución. En la búsqueda del cambio y de un verdadero desarrollo latinoamericano no es necesario ser militante de algún partido político pero sí es indispensable participar activamente para decidir entre las opciones posibles que nos presentan para gobernar o para inventar nuevas. Dentro o fuera de los partidos, también será necesario participar de manera constante para influir, apoyando u oponiéndose, a las políticas determinadas de cualquier gobierno.

Nunca debemos desafanarnos de la política como responsabilidad ciudadana en el sentido griego de la participación continua del ciudadano en el *ágora* o en el sentido de la política como vocación, al estilo de Max Weber, como función de aquellas personas que han llegado a tener responsabilidades públicas. En ambos casos, la política atañe a lo público, a la responsabilidad ciudadana de hacer algo frente a los problemas comunes de cualquier sociedad.

La política no puede ser considerada solamente desde la perspectiva de Maquiavelo sólo como una lucha por el poder en un mundo de continuas intrigas y complotos sino también en el sentido que le imprimió tanto el idealismo de Platón, como la dialéctica de Aristóteles en su estudio sobre las constituciones griegas o como la pasión de Cicerón en su intento de

preservar los valores de la República en Roma. Tendrá que haber siempre una dialéctica entre el mundo real de intereses opuestos de los diversos grupos y las propuestas y compromisos de construcción de ciudadanía. Así lo menciona Salustio al analizar la conjuración de Catilina sobre el modelo de la República romana del siglo I a.C., el cual era defendido ardientemente por Cicerón: *“Desde los comienzos de mi adolescencia me consagré, como otros, apasionadamente, a los negocios públicos, en los cuales hube de tropezar con numerosos obstáculos, porque en vez de modestia, sobriedad y desinterés, privaban la audacia, la prodigalidad y la avaricia”* (Salustio, 1991: 3). De manera semejante, en cada situación real, vamos a encontrar la situación de la política con todas sus contradicciones internas, pero en ella podremos siempre aspirar a hacer prevalecer lo político, el interés colectivo de la comunidad.

BIBLIOGRAFÍA

Aínsa Fernando (1990). Necesidad de la Utopía. Tupac ediciones y Nordam. Montevideo, Uruguay.

Aínsa Fernando (1999). La reconstrucción de la utopía. Ediciones UNESCO. Correo de la UNESCO. México

Alcántara Sáez Manuel (2004). Gobernabilidad, crisis y cambio. Elementos para el estudio de la gobernabilidad de los sistemas políticos en épocas de crisis y cambio. Fondo de Cultura Económica. 2ª. Reimpresión. México.

Alcántara Manuel, Freidenberg Flavia (coordinadores) (2003). Partidos políticos de América latina. Tomo sobre Cono Sur / Tomo sobre Países Andinos. Fondo de Cultura Económica e Instituto Federal Electoral. México.

Alfaro María del Rosario (2008). Incidencia del gobierno municipal y la ciudadanía en la democratización de la gestión pública a nivel municipal en Guatemala de 1996 a 2003. Caso de estudio comparativo. Tesis de Maestría en el programa de Política y Gestión Pública, del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Fecha de titulación: agosto 2008. Guadalajara, Jalisco, México.

América Latina hoy (2001). Revista de Ciencias sociales. Vol. 29, Diciembre de 2001: Sistemas electorales y elecciones. Ediciones Universidad de Salamanca. España.

Amnistía Internacional, (1985). Memorando al Gobierno de Guatemala sobre una misión de Amnistía Internacional, en Abril de 1985. Separata de Polémica, editada por el Instituto Centroamericano de Documentación e Investigación Social (ICADIS). San José, Costa Rica.

Annuaire économique géopolitique mondial (2006): L'Etat du monde 2007. Sous la direction de Bertrand Bodie et Béatrice Didiot. Éditions la Decouverte. Paris, 2006.

Ansaldi Waldo (director) (2007). La democracia en América Latina, un barco a la deriva. Fondo de Cultura Económica. Argentina.

Antunes Ricardo (2004). El PT concluyó su ciclo como partido de izquierda. Entrevista de Mario Hernández al sociólogo Ricardo Antunes. Rebelión. 18 de mayo del 2004. *www.rebellion.org*

Badit Bertrand et Didiot Béatrice (sous la direction de), (2006). L'état du monde, 2007. Annuaire économique géopolitique mondial. Éditions La Découverte. Paris.

Banco Mundial (2007). Disponible en: *www.bancomundial.org*

Barbier René (2007). Histoire du concept d'Imaginaire et de ses transversalités. Universidad de Paris VIII. Consulta en junio del 2007. *http://www.barbier-rd.nom.fr/Histoiredimaginaire.htm*

Barry Tom and Preusch Deb, (1986). The Central America Fact Book. Grove Press. New York.

Bauman Zygmunt (2006). En busca de la política. Fondo de Cultura Económica de Argentina.

Beck, Ulrich (2002). *Macht und gegenmacht im globalen zeitalter. Neue weltpolitische ökonomie*. Edition zweite moderne. Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main. Germany.

Bendaña Alejandro (2007). Nicaragua: una derrota para EE.UU que no significa una victoria para la izquierda. Agencia Periodística de Información Alternativa (APIA). 18 enero 2007. Bendaña es director del Centro de Estudios Internacionales en Managua, Nicaragua.

<http://www.apivirtual.com/2007/01/18/articulo-16631/>

Betto Frei (2002). El amigo Lula. Artículo enviado a ALAI-AMLATINA, del 28 de octubre del 2002. Sao Paulo Brasil.

Betto Frei (2005). Gente del PT hizo el juego a la derecha. Entrevista de Darío Pignotti, a F. Betto, teólogo de la liberación. 02-09-2005. www.rebellion.org

Bey Marguerite et Dehouve Danièle (sous la direction de) (2006). La transition démocratique au Mexique. Regards croisés. CRI-IEDES /LESC. L'Harmattan. Recherches Amériques latines. Paris.

Boersner, D. (2006). Venezuela: polarización, abstención y elecciones. *Nueva Sociedad*. Marzo de 2006.

http://www.nuso.org/docesp/boersner_fñnal.pdf

Bobbio Roberto (1995). Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política. Editorial TAURUS – junio de 1995

Boff Leonardo (2006). Brasil 2006: ¿Qué ética va a prevalecer? Revista Koinonía. 20-10-2006.

Borón Atilio A. (2008). Bolivia: Evo plebiscitado. Publicación de la Agencia de Información fray Tito para América Latina (ADITAL). 12.08.08

<http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?idioma=ES&cod=34462>

Bosoer Fabián, (2007). Kirchner, segundo acto: el panorama electoral en Argentina. Revista Nueva Sociedad, no. 208. Marzo-Abril 2007. www.nuso.org

Bourdieu Pierre (1999). Gauche-droite. Annie Gonzalez et C-P Productions. Entretien datant de 1999 avec Pierre Carles en partie de ce qui tient à ce qu'une personne soit de droite au de gauche.

<http://www.youtube.com/watch?v=xE1ehtg4Skg>

Cairo Heriberto y Sierra Gerónimo de (Compiladores) (2008). América Latina, una y diversa: Teorías y Métodos para su análisis. Editorial Librería Alma Mater. San José, Costa Rica.

Camou Antonio, (2004). ¿Bipartidismo, «baliancismo» o partido dominante? El gobierno de Kirchner y la renovación del sistema de partidos en la Argentina. Aparecido en Anuario Social y Político de América Latina y el Caribe Nro. 7, Flacso / Unesco / Nueva Sociedad, Caracas, 2004, pp 32-41. www.nuso.org

Canton Darío and Jorrat Jorge Raúl, (2003). Abstention in Argentine Presidential Elections 1983-1999. Latin American Research Review. Volume 38, Number 1, 2003. The University of Texas Press. USA.

Calcagno Alfredo, Eric Calcagno (2002). El monstruo bicéfalo de la renta financiera. Revista Nueva Sociedad, no 179 Mayo-Junio 2002. www.nuso.org

Carlsen Laura (2006). ¿Una ola rojilla en América Latina? Programa de las Américas del International Relations Center (IRC). Traducción de Ramón vera Herrera. 20 diciembre 2006. www.ircamericas.org

Castañeda Jorge G. (1993). La casa por la ventana. México y América Latina después de la guerra fría. Ediciones Cal y Arena. México.

Castañeda Jorge G., Morales Marco A. (2008). Leftovers. Tales of the Latin American left. Routledge, USA. Capítulo de Jorge Castañeda: Where do we go from here?, traducido por Aron

Caliu y Lynn Syrett en el periódico Reforma. 9 diciembre 2008. México, D.F.

Castoriadis Cornelius (1975). *L'institution imaginaire de la société*. Seuil. Paris, France.

Castoriadis Cornelius (1996). *La montée de l'insignifiance*. Seuil. Paris, France.

Cautrés Bruno, Mayer Nonna (Sous la direction de), (2004). *Le nouveau désordre électoral. Les leçons du 21 avril 2002*. Presses de la Fondation National de Sciences Politiques. Paris.

CDHG (1994). Comisión de Derechos Humanos de Guatemala. Boletín Internacional. Año 12. No. 92 y 93. Abril y Mayo, 1994.

CEPAL (2004). *Panorama Social de América latina*. Santiago de Chile. Noviembre del 2004. LC/L. 2220.

CID-Gallup (2006). Nicaragua Public Opinion Survey: Nicaragua, Daniel Ortega leads in voting intention. Number 53, August 2006. CID Latinoamérica: Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S.A. San José, Costa Rica.

CNE (1998-2006). Consejo Nacional Electoral de Venezuela. Disponible en: <http://www.cne.gov.ve/estadisticas/e015.pdf>

CONADEP, Lista de desaparecidos. En la página de Internet: www.desaparecidos.org

Copleston Frederick (1988). *Historia de la filosofía*, Volúmen 3: De Ockam a Suárez. Editorial Ariel. 2ª reimpression en México.

Corbière Emilio J. (1983). Quién es quién. Los partidos políticos en Argentina. Revista Nueva Sociedad, no. 67 Pags. 123-132. Julio-Agosto 1983. www.nuso.org

Correa Rafael (2007). Discurso de toma de posesión como presidente de Ecuador. 15 enero 2007. <http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2007011607>

Corten André (sous la direction de) (2006). Les frontières du politique en Amérique latine. Imaginaires et émancipation. Avec la collaboration de Vanessa Molina et Julie Girad-Lemay. Éditions Karthala. Paris. Ver especialmente *Triptyque: le religieux et le sacré comme instituant du politique* (pags. 57-84), y Peñafiel Ricardo: *Le discours d'Hugo Chávez au Venezuela: imaginaire populopauveriste et suture d'un système politique disloqué* (p. 139-155)

Couffignal Georges (Sous la direction de) (2007). Amérique latine. Les surprises de la démocratie. La documentation française. IHEAL: Observatoires de changement en Amérique latine. Paris.

Cuba Rojas Pablo (2006). Bolivia, Movimientos sociales, nacionalización y Asamblea Constituyente. Observatorio Social de América Latina (OSAL), año VI, no. 19. Consejo latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Julio 2006.
[http:// bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal19/rojas.pdf](http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal19/rojas.pdf)

Cueva Agustín (1989). El desarrollo del capitalismo en América Latina. Editorial Siglo XXI. 13 edición. México. Octubre de 1989.

Chávez Ramírez Alejandra (compiladora) (2008). Diálogos de saberes. Editorial elaleph.com Colección Temas Estratégicos. Argentina.

Chávez Hugo (2007). Discurso de toma de posesión para el período presidencial 2007-2013, el día 10 de enero del 2007, transcrito por Mónica Chalbaud. Caracas, Venezuela.

Dieterich, H (2004). Hugo Chávez. El destino superior de los pueblos latinoamericanos. Caracas: Instituto Municipal de Publicaciones, Alcaldía de Caracas, Venezuela.

Drake Paul W. And Silva Eduardo (Editors). (1986). Elections and democratization in Latin America, 1980-85. Center for Iberian and Latin American Studies, University of California, San Diego. USA

Echegaray Fabian (2006). Elecciones en Brasil: hacia un sistema político moderno y secularizado. Revista Nueva Sociedad, no. 206. Noviembre-diciembre 2006. Venezuela. www.nuso.org

EGP, (1982), Revista COMPAÑERO. The international magazine of Guatemala's Guerrilla Army of the Poor. San Francisco, Cal. September, 1982.

Elías Antonio (compilador), (2006). Los Gobiernos progresistas en debate: Argentina, Brasil, Chile, Venezuela y Uruguay. CLACSO/ PIT-CNT-Instituto Cuesta Duarte. Buenos Aires, Argentina. Julio 2006.

Ellner, S (1998). Izquierda y política en la agenda neoliberal venezolana. *Nueva Sociedad*. Septiembre-Octubre 1998.
http://www.nuso.org/upload/articulos/2716_1.pdf

Envío (1996). Publicación del Instituto Histórico Centroamericano. Managua, Nicaragua.

Fajardo José Manuel (2008). Cuando la izquierda llama a la puerta. Periódico Público, de Guadalajara. Domingo 13 enero de 2008. México.

Falla Ricardo (2007). Rigoberta Menchú: ¿estrella fugaz en el cielo electoral? Revista Envío, no. 304. Julio 2007. Managua, Nicaragua.

Figuerola Ibarra Carlos, (1986). Ciencias Sociales y Sociedad en Guatemala. Fotocopia.

Fleury Cynthia (Coordonné par) (2006). Imaginatio, imaginaire, imaginal. PuF Débats Philosophiques. Presse Universitaires de Paris.

Frente Para la Victoria (2007), organismo político en Argentina. Disponible en:
<http://www.frenteparalavictoria.org/plataforma.php>

Fukuyama Francis (1992). The end of history and the last man. Penguin editors. USA.

GAM, (1988). Grupo de Apoyo Mutuo, organismo de familiares de presos, desaparecidos y asesinados políticos en Guatemala. Boletín no. 8

García Lupo Rogelio, (1984). Argentina: El Alfonsoismo navega mar afuera. Revista Nueva Sociedad, no. 70 Enero-Febrero 1984. www.nuso.org

Géopolitique (2006). *Amérique latine. Une ère nouvelle*. Revue trimestrielle de l'Institut International de Géopolitique. No. 96. Octubre 2006. Paris.

Giddens Anthony (1999). La 'Tercera Vía'. Taurus. Madrid, 1999.

Giménez Gilberto (1976). Condicionamientos estructurales del proceso de liberación social. Revista Christus. Cinco capítulos en los números. 488, 489, 490, 491, 492, de Julio a Noviembre 1976. México, D.F.

Gómez Barata Jorge (2005) Derecha e izquierda: ¿de qué hablamos? <http://www.voltairenet.org> Red de Prensa de los No Alineados. Consulta 10 junio 2007.

González Casanova Pablo (coordinador), (1983). No intervención, autodeterminación y democracia en América Latina. Ediciones Siglo XXI / UNAM. México)

González Oscar R, Abalo Carlos, (1988). Argentina: el ocaso del alfonsinismo. Revista Nueva Sociedad, no. 98 Noviembre-Diciembre 1988. www.nuso.org

Guevara Aleida (2005). Chávez, un hombre que anda por ahí. Una entrevista con Hugo Chávez. La Habana, Cuba.

Habermas, Jürgen (1999). *Nuestro Breve Siglo*.
http://www.nexos.com.mx/internos/saladelectura/habermas_c.htm

Harnecker Marta (2007). Venezuela: golpes y contragolpes. www.rebellion.org

- Harris Robert (2007). Imperium. Editorial Grijalbo. México.
- Hernández Martínez Jorge (2007). Antinomias políticas y hegemonía en las relaciones interamericanas: los Estados Unidos y Venezuela en la coyuntura actual. *Revista de Análisis Político Contexto Latinoamericano*. No. 6 Octubre-diciembre de 2007. Ocean Sur. México.
- Hernández Sánchez-Barba Mario, (1963). *Historia Universal de América II*. Ediciones Guadarrama. Madrid, España.
- Hidalgo F. Francisco (2005). Potencialidades y límites de “la rebelión de los forajidos” en el derrocamiento del presidente Gutiérrez en Ecuador. *Revista Pasos número 119*. Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI). Costa Rica. Mayo-Junio. 2005
- Hirschberger Johannes (1988). *Breve historia de la filosofía*. Editorial Herder. Barcelona.
- Houtart François (2006). ¿Existe una izquierda en Nicaragua? *Rebelión* 29-10-2006.
<http://www.rebelion.org/noticia.php?id=40229>
- Hugo Víctor (1974). *Los miserables*. Tomo I. Clásicos Asuri. Ediciones Moretón. España.
- IIDH (2006). Elecciones, democracia y derechos humanos en las Américas. Balance Analítico 2006. <http://www.iidh.ed.cr/>
- Inglehart Ronald y Carballo Marita (2008). ¿Existe Latinoamérica? Un análisis global de diferencias transculturales. *Revista Perfiles Latinoamericanos* No. 31. Enero-Junio 2008. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México.
- IRIPAZ, (1996). *Revista ESTUDIOS INTERNACIONALES*, del Instituto de Relaciones Internacionales y de Investigaciones para la Paz (IRIPAZ) Ago 7, Volumen 7, No.14. Julio-Diciembre 1996. Guatemala, CA.

Kalny Eva, (2003). “El estado de Guatemala y la violencia. Percepciones desde comunidades Mayas”. Artículo publicado en @mnis, Revue de Civilisation Contemporaine de l’Université de Bretagne Occidentale. Europes / Amériques. <http://www.univ.-brest.fr/ammis> Publicación en septiembre 2003.

Kant, Emmanuel (2002). *Filosofía de la Historia*. Fondo de Cultura Económica. México.

Krauze Enrique (2008). El poder y el delirio. Tusquets Editores. México.

Kuehnelt-Leddihn (1991) Leftism revisited. From de Sade and Marx to Hitler and Pol Tot. With a preface by William E. Buckley jr. KeVa Books.

LADB Latin American Data Base (1997-2007). NotiSur; NotiCen. Latin American Institute. University of New Mexico, Albuquerque. USA. <http://ladb.unm.edu>

Leroy Paul (2003). Les régimes politiques du monde contemporain. Vol. II Le régimes politiques des États socialistes et des États du tiers-monde. Presses Universitaires de Grenoble. Paris, 2003.

Levitsky Steven, (2003). From labor politics to machine politics: the transformation of Party-Union linkages in Argentine Peronism, 1983-1999. Latin American Research Review. Volume 38. Number 3, 2003. The University of Texas Press. USA.

Lizcano Fernández Francisco (2006). Entre la utopía y la realidad. Enfoques para una reinterpretación histórica y conceptual de la democracia en América Latina. Universidad Autónoma del Estado de México / UNAM. México.

López Carolina R. (2007). *Historia y Utopía: relaciones vinculantes desde la perspectiva de Agnes Heller*. Revista Utopía y praxis latinoamericana / Año 12. No. 37. Abril-junio 2007. Pags. 99-

106. Revista internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

Lugo Rodríguez Ramón Alberto (2005). Guerra y narcotráfico en Colombia: los efectos negativos del Plan Colombia. Tesis de Maestría en la licenciatura en Relaciones Internacionales del ITESO, Universidad jesuita en Guadalajara. Fecha de titulación: Junio de 2005. Guadalajara, Jalisco, México.

Macedo Cintra Marcos Antonio, Farhi Maryse, (2002). Contradicciones y límites del Plan de Convertibilidad. Revista Nueva Sociedad, no. 179. Mayo-Junio 2002. www.nuso.org

Mack Luis Fernando, (2007). El ocaso de los patriarcas. Un análisis de las elecciones de Guatemala de 2007. Revista Nueva Sociedad, no. 213. Enero-febrero 2008. www.nuso.org

Maggi Claudio y Messner Dirk (Editores), (2002). Gobernanza Global. Una mirada desde América Latina. El rol de la región frente a la globalización y a los nuevos desafíos de la política global. Ediciones Nueva Sociedad. Venezuela.

Manière de voir (2007). *Amérique latine rebelle*. Revue bimestriel Le Monde Diplomatique. Décembre 2006-janvier 2007. Paris.

Maquiavelo Nicolás (1999). El príncipe. Editado por elaleph.com Copyright www.elaleph.com Documento electrónico descargado en <http://www.educ.ar>

Martínez Carlos Aníbal (2005). Guatemala, a 15 meses del gobierno de Oscar Berger. Revista Nueva Sociedad, no. 197. Mayo-Junio 2005. www.nuso.org.

Medina Núñez Ignacio (1978). Alternativas de la izquierda mexicana. Corrientes y partidos políticos. Revista CHRISTUS No. 512. Julio de 1978. México.

Mattelart Armand (2000). Historia de la Utopía planetaria. De la ciudad profética a la sociedad global. Paidós. Barcelona.

Medina Núñez Ignacio (compilador) (1997). *Centroamérica ante el fin de milenio*. Fondo Editorial Universitario-DEILA. Guadalajara, Jal. México

Medina Núñez Ignacio (coordinador) (1998). *Centroamérica: después de la guerra*. Fondo Editorial Universitario-DEILA. Guadalajara, Jal. México.

Medina Núñez Ignacio y Delgado Hinojosa Paula (2003). *Neoliberalismo y desorden mundial: América Latina y la búsqueda de alternativas*. Capítulo en el libro *La integración regional de América Latina en una encrucijada histórica*. Pags. 49-83. Publicación de varios autores. Ediciones del CUCSH de la Universidad de Guadalajara, México.

Méndez Juan E., O'Donnell Guillermo y Pinheiro Paulo Sergio (Compiladores) (2002). *La (in)efectividad de la ley y la exclusión en América latina*. Paidós. Argentina.

Meyer Lorenzo (2005). *El estado en busca del ciudadano*. Un ensayo sobre el proceso político mexicano contemporáneo. Editorial Oceano. México.

Middlebrook Kevin J. (Edited by) (2004). *Dilemmas of political change in Mexico*. Institute of Latin American Studies. University of London. Center for Us Mexican Studies University of California, San Diego. London.

Miranda José Porfirio (1988). *Comunismo en la Biblia*. Siglo XXI Editores. 3ª. Edición. México.

Monde diplomatique Le (2007). “Les recette idéologiques du président Sarkozy”. Par Serge Halimi. No. 639. 54e année. Juin 2007. “Illusion perdues de la gauche de gauche”; “Au Venezuela, voyage en pays indien”. No. 640. Paris, Juillet 2007.

Moniz Bandeira Luis Alberto (2004). *Argentina, Brasil y Estados Unidos. De la triple alianza al MERCOSUR*. Conflicto e integración en América del Sur. Grupo Editorial Norma. Argentina.

Monterroso Augusto (1996). “Retorno del proscrito”. Discurso al recibir el doctorado honoris causa de la Universidad de San Carlos. La Jornada Semanal. 21 julio de 1996. México.

Moreno Jaimes Carlos (2008). Democracia electoral y calidad gubernativa. El desempeño de los gobiernos municipales en México. Ediciones del ITESO, UIA-Puebla, UIA-Torreón. México.

Morin, Edgar (2001). *La Méthode 5. L'humanité de l'humanité. L'identité humaine*. Éditions du Seuil. Paris.

Moulián Tomás (2006). El gobierno de Michelle Bachelet. Las perspectivas de cambio. Observatorio Social de América Latina (OSAL). Año VI, no. 19. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Julio 2006. Argentina.

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal19/sur.pdf>

Mouvements (2007). Dossier: Où est passé la gauche? 1997-2007. No. 50 Juin-Août 2007. La Découverte. Paris.
www.mouvements.info

Multipartidaria (1981). Primer comunicado de prensa. En la página de Internet www.wikipedia.com

Muñoz María Antonia y Retamozo Martín (2008). Hegemonía y discurso en la Argentina contemporánea. Efectos políticos de los usos de “pueblo” en la retórica de Néstor Kirchner. Revista Perfiles Latinoamericanos No. 31. Enero-Junio 2008. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, México.

Murillo Guerra Alberto (2007). La petropolítica de Hugo Chávez en Venezuela: herramienta de política interna y de inserción geopolítica. Tesis de licenciatura en Relaciones Internacionales, en el ITESO, Universidad jesuita en Guadalajara. Fecha de titulación: Noviembre 2007. Guadalajara, Jalisco, México.

Narayan Deepa (2000). *La voz de los pobres. ¿Hay alguien que nos escuche?* Ediciones Mundi-Prensa del Banco Mundial. Madrid, Barcelona, México.

Navia Patricio (2006). Chile: continuidad y cambio. *Revista Nueva Sociedad*. Edición especial. Marzo de 2006. Caracas, Venezuela.

Nouvel observateur Le (2007). *Comprendre le capitalisme. Des théories fondatrices aux dérives de la mondialisation*. Hors-série no. 65. May/Juin 2007. Paris. Paris. Ver la entrevista a Stiegler Bernard: “*La crise á rebonds du capitalismo*”.

Novaro Marcos, Palermo Vicente, (2003). *La dictadura militar 1976/1983. Del golpe de estado a la restauración democrática*. Paidós. Argentina.

Núñez Soto Orlando (1988). *La insurrección de la conciencia*. Editorial Escuela de Sociología de la Universidad Centroamericana. Managua, Nicaragua.

Ochoa Henríquez Haydée, Fuenmayor Jennifer y Henríquez Deyanira (2007). De la descentralización territorial a la descentralización participativa en Venezuela. *Revista Utopía y Praxis Latinoamericana* v.12 n.36. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Universidad del Zulia. Maracaibo mar. Venezuela.

Ojeda Bello István (2006). Venezuela: ¿*New Deal* de Roosevelt o Revolución Socialista de Castro?, en *América Latina y El Caribe hoy, el pensamiento renovador y algunas problemáticas actuales*. Edición de AUNA-Cuba. La Habana.

Orellana Aillón Lorgio (2006). Hacia una caracterización del gobierno de Evo Morales. *Observatorio Social de América Latina (OSAL)*, año VI, no 19. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Julio 2006. Buenos Aires, Argentina. [http:// bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal19/aillon.pdf](http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/osal/osal19/aillon.pdf)

Ortega Hegg Manuel (2006). Los resultados electorales del 2006 en Nicaragua. Sociólogo y analista político del Centro de

Análisis Socio-Cultural (CASC) de la Universidad Centroamericana (UCA) <http://www.boell-latinoamerica.org/>

Ortega y Gasset José (1984). *Meditaciones del Quijote*. Ediciones Cátedra. Madrid, España.

Osorio Goicoechea Joaquín (Coordinador), (2001). *Fox, a un año de la alternancia*. Ediciones del ITESO (Universidad jesuita de Guadalajara). Tlaquepaque, México.

Palermo Vicente (comp.), (2003). *Política brasileña contemporánea. De Collor a Lula en años de transformación*. Instituto di Tella (PNUD) y Siglo XXI de Argentina Editores. Argentina.

Panorama Centroamericano, (1995). Reporte Político No. 107,110. Año XXVI, 3a. Época. Agosto y Noviembre 1995.

Paramio, L. (2006). Giro a la izquierda y el regreso del populismo. *Nueva Sociedad*. Septiembre-Octubre 2006.
http://www.nuso.org/upload/articulos/3382_1.pdf

Pasquino Gianfranco (2004). *Izquierda y derecha: pilares democráticos*. Revista Ñ. Edición del 23.10.2004 Traducción de Cristina Sardoy. Argentina. Consulta en junio 2007:
<http://www.clarin.com/suplementos/cultura/2004/10/23/u-854778.htm>

Pérez-Baltodano Andrés (2006). *Nicaragua: un panorama electoral incierto*. Revista Nueva Sociedad. Edición Especial. Marzo de 2006. Caracas, Venezuela.

Picardo Joao Oscar (Coordinación) (1999). *La izquierda latinoamericana a finales del siglo XX: un diálogo con el FMLN*. Edición de la Red de Investigadores Latinoamericanos por la Democracia y la Autonomía de los Pueblos. Mayo 1999. México.

Ramírez Ramón (1969). *El movimiento estudiantil de México*. Julio-Diciembre de 1968. Tomo I y II. Ediciones Era. México.

Ramírez Ribes María (2007). *Fernando Aínsa: la seducción por la utopía revolucionaria en América Latina*. Revista Utopía y praxis

latinoamericana / Año 12. No. 37. Abril-junio 2007. Pags. 91-97. Revista internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social. Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.

Ramonet Ignacio (2006). México fracturado. Rebelión. Política Internacional. 08-09-2006. Ramonet trabaja para Le Monde Diplomatique

Regalado Álvarez Roberto (2005). La izquierda latinoamericana hoy. Revista Cuadernos de Nuestra América. No. 35-36. Vol. XVIII. Enero-diciembre 2005. Cuba.

Regalado Roberto (2008a). Los gobiernos de izquierda en América latina. Ocean Sur. México.

Regalado Roberto (2008b). Encuentros y desencuentros de la izquierda latinoamericana. Una mirada desde el Foro de Sao Paulo. Ocean Sur. México.

Rémond René (1993). La politique n'est plus ce qu'elle était. Calmann-Lévy. Paris.

Rémond René (2005), de l'Académie française. Les droites aujourd'hui. Édition Louis Audibert. Paris.

Robert François-Xavier (2007). Politique: Gauche ou droite?
http://www.fnb.to/FNB/Article/Bastion_65/gauche%20droite.htm

Robinson William I. (2003). Transnacional conflicts. Central America, Social Change and Globalization. First published by Verso. London / New York.

Rojas Bolaños Manuel, (2006). Centroamérica, un giro a la derecha. Revista Nueva Sociedad. Edición especial, Marzo de 2006. Venezuela.

Rouquié Alain, (1989). América Latina, introducción al extremo occidente. Ediciones Siglo XXI. México.

Rouquié Alain, (1994). Guerras y paz en América Central. Fondo de Cultura Económica. México, D.F.

Sader Emir, (2006). El derecho a la fiesta y a la lucha. Programa de las Américas del International Relations Center (IRC). 8 noviembre 2006. www.ircamericas.org

Salazar Pérez Robinson y Lenguita Paula (compiladores) (2005). Democracia Emancipatoria. Edición digital e impresa, Libros en Red. Buenos Aires, Argentina.

Salustio Crispo Cayo (1991). Conjuración de Catilina. Versión de Agustín Millares Carlo. Ediciones de la UNAM. México

Samper Pizano Ernesto (2006). Los tres desafíos de Chávez. Revista Nueva Sociedad. Diciembre 2006. Venezuela.

Santos Theotonio dos (2006). Lula vs Alckmin: choque entre clases. Periódico El Universal-Online, de México. 27 octubre de 2006.

Schlesinger Stephen, Kinzer Stephen, (1982). Fruta amarga. La C.I.A. en Guatemala. Siglo XXI Editores. México.

Seitz Max, (2007). BBC Mundo, Cristina promete continuidad. BBC Mundo. 20 de julio de 2007. Disponible en:
http://news.bbc.co.uk/1/hi/spanish/latin_america/newsid_6907000/6907675.stm

Shetemul Haroldo, (1996). Corresponsal del periódico Excelsior, de la ciudad de México, con dos artículos: Paz en Guatemala, después de 36 años de guerra y más de 150,000 muertos. Excelsior. 26 y 27 de Diciembre de 1996.

Shifter, M (2006). En busca de Hugo Chávez. *Foreign Affaire en español*, 6(3), 2-18. México.

Sierra Gerónimo de (Compilador), (1994). Democracia emergente en América del Sur. UNAM. México.

Sierra Gerónimo de (compilador) (1994). Democracia emergente en América del Sur. Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades de la UNAM. México.

Spinoza Baruch, 1999. *Ética / Tratado teológico-político*. Editorial Porrúa. Núm 319. México.

Stedile Joao Pedro (2005). El MST ante la coyuntura brasileña. Stedile es dirigente del MST. Periódico *La Jornada*, de la ciudad de México. Sábado 1 de octubre de 2005.

Tapia Valdés Jorge A. (1980). *El terrorismo de estado. La doctrina de la seguridad nacional en el Cono Sur*. Nueva Sociedad, Editorial Nueva Imagen. México.

Tejeda José Luis (2005). El laboratorio de la democracia en América Latina. Artículo en la revista *Espiral*, Estudios sobre Estado y Sociedad. Vol. XI, no. 32. Enero/ Abril de 2005. Universidad de Guadalajara, México.

Therborn Goran (2007). Después de la dialéctica. La teoría social radical en un mundo poscomunista. *Revista ESTE PAIS*. No. 194. Mayo 2007. Páginas 4-28. México

Toranzo Roca Carlos (2006). Bolivia, una revolución democrática. *Revista Nueva Sociedad*. Edición especial. Marzo de 2006. Caracas, Venezuela.

Toriello Garrido Guillermo (1975). *Tras la cortina de banano*. Fondo de Cultura Económica. México

Torres Paola (2001). Trujillo: mito y emblemática de una dictadura latinoamericana. *Revista Imaginario*. Nucleo interdisciplinar do Imaginário e Memória – NIME.No. 7 Imaginário e América latina. Instituto de Psicologia da Universidade de Sao Paulo, Brasil.

Touraine Alain (2005). *Un nouveau paradigme pour comprendre le monde d'aujourd'hui*. Librairie Arthème Fayard. Paris.

Tsebelis George (2002). *Jugadores con veto. Cómo funcionan las instituciones políticas*. Fondo de Cultura Económica. México.

Universal El (2006). Periódico nacional editado en la ciudad de México.

URNG (1995). "Una paz justa y democrática: contenido de la negociación". Fotocopia.

Valdés Zurita Leonardo (Compilador) (1990). América latina y México en el umbral de los noventa. Edición de la UAM-Unidad Iztapalapa. México

Vera Herrera Raúl (2000). Ecuador: bitácora de un levantamiento popular. *Chiapas, no. 10*. IIEC, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, DF, México.

<http://www33.brinkster.com/revistachiapas/chiapas-pres.html>

Vogels Henr. Jos. (1922). *Novum testamentum graece et latine. Pars prima: evangelia et actus apostolorum*. I. Schwann, Druckerei und Verlag. Dusseldorf.

Weber Max (1982). La política como vocación. *Escritos Políticos II*. Editorial Folios.

Woldenberg José (2006). Hacia las elecciones en México. Una espiral virtuosa de pluralismo y democracia. *Revista Nueva Sociedad*, no. 202. Venezuela.

World Bank (2005). Datos básicos sobre las naciones del mundo contemporáneo.

<http://info.worldbank.org/governance/kekz2005/> Consultado en Agosto 2006.

Yanes Pablo (1993). Autogolpe. Guatemala: las nuevas posibilidades. *Revista Nexos. Cuadernos de Nexos*. Julio 1993. México, D.F.

Zibechi Raúl (2006). Lula: entre las elites y los movimientos. Programa de las Américas, del International Relations Center (IRC): www.ircamericas.org 27 de noviembre del 2006.

